**Dictámenes y Acuerdos correspondientes a la Décima Novena Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones, del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.**

**30 de junio del año 2020.**

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de Dictámenes en cartera:

**A.-** Dictamen con vista del sentir de los ayuntamientosde la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Coahuila, planteada por el Diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**B.-** Dictamen con vista del sentir de los ayuntamientosde la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 7° y se adiciona el artículo 199 a la Constitución Política del Estado de Coahuila, planteada por el Diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**C.-** Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se deroga el segundo párrafo del artículo 89 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Jesús Andrés Loya Cardona, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**D.-** Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el cuarto párrafo de la fracción XXXIII del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Coahuila, planteada por la Diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional.

**E.-** Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto para reformar la fracción II del artículo 167 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, de la Fracción Parlamentario “Presidente Benito Juárez García”, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional.

**F.-** Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza y la Ley de Prevención, Asistencia y Atención de la Violencia Familiar, con el objeto de reconocer a la alienación parental como una forma de violencia familiar,planteada por la Diputada María del Rosario Contreras Pérez, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**G.-** Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia,, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 234 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**H.-** Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con proyecto de Decreto mediante la cual se reforma el artículo 238 de la Ley para la Familia de Coahuila, planteada por la Diputada Graciela Fernández Almaraz, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**I.-** Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma la fracción III del artículo 3, la fracción III del artículo 4 bis y la fracción III del artículo 10; se adiciona: un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 12 y la fracción V al artículo 25, de la Ley de Protección Civil del Estado de Coahuila, planteada por la Diputada Verónica Boreque Martínez González, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**J.-** Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con proyecto de Decreto para adicionar un párrafo al artículo 5 de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niñas y Niños del Estado de Coahuila, suscrita por la Diputada Verónica Boreque Martínez González, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**K.-** Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se propone adicionar una fracción VI, al artículo 105 del Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**L.-** Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se modifica el contenido del segundo párrafo de la fracción I del artículo 383 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, y el segundo párrafo del numeral 1 de la fracción VI del artículo 102 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por la Diputada María Eugenia Cazares Martínez, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**M.-** Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se adicionan dos párrafos al artículo 108 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por la Diputada María Eugenia Cázares Martínez, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**N.-** Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XIV al artículo 2 y una porción normativa al último párrafo del artículo 3 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza, y se adiciona una porción normativa al artículo 1, una porción normativa al artículo 641 y la fracción VIII, recorriéndose la actual del artículo 644, de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Fernando Izaguirre Valdés, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**Ñ.-** Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Desarrollo Urbano, Infraestructura, Transporte y Movilidad Sustentable, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 45 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, y el artículo 251 fracción VI de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Juan Carlos Guerra López Negrete, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**O.-** Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se adiciona un segundo párrafo, recorriendo el que actualmente ocupa esa posición al tercer lugar, haciendo lo mismo con el párrafo siguiente del artículo 251 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**P.-** Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se propone adicionar en lo conducente diversas fracciones y párrafos a los artículos 175 y 176 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Juan Antonio García Villa, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**Q.-** Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un segundo párrafo al numeral 4 de la fracción VII del artículo 102 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, de la Fracción Parlamentaria “Presidente Benito Juárez García”, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional.

**R.-** Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 50 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila.

**S.-** Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma la fracción III del artículo 123 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**T.-** Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con relación al oficio enviado por el Prof. Gilberto López Estrello, Secretario del R. Ayuntamiento de Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual insta se dé trámite correspondiente para que se realice la designación de quien habrá de sustituir a la C. Mariela Marín Contreras, al cargo de Octava Regidora de dicho Ayuntamiento.

**U.-** Dictamende las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad y de Desarrollo Urbano, Infraestructura, Transporte y Movilidad Sustentable, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adicionan y modifican diversas disposiciones del Código Municipal, a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, todas del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila.

**V.-** Dictamende la Comisión de Finanzas, con relación a la Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, mediante la cual se solicita reformar los Artículos Primero y Segundo y adicionar los Artículos Tercero, Cuarto y Quinto todos del Decreto 834, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 18 de abril de 2017, y abrogar los Decretos 931 y 1004 publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, número 71 y número 90 de fecha 05 de septiembre y 10 de noviembre de 2017, respectivamente, a través del cual se autorizó al Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza a celebrar con la empresa “NL TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.” un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales para Alumbrado Público, con el objeto de que se lleve a cabo el “Proyecto de Prestación de Servicios Profesionales para Alumbrado Público”.

**W.-** Dictamende la Comisión de Presupuesto, con relación a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante la cual solicita se reforme el contenido del Segundo Párrafo del Artículo 18 de la Ley Reglamentaria del Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila, planteada por la Diputada María Eugenia Cázares Martínez, conjuntamente con las y los Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”.

**X.-** Dictamende la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, relativo al Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 169, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, para el efecto de suprimir de dicho texto lo relativo a que se hablara hasta tres oradores en pro y otros tres en contra para hacer comentarios, al momento de la lectura de una iniciativa, planteada por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del “Partido Acción Nacional”.

**Y.-** Dictamende la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, respecto de la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona el artículo 120 BIS, a la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares del Grupo Parlamentario “Brígido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila.

**Z.-** Dictamende la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, relativo al Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo 55, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, para el efecto de que se disponga expresamente en dicho artículo, que se consideraran Diputados Independientes, también a aquellos que por su decisión personal, libre unilateral y manifiesta, dejen de pertenecer al partido político que los postuló y se declaren independientes, sin que tengan que presentar documento alguno en donde se asiente la aceptación de su renuncia por parte del partido político donde militaron, planteada por el Diputado José Benito Ramírez Rosas, de la Fracción Parlamentaria “Venustiano Carranza Garza”.

**A BIS 1.-** Dictamende la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Juan Antonio García Villa, conjuntamente con los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**A BIS 2.-** Dictamen de la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto planteada por el Diputado Jesús Andrés Loya Cardona, del Grupo Parlamentario “General Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se reforma el numeral 2 y se adiciona el numeral 3 al artículo 5º, y se reforma el primer párrafo del artículo 6º de la Ley de Cardioprotección para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con el propósito de impulsar la capacitación constante en el uso de los desfibriladores automáticos externos.

**A BIS 3.-** Dictamen de la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto planteada por el Diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se modifica el contenido de la fracción XI, recorriendo su actual contenido a la que sigue, que se crea, quedando como la fracción XII; modificando a su vez el párrafo segundo de esta fracción del artículo 275 de la Ley Estatal de Salud, en relación a la instalación de los filtros de control sanitario.

**A BIS 4.-** Dictamen de la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que plantea la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, en coordinación con Paola Aguirre Praga, Leticia Espinoza Méndez y Abril Martínez Ávalos, de la Organización Civil Proyecto de Mujeres, y en conjunto con las Diputadas Diana Patricia González Soto, Verónica Boreque Martínez González, Lucía Azucena Ramos Ramos, Graciela Fernández Almaraz, María Esperanza Chapa García, Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Josefina Garza Barrera y Elisa Catalina Villalobos Hernández, por el que se adicionan los artículos 147 bis; 147 bis1; y 147 bis, de la Ley Estatal de Salud, en materia de atención a la salud menstrual.

**Retirado por el Coordinador de la Comisión**

**A BIS 5.-** Dictamen de la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto planteada por la Diputada Graciela Fernández Almaraz, del Grupo Parlamentario “General Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por el que se adiciona el artículo 8º bis a la Ley de Prevención del Suicidio para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de incluir a la Secretaría de Educación en las acciones concretas para prevenir el suicidio.

**A BIS 6.-** Dictamen de la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto planteada por la Diputada María Esperanza Chapa García, del Grupo Parlamentario “General Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por el que se reforma la fracción IX del Inciso B y el Inciso D del artículo 5, así como la fracción VI del artículo 11 de la Ley para la Prevención, Atención y Combate del Sobrepeso y Obesidad para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de adecuar el reenvío correcto de las acciones que corresponden al instituto estatal de la juventud acorde a la legislación estatal vigente.

**A BIS 7.-** Dictamen de la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto planteado por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, por el que se reforma la fracción III del artículo 65 A de la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en materia de campañas de esterilización.

**A BIS 8.-** Dictamen de la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto planteada por la Diputada Blanca Eppen Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se modifica la fracción I del artículo 25; y, se modifica el artículo 31, todos de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza, en relación con la elaboración e implementación de programas, políticas y acciones para la adaptación al cambio climático derivados del Plan Estatal y de esta Ley, atendiendo de manera especial a las poblaciones ubicadas en zonas de alto riesgo, y se deberán respetar irrestrictamente los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones de vulnerabilidad y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional, además de promover la participación ciudadana, procurando siempre la equidad de género y la representación de las poblaciones más vulnerables al cambio climático, indígenas, personas con discapacidad, académicas e investigadores para la toma de decisiones.

**A BIS 9.-** Dictamen de la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto planteada por el Diputado Jesús Andrés Loya Cardona, del Grupo Parlamentario “General Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por el que se reforma el artículo 56, el primer párrafo del artículo 61 y el artículo 62; se adiciona un segundo párrafo al artículo 61, recorriéndose el ulterior y un segundo párrafo al artículo 62 de la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de fortalecer las acciones de difusión y adopción de los animales bajo el resguardo de los centros de control animal.

**Retirado por el Coordinador de la Comisión**

**A BIS 10.-** Dictamen de la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto planteada por la Diputada Diana Patricia González Soto, del Grupo Parlamentario “General Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por el que se reforma la fracción I del artículo 8 de la Ley de Prevención del Suicidio para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de fortalecer las acciones de prevención de la Secretaría de Salud, en materia educativa.

**A BIS 11.-** Dictamen de la Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, respecto a la iniciativa con proyecto de decreto presentada por las Diputadas y los Diputados del Grupo Parlamentario "Gral. Andrés S. Viesca", del Partido Revolucionario Institucional, por conducto del Diputado Jesús Andrés Loya Cardona, por la que se adiciona la fracción XIV al artículo 9º de la Ley para el Fomento a la Gastronomía en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de generar vínculos entre la producción ganadera, agrícola, pesquera y apícola del estado con el comercio e industria gastronómica local.

**A BIS 12.-** Dictamen de la Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, respecto a la iniciativa con proyecto de decreto que presentan las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto del Diputado Jesús Berino Granados, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Económico del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de fomentar y estimular la generación de empleos alineados con los parametros de ‘trabajo decente’ establecido por la organización internacional del trabajo.

**A BIS 13.-** Dictamende la Comisión para la Igualdad y no Discriminación, con relación a una Iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se adicionan y modifican diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza; con objeto de reforzar las facultades de las autoridades con acciones encaminadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y modernizar las disposiciones relacionadas a los derechos laborales y de maternidad; Planteada por la Diputada Diana Patricia González Soto, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**A BIS 14.-** Dictamende la Comisión para la Igualdad y no Discriminación, con relación a una Iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se modifica el contenido de la fracción VIII del artículo 8 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza; con objeto de armonizar éste con lo dispuesto en los artículos 20 Bis y 20 Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Planteada por la Diputada Blanca Eppen Canales, conjuntamente con las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional.

**A BIS 15.-** Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la propuesta de iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 29 y 116 fracción IV inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática.

**A BIS 16.-** Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la propuesta de iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, planteada por la Diputada Graciela Fernández Almaraz, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**A BIS 17.-** Dictamende la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la denuncia que suscriben el primer Regidor y Presidente de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Monclova, C. Ariel Venegas Castilla, y el tercer Regidor, C. Theodoros Kalionchiz de la Fuente, a efecto de que esta Comisión lleve a cabo una revisión por situación excepcional en contra de Presidente Municipal y Tesorero del Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, en relación a la presunta omisión en el cobro de créditos fiscales en perjuicio de la Hacienda Pública Municipal de Monclova, Coahuila, y una vez que la Auditoría Superior concluya con dicha revisión informe del resultado a este H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**A BIS 18.-** Dictamen de la Comisión de Deporte y Juventud, con relación a una Iniciativa de Decreto por la cual se adicionan los Artículos 16 Bis., 16 Bis. 1, 16 Bis. 2, 16 Bis. 3, 16 Ter., 16 Ter. 1, 16 Ter. 2 y 16 Ter. 3, 16 Quater; creando una nueva fracción XIV recorriendo la actual a la XVII, creando las fracciones XV, y XVI, del artículo 29; todos de la Ley para el Desarrollo Integral de la Juventud del Estado de Coahuila de Zaragoza; planteada por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel”.

**A BIS 19.-** Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 313 bis al código penal de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila.

**A BIS 20.-** Acuerdo de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por el que se emite la convocatoria pública para elegir a cinco de nueve integrantes de la Comisión de Selección, Encargada de Designar al Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción; dirigida a las instituciones de educación superior y de investigación del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**A BIS 21.-** Acuerdo de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por el que se emite la convocatoria pública para elegir a cuatro de nueve integrantes de la Comisión de Selección, Encargada de Designar al Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción; dirigida a las organizaciones de la sociedad civil del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**A BIS 22.-** Acuerdo de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a una iniciativa popular, mediante la cual se propone que se brinden cursos de defensa personal para mujeres, planteada por los C.C. Félix Gerardo Cabello Dueñas y Rodrigo Cervantes Rocha.

**A BIS 23.-** Acuerdo de la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, del Honorable Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo planteado por la Diputada Graciela Fernández Almaraz, mediante el cual “se exhorta respetuosamente a los 38 Municipios del Estado para que, en la medida de sus posibilidades, refuercen las medidas sanitarias, con apego a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en cuestión de limpieza, desinfección y sanitización, ahora que inició la reactivación de actividades, especialmente en las áreas que se reactivaron al público, que son de su competencia, para avanzar con éxito en esta nueva normalidad”.

**INFORME DE CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTACIÓN**

**RECIBIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO**

**30 DE JUNIO DE 2020**

**1.-** ESCRITO DE LA CIUDADANA ALMA IBETH SALINAS BARRON, MEDIANTE EL CUAL PRESENTA UNA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA Y ADICIONA EL ARTICULO 261 DEL CODIGO PENAL DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA PARA LOS EFECTOS DE LO QUE SE DISPONE EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**2.-** ESCRITO DEL CIUDADANO JESÚS DE LEON TELLO, PRESIDENTE ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, MEDIANTE EL CUAL PRESENTA UNA DENUNCIA EN CONTRA DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE RAMOS ARIZPE Y DE QUIEN, Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, POR LA PROBABLE EXISTENCIA DE ACTOS DE NEPOTISMO O DE ACTOS O HECHOS DE CORRUPCIÓN Y DE SITUACIONES EXCEPCIONALES, QUE COMO CONSECUENCIA TRAE LA EXISTENCIA DE UN DAÑO PATRIMONIAL QUE AFECTA LA HACIENDA PÚBLICA O AL PATRIMONIO DE DICHO AYUNTAMIENTO.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA PÚBLICA.**

**Dictamen con vista del sentir de los ayuntamientos** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Coahuila, planteada por el Diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, le fue turnado el expediente que contiene diversos oficios, emitidos el 12 de marzo de 2019, mediante los cuales el Oficial Mayor del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, hizo del conocimiento a los 38 Presidentes Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza, de la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Coahuila, planteada por el Diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben; a fin de cumplir con lo dispuesto por los Artículos 196, fracciones V y VI, y 197 del referido ordenamiento y en los Artículos 159 y 160 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado.

En esa tesitura, toda vez que se comunicó a los 38 Ayuntamientos del Estado sobre la reforma en comento, a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en los Artículos 196, fracción IV, y 197 de la Constitución Política del Estado y en los Artículos 159 y 160 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado; es menester referir que se recibió la opinión favorable de los Ayuntamientos de Allende, Arteaga, Cuatro Ciénegas, Francisco I. Madero, Frontera, General Cepeda, Jiménez, Lamadrid, Morelos, Múzquiz, Nava, Ocampo, Progreso, Ramos Arizpe, Sacramento, Saltillo, San Buenaventura, San Pedro, Torreón y Viesca, cumpliéndose así con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 197 de la Constitución Local. Consecuentemente atendiendo a lo dispuesto por el Artículo 196 fracción V del referido ordenamiento, debe procederse a la declaración del Congreso con el sentir afirmativo de la mayoría absoluta de los Ayuntamientos.

**SEGUNDO.-** Que dichos oficios fueron turnados a esta comisión, a fin de que emitiera el dictamen respecto a la declaratoria de aprobación de la citada reforma, una vez analizado el expediente de referencia; y,

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que el texto del Artículo 196 de la Constitución Política local, que da el sustento al procedimiento de reforma constitucional, es del tenor literal siguiente:

***Artículo 196.*** *La Ley Suprema Coahuilense puede ser adicionada o reformada por el Congreso del Estado. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte del bloque de la constitucionalidad local, deben observarse los requisitos siguientes:*

***I.*** *Iniciativa suscrita por el Gobernador o por uno o varios Diputados, a la que se le dará una lectura y se turnará a la Comisión correspondiente.*

***II.*** *Dictamen de la Comisión respectiva al que se le dará una lectura.*

***III.*** *Discusión del dictamen y aprobación del mismo, por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes.*

***IV.*** *Publicación del expediente por la prensa.*

***V.*** *Que la adición o reforma sea aprobada por la mayoría absoluta de los ayuntamientos del Estado.*

***VI.*** *Discusión del nuevo dictamen, que se formará con vista del sentir de los ayuntamientos, la Comisión que conoció de la iniciativa, pronunciándose en sentido afirmativo o negativo, según el sentir de la mayoría absoluta de los respectivos ayuntamientos.*

***VII.*** *Declaración del Congreso, con vista y discusión del dictamen de la comisión.*

**SEGUNDO.-** Que en la sesión celebrada el día 12 de marzo de 2019, el Pleno del Congreso aprobó la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Coahuila, planteada por el Diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, al tenor literal siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO.**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se adiciona un párrafo octavo, recorriéndose los ulteriores del Artículo 7° de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 7°. - …**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

Las Cartas de los Derechos Fundamentales y esta Constitución, determinan los principios mínimos en los que se sustenta el ejercicio de los Derechos Humanos. Serán ley suprema en el régimen interior del Estado.

Ninguna persona será sometida a desaparición, sea ésta cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o el consentimiento del Estado.

El Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas apropiadas para proteger a las personas contra las desapariciones.

Las personas desaparecidas y quienes hayan sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición, tienen derecho a una búsqueda inmediata y efectiva, a la localización de la persona desaparecida, a conocer la verdad, a la justicia, a la protección judicial efectiva y a la reparación integral del daño y a las garantías de no repetición. El Estado garantizará estos derechos.

Las personas desaparecidas tienen derecho a continuar con su personalidad jurídica con el fin de garantizar el ejercicio de todos sus derechos. El Estado adoptará las medidas apropiadas en relación con la situación legal de las personas desaparecidas cuyo paradero no haya sido esclarecido. La ley establecerá el procedimiento para la declaración de ausencia por desaparición de personas.

Ninguna persona será sometida a cualquier forma de esclavitud, servidumbre, o a ejecutar un trabajo forzoso.

**T R A N S I T O R I O S**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 29 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen con vista del sentir de los ayuntamientos** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 7° y se adiciona el artículo 199 a la Constitución Política del Estado de Coahuila, planteada por el Diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, le fue turnado el expediente que contiene diversos oficios, emitidos el 15 de mayo de 2019, mediante los cuales el Oficial Mayor del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, hizo del conocimiento a los 38 Presidentes Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza, de la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 7° y se adiciona el artículo 199 a la Constitución Política del Estado de Coahuila, planteada por el Diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben; a fin de cumplir con lo dispuesto por los Artículos 196, fracciones V y VI, y 197 del referido ordenamiento y en los Artículos 159 y 160 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado.

En esa tesitura, toda vez que se comunicó a los 38 Ayuntamientos del Estado sobre la reforma en comento, a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en los Artículos 196, fracción IV, y 197 de la Constitución Política del Estado y en los Artículos 159 y 160 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado; es menester referir que se recibió la opinión favorable de los Ayuntamientos de Acuña, Arteaga, Cuatro Ciénegas, Francisco I. Madero, General Cepeda, Guerrero, Jiménez, Lamadrid, Morelos, Múzquiz, Nava, Ocampo, Progreso, Ramos Arizpe, Sacramento, Saltillo, San Buenaventura, San Pedro, Torreón y Viesca, cumpliéndose así con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 197 de la Constitución Local. Consecuentemente atendiendo a lo dispuesto por el Artículo 196 fracción V del referido ordenamiento, debe procederse a la declaración del Congreso con el sentir afirmativo de la mayoría absoluta de los Ayuntamientos.

**SEGUNDO.-** Que dichos oficios fueron turnados a esta comisión, a fin de que emitiera el dictamen respecto a la declaratoria de aprobación de la citada reforma, una vez analizado el expediente de referencia; y,

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que el texto del Artículo 196 de la Constitución Política local, que da el sustento al procedimiento de reforma constitucional, es del tenor literal siguiente:

***Artículo 196.*** *La Ley Suprema Coahuilense puede ser adicionada o reformada por el Congreso del Estado. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte del bloque de la constitucionalidad local, deben observarse los requisitos siguientes:*

***I.*** *Iniciativa suscrita por el Gobernador o por uno o varios Diputados, a la que se le dará una lectura y se turnará a la Comisión correspondiente.*

***II.*** *Dictamen de la Comisión respectiva al que se le dará una lectura.*

***III.*** *Discusión del dictamen y aprobación del mismo, por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes.*

***IV.*** *Publicación del expediente por la prensa.*

***V.*** *Que la adición o reforma sea aprobada por la mayoría absoluta de los ayuntamientos del Estado.*

***VI.*** *Discusión del nuevo dictamen, que se formará con vista del sentir de los ayuntamientos, la Comisión que conoció de la iniciativa, pronunciándose en sentido afirmativo o negativo, según el sentir de la mayoría absoluta de los respectivos ayuntamientos.*

***VII.*** *Declaración del Congreso, con vista y discusión del dictamen de la comisión.*

**SEGUNDO.-** Que en la sesión celebrada el día 15 de mayo de 2019, el Pleno del Congreso aprobó la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 7° y se adiciona el artículo 199 a la Constitución Política del Estado de Coahuila, planteada por el Diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, al tenor literal siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se reforma el cuarto párrafo del artículo séptimo y se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los ulteriores al mismo artículo 7° y el artículo 199 a la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 7º.** …

Los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, irrevocables y exigibles. En la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos prevalecerá el principio pro persona.

…

…

**a)** a **c)** …

Todas las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, tendrán la obligación de promover, respetar, proteger y establecer los mecanismos que garanticen los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y no regresividad. El Estado deberá de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que determine la ley.

…

…

…

…

…

…

…

…

…

**Artículo 199.** En estricta observancia a los principios de progresividad y no regresividad, los derechos y libertades reconocidos en el Estado de Coahuila de Zaragoza, en esta Constitución y en las leyes que de ella emanen, podrán reformarse para ampliar, proteger y garantizar los derechos de las personas, nunca en su detrimento, salvo en aquellos casos en los que se justifiquen plenamente los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

**T R A N S I T O R I O**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 29 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se deroga el segundo párrafo del artículo 89 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Jesús Andrés Loya Cardona, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 29 del mes de abril del presente año, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se deroga el segundo párrafo del artículo 89 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Jesús Andrés Loya Cardona, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se deroga el segundo párrafo del artículo 89 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Jesús Andrés Loya Cardona, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S***

*“Coahuila es un Estado con una historia constitucional y parlamentaria sumamente rica. Cuna de grandes mujeres y hombres que forjaron el presente y futuro de nuestra nación, ha sido ejemplo constante de actualización y modernidad, buscando siempre alcanzar las máximas en protección y salvaguarda de los derechos humanos de quienes aquí habitamos.*

*Nuestra Constitución actual fue promulgada hace 102 años, teniendo a la fecha diversas reformas que la han mantenido vigente ante las circunstancias y necesidades del desarrollo político, económico y social de la entidad y el país. Sin duda, una de las más importantes del entorno contemporáneo fue la reforma que modificó la naturaleza del órgano encargado de procuración de justicia, dando paso a la autonomía constitucional e indepencia de la Fiscalía General del Estado.*

*A partir de esta trascendental reforma emanó un sistema jurídico que dieran vida y soporte a la misma, como lo es la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, que establece las reglas básicas para la operación de esta institución. De igual forma, se publicaron reformas a 27 textos jurídicos a fin de homologarlos a la nueva denominación del apartado de procuración de justicia, dejando atrás la pasada Procuraduría General de Justicia, cuya raíz denotaba un sesgo de dependencia con el Poder Ejecutivo.*

*Siendo la Constitución nuestro máximo ordenamiento, es fundamental que sus preceptos se encuentren correctamente armonizados con la realidad del Estado y de sus instituciones, pues es la pieza normativa clave que da sustento al resto de nuestro engranaje jurídico.*

*Ante ello, es necesario hacer las adecuaciones necesarias en torno a la ya consolidada autonomía de la Fiscalía General del Estado, debiendo al efecto modificar o, en su caso, derogar aquellas porciones normativas que constrastan con su naturaleza de órgano constitucional autónomo, como es el caso del segundo párrafo del artículo 89 constitucional, cuyo texto se refiere a la facultad del Procurador General del Estado de concurrir al Congreso, previa anuencia del Gobernador, cuando se discuta una ley de su competencia.*

*Esta disposición tiene al efecto tres factores de confronta: el primero de ellos, es que la misma se encuentra inserta en el Título Cuarto, Del Poder Ejecutivo; la segunda, es que señala expresamente que, para ello, el Legislativo debe solicitar al Gobernador su anuencia; y finalmente, la tercera, es que el sentido de dicha disposición se replica y en cierta medida se contradice en la fracción XVI del artículo 115 del mismo ordenamiento.*

*En ese sentido y con el fin de eliminar contrastes en la regulación del mismo texto constitucional y fiel a la noción autónoma del ente Procurador de Justicia, es que se pone a su consideración esta iniciativa de reforma por la cual se deroga el segundo párrafo del artículo 89 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, dejando por demás de manifiesto que la facultad del titular de la Fiscalía General de concurrir ante el Congreso cuando se discuta una ley materia de su competencia, se contempla de forma expresa en el ya citado artículo 115.*”

**TERCERO.-** Los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, nos abocamos al análisis del objeto y consideraciones de la iniciativa que se dictamina, de lo cual se puede desprender que el objeto de la misma radica en modificar en derogar el segundo párrafo del artículo 89 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, con la finalidad realizar las adecuaciones necesarias en torno a la ya consolidada autonomía de la Fiscalía General del Estado, debiendo al efecto modificar o, en su caso, derogar aquellas porciones normativas que contrastan con su naturaleza de órgano constitucional autónomo.

En este orden de ideas, quienes dictaminamos observamos que el 14 de julio del año 2017 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el Decreto 903 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, en Materia Anticorrupción. Dentro de las modificaciones se contempló dotar al Estado de un nuevo marco jurídico en materia de procuración de justicia revistiendo al Ministerio Público de Autonomía, migrando del esquema de Procuraduría al de Fiscalía a efecto de garantizar los principios de eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.

En mismo modo, el 10 de Febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Constitución General, que entre otras modificaciones incluía la concerniente al artículo 102, a efecto de disponer que “el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República, como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios”.

En este contexto es que coincidimos con quien suscribe que, a consecuencia de las referidas reformas, nace la necesidad de armonizar nuestro marco normativo con las mimas, entendiendo dicha armonización como un arduo proceso de reforma, adaptación e integración normativa de los diversos ordenamientos jurídicos que forman parte de un sistema de derecho, a efecto de que se asegure la correcta aplicación de las normas, estableciendo así que el sistema jurídico opere como un todo que sea coherente.

En el mismo sentido, las armonizaciones permiten identificar y resolver contradicciones entre las normas jurídicas, superar incongruencias y cubrir lagunas, a fin de hacer posible que los mandatos o disposiciones jurídicas, fluyan sin obstáculo a través del andamiaje institucional diseñado, hasta concretarse en su eficaz cumplimiento.

Es por lo anteriormente expuesto, que consideramos indispensable y oportuna reformar el referido ordenamiento, con la finalidad de otorgar leyes claras y adecuadas para todos los coahuilenses, de forma que resulten más accesibles en su contenido.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se deroga el segundo párrafo del artículo 89 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 89.** …

**Se deroga.**

**TRANSITORIO**

**ÚNICO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 29 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el cuarto párrafo de la fracción XXXIII del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Coahuila, planteada por la Diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 23 del mes de octubre del año 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, en fecha 25 de octubre del mismo año se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el cuarto párrafo de la fracción XXXIII del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Coahuila, planteada por la Diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el cuarto párrafo de la fracción XXXIII del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Coahuila, planteada por la Diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*En la sesión pública de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), celebrada el pasado día 30 de septiembre del año en curso, se resolvieron cuatro acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de diversas disposiciones contenidas en Leyes de Ingresos de municipios de Veracruz, Aguascalientes, Puebla y Guerrero.*

*Destacó el caso de las leyes de ingresos de Aguascalientes, en virtud de que reiteradamente el Congreso de ese Estado volvió a establecer, como base del pago del Derecho de Alumbrado Público (DAP), el consumo de energía eléctrica. Lo anterior, a pesar de que existe jurisprudencia declarando esa práctica como inconstitucional y de que en las leyes de ingresos del año anterior la SCJN, al declarar la inconstitucionalidad del DAP, había vinculado al Congreso de Aguascalientes a no repetir esa práctica, cosa que evidentemente no hizo.*

*El malestar de la SCJN quedó acreditado cuando tres de sus miembros propusieron, como parte de los efectos de la sentencia, que las cantidades indebidamente cobradas fueran devueltas. Desafortunadamente la propuesta no alcanzó la mayoría.*

*Lo reseñado plantea tres problemas: En primer lugar, las leyes de ingresos tienen una vigencia anual. Como todos saben, el plazo para presentar la Acción de Inconstitucionalidad es de treinta días a partir de la publicación del decreto. Hasta el año pasado, la gran mayoría de acciones de inconstitucionalidad contra leyes de ingresos municipales eran resueltas un año después, es decir, cuando ya no tenían vigencia y, por tanto, la declaratoria de inconstitucionalidad perdía su efecto reparador pues los hechos estaban consumados. Apenas, en este año, la SCJN ha tratado de resolverlas mientras tienen vigencia, pero como puede observarse, las resoluciones se dan cuando han estado vigentes nueve de los doce meses.*

*El segundo problema es que, frente a estas normas inconstitucionales, las grandes empresas recurren al amparo y evitan ser lesionadas en sus derechos. Sin embargo, la mayoría de los contribuyentes no tienen los medios para defenderse y tienen que pagar una contribución que posteriormente es declarada inconstitucional y ya no se puede reparar la vulneración de sus derechos. Esto es a todas luces injusto y un verdadero abuso de la autoridad municipal.*

*El tercer problema es que de todo esto son responsables las Legislaturas Estatales, pues son ellos quienes tienen la facultad exclusiva de aprobar las leyes de ingresos municipales. Es decir, la responsabilidad directa de que se expidan normas inconstitucionales que lesionan el patrimonio de los contribuyentes municipales corresponde a los Congresos de las entidades federativas.*

*Para resolver estos problemas se propone reformar el párrafo cuarto de la fracción XXXIII del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, relativo a las facultades del Congreso.*

*En la actualidad, el párrafo cuarto señala (y cito): “En el caso de no aprobarse la Ley de Ingresos o el Presupuesto de Egresos del Estado, continuarán en vigor las del año inmediato anterior, con las actualizaciones que sean pertinentes de acuerdo al índice de precios al consumidor.” (fin de la cita)*

*Debo aclarar que en el tercer párrafo de esta fracción se contiene la facultad del Congreso de “examinar, discutir y aprobar anualmente las leyes de ingresos de los municipios.”*

*Se propone reformar el párrafo cuarto en tres aspectos. Primero, para incorporar las leyes de ingresos municipales al supuesto de que, de no ser aprobadas, continuarán en vigor las del año inmediato anterior, con las actualizaciones que resulten pertinentes. Además, se incorpora el índice inflacionario, pues el índice de precios opera, en su caso, con el Presupuesto de Egresos del Estado, mientras que las actualizaciones de las Leyes de Ingresos, tanto Estatal como Municipales, tendrían que ser en función del índice inflacionario. Finalmente se establece que dichas “actualizaciones” deberán ser debidamente motivadas. Esto último, por su importancia, requerirá lo que la SCJN ha denominado “motivación reforzada”, para los efectos de que las actualizaciones estén debidamente justificadas.*

*En segundo término se propone establecer una prohibición tajante al Congreso del Estado para que, al aprobar las leyes de ingresos del Estado y los Municipios, no pueda incluir normas declaradas previamente como inconstitucionales por la SCJN, es decir, se le impone al Poder Legislativo la obligación de verificar que las normas contenidas en las leyes de ingresos no contengan vicios de inconstitucionalidad con lo que, además de ceñirse al principio de legalidad, se colma el principio de certeza y seguridad jurídica a favor de los contribuyentes.*

*En tercer lugar y no por ello menos importante, se propone que, en el supuesto de que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de normas contenidas en las Leyes de Ingresos, el Estado o los Municipios, según sea el caso, las autoridades fiscales competentes estarán obligadas a la devolución de lo indebidamente recaudado.*

*El objetivo de esta disposición es claro: Terminar con el abuso de las autoridades fiscales que cobren contribuciones inconstitucionales, obligándolas a devolver lo indebidamente recaudado, con independencia del principio de anualidad de las leyes de ingresos pues, como lo dispone el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la interpretación de las leyes deberá privilegiarse el principio pro persona, esto es, favoreciendo la protección más amplia a las personas.*

*Todo lo planteado obligaría, tanto al Congreso del Estado, al Titular del Ejecutivo y a los Ayuntamientos, a presentar Iniciativas de Leyes de Ingresos que no contengan normas inconstitucionales que, al final de cuentas, resultan perjudiciales para la mayoría de los contribuyentes.*

**TERCERO.-** Quienes integramos esta comisión dictaminadora efectuamos el estudio y análisis de la iniciativa de reforma así como de las consideraciones en las que encuentra sustento la misma, verificando que el proyecto normativo tiene por objeto reformar la fracción XXXIII del artículo 76 de la Constitución Local, en relación a la facultad del Congreso al aprobar las Leyes de Ingresos del Estado y los Municipios.

Dentro de la exposición de motivos se alude que “[*en] la sesión pública de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), celebrada el pasado día 30 de septiembre del año en curso, se resolvieron cuatro acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de diversas disposiciones contenidas en Leyes de Ingresos de municipios de Veracruz, Aguascalientes, Puebla y Guerrero”.*

De lo anterior, podemos hacer referencia de la Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 15/2019, promovida por la citada Comisión Nacional de los Derechos Humanos y publicada por el Diario Oficial de la Federación, en fecha 13 de febrero de 2020, la cual, entre las consideraciones relativas al tema II referente al alumbrado público, se alude que:

*“La comisión accionante afirma, en esencia, que los artículos impugnados bajo este tema violan la garantía de seguridad jurídica y los principios de justicia tributaria, en la medida en que si bien establecen un derecho por la prestación del servicio de alumbrado público, lo que en realidad regulan es un impuesto, porque toman como base el consumo de energía eléctrica de los usuarios.*

*Explica que la base que regulan los aludidos preceptos se relaciona con un hecho imponible que no corresponde a una actividad del Estado por concepto del servicio de alumbrado público, sino a un hecho, acto, situación o actividad que revela capacidad contributiva y, por ende, que es ajeno a la naturaleza de la contribución denominada derecho.*

*Dice que si bien el artículo 115 constitucional prevé que el Municipio tendrá a su cargo el servicio de alumbrado público, tal circunstancia no lo faculta o habilita para cobrar contribuciones por el consumo de energía eléctrica, de modo que aquel precepto debe interpretarse de manera sistemática con el diverso 73, fracción XXIX, numeral 5, inciso a), constitucional a fin de concluir que lo que realmente se está regulando es un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica.*

*Agrega que como los preceptos impugnados en realidad regulan un impuesto, es claro que se viola la garantía de seguridad jurídica y el principio de proporcionalidad tributaria, pues el legislador local no está constitucionalmente habilitado para establecer contribuciones por el consumo de energía eléctrica y se pretende cobrar como derecho un tributo que en realidad tiene una naturaleza jurídica diferente, tal como, dice, lo ha resuelto este Tribunal Pleno en los precedentes que invoca.*

***Al resolver, entre otras, la acción de inconstitucionalidad 18/2018, en sesión de cuatro de diciembre del dos mil dieciocho, en que, dicho sea de paso, se impugnaron las mismas leyes de ingresos municipales del Estado de Aguascalientes aquí controvertidas, este Tribunal Pleno estableció que conforme a los artículos 73, fracción XXIX, numeral 5, inciso a), y 115, fracciones III, inciso b), y IV, inciso c), de la Constitución Federal, corresponde al Congreso de la Unión establecer contribuciones especiales sobre energía eléctrica, mientras que los municipios tienen a su cargo, entre otros servicios, el de alumbrado público”.***

Como podemos observar, en más de una ocasión se promovió y se resolvió una Acción de Inconstitucionalidad en la que se declaró la invalidez de diversos artículos de las Leyes de Ingresos de distintos Municipios del Estado de Aguascalientes, debido a que estas se aprobaron en los mismos términos ya invalidados con anterioridad.

Aunado a lo anterior *“se propone establecer una prohibición tajante al Congreso del Estado para que, al aprobar las leyes de ingresos del Estado y los Municipios, no pueda incluir normas declaradas previamente como inconstitucionales por la SCJN, es decir, se le impone al Poder Legislativo la obligación de verificar que las normas contenidas en las leyes de ingresos no contengan vicios de inconstitucionalidad con lo que, además de ceñirse al principio de legalidad, se colma el principio de certeza y seguridad jurídica a favor de los contribuyentes”.*

Actualmente la Constitución Estatal en su artículo 67, fracción XXXIII, el cual es objeto de la presente propuesta, establece que:

***Artículo 67.*** *Son atribuciones del Poder Legislativo:*

***XXXIII.*** *Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado, los cuales deben estar armonizados con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, discutiendo primero los ingresos que deben decretarse para cubrir el ejercicio presupuestal, tomando en cuenta, entre otros elementos, los informes de la entidad de fiscalización superior.*

*El Congreso deberá aprobar en el Presupuesto de Egresos del Estado, las partidas necesarias para solventar las obligaciones incurridas en ejercicios anteriores y pagaderos en dicho ejercicio:*

***a)*** *Que constituyan deuda pública del Estado o de las entidades paraestatales que cuenta con la garantía del Estado, conforme a lo autorizado por las leyes y los decretos correspondientes, y:*

***b)*** *Que se deriven de contratos para proyectos para prestación de servicios aprobados por el Congreso conforme a las leyes aplicables.*

*Asimismo, examinar, discutir y aprobar anualmente las leyes de ingresos de los Municipios, tomando en cuenta, entre otros elementos, los informes de la entidad de fiscalización superior, así como determinar, también anualmente, las bases, montos y plazos que habrán de observarse conforme a los principios que establece el artículo 158-T de esta Constitución, para que los Municipios reciban de inmediato y sin demora las participaciones y aportaciones federales o estatales que les correspondan.*

***En el caso de no aprobarse la Ley de Ingresos o el Presupuesto de Egresos del Estado, continuarán en vigor las del año inmediato anterior, con las actualizaciones que sean pertinentes de acuerdo al índice de precios al consumidor.***

*Las leyes garantizarán la gratuidad de la información pública bajo el principio de disponibilidad presupuestal, sin perjuicio de los derechos o cuotas proporcionales, equitativas y mínimas por la reproducción, gastos de envío, servicio o trámite público, conforme a las leyes fiscales.*

De lo anterior, podemos destacar que en lo referente al párrafo cuarto, se cita que en caso de no ser aprobada la Ley de Ingresos o el Presupuesto de Egresos, seguirá en vigor las del año inmediato anterior.

En base a ello, la iniciadora propone dentro de sus consideraciones modificar el citado párrafo “*para incorporar las leyes de ingresos municipales al supuesto de que, de no ser aprobadas, continuarán en vigor las del año inmediato anterior, con las actualizaciones que resulten pertinentes. Además, se incorpora el índice inflacionario, pues el índice de precios opera, en su caso, con el Presupuesto de Egresos del Estado, mientras que las actualizaciones de las Leyes de Ingresos, tanto Estatal como Municipales, tendrían que ser en función del índice inflacionario. Finalmente se establece que dichas “actualizaciones” deberán ser debidamente motivadas”.*

Una vez agotado el análisis de la presente propuesta de reforma, quienes integramos esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia coincidimos en el hecho de que resulta indispensable adecuar nuestro marco constitucional en los términos expuestos, a efecto de que las actualizaciones de Leyes de Ingresos, estén debidamente adecuadas y cumplan con el correcto objetivo para el que son creadas.

No obstante lo anterior, por lo que hace a la porción normativa *“en caso de que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de normas contenidas en las Leyes de Ingresos, las autoridades fiscales competentes del Estado o de los Municipios, según sea el caso, estarán obligadas a la devolución de lo indebidamente recaudado”, después de realizar un exhaustivo análisis de la inactiva, se concluyó que debe atenderse a cada caso en concreto, por lo que no se incluye dicha porción normativa en el proyecto de Decreto contenido en el presente dictamen.*

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO. -** Se reforma el párrafo cuarto de la fracción XXXIII del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 67.** …

**I** a la **XXXII.** …

**XXXIII.** …

…

a) y b) …

…

En el caso de no aprobarse las Leyes de Ingresos del Estado o de los Municipios o el Presupuesto de Egresos del Estado, continuarán en vigor las del año inmediato anterior, con las actualizaciones que sean pertinentes de acuerdo al índice de precios al consumidor o al índice inflacionario, según sea el caso, mismas que deberán ser debidamente motivadas. El Congreso del Estado, al aprobar las Leyes de Ingresos a que se refiere este párrafo, tendrá prohibido establecer normas que hayan sido declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

…

**XXXIV** a la **LIV.** …

…

**TRANSITORIOS**

**Primero.-** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; y

**Segundo.-** Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 29 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto para reformar la fracción II del artículo 167 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, de la Fracción Parlamentario “Presidente Benito Juárez García”, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 18 del mes de marzo de 2020, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con proyecto de decreto para reformar la fracción II del artículo 167 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, de la Fracción Parlamentario “Presidente Benito Juárez García”, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con proyecto de decreto para reformar la fracción II del artículo 167 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, de la Fracción Parlamentario “Presidente Benito Juárez García”, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*“La iniciativa que hoy someto a la consideración del Pleno encuentra su sustento, por un lado, en la necesidad de establecer, en el texto constitucional, la obligación de integrar cualquier órgano colegiado del Estado, bajo el principio de paridad de género.*

*Como se recordará éste principio ya fue elevado a rango constitucional en la Carta Magna que rige nuestro sistema republicano y federal.*

*Desde luego hay que señalar que, en la actualidad, el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción está integrado por dos mujeres y tres hombres. Sin embargo, no existe norma legal y mucho menos constitucional que establezca la obligatoriedad de sujetarse al principio de paridad de género en la integración de este importante órgano ciudadano.*

*Es evidente que, en las condiciones actuales, la paridad de género no puede estar al arbitrio de la buena voluntad de nadie sino que debe ser de cumplimiento obligatorio y, para ello, debe estar expresamente establecido en el texto constitucional. Las mujeres nos hemos ganado ese derecho.*

*Por otro lado, el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción es un órgano de singular importancia. En primer lugar porque, de conformidad al artículo 11 de la ley de la materia, la Presidencia del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción se ejerce durante un año y este cargo es rotativo entre los miembros del Comité de Participación Ciudadana.*

*Debe tenerse presente que es la persona que ocupa la presidencia del Comité Coordinador quien presenta el informe anual de resultados y las recomendaciones en materia de prevención y combate a la corrupción. Por lo anterior, de prosperar la presente iniciativa se garantizará que, por lo menos, dos de cada cinco años, el Comité Coordinador sea presidido por una mujer y esta garantía tendrá rango constitucional.*

*Ahora bien, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila, el Consejo de Participación Ciudadana tiene como propósito (y cito) “el cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema Estatal.” (fin de la cita)*

*Además, el Consejo tiene facultades para proponer metodologías y procedimientos que permitan la generación de indicadores sobre la corrupción en la entidad. No debe perderse de vista que uno de los objetivos fundamentales del Consejo es proponer el establecimiento de mecanismos para que la sociedad participe activamente en la prevención y denuncia de actos de corrupción.*

*Así mismo, el Consejo es competente para articular y establecer, en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, una red de participación ciudadana que se involucre en el combate a la corrupción, lo que por supuesto genera un sistema ciudadano de vigilancia para prevenir, denunciar y sancionar los actos de corrupción.*

*Por la singular importancia de este órgano colegiado y por su potencial para impulsar la lucha contra la corrupción, es indispensable que, desde el texto constitucional, se establezca la paridad de género en su integración.*

*Se propone incorporar al texto constitucional que el Consejo deba integrarse con cinco ciudadanas y ciudadanos y que éstos tengan que ser designados en estricto apego al principio de paridad de género.*

*Además, se propone señalar que todo lo anterior se sujetará a los términos que disponga la ley de la materia. Esto último es necesario pues la integración del Consejo se hace de manera escalonada. En la actualidad no existe norma legal o constitucional que impida que la renovación escalonada pueda derivar en un Consejo integrado por cinco hombres. Con la reforma que se propone, se establece un límite constitucional en la integración pues no podrá integrarse con más de tres consejeros de un mismo género.*

*Así, al hacer la Constitución una remisión a la ley de la materia, el legislador ordinario, en el momento de reformar la ley para incorporar el principio de paridad de género podrá optar por diversos métodos de selección y designación pero, en todo momento, deberá respetar el límite de que nunca el Consejo podrá quedar integrado por más de tres consejeros de un mismo género.*

*A mayor abundamiento, el legislador ordinario podrá optar por establecer un procedimiento de renovación escalonada en donde un año se integre con tres mujeres y dos hombres y al año siguiente la integración sea de tres hombres y dos mujeres. Lo anterior es posible en tanto el tercer párrafo del artículo 16 de la ley de la materia dispone que el período de encargo de los consejeros es de cinco años y que la renovación se realizará de manera escalonada.*

*Un dispositivo normativo como el señalado anteriormente, es ideal para que, en un órgano colegiado cuyo número de integrantes resulta impar, pueda sujetarse de manera armónica al principio de equidad de género. Al respeto este procedimiento, así como la presidencia rotativa en razón del género, han sido incorporados en algunas legislaciones europeas y, en mi opinión, su aplicación se irá extendiendo tanto en su vertiente cuantitativa como cualitativa, esto es, no solo en un mayor número de países sino también en órganos colegiados de mayor relevancia legal y constitucional.*

*El presente es la paridad de género y la lucha por la erradicación de la violencia contra las niñas y las mujeres; el pasado es el machismo, la sociedad patriarcal, la misoginia y todos los ancestrales complejos que han impedido, hasta ahora, la igualdad sustancial entre hombres y mujeres. Independientemente de nuestras diferencias ideológicas y partidarias somos el primer Congreso de Coahuila con mayoría de mujeres: Que se haga sentir nuestra mayoría; Cuando menos, al legislar a favor de las mujeres hagamos a un lado nuestras diferencias; Demostremos que somos dignas representantes de las mujeres: Seamos ejemplo para nuestras hijas.*

*No puedo dejar de mencionar que me entristece profundamente que, en una comisión donde las mujeres son mayoría, una iniciativa de ley que presenté hace muchos meses y que tiene como único propósito erradicar el lenguaje sexista y garantizar que las leyes de Coahuila tengan un lenguaje incluyente y no discriminatorio hacia las mujeres, no cuente con el apoyo de las compañeras del PAN y del PRI. Ojalá cambien de opinión y se sumen al esfuerzo de erradicar el lenguaje sexista que nos discrimina impunemente. No es un tema menor, el lenguaje es una manifestación de la cultura y el lenguaje sexista es una manifestación de la cultura machista y de su peor efecto: Hacer invisible a la mujer y crear las condiciones sociales para la nefasta tolerancia hacia la violencia de género y el feminicidio, condiciones que a su vez generan impunidad e iniferencia.*

*Yo hago votos porque en este último año de nuestra legislatura las Diputadas, que somos mayoría en este Congreso por primera vez en la historia, podamos acordar una agenda legislativa a favor de las mujeres y realizar las reformas legales y constitucionales que las niñas y mujeres coahuilenses requieren para su protección y desarrollo.*”

**TERCERO.-** Los integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, revisamos el objeto y alcances de la iniciativa, misma que tiene por finalidad de incorporar el principio de paridad de género en la integración del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

En este sentido, la promovente plantea la necesidad de consignar en el artículo 167 de nuestro marco normativo, que en el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, se deberá especificar que será integrado por cinco **ciudadanas** y **ciudadanos**, además de establecer que los mismos serán designados en **estricto apego al principio de paridad de género**, y para un mejor proveer, enseguida anexamos un cuadro comparativo con la ley vigente.

|  |  |
| --- | --- |
| **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA** | |
| **LEY VIGENTE** | **PROPUESTA** |
| **Artículo 167.** El Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades estatales y municipales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:  **I.** El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior del Estado; de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Estatal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza; el Presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información; así como por un representante del Consejo de la Judicatura y otro del Consejo de Participación Ciudadana, que será quien presida el Comité de Coordinación en los términos que establece la ley de la materia.  **II.** El Consejo de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley.  **III.** Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la Ley:  **a)** El establecimiento de mecanismos de coordinación entre los organismos que integran el sistema estatal con los municipios del Estado.  **b)** El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan.  **c)** La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno.  **d)** El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos.  **e)** La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.  Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas. | **Artículo 167.** …  **I.** …  **II.** El Consejo de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco **ciudadanas y** ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados **en estricto apego al principio de paridad de género** en los términos que establezca la ley.  **III.** … |

Es menester referir, que en junio de 2019, el Congreso del Estado aprobó un dictamen relativo a una iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modificó el contenido del último párrafo del artículo 17 y se adicionó un tercer párrafo al artículo 18 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza, quedando de la siguiente manera:

***“Artículo 17.*** *Los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, no tendrán relación laboral alguna por virtud de su encargo con la Secretaría Ejecutiva. El vínculo legal con la misma, así como su contraprestación, serán establecidos a través de contratos de prestación de servicios por honorarios, en los términos que determine el órgano de gobierno, por lo que no gozarán de prestaciones, garantizando así la objetividad en sus aportaciones a la Secretaría Ejecutiva.*

*Los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana estarán sujetos al régimen de responsabilidades que determina el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 159 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.*

*En relación con el párrafo anterior, le serán aplicables las obligaciones de confidencialidad, discreción, resguardo de información, y demás aplicables por el acceso que llegaren a tener a la información de las plataformas digitales de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional y demás información de carácter reservado y confidencial.*

***En la conformación del Consejo de Participación Ciudadana se garantizará la paridad de género, por lo que deberá conformarse, en cualquier circunstancia, de tres ciudadanos de un mismo género.***

***Artículo 18.*** *Los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana serán nombrados conforme al siguiente procedimiento:*

***I.*** *El Congreso del Estado constituirá una Comisión de Selección integrada por nueve mexicanos, residentes del estado, por un periodo de tres años, de la siguiente manera:*

***a)*** *Convocará a las instituciones de educación superior y de investigación del estado, para proponer candidatos a fin de integrar la Comisión de Selección, para lo cual deberán enviar los documentos que acrediten el perfil solicitado en la convocatoria, en un plazo no mayor a quince días, para seleccionar a cinco miembros basándose en los elementos decisorios que se hayan plasmado en la convocatoria, tomando en cuenta que se hayan destacado por su contribución en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción.*

***b)*** *Convocará a organizaciones de la sociedad civil que tengan experiencia comprobada en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción, para seleccionar a cuatro miembros, en los mismos términos del inciso anterior.*

*El cargo de miembro de la Comisión de Selección será honorario. Quienes funjan como miembros no podrán ser designados como integrantes del Consejo de Participación Ciudadana por un periodo de seis años contados a partir de la disolución de la Comisión de selección.*

***La Comisión de Selección se conformará atendiendo al principio de paridad de género, por lo que cinco de sus integrantes deberán pertenecer a un mismo género.***

*Los integrantes de la Comisión de Selección deberán reunir los mismos requisitos que esta ley exige para ser Secretario Técnico, establecidos en el artículo 34.*

***II.*** *La Comisión de Selección deberá emitir una convocatoria, con el objeto de realizar una amplia consulta pública en el estado, dirigida a toda la sociedad, para que presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo.*

*Para ello, definirá la metodología, plazos y criterios de selección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y deberá hacerlos públicos; en donde deberá considerar al menos las siguientes características:*

***a.*** *El método de registro y evaluación de los aspirantes;*

***b.*** *Hacer pública la lista de las y los aspirantes;*

***c.*** *Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su inscripción en versiones públicas;*

***d.*** *Hacer público el cronograma de audiencias;*

***e.*** *Podrán efectuarse audiencias públicas en las que se invitará a participar a investigadores, académicos y a organizaciones de la sociedad civil, especialistas en la materia, y*

***f.*** *El plazo en que se deberá hacer la designación que al efecto se determine, y que se tomará, en sesión pública, por el voto de la mayoría de sus miembros.*

*En caso de que se generen vacantes imprevistas, el proceso de selección del nuevo integrante no podrá exceder el límite de noventa días y el ciudadano que resulte electo desempeñará el encargo por el tiempo restante de la vacante a ocupar.”*

Gracias a la referida reforma, se estableció que en la conformación del Comité de Selección y Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, fuera acorde a los principios de equidad de género. Aunado a lo anterior, quienes integramos la presente comisión apreciamos que tanto la reforma anteriormente referida, como la que hoy nos ocupa, son medidas legislativas cuyo sustento recae en lo estipulado por el artículo primero de la Constitución General, disposición en la que se consagra el derecho a la igualdad y a la no discriminación y que las mismas son consistentes con diversos instrumentos de derechos humanos, tanto del sistema internacional, como del sistema americano, signados y ratificados por el Estado Mexicano, en particular la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Internacional sobre las Mujeres de Beijing (1995), en la que se promueve de manera fehaciente el compromiso de tomar medidas en el campo de las leyes y los procesos judiciales, de las administración y las políticas públicas para la consecución de la igualdad entre los géneros.

Es por lo anterior, que para los integrantes de esta dictaminadora, resulta necesario impulsar acciones concretas y medidas normativas a efecto de asegurar y procurar una solución transitoria que permita garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, por lo cual consideramos oportuna la modificación propuesta a nuestra constitución local, teniendo en cuenta las reformas a la constitución general, aprobadas recientemente, en materia de paridad de género, que tuvieron como finalidad establecer las normas que garanticen el principio de paridad en la totalidad de los cargos públicos, es decir tanto los cargos de elección popular como aquellos cuya designación no se realiza mediante comicios electorales, y que tuvo motivación en por la gran la situación de desigualdad en la que aún se encuentran hombres y mujeres en el servicio público.

Ahora bien, en la Constitución Local, se señala que “*el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley”*, y aunque como bien se señala en la exposición de motivos, actualmente está integrado por dos mujeres y tres hombres, no existe en la norma constitucional, la obligatoriedad de sujetarse al principio de paridad de género, por lo que coincidimos en que la paridad de género no puede estar sujeta solo a buenas voluntades, sino de cumplimiento obligatorio establecido en el texto constitucional.

Un punto que resulta fundamental a efecto de pronunciarnos con respecto de la reforma, fue el determinar si esta propuesta era consistente con la génesis, naturaleza y principios en los que se sustenta el Sistema Estatal Anticorrupción, encontrándose que su incorporación es conforme al mismo, sin afectar principios como el de la equivalencia en sus órganos.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO:** Se reforman la fracción II artículo 167, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 167.** …

**I.** …

**II.** El Consejo de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco **ciudadanas y** ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados **en estricto apego al principio de paridad de género** en los términos que establezca la ley.

**III.** …

**TRANSITORIOS**

**Primero.-** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado;

**Segundo.-** Dentro de los 60 días naturales siguientes a la publicación del presente Decreto, se realizarán las reformas legales que resulten necesarias; y

**Tercero.-** Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Así lo acuerdan las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 29 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la presente iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza y la Ley de Prevención, Asistencia y Atención de la Violencia Familiar, con el objeto de reconocer a la alienación parental como una forma de violencia familiar,planteada por la Diputada María del Rosario Contreras Pérez, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 23 de abril del año 2020, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza y la Ley de Prevención, Asistencia y Atención de la Violencia Familiar, con el objeto de reconocer a la alienación parental como una forma de violencia familiar,planteada por la Diputada María del Rosario Contreras Pérez, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** presente iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza y la Ley de Prevención, Asistencia y Atención de la Violencia Familiar, con el objeto de reconocer a la alienación parental como una forma de violencia familiar,planteada por la Diputada María del Rosario Contreras Pérez, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*De acuerdo con un estudio realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos[[1]](#footnote-1), la alienación parental consiste en las conductas que lleva a cabo el padre o la madre que tiene la custodia de un hijo o hija, e injustificadamente impide las visitas y convivencias con el otro progenitor, causando en el niño o niña un proceso de transformación de conciencia, que puede ir desde el miedo y el rechazo, hasta llegar al odio.*

*Tales conductas si se realizan de manera reiterativa, manipulan la mente del menor e influyen de manera negativa hasta lograr un cambio de conciencia con respecto a alguno de sus progenitores, pues no tiene la capacidad de comprender o resistir los actos de manipulación que un adulto ejerce sobre el para lograr un objetivo: el impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos contra el otro progenitor.*

*Este tipo de conductas, suelen darse previo, durante o después de un proceso de divorcio, en el que debido a la separación y designación de quien temporal o definitivamente tendrá la custodia de los menores, suelen utilizar a los hijos como un pretexto para desquitarse de su excónyuge o conseguir beneficios económicos por la disolución del vínculo matrimonial, a costa de una convivencia pacífica entre los hijos con alguno de los progenitores.*

*Esta situación coloca a los menores en un campo de batalla entre sus padres, en el que se forja un conflicto de lealtades, lo que genera una perturbación psicológica hacia el menor, que afecta de manera significativa su desarrollo emocional, lo cual trae efectos negativos en diversos ámbitos de su vida.*

*La alienación parental se genera a través de conductas negativas, que en muchas ocasiones no suelen ser sutiles sino violentas por parte de alguno de los progenitores, pues tratan desesperadamente crear en los menores sentimientos de rechazo contra uno de los progenitores, mediante maniobras de desprestigio o injurias, lo cual poco a poco los menores asumen como suyo ese rechazo y esos argumentos que reiteradamente lo acechan, hasta generar un cambio en su comportamiento que lo hace rechazar a mantener un contacto con alguno de sus progenitores, haciéndolo extensivo muchas veces a familiares como abuelos, tíos o primos, pues cortan toda relación de parentesco.*

*Esto sin duda alguna, constituye una forma de violencia familiar, pues se juega con las emociones de los menores. La alienación parental no solamente afecta la dinámica familiar, sino el desarrollo normal de los menores, además constituye una violación a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, pues atenta su derecho a la identidad, al apego, y a desarrollar una convivencia pacífica y permanente con el padre o madre que no tenga su custodia.*

*La protección de los derechos de los menores debe anteponerse a los derechos, deberes e intereses de los padres que transitan en un proceso de divorcio, por lo que es necesario frenar esas conductas de conflictos interparentales que constituyen una violencia familiar hacia los menores.*

*Es por ello, que resulta necesario establecer en la legislación estatal normas que garanticen la protección integral de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en el que prevalezca el interés superior de los menores, reconociendo a la alienación parental como una forma de violencia familiar y como tal, ejercer acciones para prevenirla y erradicarla.*

*Por lo cual, esta iniciativa propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza y la Ley de Prevención, Asistencia y Atención de la Violencia Familiar, con la finalidad de prevenir violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que puedan ver afectado su normal desarrollo, como consecuencia de conductas de alienación parental.*

**TERCERO.-** Quienes integramos la presente Comisión Dictaminadora, efectuamos el estudio y análisis de la iniciativa, verificando que la misma tiene por objeto la modificación de la Ley para la Familia del Estado y la Ley de Prevención, Asistencia y Atención de la Violencia Familiar, a efecto de establecer como una de las formas que reviste la violencia familiar, la alienación parental y por lo tanto también como una causal por la cual pueden suspenderse los derechos que confieren la patria potestad.

|  |  |
| --- | --- |
| **LEY PARA LA FAMILIA**  **VIGENTE** | **INICIATIVA** |
| **Artículo 437.** Los derechos que confiere la patria potestad se suspenden:    **I.** Por padecer alguna deficiencia en las funciones o estructuras corporales que sea de tal grado que impida que quien desempeña la patria potestad tome decisiones por sí mismo, para lo cual será necesario que exista declaración judicial.    **II.** Por la ausencia declarada en forma y por la declaración especial de ausencia, de conformidad con el Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza o con la Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila de Zaragoza.  **III.** Por sentencia condenatoria que imponga como pena esta suspensión.    **IV.** Por determinación de la autoridad judicial competente. | **Artículo 437.** …    **I.** a la **IV.** ...    **V.** Por alienación parental acreditada ante la autoridad judicial competente. |
| **Artículo 647.** La violencia familiar se puede presentar mediante los siguientes tipos de violencias:  **I.** La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio;  **II.** La violencia física.-Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas;  **III.** La violencia patrimonial.-Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima;  **IV.** La violencia económica.-Es toda acción u omisión del Agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral;  **V.** La violencia sexual.-Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto, y  **VI.** Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las personas que integran la familia. | **Artículo 647.** …  **I.** a la **V.** …  **VI**. La alienación parental.- Es una forma de violencia familiar que se presenta cuando el padre o la madre manipula a un menor de edad con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores, y  **VII.** Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las personas que integran la familia. |
| **LEY DE PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR VIGENTE** | **INICIATIVA** |
| **Artículo 10.** En orden a los sujetos y supuestos de aplicación de esta ley, se entiende por:  I. “ Persona Receptora de la violencia familiar”: La persona o grupo de personas que sufren el maltrato físico, verbal, psicoemocional, sexual o económico en su esfera biopsicosexual o patrimonial.  II. “Persona Generadora de la violencia familiar”: Quienes realizan actos de maltrato físico, verbal, psicoemocional, sexual, por negligencia o económico, hacia las personas con las que tengan o hayan tenido algún vínculo familiar; se hallen bajo su guarda o custodia o mantengan relaciones de hecho similares a las que se originan con motivo del matrimonio o en el seno familiar.  III. “Violencia familiar”: Aquel acto de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, por negligencia, económica ó sexualmente a cualquier miembro de la familia, que tenga relación de parentesco por consanguinidad, tenga o lo haya tenido por afinidad o civil, o se halle en unión libre, de hecho o concubinato o en una relación de noviazgo; realizado dentro o fuera del domicilio familiar, y que tenga por efecto causar daño, en cualquiera de las siguientes modalidades:  a) “Maltrato físico”: Todo acto de agresión intencional, en el que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad de la otra persona, encaminado hacia su sometimiento y control, provocándole cualquier alteración en su salud física o mental.  b) “Maltrato psicoemocional”: Todo acto u omisión, consistente en cualquier clase de prohibiciones, condicionamientos, coacciones, intimidaciones, amenazas, actitudes devaluatorias o de abandono, que provoquen en quien las recibe, deterioro, disminución de la autoestima o devaluación del autoconcepto.  El acto que se compruebe que ha sido realizado con la intención de causar daño a una menor o a un menor de edad, será considerado maltrato emocional en los términos de este artículo, aunque se argumente como justificación su educación o formación.  c) “Maltrato sexual”: Todo acto y omisión que provoque burla y humillación de la sexualidad; niegue las necesidades sexoafectivas; induzca coactivamente a la realización de actos o prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor; o se practique la celotipia como medio de control, manipulación o dominio de la persona, generando un daño; así como los delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual a que se refiere el Código Penal del Estado, respecto a los cuales la presente ley solo surte efectos en el ámbito de la prevención , de la atención y de la asistencia .  d) “Maltrato verbal”: Toda expresión, concreta, intencional y reiterada, que indique el propósito de ofender o manifestar desprecio al otro y que haga imposible la vida en familia.  e) “Maltrato por negligencia”: Toda conducta omisiva consistente en faltar gravemente a los deberes de proveer adecuadamente al sustento, al vestido, a la vivienda, a la educación o a la atención de la salud a los que tienen derecho quienes integran una familia, que por su edad, capacidad o particular condición, se encuentren en situación de dependencia.  f) “Afectación económica o patrimonial”: Todo acto u omisión que genere daño, destrucción, deterioro, sustracción o retención de bienes muebles o inmuebles, propiedad de la víctima o destinados a la satisfacción de necesidades familiares. | **Artículo 10.** En orden a los sujetos y supuestos de aplicación de esta ley, se entiende por:  **I.** a la **II. ...**  III. “Violencia familiar”: …:  a) al f) …  g) “Alienación parental” Toda conducta que ejerza el padre o la madre para manipular a un menor de edad con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores. |

La promovente toma como referencia para su iniciativa un estudio de realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos[[2]](#footnote-2), n el cual queda de manifiesto que *“la alienación parental consiste en las conductas que lleva a cabo el padre o la madre que tiene la custodia de un hijo o hija, e injustificadamente impide las visitas y convivencias con el otro progenitor, causando en el niño o niña un proceso de transformación de conciencia, que puede ir desde el miedo y el rechazo, hasta llegar al odio* .”

En este sentido la iniciadora estima que *“¨[e]sta situación coloca a los menores en un campo de batalla entre sus padres, en el que se forja un conflicto de lealtades, lo que genera una perturbación psicológica hacia el menor, que afecta de manera significativa su desarrollo emocional, lo cual trae efectos negativos en diversos ámbitos de su vida”.*

En el mismo sentido las consideraciones en las que se motiva el proyecto de reforma refieren que ello *“sin duda alguna, constituye una forma de violencia familiar, pues se juega con las emociones de los menores. La alienación parental no solamente afecta la dinámica familiar, sino el desarrollo normal de los menores, además constituye una violación a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, pues atenta su derecho a la identidad, al apego, y a desarrollar una convivencia pacífica y permanente con el padre o madre que no tenga su custodia”, concluyendo que toda vez que, “la protección de los derechos de los menores debe anteponerse a los derechos, deberes e intereses de los padres que transitan en un proceso de divorcio, por lo que es necesario frenar esas conductas de conflictos interparentales que constituyen una violencia familiar hacia los menores.*

En este orden de ideas quienes dictaminamos, previo a pronunciarnos con respecto a la procedencia de la reforma analizamos el marco normativo vigente, resultado de lo cual se observa que actualmente la ley para la familia, ya establece la posibilidad de que se suspenda la patria potestad cuando se esté en presencia de situaciones de manipulación de los menores, lo cual se prevé en el artículo 447, mismo que dispone que:

***Artículo 441.*** *En los casos de los artículos 355, 356 y 439 de esta ley, cuando la guarda y custodia corresponda solo a uno de los padres, o solo a uno de los abuelos, convendrán aquéllos o éstos, el tiempo, modo y lugar en que podrán visitar a la niña o niño y comunicarse con éstos el ascendiente con el que no viva la niña o niño y, si no llegaren a un acuerdo, resolverá la autoridad judicial competente estas cuestiones.*

***Los ascendientes, de manera recíproca, deberán evitar todo acto de manipulación encaminado a producir en una niña o niño, rechazo, rencor o distanciamiento hacia el otro ascendiente.***

*Cuando la autoridad judicial competente tenga conocimiento de este tipo de actos solicitará al Consejo de Familia que uno de sus especialistas emita un dictamen en el que se determine el grado de manipulación ejercida y la influencia o afectación en el área cognitiva producida.*

*Si los resultados del dictamen arrojan que el grado de afectación es leve, la autoridad judicial tomará las medidas de seguridad y seguimiento que considere necesarias. Podrá determinar la modificación del régimen de convivencias y visitas; o decretar que durante éstas exista supervisión por el personal de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia; o bien, decidir que la persona que tiene la guarda y custodia sea sustituida por el otro ascendiente.*

***Cuando el grado de afectación sea considerado severo o grave, la autoridad judicial competente decretará la suspensión de los efectos de la patria potestad y tanto la niña o el niño como sus ascendientes serán sometidos al tratamiento que indique el especialista del Consejo de Familia que haya dictaminado sobre la afectación producida.***

*La suspensión a la que se refiere el párrafo anterior durará el tiempo que se considere necesario para llevar a cabo el tratamiento prescrito, con audiencia del especialista del Consejo de Familia. Vencido este plazo o antes si así lo determina el Consejo de Familia, se realizará una nueva evaluación para determinar si es viable restituir al ascendiente suspendido las condiciones plenas que la patria potestad supone.*

*Si el Consejo de Familia determina luego de la evaluación, que no es viable restituir al ascendiente suspendido por causas que le sean imputables, los derechos que la patria potestad supone, la autoridad judicial competente atendiendo a las circunstancias especiales del caso, podrá determinar la pérdida de ésta.*

*A fin de asegurar el bienestar de la niña o la niño, y en caso de que, por alguna circunstancia, resulte imposible que viva con el ascendiente al que correspondería la guarda y custodia, en ausencia del primero, la autoridad judicial competente, evaluando a los parientes más cercanos, determinará qué persona quedará encargada de su cuidado mientras recibe el tratamiento que haga posible la convivencia con el ascendiente suspendido en sus derechos.*

*Si la imposibilidad de habitar con el ascendiente no suspendido en sus derechos desaparece, será éste a quien corresponda el cuidado y protección de la niña o niño, previa determinación judicial.*

De lo anterior se concluye que una de las innovaciones que se introdujeron en la Ley para la Familia, fue precisamente fijar como causa de suspensión de la patria potestad la realización de conductas de esta naturaleza, no obstante ello coincidimos en que la reforma abona a robustecer el marco jurídico en la materia.

En este orden de ideas, toda vez que es nuestro deber como legisladores garantizar el derecho las niñas y los niños a vivir en familia, al medio ambiente adecuado, a una vida libre de violencia y al libre desarrollo de la personalidad, a la integridad personal, por mencionar algunos.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de:

**DECRETO**

**PRIMERO.-** Se reforma el contenido de la fracción VI, recorriéndose la actual a la siguiente del artículo 647 y se adiciona la fracción V al artículo 437 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 437.** Los derechos que confiere la patria potestad se suspenden:

**I.** a la **IV.** ...

V. Por alienación parental acreditada ante la autoridad judicial competente.

**Artículo 647.** La violencia familiar se puede presentar mediante los siguientes tipos de violencias:

**I.** a la **V.** …

VI. La alienación parental.- Es una forma de violencia familiar que se presenta cuando el padre o la madre manipula a un menor de edad con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores, y

VII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las personas que integran la familia.

**SEGUNDO.-** Se adiciona el inciso g) a la fracción III del artículo 10 de la Ley de Prevención, Asistencia y Atención de la Violencia Familiar, para quedar como sigue:

**Artículo 10.** En orden a los sujetos y supuestos de aplicación de esta ley, se entiende por:

**I.** a la **II. ...**

III. “Violencia familiar”: …:

a) al f) …

g) “Alienación parental” Toda conducta que ejerza el padre o la madre para manipular a un menor de edad con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores.

**T R A N S I T O R I O**

**ÚNICO. -** El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 29 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 234 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 29 del mes de noviembre del año 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 234 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 234 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S***

*La Organización de Naciones Unidas aprobó en 1959 una Declaración de los Derechos del Niño que contenía 10 principios, sin embargo debido a que este documento carecía de carácter obligatorio, no era suficiente para garantizar la protección a los derechos de la infancia.*

*Debido a esta situación, Polonia presentó a las Naciones Unidas en 1978 una versión provisional de la Convención sobre los Derechos del Niño.[[3]](#footnote-3)*

*Finalmente después de varios años de negociaciones con los gobiernos de todos los continentes del mundo, líderes religiosos, organismos no gubernamentales y otras instituciones mundiales, se aprueba el 20 de noviembre de 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual sería obligatorio su cumplimiento para los países que la ratificaran.*

*México firmó y ratificó el tratado en 1990, desde entonces se ha convertido en uno de los países que más ha pugnado por la promoción, protección, respeto y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.*

*Así, con los años, se ha ido construyendo una legislación tanto a nivel federal como local, acorde con los tratados internacionales como el que mencionamos, con el propósito de hacer efectiva la protección de los menores de edad y de los adolescentes.*

*De acuerdo con lo establecido en el artículo 3º de la Convención de los Derechos del Niño, los Estados se comprometen a asegurar a las niñas, niños y adolescentes la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley, con ese fin, se deben tomar todas las medidas legislativas y administrativas que sean adecuadas.*

*En ese sentido, el artículo 234 de la Ley para la Familia establece el derecho de los cónyuges que estén en un proceso de divorcio a recibir terapia psicológica especializada, cuando sean padres de por lo menos una hija o hijo, suspendiendo el procedimiento de divorcio si ambos cónyuges aceptan la terapia.*

*Con esta norma se busca garantizar el derecho de las niñas, los niños y los adolescentes a crecer dentro de una familia que les otorgue protección y seguridad.*

*Sin embargo, en los casos de violencia familiar, consideramos que es más importante salvaguardar la vida, la integridad personal y la salud de los menores hijos y adolescentes, por lo que se debe considerar como obligatorio el tomar terapia psicológica con el objeto de erradicar cualquier tipo de comportamiento violento.*

*Tomando en cuenta tal situación y en atención a la máxima protección de los derechos de la niñez y a los principios de proporcionalidad de la norma, creemos importante reformar el artículo 234 de la Ley para la Familia con el finalidad de establecer como obligatorio el tomar terapia psicológica, cuando hay violencia familiar.*

*El objetivo de hacer obligatorio la terapia psicológica en caso de existir violencia familiar, es evitar conductas agresivas dentro del ámbito del hogar y en especial en contra de los infantes, dándole relevancia a la protección del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, reforzando con ello las medidas con las que cuenta la autoridad para salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.*

*Con esta reforma, buscamos contribuir a que la unidad familiar se dé en condiciones dignas para todos los miembros, pero sobre todo que se garanticen los derechos de los menores quienes resultan ser casi siempre los más afectados en estos procesos.*

**TERCERO.-** Quienes integramos esta comisión dictaminadora efectuamos el estudio y análisis de la iniciativa de reforma así como de las consideraciones en la que encuentra sustento la misma, verificando que el proyecto normativo tiene por objeto hacer obligatoria la terapia psicológica a menores de edad durante el proceso de divorcio, en los casos en que exista violencia familiar.

La Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1989 y ratificada por nuestro país en el año 1990, es el tratado más ampliamente refrendado en la historia, dentro del cual se establecen amplias disposiciones de derechos y libertades, tales como vivir en un entorno familiar adecuado, la salud básica y la educación, así como las medidas necesarias para la protección de niños, niñas y adolescentes, ello con el fin de salvaguardar en todo momento el interés superior de la niñez.

Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos durante 2011 incorporó el principio del interés superior de la niñez en su artículo 4, el cual establece que:

***Artículo 4o.-*** *La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.*

*Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.*

*Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.*

*Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.*

*Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.*

*Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.*

*Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.*

*Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.*

***En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.***

*Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.*

***El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.***

*Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.*

*Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.*

De ello podemos concluir que el estado tiene la obligación de garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como otorgar las condiciones materiales y efectivas que le permitan a los menores vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar posible, es por esto que se han creado ordenamientos tanto a nivel federal como estatal, tendientes a salvaguardar estos derechos.

Es así que, como se manifiesta en la exposición de motivos “*el artículo 234 de la Ley para la Familia establece el derecho de los cónyuges que estén en un proceso de divorcio a recibir terapia psicológica especializada, cuando sean padres de por lo menos una hija o hijo, suspendiendo el procedimiento de divorcio si ambos cónyuges aceptan la terapia”,* ello con el fin de garantizar el derecho del menor de crecer en un entorno familiar adecuado.

Sin embargo, también se alude que “*en los casos de violencia familiar, consideramos que es más importante salvaguardar la vida, la integridad personal y la salud de los menores hijos y adolescentes, por lo que se debe considerar como obligatorio el tomar terapia psicológica con el objeto de erradicar cualquier tipo de comportamiento violento”.*

Es por todo lo anteriormente expuesto que quienes integramos esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, coincidimos con el iniciador en la necesidad de adicionar un último párrafo al artículo 234 de la Ley para la Familia del Estado, con el propósito de incluir la obligatoriedad de tomar terapia psicológica en los casos en que exista violencia familiar, a fin de recibir la protección y asistencia necesarias hacia los niños, niñas y adolescentes, con el objeto de llevar a cabo un pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, creciendo en el seno de una familia que otorgue un ambiente idóneo para asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la sociedad.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se adiciona un último párrafo al artículo 244 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 244.** …

**I.** a la **V.** …

En caso de que exista violencia familiar por parte de uno de los cónyuges en contra del otro o de las o los hijos menores de edad o adolescentes, la terapia psicológica será obligatoria con el fin de erradicar cualquier comportamiento violento, esto sin perjuicio de lo que dispongan las normas en materia penal, civil y procedimental referentes a la materia.

**T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.-** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado; y

**SEGUNDO.-** Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 29 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con proyecto de Decreto mediante la cual se reforma el artículo 238 de la Ley para la Familia de Coahuila, planteada por la Diputada Graciela Fernández Almaraz, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 02 de septiembre del año 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, el día 04 de septiembre de 2019, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con proyecto de Decreto mediante la cual se reforma el artículo 238 de la Ley para la Familia de Coahuila, planteada por la Diputada Graciela Fernández Almaraz, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con proyecto de Decreto mediante la cual se reforma el artículo 238 de la Ley para la Familia de Coahuila, planteada por la Diputada Graciela Fernández Almaraz, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*“La familia como grupo social ha sido el núcleo esencial de la humanidad desde que los seres humanos comenzaron a interrelacionarse de forma racional, es por ese motivo que las normas jurídicas han establecido mecanismos que permitan a los integrantes de la familia estar protegidos frente a cualquier situación o conflicto, ya sea interno o externo, como es en el caso de una separación, un divorcio.*

*Desde luego que para nosotros es importante que las familias se mantengan unidas, siempre y cuando el hogar sea seguro, amoroso y considerado para cada uno de sus miembros, por lo que respetamos a todas aquellas personas que por alguna razón deciden terminar su vínculo matrimonial, pues tal decisión parte del principio al libre desarrollo de la personalidad.*

*No obstante, en muchos casos la separación es injusta para alguno de los cónyuges sobre todo para aquel que dedicó su vida preponderantemente al cuidado del hogar y los hijos, que por lo general resulta ser la mujer, por ser ella a que culturalmente se la dejado la obligación moral del cuidado de la familia, aunque la obligación desde luego debe ser igual para ambos.*

*En la actualidad, el artículo 238 de la Ley para la Familia del Estado de Coahuila, establece que el cónyuge que se dedicó preponderantemente al hogar o al cuidado de las y los hijos puede exigir una pensión alimenticia por el tiempo en el cual duró el matrimonio, siempre y cuando pruebe que necesidad de la misma.*

*Sin embargo, el problema surge cuando la persona trabaja o trabajó durante el matrimonio, pues al hacerlo se presume que no tiene la necesidad de solicitar una pensión de alimentos, sin tomar en cuenta que alguno de los cónyuges pudo realizar una doble jornada laboral como sucede regularmente en los matrimonios, donde por lo general, la mujer tiene un trabajo fijo que aporta al sustento de la casa pero además dedica el resto de su jornada al cuidado del hogar y la crianza de los hijos. En esos casos, es donde consideramos que la ley de flexibilizarse y no partir únicamente del planteamiento de que sólo tiene derecho a pensión por alimentos, quien se dedicó casi exclusivamente al hogar.*

*De hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha resuelto casos como el Amparo Directo en Revisión 1754/2015, en el cual resolvió que a pesar de que alguno de los cónyuges hubiera tenido un trabajo estable durante el matrimonio, podía acceder a la pensión alimenticia si se acreditaba que ejercía una doble jornada laboral.*

*Al respecto la Corte consideró que existe una disparidad de género histórica, en el sentido de que han sido las mujeres las encargadas de desempeñarse en el hogar, en actividades como: la crianza de los hijos, el funcionamiento del mismo –la limpieza y el orden–, cocinar, realizar las compras, por mencionar algunas. Dichas tareas, han sido asignadas a las mujeres por el sólo hecho de serlo, se les ha dado el rol de amas de casa y madres, independientemente de que trabajen fuera de su núcleo familiar. De ahí que se les reconociera jurisdiccionalmente una pensión, incluso si trabajaron durante el tiempo que estuvieron casadas.*

*Además la Corte reconoció que en ciertos casos, cuando uno de los cónyuges está en un contexto de vulnerabilidad, también debe acceder a la pensión alimenticia, teniendo en cuenta su situación específica como una forma de no dejar que caiga en el desamparo. Es por esta razón, que presentamos esta propuesta de reforma a la Ley para la Familia, con el fin de ampliar el derecho a recibir pensión, para incluir dentro del mismo a las personas que hayan tenido una doble jornada laboral o bien, estén en una situación especial de vulnerabilidad.”*

**TERCERO.-** Los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, nos abocamos al estudio de la iniciativa que reforma el artículo 139 de la Ley para la familia de Coahuila, con el objeto de ampliar el derecho a recibir una pensión, incluyendo dentro del mismo artículo a las personas que hayan tenido una doble jornada laboral, o que estén en una situación especial de vulnerabilidad.

Para los integrantes de esta comisión dictaminadora, resulta imprescindible redoblar esfuerzos para optimizar los marcos normativos, por lo que coincidimos que es importante estar en una constante revisión legislativa en materia familiar, que tienda a unificar el marco jurídico vigente, conforme al espíritu y contenido de los instrumentos internacionales, sin omitir, que si bien ha habido avances significativos gracias a la promulgación de leyes y la instrumentación de políticas públicas, no debemos dejar de abocarnos en la armonización legislativa nacional con el marco jurídico internacional que reconoce y garantiza los derechos humanos en general.

Además, al abocarnos al estudio de la iniciativa objeto del presente dictamen, consideramos apropiado retomar lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al Amparo Directo en Revisión 1754/2015, del cual la promovente ha hecho referencia en su exposición de motivos, sobre “pensión alimenticia por compensación de doble jornada laboral”.

La reseña argumentativa de dicho amparo de revisión, señala que “*en el estado de Campeche, un matrimonio, en el que la mujer se dedicó al cuidado de sus hijos, a las labores del hogar; y, que además trabajó para contribuir con el sostenimiento de su familia –empleo en el que se le concedió una pensión por jubilación–; después de años de casados, el señor decidió promover un juicio de divorcio necesario.”*

Señalando que en *abril de 2014, concluyó el procedimiento determinándose improcedente la acción, declarando por una parte, disuelto el vínculo matrimonial y por otra, innecesario establecer una pensión alimenticia para la demandada, toda vez que contaba con ingresos de una pensión por jubilación, recurriendo el fallo y una Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la misma entidad conoció de la apelación, en la cual se confirmó la sentencia recurrida. Por lo cual la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, mismo que le fue negado; por lo que interpuso recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado.*

Al respecto, los Ministros determinaron conocer del asunto, toda vez que subsistía una cuestión de constitucionalidad. Ya que la agraviada externó que se vulneraron sus derechos de igualdad y no discriminación, ya que la Sala omitió manifestarse respecto de su derecho a recibir una pensión alimenticia, ante el doble esfuerzo de tener un empleo –remunerado- y dedicarse a las labores del hogar, incluido el cuidado de sus hijos.

En razón de lo anterior, la Sala concluyó que *no es incompatible la pensión alimenticia con el hecho de que el acreedor haya tenido un empleo remunerado;* además indicó que *negar el acceso a ese derecho es discriminatorio, pues parte de un estereotipo de género y contradice el principio de dignidad*, haciendo mención además, que la quejosa señaló no poder sufragar los gastos derivados de sus padecimientos asociados a su avanzada edad, situación que la pone en un estado de vulnerabilidad, ya que no puede atender su salud de manera adecuada.

Los integrantes de esta comisión dictaminadora, también queremos señalar el Amparo Directo en Revisión 4883/2017, en el cual la SCJN, que determinó que *es posible el pago de compensación cuando el cónyuge acredite que durante el matrimonio se dedicó al hogar y al cuidado de los hijos, incluso cuando haya realizado algún trabajo remunerado fuera de casa*.

*“La Primera Sala determinó que resulta inconstitucional la interpretación efectuada por el órgano colegiado, toda vez que la institución de compensación tiene como eje rector mitigar la inequidad que soportó alguno de los cónyuges como consecuencia de la dedicación al trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos, por lo que, la doble jornada, esto es, asumir las cargas familiares y adicionalmente un empleo remunerado, no puede constituir un obstáculo para acceder al mecanismo compensatorio. En ese sentido, la Primera Sala señaló que puede accederse al mecanismo compensatorio cuando el cónyuge solicitante acredite que se dedicó al trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos, ello incluso cuando haya dedicado alguna proporción de su tiempo al trabajo remunerado fuera de casa”.*

Es así que los integrantes de esta comisión dictaminadora, una vez que consideramos que la razón de ser de la institución de la compensación, es colocar en igualdad de derechos a los cónyuges. Toda vez que coincidimos en que en el supuesto en que un cónyuge al contribuir al patrimonio familiar, mediante un ingreso obtenido de un trabajo, además de las cargas domésticas y familiares, no logró desarrollarse de manera plena laboralmente, en paralelo al otro, lo cual sin lugar a dudas provoca un disminución en su patrimonio, toda vez que al haberse dedicado también al trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos, se realizó una doble jornada.

Además, coincidimos con el promovente, en su iniciativa para que también se dé acceso a una pensión alimenticia al cónyuge que se encuentre en una situación de vulnerabilidad que le sea imposible obtener por sí mismo los medios suficientes de subsistencia, buscando con ello evitar que caiga en un estado de desamparo que le afecte como persona y le impida un nivel de vida adecuado.

Es en razón de lo expuesto anteriormente, que nos resulta oportuno, que se reforme el primer párrafo del artículo 238 de la Ley objeto de la presente reforma, con el objeto de agregar *“no obstante que hubiera trabajado u obtenido algún tipo de ingreso producto de su esfuerzo”*; así como también establecer *“o se encuentre en una situación de vulnerabilidad por razón de su edad, condición de salud o discapacidad”*.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO.-** Se reforma el primer párrafo del artículo 238 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 238.** La autoridad judicial competente que decrete el divorcio resolverá sobre el pago de alimentos a favor del cónyuge que, teniendo la necesidad de recibirlos durante el matrimonio, se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar no obstante que hubiera trabajado u obtenido algún tipo de ingreso producto de su esfuerzo, al cuidado de las hijas o hijos o esté imposibilitado para trabajar y carezca de bienes que produzcan frutos, o se encuentre en una situación de vulnerabilidad por razón de su edad, condición de salud o discapacidad, sin perjuicio de la acción compensatoria prevista en la disposición siguiente. Quien demande el pago de los alimentos con el argumento anterior, tiene a su favor la presunción de necesitarlos y tendrá derecho a una pensión compensatoria hasta en tanto se encuentre en posibilidades de proporcionarse a sí mismo los medios necesarios para su subsistencia.

...

**ARTÍCULOS TRANSITORIOS**

**PRIMERO.-** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.-** Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga (Secretaria), Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 29 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma la fracción III del artículo 3, la fracción III del artículo 4 bis y la fracción III del artículo 10; se adiciona: un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 12 y la fracción V al artículo 25, de la Ley de Protección Civil del Estado de Coahuila, planteada por la Diputada Verónica Boreque Martínez González, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 06 del mes de mayo del presente año, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, en fecha 11 de mayo del año 2020 se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma la fracción III del artículo 3, la fracción III del artículo 4 bis y la fracción III del artículo 10; se adiciona: un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 12 y la fracción V al artículo 25, de la Ley de Protección Civil del Estado de Coahuila, planteada por la Diputada Verónica Boreque Martínez González, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma la fracción III del artículo 3, la fracción III del artículo 4 bis y la fracción III del artículo 10; se adiciona: un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 12 y la fracción V al artículo 25, de la Ley de Protección Civil del Estado de Coahuila, planteada por la Diputada Verónica Boreque Martínez González, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*La base divisora de nuestro territorio nacional inicia desde el Municipio; a ciencia cierta, esta institución jurídica es sin duda alguna el acercamiento de primer nivel que tiene la sociedad con su gobierno, con su funcionamiento y con la organización y repercusión social, política y administrativa.*

*A través de su Ayuntamiento y grupo colegiado, el municipio trabaja a diario para facilitar las actividades diarias que su ciudadanía requiere cubrir y que esté tiene obligación de otorgar. El artículo 115 de nuestra carta magna le reconoce autonomía hacendaria, administrativa y financiera para estos, estableciendo, además, diversas funciones orgánicas y de ejercicio que son ampliadas de manera concurrente con otros poderes y órdenes de gobierno, incluso con participación de otros sectores privados.*

*Una de dichas actividades, también llamadas “servicios públicos”, es la de protección civil, definida dentro de la Ley General de Protección Civil como la “acción solidaria y participativa, que en consideración tanto de los riesgos de origen natural o antrópico, como de los efectos adversos de los agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores público, privado y social, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera corresponsable, y privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente”.*

*La importancia que ha alcanzado la atención de esta materia dentro del ejercicio de las acciones de gobierno obedece a la presencia constante de fenómenos naturales o provocados cada vez más intensos, como por ejemplo el calentamiento global, desastres naturales o inclusive atribuidas a malas prácticas y malos hábitos de salud propios del ser humano.*

*Al poner en marcha una verdadera “protección civil” para las y los ciudadanos, se estarían así representando estrategias y esfuerzos que evitan riesgos, atienden siniestros y sus consecuencias, garantizando con ello, la protección de las personas, su vida y su salud, su estabilidad física y emocional, así como de su patrimonio.*

*Inundaciones, incendios forestales, atención de migrantes, campañas de cuidado de zonas naturales, y ahora también, apoyando en la atención de epidemias y pandemias de salud, sin duda algún, la protección civil es una actividad de evolución constante que requiere ir a la par con los problemas actuales.*

*Se mantiene en alerta el país, Coahuila obviamente de por medio; continuamos con el temor de que en los siguientes días se presenten más y más casos de contagio de virus, también existe la incertidumbre de cómo el gobierno orientara a la ciudadanía durante la reactivación de las rutinas laborales, escolares, sociales o de esparcimiento cuando se levante el decreto de contingencia.*

*Es más que claro la notoria necesidad de la participación de las autoridades y la sociedad en general para que este rubro sea tomado con éxito; sobre todo de nuestras autoridades y del personal adscrito a las direcciones municipales de protección civil, quienes tendrán que participar muy activamente para el orden y el progreso de la sociedad en nuestro país y en nuestro Estado.*

*La urgencia de evitar la pérdida de más vidas humanas, también de recursos naturales y patrimoniales, pero sobre todo el plan de impulsar el desarrollo estatal con garantías de seguridad para las y los coahuilenses, nos empuja a tomar con seriedad esta materia pública de naturaleza preventiva y de atención de emergencias.*

*En consideración a esto, el Estado cuenta con un aparato legal y administrativo encargado de salvaguardar la integridad de las personas; existen instrumentos normativos de creación fundamental a cargo de los tres órdenes de gobierno.*

*Tal es el caso de los Programas de Protección Civil y de los Atlas de Riesgo Nacional, Estatal y Municipal; estos instrumentos especifican las acciones preventivas, resolutivas, así como de atención a contingencias o casos de extrema naturaleza de acuerdo a las condiciones de la región o comunidad de que se trate.*

*Los Atlas de Riesgos constituyen uno de los instrumentos que el Gobierno Federal mexicano ha privilegiado en los últimos años, con la finalidad de apoyar el ordenamiento de los asentamientos humanos. Su objetivo es identificar los distintos tipos de riesgo asociados a peligros naturales y que se conviertan en herramientas útiles para implementar medidas de reducción de vulnerabilidad y mitigación de dichas amenazas.*

*Conforme a lo anterior y observando la necesidad de dicho documento normativo, es que todos y cada uno de los 38 municipios de nuestro Estado deberían contar con la creación y vigencia de este para cada uno de sus territorios, y actualmente, solo se tienen elaborados y vigentes 3: Saltillo, Muzquiz y Nadadores.*

*Para corregir lo anterior, es indispensable imponer desde la ley un esquema de control y vigilancia que permita a la ciudadanía y a las autoridades, contar con las herramientas que el contexto de riesgos demanda. Se requiere fortalecer la vigilancia y coordinación entre los tres órdenes de gobierno para contar con autoridades certificadas y con los Atlas de Riesgos necesarios, a fin de prevenir epidemias, pandemias, desastres naturales, contingencia, y por supuesto, sus consecuencias.*

*Debemos poner una mayor atención en este tipo de tareas, que representan una debilidad para la prestación idónea de los servicios de protección civil frente a problemas de riesgo social, como el que hoy vivimos. Aunado a lo anterior y a la falta de atribuciones de la entidad para vigilar y verificar la realización de los Atlas Municipales de Riesgos, es indispensable reconocer las atribuciones a las Unidades Estatal y Municipal para subsanar estas condiciones y garantizar servicios oportunos y de calidad para la ciudadanía.*

**TERCERO.-** Quienes integramos esta comisión dictaminadora efectuamos el estudio y análisis de la iniciativa de reforma así como de las consideraciones en las que encuentra sustento la misma, verificando que el proyecto normativo tiene por objeto reformar diversas disposiciones de la Ley de Protección Civil para el Estado de Coahuila, a fin de dotar de información indispensable y actualizada sobre los potenciales riesgos a los que se expone la población en sus asentamientos y zonas de tránsito, a través de un atlas de riesgo eficiente.

Distintos factores como lo son el cambio climático, la contaminación, las áreas volcánicas, los fenómenos naturales o el inadecuado mantenimiento de zonas transitadas, entre otros, son algunas de las causas que ponen en riesgo a las personas que se encuentran asentadas en alguna zona o que tienen un recurrente paso por diversas vías.

El Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wildlife Fund, por sus siglas en inglés WWF) manifiesta que la biodiversidad en México está siendo severamente afectada por las actividades humanas, lo que ha traído como consecuencia el cambio climático. La biodiversidad ha sido afectada por el cambio de uso de suelo, con la pérdida de 250,000 km2 de bosques tropicales, 129,000 km2 de bosques templados, 155,000k2 de arbustos y 83,000 km2 de pastizales.

Estas cifras constituyen un riesgo, debido a que las amenazas climáticas como sequías, inundaciones o las temperaturas extremas, ejercen sobre el desarrollo humano un estímulo negativo, primordialmente en aquellas zonas de alto riesgo donde la destrucción de los bienes y demás efectos perjudican el bienestar físico, mental y social de una población.

Es por ello que resultó indispensable el desarrollo de los Atlas de Riesgo, que de acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres, estos son *“instrumentos que sirven como base de conocimientos del territorio y de los peligros que pueden afectar a la población y a la infraestructura en el sitio, pero también son herramientas que permiten hacer una mejor planeación del desarrollo para contar con infraestructura más segura y de esta forma contribuir a la toma de decisiones para la reducción de riesgos de desastres”.*

En base a lo anterior, dentro de la Ley de Protección Civil de nuestro Estado, se establece en su artículo 5 fracción VI el Atlas Estatal de Riesgo como un “*sistema integral de información sobre los agentes perturbadores y daños esperados, resultado de un análisis espacial y temporal sobre la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de la población a los agentes perturbadores”.*

Asimismo, se contempla la elaboración y actualización de los Atlas de Riesgo en los Municipios, tal y como se dispone en los artículos 12 fracción VII, 13 fracción V y 69 fracción XIII, ello en colaboración con las autoridades competentes.

Aunado a anterior y de acuerdo a lo manifestado en la presente exposición de motivos, al observar la importancia de que cada ayuntamiento debe contar con las medidas necesarias para reducir riesgos o la vulnerabilidad de la sociedad, es que resulta indispensable que los 38 municipios de nuestra entidad cuenten con estas medidas, ya que como manifiesta la iniciadora, actualmente solo tres ayuntamientos cuentan con este tipo de prevenciones.

En atención a lo anterior, es que quienes dictaminamos acordamos analizar el objeto y los alcances de las iniciativas, observando lo siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| **VIGENTE** | **PROPUESTA** |
| **ARTÍCULO 3.-** Para los efectos de esta Ley se considera de interés público:  **I.** La identificación, estudio, análisis, prevención y control de las situaciones de emergencia, desastre y/o disturbios que se presenten en el Estado, principalmente en los centros educativos y de salud;  **II.** El establecimiento de procedimientos, estrategias y líneas de acción tendientes a la prevención de las situaciones a que se refiere la fracción anterior;  **III.** La expedición, aplicación, evaluación y difusión del Plan Estatal y el Programa Estatal de Protección Civil, así como de los planes y programas específicos, sectoriales, regionales o acciones que de éstos se deriven;  **IV.** La ejecución coordinada de programas y acciones de los gobiernos federal, estatales y municipales, tendientes a hacer del conocimiento de la población las medidas que, para la prevención y control de desastres, se estimen necesarios, y  **V.** Las demás que con ese carácter expida el titular del Ejecutivo del Estado. | **ARTÍCULO 3.-** Para los efectos de esta Ley se considera de interés público:  **I.** a la **II. …**  **III.** La expedición, aplicación, evaluación y difusión del Plan Estatal, el Programa Estatal de Protección Civil, **el Atlas Estatal de Riesgos,** así como los planes y programas específicos, sectoriales, regionales o acciones que de éstos se deriven;  **IV.** a la **V. …** |
| **ARTÍCULO 4 Bis.-** Las políticas públicas en materia de protección civil, se ceñirán al Plan Estatal de Desarrollo y los Programas de Protección Civil, identificando para ello las siguientes prioridades:  **I.** La identificación y análisis de riesgos como sustento para la implementación de medidas de prevención y mitigación;  **II.** Promoción, desde la niñez, de una cultura de responsabilidad social dirigida a la protección civil con énfasis en la prevención y autoprotección respecto de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y su vulnerabilidad;  **III.** Obligación del Estado y los Municipios, para reducir los riesgos sobre los agentes afectables y llevar a cabo las acciones necesarias para la identificación y el reconocimiento de la vulnerabilidad de las zonas bajo su jurisdicción;  **IV.** El fomento de la participación social para crear comunidades resilientes, y por ello capaces de resistir los efectos negativos de los desastres, mediante una acción solidaria, y recuperar en el menor tiempo posible sus actividades productivas, económicas y sociales;  **V.** Incorporación de la gestión integral del riesgo, como aspecto fundamental en la planeación y programación del desarrollo para revertir el proceso de generación de riesgos;  **VI.** El conocimiento y la adaptación al cambio climático, y en general a las consecuencias y afectos del calentamiento global provocados por el ser humano y la aplicación de las tecnologías; y  **VII.** La atención prioritaria para la población vulnerable. | **ARTÍCULO 4 Bis**.- Las políticas públicas en materia de protección civil, se ceñirán al Plan Estatal de Desarrollo, los Programas de Protección Civil **y el Atlas Estatal de Riesgos** identificando para ello las siguientes prioridades:  **I.** a la **II. …**  **III.** Obligación del Estado y los Municipios, para reducir los riesgos sobre los agentes afectables y llevar a cabo las acciones necesarias para la identificación y el reconocimiento de la vulnerabilidad de las zonas bajo su jurisdicción; **para lo anterior, los 38 Municipios deberán expedir y mantener actualizado y vigente su Atlas Municipal de Riesgos.**  **IV.** a la **VII. …** |
| **ARTÍCULO 10.-** Corresponde al titular del Ejecutivo del Estado el ejercicio de las siguientes atribuciones:  **I.** Establecer políticas y estrategias en materia de protección civil, que garanticen la salvaguarda y seguridad de las personas, sus bienes, los servicios básicos y el medio ambiente;  **II.** Coordinar las acciones para el adecuado funcionamiento del Sistema y promover la coordinación de acciones entre el Estado con los gobiernos federal y municipales;  **III.** Aprobar y publicar el Plan Estatal y Programa Estatal de Protección Civil y demás programas específicos, sectoriales, regionales o acciones que de éstos se deriven;  **IV.** Crear fondos para la prevención y atención de emergencias o desastres. La aplicación de estos fondos se hará conforme a las disposiciones presupuestales y legales aplicables;  **V.** Coadyuvar con las autoridades federales en la integración del Sistema Nacional de Protección Civil y en la ejecución del Programa Nacional de Protección Civil;  **VI.** Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y los programas de protección civil en el ámbito de su competencia y de conformidad con lo convenios de coordinación que celebre con los gobiernos Federal, de otras entidades y municipios, con el propósito de prevenir o auxiliar en caso de emergencias o desastres;  **VII.** Emitir o, en su caso, solicitar ante el Gobierno Federal la declaratoria de emergencia o de desastre, en los términos establecidos en esta ley y demás disposiciones aplicables;  **VIII.** Ordenar, en su caso, la evacuación forzosa ante la presencia de una emergencia, desastre y/o disturbio;  **IX.** Solicitar, cuando lo estime necesario, el apoyo del Gobierno Federal, de las entidades y de los municipios para el desarrollo de las acciones de auxilio y rescate derivadas de los efectos de una emergencia o desastre;  **X.** Apoyar y asesorar a los municipios que lo soliciten, en la integración de los sistemas municipales de protección civil y en la elaboración de sus programas, así como para el desarrollo de las acciones de prevención, auxilio y recuperación en casos de riesgos, emergencias o desastres;  **XI.** Promover la capacitación de los habitantes del Estado en materia de protección civil;  **XII.** Promover la participación ciudadana en la elaboración, ejecución, evaluación y revisión del Plan Estatal y los programas estatal y municipales de protección civil;  **XIII.** Promover que en las instituciones educativas de todos los niveles, se impartan materias o cursos en torno a la protección civil, y  **XIV.** Ordenar la elaboración, publicación e implementación de los planes de contingencia de disturbios en centros educativos y de salud; y  **XV.-** Promoverá el establecimiento de un sistema de certificación de competencias, que garantice un perfil adecuado en el personal responsable de la protección civil en el estado y los municipios.  **XVI.** Las demás que le confiera la presente ley y otras disposiciones aplicables. | **ARTÍCULO 10.-** Corresponde al titular del Ejecutivo del Estado el ejercicio de las siguientes atribuciones:  **I.** a la **II. …**  **III.** Aprobar y publicar el Plan Estatal, el Programa Estatal de Protección Civil, **el Atlas Estatal de Riesgos** y demás programas específicos, sectoriales, regionales o acciones que de éstos se deriven;  **IV.** a la **XVI. …** |
| **ARTÍCULO 12.-** Corresponde al Subsecretario de Protección Civil el ejercicio de las siguientes atribuciones:  **I.** Proponer la adopción de medidas tendientes a la prevención y reparación de daños por desastres;  **II.** Elaborar y ejecutar, en su caso, los planes y programas de protección civil que sean necesarios;  **III.** Promover la protección civil en sus aspectos normativo, operativo, de coordinación y de participación, buscando la extensión de sus efectos a toda la población del Estado;  **IV.** Elaborar el Plan Estatal y el Programa Estatal y someterlos a la aprobación del titular del Ejecutivo del Estado, por conducto del Secretario;  **V.** Evaluar las situaciones de emergencias y desastres, la capacidad de respuesta del Estado, así como brindar y, en su caso, solicitar el auxilio de las autoridades y organizaciones competentes para la atención de los mismos;  **VI.** Coordinar y asumir el control de las acciones emprendidas por las instancias que integran el Sistema, excepto cuando los municipios se declaren capacitados para asumir el control de una emergencia o desastre, sin perjuicio de que el Estado preste el apoyo necesario;  **VII.-** Elaborar y actualizar el Atlas Estatal de Riesgos, así como verificar, en términos de ley y en colaboración con las autoridades competentes, la elaboración y actualización de los atlas municipales de riesgo, y la certificación de competencias de sus integrantes y de las unidades municipales;  **VIII.** Implementar y evaluar acciones de emergencia en las zonas que se establezcan, así como proveer las medidas necesarias para su operación;  **IX.** Ordenar actos de inspección, a fin de constatar el cumplimiento de las disposiciones relativas a la constitución de unidades internas y a la formulación y aplicación de los Programas Internos de Protección Civil a cargo de los establecimientos, edificaciones o inmuebles siguientes:  **a)** Edificaciones con habitaciones colectivas para más de veinte personas, como asilos, conventos, internados, fraternidades, hoteles, moteles, condominios, campamentos turísticos y centros vacacionales;  **b)**  Instituciones educativas de los sectores público o privado, en todos sus niveles;  **c)** Centros comerciales, mercados, supermercados, bodegas, depósitos de cosas o mercaderías;  **d)** Oficinas públicas estatales;  **e)** Edificaciones para almacenamiento, distribución o expendio de hidrocarburos, otros combustibles y materiales peligrosos;  **f)** Terminales y estaciones de ferrocarriles, de transporte de carga, de transporte de pasajeros urbanos y foráneos y aeropuertos;  **g)** Guarderías, estancias infantiles y centros de desarrollo para infantes, albergues y casas de apoyo para personas con discapacidad o adultos mayores, de los sectores público, privado y social;  **h)** Lienzos charros, circos o ferias eventuales;  **i)** Maternidades, hospitales, centros médicos, clínicas y puestos de socorro, del sector privado;  **j)** Cinemas, teatros, auditorios, gimnasios, estadios, arenas, autódromos, hipódromos y velódromos, y  **k)** Otros que por sus características y magnitud sean similares a los mencionados en los incisos anteriores, con un área mayor a mil quinientos metros cuadrados o que tengan una afluencia masiva de personas o representen un riesgo de daños para la población.    Cuando dos o más establecimientos, edificaciones o inmuebles de los señalados en la fracción XV del Artículo13 de esta ley, compartan o estén ubicados dentro de una misma unidad de construcción, o concurran con alguno de los señalados en el presente artículo, la Subsecretaría será competente para realizar visitas de inspección a los mismos.  Asimismo, la Subsecretaría será competente para inspeccionar a todos los establecimientos o edificaciones que se encuentren ubicados en un radio de quinientos metros a partir de las edificaciones a que se refiere el inciso e) de esta fracción.  **l)** Instalaciones donde se desarrollan de manera temporal, las actividades, cursos o campamentos de verano, independientemente que dichas instalaciones cuenten con el dictamen de seguridad y operación de otro giro.  **X.** Auxiliar, previa solicitud de los ayuntamientos, en las acciones que realicen para la atención de emergencias y desastres;  **XI.** Coordinar sus acciones con las autoridades federales, de otras entidades federativas y municipales, así como con grupos voluntarios y, en general, con los sectores social y privado, para prevenir y controlar situaciones de emergencias o desastres;  **XII.** Emitir los formatos de autodeclaratoria que deben presentar los sujetos obligados conforme a las disposiciones previstas en esta ley, así como supervisar y vigilar su cumplimiento;  **XIII.** Formular e implementar, en su caso, los planes y programas para la protección de personas, bienes y el medio ambiente;  **XIV.** Requerir, en el ámbito de su competencia, a las industrias, empresas o establecimientos obligados la elaboración y presentación de programas específicos para la prevención, auxilio y recuperación de accidentes internos y externos;  **XV.** Coadyuvar con las autoridades competentes en la investigación y determinación de responsabilidades derivadas de emergencias o desastres que implique daños actuales o potenciales a la población;  **XVI.** Promover la instalación de unidades internas de protección civil en las dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal y de los municipios;  **XVII.** Integrar un catálogo de recursos humanos, tecnológicos y materiales que deban ser rápidamente movilizados en caso de emergencia;  **XVIII.** Mantener un directorio internacional, nacional, estatal y municipal, de organismos públicos y privados, especialmente dedicados a la atención de la protección civil en caso de emergencias o desastres;  **XIX.** Elaborar y difundir la información relativa a las medidas de protección civil en caso de emergencias o desastres;  **XX.** Informar y orientar oportunamente a la población sobre los riesgos y la implementación de medidas que deban adoptarse en caso de emergencias o desastres;  **XXI.** Solicitar la colaboración de los medios de comunicación social, a efecto de divulgar información dirigida a la población en las acciones de protección civil;  **XXII.** Expedir constancia de factibilidad en materia de protección civil para la construcción de edificaciones e instalación de los establecimientos de tipo 3 Grande y 4 Compleja que dispone el artículo 7 del Reglamento de Construcciones para el Estado Coahuila de Zaragoza, y las que por su funcionamiento o naturaleza representen riesgos para la población, siendo requisito indispensable previo para que los ayuntamientos otorguen la licencia de construcción y de funcionamiento y demás trámites análogos de competencia municipal;  **XXIII.** Promover y mantener el registro de empresas, consultorías y de las personas físicas que se dediquen a prestar servicios en la materia, previo cumplimiento de los requisitos que para tal efecto se establezcan en el reglamento de esta ley y otras disposiciones aplicables;  **XXIV.** Participar en la incorporación dentro de las leyes, reglamentos y demás disposiciones en materia de asentamientos humanos, medio ambiente, salud, construcción y demás relacionados con la materia de protección civil, los criterios de prevención y auxilio;  **XXV.** Asesorar a las empresas, asociaciones, organismos y entidades de los sectores privado y social que lo soliciten, para integrar sus unidades internas y organizar grupos voluntarios de conformidad con las disposiciones aplicables;  **XXVI.** Mantener la coordinación y comunicación constante con las autoridades federales, estatales y municipales para que se dé atención a los asuntos de los que tenga conocimiento y que estén fuera de su competencia;  **XXVII.** Elaborar una base de datos de empresas que transporten sustancias químicas o residuos peligrosos, identificando rutas y sitios de almacenamiento, a fin de establecer medidas y líneas de acción en coordinación con las instancias competentes, ante la presencia de una emergencia o desastre derivado de la transportación de los mismos;  **XXVIII.** Expedir las autorizaciones para el funcionamiento de los grupos voluntarios en materia de protección civil,  **XXIX.** Expedir, previa solicitud, copias certificadas de los documentos que obren en poder de la Subsecretaría, y  **XXX.** En coordinación con la Fiscalía General del Estado y demás autoridades competentes, emitir y difundir los lineamientos y criterios para la implementación de los planes de contingencia de disturbios dentro de centros educativos y de salud;  **XXXI.** Vigilar y verificar la implementación de los planes de contingencia de disturbios en centros educativos y de salud; y  **XXXII.** Solicitar apoyo a los municipios en las labores de inspección y vigilancia;  **XXXIII.** Emitir opinión respecto al uso de establecimientos para lo cual valorará la ubicación del mismo y el giro o actividad que se pretenda realizar en él;  **XXXIV.** Revisar por sí mismo o a través de terceros, las condiciones estructurales, eléctricas, de gas y otras que se requieran de los establecimientos señalados en la fracción IX del presente artículo que, por su funcionamiento o naturaleza representen riesgos para la población;  **XXXV.** Autorizar el inicio y/o reinicio de operaciones de establecimientos, ya sean personas físicas o morales cuya actividad preponderante involucre el manejo de materiales peligrosos;  **XXXVI.** Verificar que las personas físicas o morales, cuya actividad sea la fabricación y/o comercio y/o transportación y/o almacenamiento de artilugios de pirotecnia cuenten con los permisos y autorizaciones establecidos en las leyes y reglamentos, así como con las medidas de seguridad y de protección civil necesarias para la realización de dichas actividades; y en su caso, aplicar las medidas preventivas y/o sanciones, que se consideren adecuadas; y  **XXXVII.** Las demás que establezcan la presente ley y otras disposiciones aplicables. | **ARTÍCULO 12.-** Corresponde al Subsecretario de Protección Civil el ejercicio de las siguientes atribuciones:  **I.** a la **VI. …**  **VII.-** Elaborar y actualizar el Atlas Estatal de Riesgos, así como verificar, en términos de ley y en colaboración con las autoridades competentes, la elaboración y actualización de los atlas municipales de riesgo, y la certificación de competencias de sus integrantes y de las unidades municipales;  **Para esto, tendrá que apoyar por medio de campañas de capacitación a los 38 municipios con el fin de asesorar sobre la elaboración, los criterios y lineamientos a considerar para la formulación y expedición de estos.**  **VIII.** a la **XXXII. …** |
| **ARTÍCULO 13.-** Corresponde a los ayuntamientos, por conducto de su presidente municipal, el ejercicio de las siguientes atribuciones:  **I.** Establecer las medidas necesarias para la debida observancia y cumplimiento de las disposiciones en materia de protección civil;  **II.** Aprobar, publicar y ejecutar el Programa Municipal de Protección Civil, así como los planes y programas que de éste se deriven;  **III.** Dirigir las acciones que se requieran para enfrentar, en primera instancia, las emergencias y desastres que se presenten dentro de su jurisdicción municipal;  **IV.** Proporcionar a la Subsecretaría la información que le sea requerida para la integración del Atlas Estatal de Riesgos, así como para las distintas funciones que aquella lleve a cabo;  **V.** Identificar y diagnosticar los riesgos a los que está expuesto el municipio y autorizar el Atlas Municipal de Riesgos;  **VI.** Participar en el Sistema y asegurar la congruencia de los programas municipales con el Plan y Programa Estatal, haciendo las propuestas que estimen pertinentes;  **VII.** Crear fondos para la prevención y atención de emergencias o desastres en el municipio, de acuerdo a su disponibilidad presupuestal;  **VIII.** Solicitar al Estado el apoyo necesario para cumplir con las finalidades de esta ley en el ámbito de su jurisdicción y para desarrollar las acciones de prevención, auxilio y recuperación, cuando se requieran;  **IX.** Celebrar, en los términos de las disposiciones aplicables, con el Estado, otros ayuntamientos, así como con organismos e instituciones de los sectores público, social y privado, los convenios que sean necesarios para la mejor aplicación de las medidas en materia de protección civil;  **X.** Evaluar las situación de desastre y la capacidad de respuesta del municipio y, en su caso, solicitar el apoyo de las autoridades competentes para la atención del mismo;  **XI.** Difundir y dar cumplimiento a la declaratoria de emergencia o desastre que emita el titular del Ejecutivo del Estado o, en su caso, el Gobierno Federal;  **XII.** Asesorar a las empresas, asociaciones, organismos y entidades de los sectores privado y social que lo soliciten, para integrar sus unidades internas y organizar grupos voluntarios de conformidad con las disposiciones aplicables;  **XIII.** Integrar en los reglamentos de desarrollo urbano, construcción y demás relativos, los criterios de prevención en materia de protección civil y hacer que se cumplan;  **XIV.** Promover la capacitación de los habitantes del municipio en materia de protección civil, así como proporcionar información y asesoría a los grupos de vecinos, para elaborar programas específicos e integrar unidades internas de protección civil;  **XV.** Ordenar actos de inspección, para constatar el cumplimiento de las disposiciones relativas a la constitución de unidades internas y a la formulación y aplicación de los Programas Internos de Protección Civil a cargo de propietarios, poseedores o encargados de los establecimientos, edificaciones o inmuebles siguientes:  **a)** Edificios departamentales de hasta cuatro unidades de vivienda;  **b)** Internados o casas de asistencia que sirvan como habitación colectiva para un número de hasta veinte personas;  **c)** Dispensarios y consultorios médicos y capillas de velación;  **d)** Rastros de semovientes, aves y empacadoras;  **e)** Estacionamientos;  **f)** Establecimientos, edificaciones o inmuebles que tengan hasta mil quinientos metros cuadrados de construcción, que conforme a esta ley no sean competencia del estado;  **g)** Parques, plazas, centros o clubes sociales o deportivos y balnearios;  **h)** Centros nocturnos, discotecas o salones de baile;  **i)** Museos, galerías de arte, centros de exposición, salas de conferencias y bibliotecas;  **j)** Templos y demás edificios destinados al culto;  **k)** Tiendas departamentales;  **l)** Oficinas públicas municipales;  **m)** Industrias, talleres o bodegas;  **n)** Granjas para ganadería, porcicultura, avicultura, cunicultura y apicultura;  **ñ)** Centrales de correos, teléfonos, telégrafos, estaciones y torres de radio, televisión y sistemas de microondas, y  **o)** Aquellos en los que la Subsecretaría le solicite apoyo al municipio en tareas de inspección.  **XVI.** Ser la primera autoridad respondiente ante la presencia de un agente perturbador;  **XVII.** Expedir constancia de factibilidad en materia de protección civil para la construcción de edificaciones e instalación de los establecimientos de tipo 2 Mediana que establece el artículo 7 del Reglamento de Construcciones para el Estado Coahuila de Zaragoza, y las que por su funcionamiento o naturaleza representen riesgos para la población, siendo requisito indispensable previo para que se otorgue la licencia de construcción y de funcionamiento y demás trámites análogos de competencia municipal;  **XVIII.** Supervisar y evaluar si los comerciantes, industriales y vendedores al menudeo y mayoreo de artilugios de pirotecnia cuentan con los permisos y autorizaciones establecidos en las leyes y reglamentos, y han implementado las medidas de seguridad y de protección civil necesarias para el manejo y almacenamiento de este tipo de productos; y en su caso, aplicar las sanciones, aseguramientos de mercancía y clausuras que se consideren adecuadas y proporcionales de acuerdo a la gravedad de la infracción; observando para ello el procedimiento legal correspondiente; y  **XIX.** Las demás que les confiera esta ley y otras disposiciones aplicables. | **ARTÍCULO 13.-** Corresponde a los ayuntamientos, por conducto de su presidente municipal, el ejercicio de las siguientes atribuciones:  **I. …**  **II.** Aprobar, publicar y ejecutar el Programa Municipal de Protección Civil **y el Atlas Municipal de Riesgos,** así como los planes y programas que de éste se deriven;  **III.** a la **IV. …**  **V.** Identificar y diagnosticar los riesgos a los que está expuesto el municipio, **para crear y** autorizar el **proyecto de** Atlas Municipal de Riesgos; **así mismo, mantenerlo actualizado y vigente conforme a los riesgos de su municipio.**  **VI.** a la **XIX. …** |
| **ARTÍCULO 25.-** Toda persona física o moral deberá:  **I.** Informar a las autoridades competentes de cualquier acto u omisión que cause o pueda causar una situación de emergencia, desastre y/o disturbio;  **II.** Cooperar con las autoridades correspondientes en la ejecución de acciones en caso de emergencia o desastre;  **III.** Colaborar con las autoridades estatales y municipales para el debido cumplimiento de los programas de protección civil, y  **IV.** Participar, previa solicitud de la autoridad competente, en la difusión del Plan Estatal y los programas de protección civil, principalmente en aquellos relacionados con riesgos que se presenten en su barrio, colonia, zona o centro de población. | **ARTÍCULO 25.-** Toda persona física o moral deberá:  **I.** a la **IV. …**  **V. Observar las medidas de prevención y seguridad de protección civil dispuestas en las fracciones V, X, XIII y XIV cuando se encuentren en una situación de exponer a terceros ante algún riesgo o peligro.** |

Es por todo lo anteriormente expuesto y del análisis del proyecto normativo, que quienes integramos esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, coincidimos con la importancia de adecuar la Ley de Protección Civil Estatal, a fin de dotar a las autoridades de los mecanismos indispensables para inhibir en la medida de lo posible los riesgos que pudiera enfrentar la ciudadanía en nuestra entidad, así como favorecer su desarrollo social, ello a través de la emisión de Atlas de Riesgo eficientes, lográndose lo anterior en coordinación y apoyo del Estado con los Municipios.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO. -** Se reforma: la fracción III del artículo 3, la fracción III del artículo 4 bis y la fracción III del artículo 10; se adiciona: un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 12 y la fracción V al artículo 25, todos de la Ley de Protección Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 3.-** Para los efectos de esta Ley se considera de interés público:

**I.** a la **II. …**

**III.** La expedición, aplicación, evaluación y difusión del Plan Estatal, el Programa Estatal de Protección Civil, **el Atlas Estatal de Riesgos,** así como los planes y programas específicos, sectoriales, regionales o acciones que de éstos se deriven;

**IV.** a la **V. …**

**ARTÍCULO 4 Bis**.- Las políticas públicas en materia de protección civil, se ceñirán al Plan Estatal de Desarrollo, los Programas de Protección Civil **y el Atlas Estatal de Riesgos** identificando para ello las siguientes prioridades:

**I.** a la **II. …**

**III.** Obligación del Estado y los Municipios, para reducir los riesgos sobre los agentes afectables y llevar a cabo las acciones necesarias para la identificación y el reconocimiento de la vulnerabilidad de las zonas bajo su jurisdicción; **para lo anterior, los 38 Municipios deberán expedir y mantener actualizado y vigente su Atlas Municipal de Riesgos.**

**IV.** a la **VII. …**

**ARTÍCULO 10.-** Corresponde al titular del Ejecutivo del Estado el ejercicio de las siguientes atribuciones:

**I.** a la **II. …**

**III.** Aprobar y publicar el Plan Estatal, el Programa Estatal de Protección Civil, **el Atlas Estatal de Riesgos** y demás programas específicos, sectoriales, regionales o acciones que de éstos se deriven;

**IV.** a la **XVI. …**

**ARTÍCULO 12.-** Corresponde al Subsecretario de Protección Civil el ejercicio de las siguientes atribuciones:

**I.** a la **VI. …**

**VII.-** Elaborar y actualizar el Atlas Estatal de Riesgos, así como verificar, en términos de ley y en colaboración con las autoridades competentes, la elaboración y actualización de los atlas municipales de riesgo, y la certificación de competencias de sus integrantes y de las unidades municipales;

**Para esto, tendrá que apoyar por medio de campañas de capacitación a los 38 municipios con el fin de asesorar sobre la elaboración, los criterios y lineamientos a considerar para la formulación y expedición de estos.**

**VIII.** a la **XXXII. …**

**ARTÍCULO 13.-** Corresponde a los ayuntamientos, por conducto de su presidente municipal, el ejercicio de las siguientes atribuciones:

**I. …**

II. Aprobar, publicar y ejecutar el Programa Municipal de Protección Civil **y el Atlas Municipal de Riesgos,** así como los planes y programas que de éste se deriven;

**III.** a la **IV. …**

**V.** Identificar y diagnosticar los riesgos a los que está expuesto el municipio, **para crear y** autorizar el **proyecto de** Atlas Municipal de Riesgos; **así mismo, mantenerlo actualizado y vigente conforme a los riesgos de su municipio.**

**VI.** a la **XIX. …**

**ARTÍCULO 25.-** Toda persona física o moral deberá:

**I.** a la **IV. …**

**V. Observar las medidas de prevención y seguridad de protección civil dispuestas en las fracciones V, X, XIII y XIV cuando se encuentren en una situación de exponer a terceros ante algún riesgo o peligro.**

**T R A N S I T O R I O S.**

**PRIMERO. -** El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado.

**SEGUNDO. -** Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 29 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con proyecto de Decreto para adicionar un párrafo al artículo 5 de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niñas y Niños del Estado de Coahuila, suscrita por la Diputada Verónica Boreque Martínez González, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 16 del mes de octubre del año 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con proyecto de Decreto para adicionar un párrafo al artículo 5 de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niñas y Niños del Estado de Coahuila, suscrita por la Diputada Verónica Boreque Martínez González, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con proyecto de Decreto para adicionar un párrafo al artículo 5 de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niñas y Niños del Estado de Coahuila, suscrita por la Diputada Verónica Boreque Martínez González, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S***

*Hoy en día el fenómeno de la migración ha sobrepasado la simpleza del “desplazamiento” de un lugar a otro, y se ha traducido en una problemática mundial que se basa en la búsqueda de mejores oportunidades o en satisfacer las necesidades personales, desatando una serie de situaciones que afectan a terceros.*

*Para darnos una idea del contexto general que guarda el crecimiento de este fenómeno a nivel mundial, en 2017, se alcanzó la cifra de 258 millones de migrantes activos, mientras que en 2015 la cifra fue de 244 millones y en el año 2000 de 173 millones.*

*Según el documento Estadísticas Migratorias: Síntesis 2018,**elaborado por la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación, tan solo en México se presentaron alrededor de 140 mil eventos de extranjeros presentados ante la autoridad migratoria, representando un 47% más respecto del 2017. De este total, el 23% eran menores de 18 años, es decir, la cuarta parte recae en niños y niñas.*

*Y es que nuestro país por su ubicación geográfica, conjunta diversos flujos migratorios, que lo han calificado y considerado como país de origen, tránsito y destino de migrantes. Igualmente Coahuila, que se encuentra dentro de la franja de estados fronterizos del norte de México, donde miles de migrantes, principalmente centroamericanos y otros más connacionales cruzan ilegalmente la frontera con miras a los Estados Unidos de América.*

*Sin embargo, no todos deciden continuar con su viaje, muchos de ellos optan por asentarse en nuestro territorio, incluso, sin haber tramitado alguna figura jurídica que les permita estar de manera legal en nuestro país.*

*De antemano sabemos que dentro de todos estos miles de migrantes van involucrados y perjudicados muchos niños y niñas que viajan acompañando a sus padres y madres, con algún otro familiar o inclusive de manera individual. Estos, son afectados desde su inicio por las amargas vivencias que forzaron el dejar su lugar de origen, e igualmente, continúan sufriendo durante su traslado a otro país.*

*En estos casos las niñas y niños se enfrentan a una mayor vulnerabilidad y, por tanto, se vuelven presa fácil de los problemas sociales que los rodeen; problemas como las malas prácticas de gobierno, la pobreza, la discriminación, la violencia, la delincuencia organizada y, con ello, prácticas de trata de personas con fines de explotación laboral y sexual o tráfico de órganos, entre muchos más abusos y violaciones de sus derechos.*

*Para el primer cuatrimestre del 2019, informó el Instituto Nacional de Migración (INM) que se incrementaron los flujos migratorios irregulares procedentes de Centroamérica, por medio de lo que todos conocimos como las “caravanas de migrantes”. Datos de la Unidad de Política Migratoria señalan que tan solo en este periodo se registraron 53 mil eventos de extranjeros presentados ante la autoridad migratoria, de los cuales 15 mil fueron sobre menores de 18 años, es decir, el 28%.*

*Todos tenemos conocimiento de dicho fenómeno social y sus estragos; las posturas que se adoptaron dentro del Estado y la Federación para tratar de contrarrestar dichas consecuencias y que todo estuviera en cierta forma apegado a derecho. Existen casos donde algunos migrantes tuvieron éxito y consiguieron establecerse en México de una manera pacífica y legal, y otros más, donde lamentablemente fueron detenidos y sometidos a procedimientos administrativos largos y denigrantes donde se violentaban derechos al por mayor por estar en el país de forma ilegal.*

*Durante estas detenciones realizadas por el Instituto Nacional de Migración, por lo regular, los migrantes son alojados en una estación temporal y separados de grupos o personas con apego.*

*Esto llega a producir daños incalculables en las vidas de las personas que lo viven y la de sus seres queridos; prueba de ello, son las constantes trasgresiones de derechos que viven los niños, niñas y adolescentes que viajan con estos grupos de personas y que lamentablemente sufren mediante la detención y la separación de sus familiares en lo que se resuelve su situación migratoria.*

*Vimos a través de medios de comunicación como autoridades fronterizas, tanto nacionales como de los Estados Unidos de América, violentaban los derechos de las personas migrantes, dándoles un trato inhumano y de poca calidez.*

*Cientos de migrantes fueron encerrados y separados de sus familias, arrastrando las consecuencias hacia muchos menores de edad que fueron tratados como un simple accesorio y no como seres humanos. Recordamos las tristes imágenes de niños y niñas llorando sin parar al sentirse indefensos, en peligro y lejos de sus familias, al estar encerrados sin conocimiento de lo que sucede.*

*Tanto sigue este problema que todavía vemos negaciones como la del Gobierno de Estados Unidos que comunico desde inicios de año que conforme a su política de migración, más de 13 mil niños, de los cuales cientos son bebes, tendrán que esperar en México en lo que se resuelven sus audiencias migratorias. Mientras esto sucede, muchos de ellos sufren la estadía incierta lejos de casa, quedan en calidad de calle, otros más en espacios de alojamiento con muy malas condiciones y lejos de sus seres amados, todo por buscar ser o tener mejor vida.*

*No queremos pensar si esto ocurre también en las fronteras de nuestro Estado, pero lo que si queremos, es actuar a medida de nuestras posibilidades y trabajar en equipo para que esto nunca pase.*

*Citando el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos … Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”. Por ello buscamos evitar dichas prácticas faltantes de empatía hacia los más pequeños; debemos priorizar el principio del interés superior de la niñez y que mediante esta propuesta se puedan establecer mecanismos que permitan a las autoridades estatales y municipales salvaguardar, de mejor forma, los derechos de las niñas y niños.*

*Queremos que en Coahuila, aquellos menores de edad en calidad extraordinaria de migrantes se encuentren en un ambiente pacífico, siempre acompañados por su padre o madre, por algún familiar o persona de confianza, o ya sea el caso cuando viajan sin familiares, acompañados por la autoridad competente. Que sean tratados de una manera digna, ya que por su naturaleza son más susceptibles a malos tratos y expuestos a daños emocionales y psicológicos.*

*Lo anterior, con el objetivo de privilegiar su estancia en lugares donde están en contra de su voluntad, para brindar una atención adecuada, para que se les informe con claridad sobre sus derechos y se le brinde los servicios de representación y asistencia que requiera. Darles esa seguridad que desde iniciada su travesía no pueden sentir.*

*Debemos establecer normas que garanticen el respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes que viven estos procesos largos y tediosos, evitando que sufran abusos y violaciones a sus derechos. Que en Coahuila se demuestren los valores y principios por los que regimos nuestra función diaria, que seamos reconocidos como ejemplo de respeto y compromiso con la sociedad.*

**TERCERO.-** Quienes integramos esta comisión dictaminadora efectuamos el estudio y análisis de la iniciativa de reforma así como de las consideraciones en la que encuentra sustento la misma, verificando que el proyecto normativo tiene por objeto asegurar una protección apegada a derechos humanos para los menores de edad que se encuentren en calidad de migrantes.

México, por su ubicación geográfica y por sus países vecinos, es considerado un país de tránsito, destino y retorno de personas migrantes y sus familias, encontrando como primera causa la búsqueda de mejores oportunidades económicas.

De acuerdo a datos proporcionados por el Instituto Nacional Migratorio, durante el año 2019 el flujo migratorio rompió récord en nuestro país, superando en más de 200% cifras interiormente registradas, esto debido a que, mientras que en 2017 la cifra apenas fue de 93 846 migrantes presentados y en 2018 se registraron 138 612, el año pasado se registraron 460 000 personas que ingresaron a México de manera indocumentada.

En base a estos datos, el mencionado Instituto Nacional Migratorio aludió que de los 460 000 migrantes que ingresaron a territorio nacional en 2019, se presentaron ante la instancia correspondiente 99 203 personas y se devolvieron a su país de origen 71 110, deduciendo que aproximadamente 360 000 indocumentados se encontraban entre territorio mexicano y americano.

Como se manifiesta en la presente exposición de motivos, se enfatiza el hecho de *“que dentro de todos estos miles de migrantes van involucrados y perjudicados muchos niños y niñas que viajan acompañando a sus padres y madres, con algún otro familiar o inclusive de manera individual. Estos, son afectados desde su inicio por las amargas vivencias que forzaron el dejar su lugar de origen, e igualmente, continúan sufriendo durante su traslado a otro país”*

De acuerdo a datos proporcionados por la UNICEF, las autoridades migratorias detectaron en 2017, 18 300 niños y niñas extranjeros provenientes de países como Guatemala, Honduras y El Salvador, en territorio mexicano, de los cuales 16 162 fueron retornados a sus países de origen.

Los niños y niñas migrantes son vulnerables a situaciones que pueden violentar sus derechos humanos, tales como el no tener acceso a un servicio de salud, de ser explotados por el crimen organizado, además de todos los tipos de violencia y discriminación que pueden llegar a enfrentar. Estas situaciones traen como consecuencia un inadecuado desarrollo de su salud física, mental y social.

La Convención sobre los Derechos del Niño, la cual fue aprobada como tratado internacional de derechos humanos el 20 de noviembre de 1989, refuerza el reconocimiento de la dignidad humana fundamental de la infancia, así como la necesidad de garantizar su protección y desarrollo.

Dentro del articulado de la citada Convención, se expresa lo siguiente:

*Artículo 3*

*1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.*

*2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.*

*3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.*

*Artículo 4*

*Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.*

Por su parte, nuestra Carta Magna en su artículo 4 manifiesta expresamente que:

***Artículo 4o.-*** *La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.*

*Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.*

*Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.*

*Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.*

*Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.*

*Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.*

*Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.*

*Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.*

***En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.***

***Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.***

***El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.***

*Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.*

*Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.*

La prioridad en torno a las personas migrantes sigue siendo el velar con el debido cumplimiento y respeto de sus derechos humanos, y en este caso, priorizando el interés superior de la niñez, salvaguardando su integridad y coadyuvando en la eliminación de la discriminación o situación que atente contra el sano desarrollo de este grupo vulnerable.

Por todo lo anteriormente expuesto y tomando en consideración que nuestro estado actualmente se considera como una entidad con alto flujo de migrantes debido a la cercanía con el país vecino, es que quienes integramos esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, consideramos indispensable adicionar un último párrafo al artículo 5 de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila, a fin de que se vigilen y se implementen los mecanismos jurídicos adecuados con el objeto de que se cumpla con el debido respeto de los derechos humanos de niños y niñas migrantes y repatriados.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se adiciona un último párrafo al artículo 5 de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Articulo 5.- …**

**I al XI. …**

…

En cuanto al programa interinstitucional de defensa y protección de migrantes y repatriados, será menester del Estado vigilar en todo momento sea apegado al respeto de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO. -** El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado.

**SEGUNDO. -** Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 29 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se propone adicionar una fracción VI, al artículo 105 del Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 27 del mes mayo del año 2020, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se propone adicionar una fracción VI, al artículo 105 del Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Quela iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se propone adicionar una fracción VI, al artículo 105 del Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*“El código civil de Coahuila expresamente establece en el artículo 88, que los derechos de la personalidad son el conjunto de atributos inherentes a las personas físicas, cuyo objetivo es garantizar a estas el goce de sus facultades físicas, psíquicas, espirituales y de relación, en condiciones óptimas dentro de sus propias circunstancias, así como que los derechos de la personalidad son inalienables, imprescriptibles, e irrenunciables, y pueden oponerse a toda persona, sea autoridad o particular.*

*En ese mismo sentido los artículos 89 y 90, de dicho ordenamiento, categóricamente instituyen, que en relación a las personas físicas son ilícitos los hechos o actos que:*

*A). - Dañen o puedan dañar su vida;*

*B). - Restrinjan o puedan restringir su libertad;*

*C). - Que afecten o puedan afectar su integridad física, y*

*D. - Que lastimen el afecto, cualquiera que sea la causa de éste, que tengan por las personas o por un bien, así como a que se les respete a las personas su honor, su reputación, su vida íntima y también privada.*

*Conforme a lo anteriormente expuesto, resulta conveniente destacar que el artículo 104, del Código Civil de Coahuila, expresamente dispone que los habitantes del estado tienen derecho a que las autoridades y los demás miembros de la comunidad, respeten los derechos de convivencia por medio de los cuales se protegen las relaciones interpersonales, de ahí, que enunciativamente y no limitativamente el artículo 105, de dicho Código, enumere los siguientes derechos de convivencia.*

*I.- De asistencia o ayuda en caso de accidente, sin perjuicio de lo que disponga el Código Penal del Estado;*

*II.- De entrar libremente en la casa habitación o lugar de trabajo, sin que lo impidan vehículos u objetos estacionados o colocados frente a la misma, aunque no haya aviso de prohibición en ese sentido;*

*III.- De que no se depositen desechos o desperdicios en el frente o a los lados de la casa habitación, aunque no haya señal o prohibición en ese sentido;*

*IV.- A no ser perturbados constantemente con sonidos estridentes, estruendosos o cualquier otro ruido molesto, o por la luz temporal de lámparas que impidan el trabajo o el reposo, y,*

*V.- A transitar libremente en calles, avenidas, bulevares y caminos públicos, salvo lo dispuesto por autoridad competente.*

*Aunado a lo anterior, dicho Código Sustantivo, establece cuales serían las obligaciones y las consiguientes sanciones que se derivan de un incumplimiento a las mismas, al establecerse expresamente en los artículos 107 y 108, de ese ordenamiento, que la violación a los derechos de la personalidad, por actos de un particular o de una autoridad, es causa de responsabilidad civil, tanto por lo que hace al daño moral como económico, de acuerdo con lo dispuesto en ese código, independientemente de cualquier otra sanción que corresponda al autor de la violación, y de ser el caso, se pueda ocurrir a los tribunales para que decreten las medidas que procedan a fin de que cesen las violaciones a los derechos de la personalidad que se estén realizando, si se efectúa por actos continuos o reiterados, o para evitar que se realice una amenaza de violación de esos mismos derechos.*

*Conforme a las premisas legales antes referidas, y atendiendo las justas y legítimas propuestas de un grupo de ciudadanos que habitan en algunas cerradas y circuitos, así como de otros sectores habitacionales, como el del fraccionamiento “Los Viñedos”, de la ciudad de Torreón, quienes en voz de sus coordinadores o dirigentes de colonos de ese sector habitacional, como el Señor Renato Villarreal, han solicitado al suscrito de que se reformen los instrumentos legales necesarios para que los vecinos y sus acompañantes de esos núcleos de población puedan transitar de una forma libre y sin riesgos por las calles, avenidas y espacios públicos de los fraccionamientos, cerradas, circuitos, colonias y de cualquier núcleo habitacional, ante la presencia de perros y/o cualquier otro animal, que ante la negligencia de sus dueños, estos puedan representar un riesgo para las personas, así como de que a dichos ciudadanos no se les perturbe indebidamente su sueño nocturno, por el exceso en los ladridos que ocasionan dichos animales...”*

**TERCERO.-** Quienes integramos la presente comisión dictaminadora efectuamos el estudio y análisis de la iniciativa, verificando que la misma tiene por objeto disponer de forma expresa el derecho a la sana convivencia de las relaciones interpersonales, mediante el cual los vecinos y sus acompañantes puedan transitar libremente y sin riesgos por las calles, avenidas y espacios públicos de distintos núcleos habitacionales, así como a no ser perturbados en su sueño nocturno por el exceso de ladridos que ocasionan los animales.

Derivado del análisis del artículo que se pretende reformar, esta Comisión razona que dicha disposición se encuentra prevista en el Capítulo VIII del Título Primero “De la Personalidad Jurídica”, por lo cual, debe partirse desde el pensamiento que considera que, los derechos que enunciativamente establece el artículo 105 son derechos inherentes a la personalidad jurídica y, específicamente, a las personas físicas.

Los derechos de la personalidad, por disposición del artículo 88 son “*el conjunto de atributos inherentes a todas las personas físicas, cuyo objetivo es garantizar a estas el goce de sus facultades físicas, psíquicas, espirituales y de relación, en condiciones óptimas dentro de sus propias circunstancias.”* Por otro lado, para Gutiérrez y González, los derechos de la personalidad “*son los bienes constituidos por determinadas proyecciones, físicas o psíquicas del ser humano, que las atribuye para sí o para algunos sujetos de derecho y que son individualizadas por el ordenamiento jurídico”[[4]](#footnote-4)*.

Por lo anterior, no hay duda de la premisa que sostiene Lucía Alejandra Mendoza Martínez, quien considera que los derechos de la personalidad son los atributos o cualidades más próximas a la persona[[5]](#footnote-5) y por lo cual, su categorización atiende a una clase de derechos fundamentales porque se encuentran estrechamente vinculados a la cualidad de persona de todos los seres humanos, independientemente de cualquier otra condición.

En ese sentido, resulta del referido análisis que el espíritu que persigue la propuesta presentada por el Diputado y quienes suscriben, persigue un interés fundamentalmente relacionado con la protección de los derechos humanos, entendidos estos como una categoría en la que encuadran los derechos inherentes a la personalidad, salvaguardando bajo ese supuesto el derecho de las personas a transitar libremente y sin riesgos por cualquier vialidad, en cualquier núcleo habitacional ante la presencia de animales que pongan en riesgo para aquellos por la negligencia de los dueños.

Así, esta Comisión considera necesario implementar dicha protección en cuanto a la seguridad de los ciudadanos a transitar libremente por las vialidades existentes, lo cual atiende a una construcción racional; esto, pues el derecho fundamental del libre tránsito se encuentra positivizado en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicho lo anterior, esta Comisión también considera pertinente pronunciarse sobre la porción normativa que establece “*así como de que a dichos ciudadanos y a sus familias, no se les perturbe indebidamente su sueño nocturno, por el exceso en los ladridos que ocasionan dichos animales”*, lo cual tiene sustento en el sentido que persigue la iniciativa planteada por quienes suscriben, no obstante, su protección no comparte la misma naturaleza jurídica con relación a la protección del libre tránsito y los derechos fundamentales.

Sobre ese punto, Lucía Alejandra Mendoza Martínez menciona que “*la ley no puede ser muy laxa en el sentido de proteger a cuanto sentimiento o estado psíquico se le antoje al sujeto, sino que deben considerarse a los que verdaderamente y en forma inmediata lesionen esas cualidades o atributos [los derechos de la personalidad], y que de cierta forma impidan al sujeto desarrollar sus potencialidades al verse disminuido en sus derechos íntimos”[[6]](#footnote-6).*

Lo anterior implica entender si realmente la porción referida implica una verdadera lesión a los derechos de la persona y, de ahí, cuál es el derecho fundamental que se está lesionando o la potencialidad humana que se disminuye con la actividad que se pretende reformar. Si bien, es cierto que la actividad que se menciona como “exceso de ladridos por las noches” puede llegar a resultar molesta, lo cierto es que ello no lesiona ningún derecho fundamental, pues no deriva en una perturbación de la tranquilidad que impida el trabajo o el reposo, toda vez que, en un primer momento, no es una actividad constante y, en segundo momento, no depende directamente de la responsabilidad del dueño, por tratarse de una condición natural del animal.

Dicho lo anterior, es de suma importancia considerar que los derechos de la persona y su inclusión en el orden jurídico civil del Estado persigue el objetivo de reprochar a través de la acción civil aquellas conductas que son contrarias al orden y a la estabilidad social. Sin embargo, la porción referida no tiene una especial relevancia jurídica que deba protegerse a través de la legislación civil.

La propuesta que se hace para adicionar como derecho de convivencia en el Estado de Coahuila de Zaragoza, resulta adecuada al establecer la seguridad de los habitantes al transitar en cualquier espacio público donde se puedan encontrar animales domésticos o de compañía que al no encontrarse bajo el cuidado adecuado de su dueño, pudieran representar un riesgo.

La Ley de Protección y Trato Digno a los Animales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, establece diversas obligaciones para los tutores y/o poseedores de animales, entre estas se contempla establecer las medidas necesarias para que el animal de compañía no escape o ponga en riesgo la seguridad y la integridad física del ser humano, de él mismo y de otros animales, así como en caso de que el animal cause daños y/o perjuicios, responder por ellos.

Es así que esta obligación que tienen los tutores y/o poseedores de animales, genera un derecho para todas las personas que pudieran sufrir algún tipo de daño en su persona o bienes derivado de alguna acción por parte del animal ante el descuido de su dueño.

Sin embargo, se menciona también lo relativo a la perturbación indebida del sueño nocturno por el exceso en los ladridos que ocasionan dichos animales, sin embargo, el mismo artículo 105 en su fracción IV, ya contempla el derecho a no ser perturbados constantemente con sonidos estridentes, estruendosos o cualquiera otro ruido molesto que impida el trabajo o el reposo, por lo que resultaría innecesario especificar los tipos de ruidos que se deben considerar como molesto.

Por lo que se considera conveniente modificar los términos de la fracción que se adiciona de conformidad con lo establecido en el presente dictamen.

**D E C R E T O**

**ARTÍCULO ÚNICO****.-** Se adiciona la fracción VI al artículo 105, del Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 105.** …

I . a la V. …

VI.- A transitar los vecinos y sus acompañantes libremente por calles, avenidas, bulevares y espacios públicos, ante la presencia de cualquier animal que pudiera poner en riesgo su seguridad e integridad física al no encontrarse bajo el debido cuidado de su tutor y/o poseedor.

**T R A N S I T O R I O**

**ÚNICO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 29 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de las comisiones unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Hacienda, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se modifica el contenido del segundo párrafo de la fracción I del artículo 383 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, y el segundo párrafo del numeral 1 de la fracción VI del artículo 102 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por la Diputada María Eugenia Cazares Martínez, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 25 del mes marzo del año 2020, se acordó turnar a estas comisiones unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Hacienda, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a estas comisiones unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Hacienda, la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se modifica el contenido del segundo párrafo de la fracción I del artículo 383 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, y el segundo párrafo del numeral 1 de la fracción VI del artículo 102 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por la Diputada María Eugenia Cazares Martínez, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que estas comisiones, con fundamento en los artículos 90, 92, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, son competentes para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se modifica el contenido del segundo párrafo de la fracción I del artículo 383 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, y el segundo párrafo del numeral 1 de la fracción VI del artículo 102 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por la Diputada María Eugenia Cazares Martínez, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*“Todas las leyes de ingresos municipales contemplan siempre un apartado de descuentos, condonaciones y estímulos fiscales aplicables a diversos supuestos e individuos. A saber: Descuentos para personas con discapacidad, de la tercera edad, pensionados y mujeres jefas de familia en rubros como: agua potable y predial, principalmente.*

*También se decretan estímulos fiscales para quienes pagan en cierto tiempo sus impuestos, aunque estos decretos se emiten a medio ejercicio fiscal, ya sea la condonación total o parcial de los recargos y multas, o una reducción en el monto del tributo.*

*Existe un tercer supuesto, en que los municipios pueden decretar condonaciones de impuestos, especialmente para hacer frente a crisis o emergencias que afecten a un considerable grupo de la población. A tal efecto, el Código Financiero para los Municipios del Estado, dispone:*

*ARTÍCULO 383.- No se otorgará condonación total ni parcial de contribuciones o sus accesorios en favor de una o más personas determinadas, salvo los supuestos señalados en los artículos 413 y 413 BIS de este código.*

*El Presidente Municipal, mediante resolución de carácter general y previa autorización expresa del ayuntamiento podrá:*

*I. Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar del Municipio una rama de actividad, la producción o venta de productos o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.*

*Previo acuerdo, fundado y motivado, se necesitará de la autorización de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento y se limitará la condonación hasta por un 30% del valor de la contribución, para todos aquellos casos que determine el Ayuntamiento y no estén previstos en el párrafo anterior.*

*Por su parte, el Código Municipal de Coahuila, refiere:*

*ARTÍCULO 102…*

*VI. En materia de desarrollo económico y social:*

*1. Conceder subsidios, apoyos administrativos o estímulos fiscales, en los términos de la legislación de la materia, con la finalidad de impulsar la actividad económica del municipio, así como el establecimiento de nuevas empresas y la generación de empleos.*

*Se necesitará de la autorización de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento y se limitará el subsidio, apoyo administrativo o estímulo fiscal hasta por un 30% del valor de la contribución, para todos aquellos casos que determine el Ayuntamiento y no estén previstos en el párrafo anterior.*

*En la doctrina fiscal se ha discutido hasta la fecha presente cuáles son los límites de la capacidad de los entes públicos para conceder condonaciones y estímulos fiscales, es decir, el monto. La opinión y la teoría se dividen en dos: Los que dicen que, en el caso de los municipios su atribución es ilimitada y no puede imponérseles restricciones en apego a la autonomía hacendaria municipal.*

*Y; otro grupo o sector que sostiene que si bien se debe respetar en todo momento la autonomía hacendaria, el municipio- y los otros dos órdenes de gobierno- deben sujetar sus condonaciones, estímulos y exenciones fiscales a límites de prudencia y razonabilidad, y justificar los mismos en base a la realidad del beneficio que se pretende otorgar y los motivos que generan la necesidad de aplicar dichas condonaciones. Al respecto, resultan aplicables los siguientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:*

*Novena Época; Registro digital: Instancia: Segunda Sala : Jurisprudencia*

*Fuente: Apéndice de 2011, Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Vigésima Primera Sección - Principios de justicia tributaria; Materia(s): Constitucional, Administrativa.*

*Tesis: 610*

*Página: 1744*

*ESTÍMULOS FISCALES. DEBEN RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA FISCAL QUE LES SEAN APLICABLES, CUANDO INCIDAN EN LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA CONTRIBUCIÓN.*

*Los estímulos fiscales, además de ser benéficos para el sujeto pasivo, se emplean como instrumentos de política financiera, económica y social en aras de que el Estado, como rector en el desarrollo nacional, impulse, oriente, encauce, aliente o desaliente algunas actividades o usos sociales, con la condición de que la finalidad perseguida con ellos sea objetiva y no arbitraria ni caprichosa, respetando los principios de justicia fiscal que les sean aplicables cuando incidan en los elementos esenciales de la contribución, como sucede en el impuesto sobre la renta en el que el estímulo puede revestir la forma de deducción que el contribuyente podrá efectuar sobre sus ingresos gravables una vez cumplidos los requisitos previstos para tal efecto.*

*Décima Época; Instancia: Primera Sala: Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I*

*Tesis: 1a. CCCXC/2014 (10a.)*

*Página: 729*

*PRINCIPIO DE GENERALIDAD TRIBUTARIA. SU ALCANCE EN RELACIÓN CON LA CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS.*

*Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 811/2008, del que derivó la tesis aislada 1a. IX/2009 (\*), estableció que el principio de generalidad tributaria se encuentra asociado a la igualdad en la imposición, y constituye un límite constitucional a la libertad de configuración del sistema tributario, el cual se traduce en un mandato dirigido al legislador para que, al tipificar los hechos imponibles de los distintos tributos, alcance todas las manifestaciones de capacidad económica, buscando la riqueza donde se encuentre. Así, el principio de generalidad tributaria en sentido negativo, obliga a enfatizar la proscripción de la condonación no razonable a los dotados de capacidad contributiva; de ahí que las condonaciones -y, en general, las formas de liberación de la obligación- deben reducirse a un mínimo, si no abiertamente evitarse y, en todo caso, justificarse razonablemente en el marco constitucional, es decir, cuando se introducen deben seguirse bases objetivas, de forma tal que los medios utilizados resulten razonables en proporción con los fines perseguidos.*

*Décima Época: Registro digital: 2012227; Instancia: Pleno, Jurisprudencia*

*Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo I. Materia(s): Constitucional*

*Tesis: P./J. 3/2016 (10a.): Página: 9*

*CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. LAS NORMAS QUE LA PREVÉN NO SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.*

*Los beneficios otorgados por razones no estructurales de la contribución son producto de una sanción positiva contenida en una norma típicamente promocional, y pueden ubicarse entre los denominados "gastos fiscales", es decir, los originados por la extinción y disminución de tributos, traducidos en la no obtención de un ingreso público como consecuencia de la concesión de beneficios fiscales orientados al logro de la política económica o social adoptada en una época determinada. Así, este tipo de beneficios, como la condonación de deudas tributarias, puede equipararse o sustituirse por subvenciones públicas, pues tienen por objeto prioritario plasmar criterios de política fiscal en cuanto a la recaudación de tributos, justificados en razones de interés público. De ahí que la condonación importa un beneficio que no obedece a una exigencia constitucional de justicia tributaria, si se toma en cuenta que se establece con una intención promocional en cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al precisar que el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y el fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga la propia Ley Suprema. Por consiguiente, al no ser la condonación un ajuste a la estructura, al diseño o al monto de un impuesto, sino la acción unilateral del Estado que, como instrumento de índole excepcional, se emplea para no hacer efectiva la deuda fiscal al renunciarse a la recepción del pago de la obligación pecuniaria del contribuyente, es inconcuso que las normas que la prevén no se rigen por los principios de justicia fiscal contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pues su otorgamiento no obedece a razones de justicia tributaria, ni al ajuste que corresponde para que el gravamen se determine conforme a la capacidad contributiva que dio lugar al tributo; sin embargo, lo anterior no implica que las normas que establezcan condonaciones escapen al control de la constitucionalidad, ya que la delimitación de quienes pueden contar con tal beneficio y su implementación, excluyendo o incluyendo a ciertos sectores o personas, desde luego, puede analizarse desde el ámbito más amplio correspondiente al principio de igualdad, y no al de equidad tributaria.*

*Revisamos algunos los Códigos Municipales y Financieros de otros municipios, y encontramos lo siguiente:*

*CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO*

*ARTÍCULO 27.- Son facultades del Presidente Municipal, las siguientes:*

*…*

*VII.- Condonar o en su caso eximir total o parcialmente los créditos fiscales municipales, cuando se afecte gravemente la situación de alguna región del Municipio o de alguna rama de la actividad económica.*

*Las disposiciones que al efecto se dicten, determinarán los créditos que se condonen, o en su caso se eximan, el importe o proporción de los beneficios, los sujetos que gozarán de los mismos, la región o la rama de actividad en la que producirán sus efectos, los requisitos que deban satisfacerse y el período al que se apliquen;*

*VIII.- Podrá condonar recargos hasta el 100 %, siempre y cuando la condonación tenga un carácter general y se conceda en un sólo período no mayor de 30 días en un ejercicio fiscal y del 50%, cuando el período sea de 31 a 60 días en un ejercicio.*

*Asimismo, podrá condonar en casos particulares hasta el 50 % de los recargos siempre y cuando se compruebe que la falta de pago se motivó por una manifiesta situación económica precaria de los contribuyentes.*

*CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA*

*Artículo 50. El Ayuntamiento mediante resolución de carácter general podrá:*

*I. Condonar total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar en el Municipio o grupos sociales en situación de vulnerabilidad, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias;*

*II. Dictar las medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y procedimientos señalados en las leyes fiscales, sin variar las disposiciones relacionadas con el sujeto, objeto, base, tasa, cuota o tarifa y época de pago de las contribuciones, las infracciones o las sanciones de las mismas, a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes; y*

*III. Conceder subsidios o estímulos fiscales. Las resoluciones que conforme a este artículo dicte el Ayuntamiento, deberán señalar las contribuciones a que se refieren, el monto o proporción de los beneficios, plazos que se concedan y los requisitos que deban cumplirse por los beneficiados.*

*CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO*

*ARTÍCULO 57.- El Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal, mediante resolución podrá:*

*I.- Condonar, total o parcialmente, el pago de contribuciones, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación económica de algún lugar o región del Municipio, la producción, venta de productos o la realización de una actividad, en los casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas, epidemias o alguna otra causa grave; y*

*II.- Conceder subsidios y estímulos fiscales. Las resoluciones que conforme a éste artículo se dicten, deberán señalar las contribuciones a que se refieren, así como el monto o proporción de los beneficios, plazos que se concedan y los requisitos que deban cumplirse por los beneficiados, salvo que se trate de estímulos fiscales.*

*Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato*

*Artículo 56. Los Ayuntamientos Municipales, mediante disposición de carácter general, podrán condonar, total o parcialmente, los créditos derivados de las obligaciones fiscales cuando por causas graves se afecte la situación de alguna región o rama de actividad económica dentro de sus respectivas jurisdicciones.*

*Salvo los casos sancionados en este artículo serán nulas, de pleno derecho, las condonaciones totales o parciales, otorgadas por personas no facultadas para ello. Quienes soliciten los beneficios a que se refiere este artículo deberán:*

*I. Presentar escrito, debidamente fundado y motivado; y*

*II. La solicitud deberá efectuarse en forma directa por el sector que pretenda resultar beneficiado o el representante legal debidamente acreditado.*

*En los hechos, predomina por amplia mayoría el derecho de los municipios a realizar incluso condonaciones totales. Y, por el contrario, una minoría de códigos observa límites a los porcentajes de descuento.*

*Nuestro Código Financiero observa ambos supuestos, en la redacción siguiente:*

*ARTÍCULO 383.-…*

*El Presidente Municipal, mediante resolución de carácter general y previa autorización expresa del ayuntamiento podrá:*

*I.* ***Condonar o eximir, total o parcialmente,*** *el pago de contribuciones y sus accesorios, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar del Municipio una rama de actividad, la producción o venta de productos o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.*

*Previo acuerdo, fundado y motivado, se necesitará de la autorización de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento y se limitará la condonación hasta por un 30% del valor de la contribución, para todos aquellos casos que determine el Ayuntamiento y* ***no estén previstos en el párrafo anterior.***

***Esto es, pueden nuestros municipios realizar condonaciones totales en los casos señalados en el párrafo primero de la fracción I del artículo 383.***

***Y solo del 30% en todos los casos no comprendidos en esos supuestos.***

*Pero, el límite del 30% es muy bajo en comparación con los porcentajes observados en otros Códigos Financieros, Municipales y Hacendarios de otras entidades federativas. Además no corresponde con los descuentos que conceden los municipios en sus leyes de ingresos, que en muchos casos son del 50%.*”

**TERCERO.-** Los integrantes de estas comisiones unidas efectuamos el estudio y análisis de la iniciativa, verificando que la misma tiene por objeto aumentar el límite de la condonación para todos aquellos casos que determine el Ayuntamiento y no sean los casos de excepción establecidos en los Códigos.

La promovente sustenta su propuesta en que en diversos Códigos Financieros, Municipales y Hacendarios de otras entidades federativas se prevé un porcentaje mayor a lo que se establece en el Código financiero y municipal de la entidad, que es un porcentaje del 30 por ciento.

Asimismo se refiere en los motivos que acompañan en proyecto de reforma que muchas de las Leyes de Ingresos Municipales contemplan supuestos en los que la condonación es mayor al porcentaje previsto en el marco normativo Coahuilense.

En este contexto, para los integrantes de estas comisiones unidas resulta adecuado realizar las reformas propuestas a las disposiciones jurídicas estatales, que contribuyan al fortalecimiento de la economía de los habitantes del Estado, lo cual cobra aun más sentido en estos momentos en los que el País atraviesa por una emergencia sanitaria que ha venido a perjudicar económicamente a los sectores de la población.

Por lo anterior, se prevé que el ayuntamiento previo acuerdo, fundado y motivado, aumente la condonación y sea hasta por un 50 por ciento del valor de la contribución, salvo los casos de excepción establecidos en los Códigos.

En este sentido, una vez que hemos agotado el estudio y análisis de la iniciativa la consideramos procedente.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente proyecto de:

**D E C R E T O**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Se modifica el segundo párrafo de la fracción I del artículo 383 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 383.-** …

…

1. …

Previo acuerdo, fundado y motivado, se necesitará de la autorización de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento y se limitará la condonación hasta por un **50%** del valor de la contribución, para todos aquellos casos que determine el Ayuntamiento y no estén previstos en el párrafo anterior.

1. …
2. …

…

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Se modifica el segundo párrafo del numeral 1 de la fracción VI del artículo 102 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 102.** …

…

…

…

**I.** a la **V.** …

**VI.** …

1. …

Se necesitará de la autorización de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento y se limitará el subsidio, apoyo administrativo o estímulo fiscal hasta por un **50%** del valor de la contribución, para todos aquellos casos que determine el Ayuntamiento y no estén previstos en el párrafo anterior.

2. a la 4. …

**VII.** a la **X.** …

**T R A N S I T O R I O**

**ÚNICO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de las comisiones unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Hacienda, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza, Dip. María Eugenia Cázares Martínez (Coordinadora), Dip. Verónica Boreque Martínez González (Secretaria) y Dip. María Esperanza Chapa García.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 29 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**COMISIÓN DE HACIENDA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. MARÍA EUGENIA CÁZAREZ MARTÍNEZ (COORDINADORA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ (SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se adicionan dos párrafos al artículo 108 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por la Diputada María Eugenia Cázares Martínez, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 27 del mes mayo del año 2020, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se adicionan dos párrafos al artículo 108 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por la Diputada María Eugenia Cázares Martínez, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Quela iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se adicionan dos párrafos al artículo 108 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por la Diputada María Eugenia Cázares Martínez, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*“Los actos de autoridad deben estar sustentados en leyes que los doten de plena legalidad, certeza y seguridad jurídica.*

*La ley debe proporcionarle al gobernado las condiciones para que conozca en qué plazo y forma su asunto o el asunto que le afecta de manera positiva o negativa, directa o indirecta, será resuelto.*

*En diversos criterios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la ley debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades.*

*A su vez, los actos de autoridad deben contemplar los elementos mínimos para su plena validez, esto aplicable a todos los casos y ámbitos de competencia de las autoridades.*

*La Ley de Procedimiento Administrativo del Estado establece lo siguiente:*

*Artículo 4. Son elementos y requisitos del acto administrativo:*

*I. Ser expedido por órgano competente, a través de servidor público, y en caso de que dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto para emitirlo;*

*II. Tener objeto que pueda ser materia del mismo; determinado o determinable; preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, y previsto por la ley;*

*III. Cumplir con la finalidad de interés público regulado por las normas en que se concreta, sin que puedan perseguirse distintos fines;*

*Los procedimientos legales, sin importar de qué materia de se trate, sin atender a su complejidad o alcances, siempre, en todos los casos, deben contener los plazos y formas para ser resueltos, no puede ser considerada valida una ley que no dispone de plazos o confiere a las autoridades amplia discrecionalidad para resolver; en cuyo caso sería una norma arbitraria por lo menos, cuando no hasta inconstitucional.*

*El plazo le confiere al gobernador la seguridad y la garantía de conocer el tiempo específico en que el asunto de su interés será resuelto, independientemente de que el resolutivo le sea adverso.*

*Asimismo, le permite contar con su derecho a una defensa, a inconformarse, acudir a otras instancias cuando así lo permite la ley y la naturaleza del caso.*

*La ausencia de plazos definitivos para resolver las etapas de un proceso legal, administrativo, fiscal, penal, y en general de cualquier materia es violatorio de las garantías de legalidad, certeza y seguridad jurídica; establece oscuridad y arbitrariedad y genera daños y perjuicios para el gobernado.*

*El Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 20 de julio de 1999. Desde entonces, y a la fecha, ha sufrido en su texto más de sesenta reformas. Concentrándose la mayor parte de ellas en las legislaturas LX y LXI. Todas las adecuaciones que se han hecho están debidamente fundadas y motivadas, y obedecen a necesidades y situaciones no previstas en su momento en dicho ordenamiento; en otros casos a la necesidad de actualizar conceptos y figuras, así como a la introducción de nuevas disposiciones orgánicas y de tipo funcional.*

*CAPÍTULO IX*

*DE LAS COMISIONES*

*ARTÍCULO 107. El Ayuntamiento, a propuesta del presidente municipal o de sus regidores, aprobará la integración de las comisiones que estime necesarias para su eficaz organización administrativa interna y para el mejor desempeño de las facultades y competencias que tiene atribuidas. Las comisiones deberán estudiar los asuntos del ramo administrativo correspondiente, o los asuntos que se les encomiende y. para tal efecto, los analizarán y emitirán un dictamen que someterán a la consideración y aprobación, en su caso, del Ayuntamiento. A cada comisión se le asignará en el presupuesto de egresos una cantidad mensual por concepto de gastos, cuyo monto autorizará el propio Ayuntamiento.*

*Las comisiones a las que refieren los artículos 112, 113, 113 BIS, 113 BIS-1 y 113 BIS-2, serán de forzosa conformación por los ayuntamientos, justificándose mediante la importancia que dichas ramas requieren. De igual manera, será libertad de cada ayuntamiento la integración de comisiones bajo libre criterio.*

*ARTÍCULO 108. Las comisiones se integrarán y funcionarán de manera colegiada con el número de miembros que establezca el reglamento interno o el acuerdo del Ayuntamiento, procurando que reflejen pluralidad y proporcionalidad; en cada comisión habrá un presidente y un secretario.*

*Artículo 109.- Las sesiones de las comisiones podrán ser públicas, cuando la divulgación de la información de los asuntos que traten no afecte a particulares y no se encuentre dentro de la información que deba ser protegida conforme las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza o de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza.*

*ARTÍCULO 110. Sólo por causas graves calificadas por las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento, podrá dispensarse o removerse del cargo a quien integre alguna comisión, haciéndose un nuevo nombramiento.*

*ARTÍCULO 111. Las comisiones podrán ser individuales o colegiadas y permanentes o transitorias, y su materia y funciones serán establecidas en el Reglamento Interior o por acuerdo del Ayuntamiento, siempre de conformidad con las necesidades municipales, teniendo el carácter de permanentes y obligatorias las de hacienda, patrimonio y cuenta pública; la de planeación, urbanismo y obras públicas; la de transparencia y acceso a la información, la de reglamentación, la de Igualdad de Género y la de Ciencia, Tecnología e Innovación.*

*Cada una de estas comisiones, estarán integradas cuando menos por un regidor de la primera minoría.*

*A simple vista, y luego de leer el resto de los artículos de este capítulo, se aprecia que no existe un plazo máximo o definitivo para que las comisiones municipales resuelvan los asuntos que les son turnados.*

*Y no debemos confundirnos con los casos en que de manera indirecta, para ciertos temas, algunas comisiones sí tienen que observar un plazo forzoso, por ejemplo, la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, debe observar los plazos que le imponen la Constitución del Estado y el Código Financiero de la entidad, para elaborar las leyes de ingresos, el Presupuesto de Egresos y la presentación de las cuentas públicas y los avances de gestión.*

*Es decir, estamos ante un caso excepcional.*

*La Comisión de Planeación, Urbanismo y Obras Pública, que debe presentar al ayuntamiento el Plan Municipal de Desarrollo Urbano dentro de los 90 días posteriores a su instalación. Otro caso excepcional.*

*Sin embargo, en general, las comisiones no tienen plazo máximo para resolver mediante dictamen o acuerdo los asuntos que les son turnados; generando las consecuencias a que ya hicimos mención en esta exposición de motivos.*

*No es de sorprender, pues al revisar más de 14 códigos municipales, encontramos el mismo problema en la mayoría.*

*En los casos de excepción, hallamos los siguientes:*

*LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL*

*DEL ESTADO DE JALISCO*

*Artículo 27. Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones.*

*…*

*Los Ayuntamientos establecen en sus respectivos reglamentos el plazo en que cada comisión edilicia debe dar cuanta de los asuntos que le sean turnados. A falta de disposición reglamentaria, los asuntos deben dictaminarse en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días naturales contados a partir del día posterior a que le sean turnados, mismos que pueden ser prorrogables en los términos de la reglamentación municipal.*

*LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SONORA*

*ARTÍCULO 73.- Las comisiones tendrán por objeto el estudio, dictamen y propuestas de solución a los asuntos de las distintas ramas de la administración pública municipal. Para tal efecto, las comisiones están obligadas a emitir dictámenes de los ramos de la administración cuya vigilancia y evaluación les haya sido encomendada, en un plazo no mayor a quince días hábiles, contados a partir de fecha en que se haya turnado el asunto, dicho plazo podrá ser prorrogado por el Ayuntamiento a Solicitud de la comisión respectiva.*

*En atención a los argumentos y fundamentos expuestos, consideramos necesaria la presente reforma.”*

**TERCERO.-** Quienes integramos esta comisión dictaminadora, efectuamos el estudio y análisis de la iniciativa así como de las consideraciones en la que encuentra sustento la misma, verificando que el proyecto normativo tiene por objeto establecer un plazo máximo de 45 días naturales para que las comisiones resuelvan los asuntos que les son turnados, con excepción de los casos en que el Código Municipal u otros ordenamientos dispongan un plazo distinto en atención al asunto de que se trate, o bien, cuando por acuerdo de cabildo se fije uno diferente.

La promovente en la propuesta de iniciativa establece que en el Código Municipal: *“no existe un plazo máximo o definitivo para que las comisiones municipales resuelvan los asuntos que les son turnados.”*. Por lo que coincidimos en que se debe de establecer un plazo, ya que es un elemento esencial para que todo acto administrativo sea resuelto y la ausencia de este da como resultado que no haya una seguridad y garantía jurídica.

No obstante estamos de acuerdo con el espíritu de la reforma, tomando en consideración la naturaleza de los asuntos que en ocasiones son complejos y requieren de un profundo análisis, los integrantes de esta dictaminadora, consideramos fijar un plazo mayor al propuesto, modificando el proyecto de Decreto para establecer 60 días naturales, garantizando con ello que la norma se cumpla.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente proyecto de:

**D E C R E T O**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se adicionan un segundo y tercer párrafo al artículo 108 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 108.** …

Las comisiones deberán resolver los asuntos que les son turnados en un plazo no mayor a sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de recepción; exceptuando los casos en que este Código u otros ordenamientos dispongan un plazo distinto en atención al asunto de que se trate, o bien, cuando por acuerdo de cabildo se fije uno diferente.

El plazo señalado en el párrafo anterior podrá duplicarse por una sola vez y de forma justificada a solicitud de la comisión, la cual deberá informar por escrito al secretario del ayuntamiento sobre las razones y motivos antes de vencer el plazo original.

**T R A N S I T O R I O**

**ÚNICO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 29 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XIV al artículo 2 y una porción normativa al último párrafo del artículo 3 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza, y se adiciona una porción normativa al artículo 1, una porción normativa al artículo 641 y la fracción VIII, recorriéndose la actual del artículo 644, de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Fernando Izaguirre Valdés, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 25 del mes de marzo del presente año, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XIV al artículo 2 y una porción normativa al último párrafo del artículo 3 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza, y se adiciona una porción normativa al artículo 1, una porción normativa al artículo 641 y la fracción VIII, recorriéndose la actual del artículo 644, de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Fernando Izaguirre Valdés, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben; y,

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XIV al artículo 2 y una porción normativa al último párrafo del artículo 3 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza, y se adiciona una porción normativa al artículo 1, una porción normativa al artículo 641 y la fracción VIII, recorriéndose la actual del artículo 644, de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Fernando Izaguirre Valdés, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa en la exposición de motivos siguiente:

**CONSIDERANDO**

*Que el derecho a la familia aparece reconocido en los Artículos 16, 25 y 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los cuales establecen:*

*“****Artículo 16***

*1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de la disolución del matrimonio.*

*2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.*

*3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.*

***Artículo 25***

*1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.*

*2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.*

***Artículo 26***

*1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.*

*2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.*

*3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.”*

*Que en el mismo tenor, el artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece:*

*“****Artículo 17.*** *Protección a la Familia*

*1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.*

*2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención.*

*3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.*

*4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos.*

*5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del mismo”.*

*Que igualmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala, en su artículo 23:*

*“****Artículo 23***

*1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.*

*2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello.*

*3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.*

*4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán las disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos.”*

*Que, además, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales indica, en los artículos 7 y 10:*

*“****Artículo 7***

*Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:*

*a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:*

*i) Un salario equitativo e igual por el trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual;*

*ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conformes a las disposiciones del presente Pacto.*

*(…)*

***Artículo 10***

*Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que:*

*1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges.”*

*Que en la misma tesitura, el Preámbulo de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño señala:*

*“…Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad…”*

*“…Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de la felicidad, amor y comprensión…”*

*Que en concordancia con lo establecido en los instrumentos internacionales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los Artículos 3º Fracción II Inciso c), 4º y 29º Párrafo Segundo entre otros:*

*“****Artículo 3º.***

*(…)*

*II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del proceso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.*

*Además:*

*(…)*

*c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona,* ***la integridad de la familia,*** *la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión….*

***Artículo 4o.*** *El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.*

***Artículo 29o.***

*(…)*

*En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal,* ***a la protección a la familia****, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez; los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.*

*Que, además, en la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXXIII, marzo de 2011, página 2133, con título “Derecho de familia. Su Concepto”, menciona que “el sistema jurídico mexicano, basado en un sistema constitucional y democrático, el derecho familiar es un conjunto de principios y valores procedentes de la Constitución, de los tratados internacionales, así como de las leyes e interpretaciones jurisprudenciales, dirigidos a proteger la estabilidad de la familia y a regular la conducta de sus integrantes entre sí, y también a delimitar las relaciones conyugales, de concubinato y de parentesco, conformadas por un sistema especial de protección de derechos y obligaciones respecto de menores, incapacitados, mujeres y adultos mayores, de bienes materiales e inmateriales, poderes, facultades y deberes entre padres e hijos, consortes y parientes, cuya observancia alcanza el rango de orden público e interés social”.*

*Que las normas internacionales, locales y las posturas de Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconocen en sentido estricto, que las familias son un grupo de individuos que conviven de manera constante, donde existe una convivencia regida por valores y costumbres que permitirán una convivencia armoniosa en el exterior del seno familiar. Ante este panorama, el Estado se encuentra obligado a garantizar, por medio de políticas públicas específicas, la implementación de programas donde exista la participación de los integrantes de las familias, acciones legislativas enfocadas al tema en mención y la difusión de información referente a la participación activa de los padres en la reconstrucción del tejido social de nuestra entidad.*

*Que por lo anterior, sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente*

***EXPOSICIÓN DE MOTIVOS***

*Como se lee en los considerandos anteriores, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales, firmados y ratificados por el Estado mexicano, reconocen a la familia como la célula básica de la sociedad. Esto bien responde al hecho de que, necesariamente, todo ser humano está vinculada de una u otra manera a una familia, en la cual, idealmente, debiera recibir la protección de sus derechos fundamentales y las condiciones necesarias para su desarrollo integral como persona[[7]](#footnote-7).*

*Padres, madres y otros familiares[[8]](#footnote-8) gozan y ejercen ciertos derechos igualmente reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, a la vez que, reciben ayuda solidaria y subsidiaria de parte de la sociedad y el Estado, para garantizar el ejercicio de los derechos a la vida, integridad, salud, alimentación, vivienda, educación y, en general, del bienestar económico de los integrantes de su familia. Esta corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado no termina con el fin de la infancia y la adolescencia. Una persona, en todas sus etapas de desarrollo, mantiene una relación con su familia, la cual puede consistir en la necesidad de una red de apoyo. Groso modo, lo anterior implica el derecho humano a y a la protección a la familia.*

***Día internacional de la familia***

*Diversas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como informes del Secretario General de este organismo internacional, han enfatizado la importancia de tomar en cuenta a la familia al momento del diseño de políticas públicas y la emisión de normatividad. La resolución 44/82 proclamó el año de 1994 como el Año Internacional de la Familia.*

*En el marco de las celebraciones del Año Internacional de la Familia, las resoluciones, ya desde sus inicios, en la resolución 50/142 de 21 de diciembre de 1995, la Asamblea General invitaba a los gobiernos a tomar en cuenta*

*“medidas para crear sociedades que favorezcan la institución de la familia mediante, entre otras cosas, la promoción de los derechos de cada uno de los miembros de la familia y, en particular, la igualdad entre los sexos y la protección y el desarrollo del niño”.*

*En el marco del décimo aniversario del Día Internacional de la Familia, la Asamblea General resolvió en su resolución 59/111, del 6 de diciembre de 2004, lo siguiente:*

*5. Alienta a los gobiernos a que* ***hagan todo lo posible para que se cumplan los objetivos del décimo aniversario del Año Internacional de la Familia y se integre la perspectiva de la familia en el proceso de planificación*** *(énfasis añadido).*

*Previa a la celebración del 20 aniversario del Día Internacional de la Familia, la Asamblea General reafirmó su compromiso con el fortalecimiento a la familia mediante los siguientes puntos resolutivos:*

*4. Alienta a los Estados Miembros a que prosigan sus esfuerzos encaminados a elaborar políticas y programas apropiados para hacer frente a la problemática de la pobreza de las familias, la exclusión social, el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar y las cuestiones intergeneracionales, y a que compartan las buenas prácticas en esos ámbitos;*

*5. Alienta también a los Estados Miembros a que promuevan el otorgamiento de prestaciones centradas en la familia, como los programas de protección social y de transferencia social, con el fin de reducir la pobreza de las familias y evitar la perpetuación de la pobreza entre generaciones;*

*6. Alienta además a los Estados Miembros a que refuercen las disposiciones sobre licencia parental, amplíen las modalidades de trabajo flexible para los empleados que tengan responsabilidades familiares, promuevan la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer, fomenten la participación paterna y respalden un amplio abanico de modalidades de cuidado infantil de calidad, a fin de mejorar el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar;*

*7. Alienta a los Estados Miembros a que apoyen la integración social y la solidaridad intergeneracional mediante la prestación de asistencia en materia de protección social y la inversión en instalaciones que sirvan de lugares de encuentro entre generaciones, así como programas de voluntariado para jóvenes y ancianos y programas de mentores y de puestos de trabajo compartidos;*

*8. Insta a los Estados Miembros a que creen un entorno propicio para fortalecer y apoyar a todas las familias, reconociendo que la igualdad entre mujeres y hombres y el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los miembros de la familia son esenciales para el bienestar.*

*La necesidad de políticas públicas para fortalecer a la familia, así como la inclusión de una perspectiva que incluya la consideración de la familia en todas las acciones públicas queda patente en las resoluciones de la Asamblea General enlistadas. Cabe resaltar, para propósitos de esta iniciativa, la insistencia de este órgano de instar a los Estados miembros a incluir la perspectiva de familia en sus procesos de planeación.*

***Política familiar***

*Las políticas públicas buscan resolver problemas comunes de manera integral, técnica e incluyendo valores públicos. Para esto, es necesario incluir todo un conjunto de acciones y decisiones de los distintos actores en el Estado. Desde el legislativo, que diseña el marco normativo, pasando por el ejecutivo que instrumenta las políticas, hasta el judicial que vela por la convencionalidad, constitucionalidad y legalidad de los actos que afectan el Bien Común. Además, una política pública requiere la participación de la sociedad en general, tanto en el diseño como en la implementación y en la evaluación.*

*Como es de probado conocimiento general, la institución familiar es de utilidad pública. En primer lugar, las familias garantizan la continuidad de la sociedad. En segundo lugar, éstas trasmiten valores y conocimientos necesarios para la integración y cohesión social de niñas, niños y adolescente. En tercer lugar, aquellas otorgan cuidados y seguridades a los miembros que así lo requieren, promoviendo el valor de la solidaridad intergeneracional. En cuarto lugar, la familia es el primer espacio propicio de equidad entre hombres y mujeres.*

*En el ejercicio de estas responsabilidades y funciones, las familias suelen interactuar con una red compleja de instituciones públicas y privadas que prestan servicios subsidiarios. El sistema de salud brinda los servicios de atención médica a las miembros de las familias. El sistema educativo es corresponsable de parte de la formación de los hijos y, debido al cambio demográfico, cada vez más frecuente de miembros adultos. Los sistemas de asistencia y seguridad social otorgan apoyos económicos para afrontar crisis o sucesos familiares. El sistema de procuración e impartición de justicia vela por la protección de los derechos mencionados y todos los otros.*

*Si bien, gran parte de la provisión de servicios que garantizan los derechos fundamentales de las personas corre por cuenta del Estado y otras instituciones, las familias mantienen la responsabilidad de gestionar el acceso a los servicios que garantizan el ejercicio de los derechos fundamentales de sus miembros. Asimismo, en no pocos aspectos, como en el caso de la educación y la salud, los padres, o quienes velan por el goce de derechos de quienes la ley considera incapaces de ejercerlos por sí mismo, ejercen obligaciones y derechos de tomar decisiones relativas al bien de quienes están bajo su cuidado.*

*Desafortunadamente, algunas familias y quienes las encabezan pueden carecer de ciertas capacidades necesarias para cumplir con estas responsabilidades. Ante esta situación, ya no basta que el Estado y los otros cuerpos solidarios realicen la parte de la que son corresponsables para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas. En estos casos, las instituciones solidarias están obligadas a realizar un aporte subsidiario que permita, en la medida de lo posible, subsanar las incapacidades. Un ejemplo claro de esta situación es la pobreza de las familias. En 2018, 48.8 % de los mexicanos pertenecían a un hogar con ingresos inferiores a la línea de pobreza.*

*Esta situación de pobreza y desigualdad suele transmitirse en las familias de una generación a otra. El Informe Movilidad Social en México 2019, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias[[9]](#footnote-9), muestra cómo la desigualdad y la pobreza de los padres suele ser el destino de los hijos. Solamente 5 % de los hijos de padres sin estudio logran alcanzar el nivel profesional; el 47 % de los hijos con padres con ingresos más bajos continúan con ingresos muy bajos. Además, llama la atención que el 36 % de hijos con padres profesionales no lograron una carrera universitaria.*

*Además de estas carencias que limitan a las familias, existen condiciones que impiden el desarrollo pleno de la familia. La distribución del tiempo entre las actividades laborales es un ejemplo de estas cuestiones estructurales que afectan a las familias. En México, la Encuesta Nacional de Ocupación del Tiempo, en su última edición realizada en 2014[[10]](#footnote-10), reportó que por cada cinco horas a la semana que las personas mayores de doce años dedican a “actividades productivas”, solamente destinan alrededor de 12 minutos a cuestiones del hogar. Este poco tiempo dedicado a la familia corresponde principalmente al cuidado de personas vulnerables. El poco tiempo dedicado refleja, en buena parte, el poco rédito que la sociedad da a las actividades familiares, de las cuales, no obstante, la sociedad resulta muy beneficiada.*

*Llama la atención de esta situación el hecho de que son las mujeres quienes dedican mayor cantidad de tiempo a la familia y al cuidado. Si la referencia y meta es la igualdad de derecho entre hombres y mujeres y el interés superior de los menores, entonces saltan a la vista la necesidad de una corresponsabilidad paterna y materna. Por una parte, la corresponsabilidad implica una adecuada participación de ambos progenitores en el desarrollo de sus hijos. Por otra parte, también resalta el derecho de la niñez a vivir, en la medida de lo posible, con ambos progenitores. Para ello es necesario establecer la normatividad que permita generar políticas de corresponsabilidad parental y balance entre las actividades laborales y familiares. Esto es más necesario si se considera que aquellos hogares con dos ingresos tienen menores probabilidades de presentar ingresos inferiores a la línea de pobreza o carencias. Por esta razón, políticas públicas y autorregulaciones privadas para el equilibrio entre las responsabilidades laborales y familiares aparecen como una necesidad que permitiría reducir tanto la pobreza como incluir a las mujeres a la vida laboral, al mismo tiempo que se atiende el desarrollo integral de los menores.*

*La creciente inclusión de las mujeres en la vida laboral y la deseable participación corresponsable de los hombres en las cuestiones familiares plantean la necesidad de atender un punto clave de la dinámica de los hogares: la cohesión y solidaridad intergeneracional expresada en la provisión de cuidados. Como ya quedó mencionado, diversas instituciones públicas y privadas prestan servicios a las familias que permiten a sus miembros el ejercicio de sus derechos. La cuestión es que en México esas instituciones de cuidados son escasas, inaccesibles por cuestiones económicas o son vistas como prestaciones para quienes poseen un empleo formal[[11]](#footnote-11). Asimismo, muy poco involucran la promoción de un desarrollo educativo temprano de calidad y las habilidades necesarias para generar un vínculo afectivo con la familia, esencial para el desarrollo psicosocial de las personas. La disposición de centros de cuidado o el involucramiento de familiares en las tareas de cuidada no es suficiente, y cada vez menos posible para muchos hogares. La dinámica demográfica, que tiende a crecer en la proporción de adultos mayores, añade importancia a la necesidad de políticas que incentiven la solidaridad intergeneracional y la cohesión solidaria de las familias.*

*La cohesión en las familias no termina en la provisión de cuidados y la atención de derechos económicos, sociales y culturales. Desafortunadamente, algunas familias presentan dinámicas de convivencia que resultan permisivas para algunos de sus integrantes. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de la Relación en los Hogares, en su última edición de 2016[[12]](#footnote-12), reveló que el 66.1 % de las mujeres mayores de 15 años encuestadas habían sido víctimas de al menos un tipo de violencia. El 43.9 % de las encuestadas con pareja, reportaron que su novio o esposo actual o anterior habían ejercido al menos un tipo de violencia contra ellas. Asimismo, 10.1 % las encuestadas señalaron que un familiar había ejercido violencia física, emocional, patrimonial o sexual en su contra. Además de las intervenciones que buscan fortalecer a las mujeres, también son necesarias intervenciones familiares que modifiquen esta situación. Solamente mejorando integralmente las dinámicas de convivencia será posible la cohesión familiar.*

*El esfuerzo por reducir la pobreza familiar, la necesidad de un equilibrio entre familia y trabajo, así como la necesaria cohesión y solidaridad intergeneracional requieren de políticas familiares. Estas políticas precisan, a su vez, de un programa de política familiar bien diseñado que impulse el bienestar de las familias mexicanas, en general, y morelenses, en particular.*

*Este programa de política familiar requiere ser sostenible y no simplemente asistencialista. La lógica es la siguiente: un Estado que omite o impide el desarrollo de capacidades genera una dependencia del sujeto que recibe el asistencialismo, pero también una obligación del Estado de continuar con la asistencia. Con el tiempo, las capacidades de las personas pueden disminuir y las cargas del Estado aumentar. El desbalance de capacidades y necesidades introduce al Estado en un círculo vicioso de carga y quizá de insatisfacción, con lo que además quedan comprometidos recursos de generaciones próximas.*

*Las políticas dirigidas a la familia poseen un verdadero potencial para atender, incluso, los objetivos y metas de desarrollo sostenible. Lo anterior lo muestran las Conclusiones principales sobre las familias, las políticas familiares y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.*

*Las políticas de familia son el soporte de todas las políticas públicas de ámbito nacional, y el instrumento más valioso que tienen los gobiernos para influir en el nivel de vida de las generaciones venideras. Como parte del avance que supone la ambición global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), esas políticas [las familiares] tienen un importante papel que jugar en el logro de muchas de las metas incluidas en esos objetivos[[13]](#footnote-13).*

***Políticas con perspectiva familiar***

*Como ha quedado expuesto, las dinámicas de las familias y las responsabilidades gubernamentales de garantizar el bienestar social y el ejercicio de los derechos humanos de las personas están estrechamente interrelacionadas. No obstante, muchos programas han sido diseñados para individuos y olvidan su carácter de integrantes de una familia, así como sus responsabilidades y derechos; de igual manera, algunas políticas públicas parten de supuestos desacertados acerca de las estructuras y dinámicas familiares. Como resultado, las políticas afectan a las familias o no alcanzan la eficiencia y efectividad que alcanzarían si se tomara en cuenta a las familias[[14]](#footnote-14).*

*Algunos problemas públicos son tan complejos que atenderlos desde una unidad, una secretaría o un sector resulta inviable. Esto también sucede con ciertos valores públicos compartidos que no pueden promoverse desde un ámbito de gobierno único. Para responder a esta situación, existe la transversalidad de las políticas públicas. Luis F. Aguilar señala que “[l]a transversalidad se exige porque existen valores públicos universales, que abarcan y comprometen toda la acción del gobierno y que deben ser reconocidos por el gobierno y los ciudadanos”[[15]](#footnote-15).*

*Esta transversalidad se logra desde un ámbito que abarque a todo el gobierno. Uno de esos ámbitos es el de la planeación y programación. De acuerdo con el sistema nacional de planeación, todos los ámbitos de gobierno deben emitir un Plan de Desarrollo, con diagnósticos, ejes, estrategias y metas que dirijan las políticas económicas y de bienestar. Estos planes derivan en programas sectoriales, institucionales y, en algunos casos, regionales y especiales.*

*La relación solidaria y subsidiaria del gobierno con las familias precisa de una perspectiva familiar transversal, que imprima ciertos criterios en los planes y programas que así lo requieran. De acuerdo con Omss (1984), una perspectiva familiar requiere al menos:*

*1) Sensibilidad ante los patrones de las familias. Esto implica la obtención y análisis de datos acerca de las tendencias (demográficas, económicas y. sociales), circunstancias, necesidades, estructuras y etapas en el ciclo de vida de las familias.*

*2) Entendimiento de las funciones y roles familiares. Los hacedores de la política pública requieren construir sobre investigaciones y conocimiento empírico acerca de las funciones familiares y su relación con sistemas e instituciones.*

*3) Apreciación del papel de la familia y la influencia de ésta. Los hacedores de política pública precisan entender la manera en que los miembros de la familia influyen y son influidos por el funcionamiento y logros de los otros miembros de la familia, así como por los problemas sociales.*

*4) Evaluación de impacto y análisis de políticas públicas en las familias. Es necesario conocer los efectos de las políticas en las distintas estructuras y dinámicas familiares y en sus funciones.*

*5) Capacitación profesional orientada a la familia. Los funcionarios que prestan servicios a las familias y sus integrantes requieren capacitación acerca de las estructuras y dinámicas de las familias, así como la manera adecuada de compartir información, tomar decisiones e interactuar con las familias como beneficiarias.*

*6) Valores en cuestión. Raramente los valores involucrados en la discusión de las políticas de familia son hechos explícitos. Una perspectiva familiar solamente será útil si los valores básicos de los que parte y las metas de la política pública son cuidadosamente explicados; los dilemas éticos involucrados son debatidos abiertamente; y las cuestiones de hechos son separadas de las cuestiones de valores (en la medida de lo posible).*

*Omss (1984) también señala que las autoridades deben superar tres barreras en la implementación de una perspectiva familiar[[16]](#footnote-16). La primera barrera es la excesiva individualización y sectorización de las cuestiones públicas y la ignorancia de las dinámicas familiares. La segunda barrera es el debate por imponer una determinada definición de familia[[17]](#footnote-17). El seminario de impacto familiar, del Instituto de Impacto Familiar[[18]](#footnote-18), propone el uso de la definición siguiente: “familia son dos o más personas relacionadas por consanguineidad, matrimonio[[19]](#footnote-19) o adopción”; a esto se añadiría el conjunto de hogares que presentan un vínculo estable de cohabitación (que resulta necesario considerar para impulsar políticas que fortalezcan su estructura y la relación que guarda con el ejercicio de sus responsabilidades familiares). La tercera barrera para la implementación de una perspectiva familiar es la presentación sesgada de las familias; por un lado, algunos grupos idealizan a las familias, al hacer referencia solamente a las características positivas, por otro lado, ciertos grupos reducen a la familia a un instrumento de opresión y perpetuación de problemas.*

*La introducción del término perspectiva familiar en la Ley de Planeación tiene como propósito reconocer a la familia como una institución de valor público que el gobierno, además de la sociedad, debe fortalecer en todas sus actividades.*

***Implementación de las políticas y la perspectiva familiares***

*La implementación de las políticas y la perspectiva familiar, en el ciclo de diseño, programación y formulación de políticas públicas, requieren del impulso coordinador de un órgano público con una adecuada participación ciudadana. Solamente así, el Programa para la Familia y la Perspectiva Familiar serán instrumentadas de manera eficiente y efectiva.*

*En este sentido, se reconoce el esfuerzo de las autoridades del Sistema Estatal DIF de transitar de una visión centrada únicamente en la valiosa labor de asistencia social al impulso de acciones de fortalecimiento a las familias. Estas acciones, en el proceso de planeación y programación deberán ser enriquecidas con la perspectiva familiar que permita que todas las dependencias y entidades, en el ámbito de sus competencias, tomen en cuenta la perspectiva familiar.*

***Impacto de la reforma***

*De acuerdo con el artículo 156 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, manifestamos que la iniciativa que aquí presentamos tendrá, de ser aprobada, el siguiente:*

1. ***Impacto jurídico:*** *El artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. A su vez, tanto la Constitución Política Local, como la Ley Orgánica y el Reglamento Interior de esta Soberanía, facultan a este poder legislativo con el derecho de proponer iniciativas de leyes y decretos que permitan crear o reformar el marco jurídico de nuestro estado.*
2. ***Impacto administrativo:*** *Implicará que las dependencia y entidades de la administración pública centralizada y descentralizada incluyan la perspectiva familiar en la elaboración de sus programas correspondientes. Asimismo, para la revisión prevista en el artículo 2 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza, se deberá incluir la perspectiva de familia.*
3. ***Impacto presupuestario:*** *De la presente propuesta no se advierte un impacto presupuestario, ya que su implementación no implica, necesariamente, la generación de una nueva estructura administrativa o de nuevas plazas.*
4. ***Impacto social:*** *Esta reforma constituirá un acto de legislación para promoción, respeto, protección y garantía del derecho a y protección a la familia. A partir de su aprobación, las políticas, planes y programas de la administración pública tomarán en cuenta las estructuras, dinámicas y realidades de las familias coahuilenses, tanto en el diseño, implementación y la evaluación.*

**TERCERO.-** Los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, coincidimos en que de conformidad al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley debe proteger la organización y el desarrollo de las familias.

En ese sentido, atendiendo a lo estipulado en tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, en relación a que *la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado*, así como que *los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo,* es acertado modificar disposiciones legales del Estado a fin de que establecer medidas para la protección de todas las familias.

Así, con el objeto de que de la planeación democrática del estado y los municipios, derive la implementación de programas y acciones que aseguren la igualdad de derechos y responsabilidades de los miembros de las familias coahuilenses, es oportuna la propuesta de reforma a la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza, que propone incluir la perspectiva de familia entre los principios en los que se basará el proceso de ordenación racional y sistemática de acciones de la administración pública estatal y municipal.

En el mismo orden de ideas, los integrantes de esta comisión, consideramos igualmente adecuada la reforma conducente en la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, para la incorporación de disposiciones que fortalezcan la protección a la familia y que aseguren la igualdad de derechos y responsabilidades de los miembros de las familias coahuilenses.

No obstante lo anterior, se estima que no sería viable incorporar en esta ley el concepto de la perspectiva de familia, toda vez que no existe una definición precisa de la misma, lo cual podría generar confusiones e interpretaciones inadecuadas en relación al conjunto de disposiciones contenidas en dicha ley, máxime que la Ley para la Familia por su propia naturaleza su construcción por si misma contempla una perspectiva de familia, es decir, los mecanismos para la protección y garantía de los derechos de la familia, lo cual está establecido actualmente en su artículo 1.

En consecuencia, se considera que únicamente debe proceder la modificación del artículo 644, el cual contiene las funciones de los Consejos de Familia, adicionándole un segundo párrafo que ordenará que dichos órganos auxiliares de la administración de justicia, desempeñarán sus funciones, garantizando que sus acciones tengan por objeto beneficiar a las familias, enfocándose en su desarrollo y bienestar.

En virtud de las consideraciones que anteceden, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO.**

**ARTÍCULO PRIMERO.– SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 3, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 2, DE LA LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:**

**Artículo 2.-** …

…

**I** a **XIII.** …

**XIV.**La perspectiva de familia, como medio rector buscará la implementación de acciones y programas, con la finalidad irrestricta de fortalecer al núcleo familiar, que es la base fundamental de toda sociedad.

**Artículo 3.-** …

**I** a **XIII.** …

Las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, para la realización de las acciones a las que se refiere el presente artículo de conformidad a su competencia, incorporarán la perspectiva de género, los principios de igualdad entre mujeres y hombres y no discriminación, así como la perspectiva de familia. Para esto, deberán incluir estadísticas, indicadores, encuestas y cualquier otra información cualitativa o cuantitativa en sus instrumentos de planeación estratégica referidos en la presente Ley, para reconocer las necesidades y requerimientos de las mujeres y los hombres en el Estado.

**ARTÍCULO SEGUNDO. – SE ADICIONA UNA SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 644, DE LA LEY PARA LA FAMILIA DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:**

**Artículo 644.** …

**I** a **VIII.** …

Los Consejos de Familia desempeñarán sus funciones garantizando que sus acciones tengan por objeto beneficiar a las familias, enfocándose en su desarrollo y bienestar.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO. -** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO. –** Los planes de desarrollo estatal y municipales, a partir de la entrada en vigor del presente decreto deberán incluir la perspectiva de familia.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 29 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Desarrollo Urbano, Infraestructura, Transporte y Movilidad Sustentable de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 45 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, y el artículo 251 fracción VI de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Juan Carlos Guerra López Negrete, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 28 de mayo del año 2019, se acordó turnar a estas Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Desarrollo Urbano, Infraestructura, Transporte y Movilidad Sustentable la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Desarrollo Urbano, Infraestructura, Transporte y Movilidad Sustentable, iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 45 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, y el artículo 251 fracción VI de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Juan Carlos Guerra López Negrete, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que estas comisiones unidas, con fundamento en los artículos 90, 99, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, son competentes para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 45 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, y el artículo 251 fracción VI de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Juan Carlos Guerra López Negrete, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*“Si bien tenemos claro que la vida es un bien jurídico tutelado, tanto así que el Artículo 4° de la Convención Americana de sobre Derechos Humanos, reconoce el derecho a la vida y establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. La mayoría de las personas asumen que el derecho a la vida es el derecho a vivir o el derecho a permanecer vivos, el derecho a la vida es un derecho inalienable como bien lo describe la doctrina.*

*De acuerdo a lo anterior, se entiende que el derecho a la vida como el derecho a que no nos priven de la vida arbitrariamente, es decir, que cualquier tercero de ninguna forma podría mediante el uso de su libertad transgredir nuestra libertad por razones arbitrarias y privarnos de la vida.*

*Esto se refuerza debido a que “la esencia misma del Derecho a la vida se encuentra establecida en los instrumentos internacionales sobre los Derechos Humanos, en los cuales se señala que nadie puede ser privado arbitrariamente de ella” (Comisión Andina de Juristas 1997).*

*Tal y como lo consagra nuestra Carta Magna y la Constitución local todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, así como en los tratados internacionales de los que el Estado de México sea parte, y no podrán restringirse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.*

*Por otra parte, el artículo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona que la ninguna persona se le impedirá que se dedique a profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Sin embrago esta libertad solamente podrá vedarse cuando haya determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de terceras personas o por resolución gubernativa.*

*De igual manera la Constitución Política del Estado de Coahuila en el artículo 20° nos menciona que los derechos de los ciudadanos coahuilenses quedan suspendidos cuando: …Fracc. I.- por sentencia ejecutoria que condene a la suspensión de esos derechos, por el tiempo que ella fije. Fracc II.- por sentencia ejecutoria que condene a pena corporal durante el término de ésta.*

*Ahora bien, en Coahuila se registraron 15 mil 330 percances automovilísticos durante el año 2016; más que en la CDMX. El 6% de estos accidentes viales se encuentran vinculados con bebidas embriagantes.*

*Coahuila es el quinto lugar en número de accidentes viales, superando a las mayores ciudades con parque automovilístico con lo es el Estado de México y la CDMX; lo anterior de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El año 2018 terminó con más de 4 mil accidentes viales, de los cuales 32 fallecidos fue la cifra que dejó como consecuencia, donde también se reportaron 2 mil 300 lesionados; esto en base a los datos proporcionados por el Tribunal de Justicia Municipal.*

*La cifra anterior es menor a la del año 2017 en un 6% sin embargo no podemos permitir que dichas situaciones pongan en riesgo de perder uno de los bienes jurídicos tutelados más importantes que tenemos como ser humano: la vida. En el caso concreto de homicidio culposo en razón de la imprudencia de un conductor de un vehículo automotriz que priva de la vida a una persona por manejar en estado de ebriedad o bien bajo el influjo de enervantes, estupefacientes o psicotrópicos o cualquier otra sustancia que produzca un efecto similar, queda evidenciado que el acusado de este delito fue irresponsable para cumplir con la norma que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales en su Art. 155 Fracc. XI.*

*Por lo tanto, nuestro ordenamiento penal tipifica como delito al homicidio, lesiones y daños ajenos culposos, estableciendo de manera clara la descripción del hecho delictivo, además de contemplar cuales son las agravantes de los mismos, como lo son: agravación por ebriedad o consumo de narcóticos que motivan la culpa, agravación por condición personal que motiva la culpa al manejar vehículo automotriz, agravación por las condiciones en que se transporta a personas o cosas, agravación por las condiciones del transporte u obra y agravación por el número de personas fallecidas o lesionadas, o por la gravedad de las lesiones, pues, precisamente la gravedad de estas calificativas son en virtud del riesgo que ponen los conductores a la comunidad que confiando en la pericia de estos, en la conducción de vehículos automotores de cualquier naturaleza, no observaron el deber jurídico de cuidado y provocando con ello un resultado que pudo haber sido previsible. Por tal razón resulta viable que los juzgadores al momento de imponer las sanciones, además de la sanción corporal que le corresponda y de las posibles multas, deberán atender el tipo de delito y la o las calificativas que se actualicen, pues según el delito y la agravante con la que se haya cometido, los mismos serán sancionados según corresponda, ya sea con la suspensión o cancelación definitiva de la licencia de conducir, tal y como lo dispone el artículo 45 del Código Penal del Estado, limitantes o restricciones que surtirá efecto una vez que el sentenciado recobre su libertad, si la sentencia le impone una pena de prisión y no obtiene un beneficio de libertad anticipada.*

*Podemos observar que en Legislaturas de otros Estados, ya es aplicada una sanción similar por ejemplo en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco en el art. 67…”la licencia se cancelará en los siguientes casos” Fracc. XI nos dice textualmente que…”cuando se participe en un accidente de tránsito y al ocurrir se encuentre bajo la influencia de bebidas alcohólica, estupefacientes o psicotrópicos”.*

*Además se somete a su consideración la reforma a la fracc. VI del art 251 de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila de Zaragoza el cual dice lo siguiente: Son causas de cancelación de la licencia de conducir, las siguientes: …Por acumular dos suspensiones temporales de licencia en el lapso de un año…*

*La finalidad de esta reforma es suprimir el lapso de un año de dicha fracción pues con el texto actual se da la oportunidad a los conductores, que acumulen dos suspensiones en un mismo año y dicho supuesto resulta poco frecuente que se actualice, y al suprimirlo se lograría general conciencia en los conductores ya que tendrían mayor cuidado en no acumular dos suspensiones y por tanto no sufrir la consecuencia de la cancelación.”*

**TERCERO.-** Los integrantes de estas Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Desarrollo Urbano, Infraestructura, Transporte y Movilidad Sustentable, procedimos a efectuar el estudio y análisis de la iniciativa, que tiene por objeto la modificación a disposiciones en materia de sanciones con relación a la suspensión o cancelación de licencia cuando se cometan delitos en grado de culpa.

La vida y la integridad de los ciudadanos son la preocupación más importante para salvaguardar el orden social, lo cual se logra en últimas instancias a través del derecho penal, como la herramienta sancionadora del Estado. Esta sanción derivada de la materialización de una conducta típica constituye, en esencia, una invasión a la esfera jurídica de derechos del gobernado por parte de la autoridad, por lo cual, ésta siempre deberá velar por el principio de proporcionalidad, valorando la pertinente necesidad de que el Estado intervenga a través del derecho penal para sancionar una conducta típica.

En ese sentido, la propuesta planteada modifica dos disposiciones de dos ordenamientos distintos, por un lado, el artículo 45 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza y, por el otro, el artículo 251, fracción VI de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable. En cuanto al Código Penal, el artículo mencionado establece modalidades agravantes derivadas de la comisión de conductas típicas en grado de culpa.

Si bien, es cierto que la salvaguarda del orden social es una de las funciones más importantes del andamiaje jurídico, también es importante destacar que no solamente el derecho penal contiene herramientas sancionadoras, por el contrario, cada rama del derecho regula, desde su aspecto, sanciones por conductas que contravengan a la norma jurídica establecida en su propia legislación.

Dicho lo anterior, el derecho penal debe de ser concebido como el último escalón de la función del Estado para sancionar las conductas antijurídicas. Así, el Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza sanciona una multiplicidad de conductas típicas, dolosas o culposas, que pongan en riesgo de lesionar o lesionen, directa o indirectamente un bien jurídico tutelado por su propia naturaleza importantísima para la salvaguarda y conservación del orden social.

Merece la pena analizar el contenido vigente del artículo 45 del Código en cita, el cual establece:

***Artículo 45 (Modalidades agravantes de ciertos tipos penales culposos)***

*Se sancionará desde una tercera parte del mínimo, hasta la mitad del máximo de las penas de prisión y multa legalmente señaladas para el delito doloso, además de la suspensión desde tres meses hasta una tercera parte del máximo de la pena de prisión que legalmente corresponda al delito doloso, para realizar la actividad mediante la cual se cometió el delito culposo, si respecto de aquélla se requiere autorización, licencia, concesión o permiso, emitidos por autoridad competente, cuando se trate de homicidio, lesiones o daño a bienes ajenos en los que se actualice alguno de los supuestos siguientes:*

*I a la V …*

De la lectura del artículo referido, se deduce la modalidad agravante aplicable a las conductas típicas culposas, es decir “*además de la suspensión desde tres meses hasta una tercera parte del máximo de la pena de prisión que legalmente corresponda al delito doloso, para realizar la actividad mediante la cual se cometió el delito culposo, si de aquella se requiere* ***autorización, licencia, concesión o permiso****, emitidos por autoridad competente…”.* Por lo anterior, no cabe duda de que el artículo mencionado regula ya en su contenido la suspensión de licencias, autorizaciones, concesiones o permisos que sean necesarios para ejercer la actividad por la cual se consumó la conducta típica culposa.

Por ello, y atendiendo al principio de proporcionalidad, resulta inconsistente aplicar una sanción que derive en la suspensión o cancelación de la licencia o cualquier otro documento equivalente como consecuencia de la comisión del delito, toda vez que dicha previsión penal ya se encuentra establecida, específicamente, en las subsecuentes fracciones, y ello incluye, además de las penas aplicables al delito en grado doloso con las reducciones establecidas en el artículo 45, las mencionadas por suspensión de autorizaciones, licencias, concesiones o permisos para ejercer dicha actividad.

Derivado de su análisis, es improcedente establecer sanciones como la suspensión y/o cancelación de licencias, toda vez que ello ya se encuentra previsto por el propio artículo y su implementación sería desproporcional para los delitos cometidos con la consumación de la referida conducta. Por otro lado, es importante también destacar que el derecho penal no puede ni debe de ser utilizado como una herramienta que, más allá de intervenir en la esfera del gobernado por la comisión de conductas penalmente reprochables, se convierta en la imposición de sanciones desproporcionadas o innecesarias atendiendo al caso concreto.

Por otro lado, en cuanto a las modificaciones del artículo 251, fracción VI de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se ha considerado procedente incluir dicha modificación, pues se estima que, como se menciona en los argumentos que sustentan la iniciativa planteada, es poco frecuente que el supuesto de la fracción VI pueda actualizarse manteniendo el lapso de un año, por lo que se considera necesario ampliarlo a un periodo de dos años, manteniendo el plazo temporal para que la conducta pueda ser acreedora a una sanción.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO UNICO.** Se **reforma** la fracción VI del artículo 251 de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 251.** …

**I.** a la **V.** …

**VI.** Por acumular dos suspensiones temporales de la licencia en el lapso de dos años;

**VII.** a la **XI.** …

**T R A N S I T O R I O S**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Desarrollo Urbano, Infraestructura, Transporte y Movilidad Sustentable de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza, Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza (Coordinador), Dip. Josefina Garza Barrera (Secretaria), Dip. Juan Antonio García Villa, Dip. Jesús Berino Granados y Dip. María Eugenia Cázares Martínez En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 29 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y MOVILIDAD SUSTENTABLE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA**  **(SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JESUS BERINO GRANADOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se adiciona un segundo párrafo, recorriendo el que actualmente ocupa esa posición al tercer lugar, haciendo lo mismo con el párrafo siguiente del artículo 251 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 27 del mes mayo del año 2020, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se adiciona un segundo párrafo, recorriendo el que actualmente ocupa esa posición al tercer lugar, haciendo lo mismo con el párrafo siguiente del artículo 251 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Quela iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se adiciona un segundo párrafo, recorriendo el que actualmente ocupa esa posición al tercer lugar, haciendo lo mismo con el párrafo siguiente del artículo 251 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*En fecha 17 de junio de 2015, el grupo parlamentario del PAN que nos representaba entonces, presentó en esta Tribuna una iniciativa de reformas diversas en el tema de Alienación Parental. Por lo valioso de la exposición de motivos y por los alcances de dicha propuesta, decidimos retomar una parte de dicho proyecto de reforma, por lo que así lo aclaramos en los términos del estricto respecto que se debe dar a los trabajos presentados por otros legisladores. En este caso, nos concentraremos exclusivamente en la materia penal, dejando para otra reforma lo que corresponde a la legislación familiar y civil.*

*Tomamos algunas partes de la exposición de motivos a que hacemos alusión, y en otros casos, actualizamos las referencias a códigos y leyes por su versión actual.*

*Es derecho de los padres ver a sus hijos, especialmente cuando no media impedimento legal debidamente decretado por la autoridad competente. Es derecho de los menores ver a sus dos padres y demás familiares, como los son los abuelos paternos y maternos, tíos por ambas líneas de parentesco y demás familiares cuando no media una razón válida y legalmente decretada que lo prohíba expresamente en relación a uno o varios de ellos.*

*Si no hay motivo legal, sentencia o disposición administrativa que impida el contacto entre familiares, léase cualquier tipo de familiares entre sí, las relaciones no pueden ser impedidas o alienadas por nadie, ya que de hacerlo, estaríamos ante un escenario ilícito civilmente hablando, o delictivo, trasladada esta circunstancia a la materia penal y configurada como delito.*

*La Violencia Familiar es un concepto amplio que incluso varía de una legislación a otra, de un país a otro, pero mantiene, en todos los casos, elementos comunes; a saber:*

*I.- Agresiones físicas, verbales y sicológicas contra un ser querido, especialmente un familiar por parentesco de consanguinidad, civil o por afinidad.*

*II.- Agresiones de tipo sexual.*

*III.- Negligencia en cuanto a los deberes de cuidado y atención.*

*IV.- Violencia económica. Y;*

*V.- Violencia de género o conductas discriminatorias.*

*Para los efectos de la presente iniciativa, vale la pena destacar uno de los tipos de violencia familiar reconocidos por La Ley de Prevención, Asistencia y Atención de la Violencia Familiar de la entidad, bajo la siguiente conceptualización:*

*Artículo 10. En orden a los sujetos y supuestos de aplicación de esta ley, se entiende por:*

*…*

*III. “Violencia familiar”: Aquel acto de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, por negligencia, económica ó sexualmente a cualquier miembro de la familia, que tenga relación de parentesco por consanguinidad, tenga o lo haya tenido por afinidad o civil, o se halle en unión libre, de hecho o concubinato o en una relación de noviazgo; realizado dentro o fuera del domicilio familiar, y que tenga por efecto causar daño, en cualquiera de las siguientes modalidades:*

*…*

*b) “Maltrato psicoemocional”: Todo acto u omisión, consistente en cualquier clase de prohibiciones, condicionamientos, coacciones, intimidaciones, amenazas, actitudes devaluatorias o de abandono, que provoquen en quien las recibe, deterioro, disminución de la autoestima o devaluación del autoconcepto.*

*El acto que se compruebe que ha sido realizado con la intención de causar daño a una menor o a un menor de edad, será considerado maltrato emocional en los términos de este artículo, aunque se argumente como justificación su educación o formación.*

*…*

*d) “Maltrato verbal”: Toda expresión, concreta, intencional y reiterada, que indique el propósito de ofender o manifestar desprecio al otro y que haga imposible la vida en familia.*

*Mientras que en el Código Penal de Coahuila, el Delito de Violencia Familiar quedó bajo la redacción que se lee:*

*(Ley publicada en el Periódico Oficial, el viernes 27 de octubre de 2017)*

*Artículo 251 (Violencia familiar)*

*Se impondrá de seis meses a seis años de prisión, pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima, incluidos los de carácter sucesorio y, en su caso, como medida de seguridad, a juicio del juez, prohibición de ir a lugar determinado o de residir en él hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta: a quien dentro o fuera del domicilio o del lugar en el que habite, ejerza violencia contra los derechos reproductivos, o violencia física, psicológica, patrimonial, económica y sexual, respecto al cónyuge o ex-cónyuge, concubina o ex-concubina, concubinario o ex-concubinario, compañera o ex-compañera civil, compañero o ex-compañero civil, pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, o pariente colateral consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado, así como contra el adoptante, adoptado o adoptada, o respecto a quien tenga relación de pareja o de hecho, o en contra de los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado de las primeras diez personas nombradas, al igual que contra cualquiera otra persona que esté sujeta a la custodia, guarda protección, educación o cuidado del sujeto activo, independientemente de que la violencia produzca o no lesiones.*

*En cualquier caso, al agente se le sujetará como medida de seguridad, a tratamiento psicológico especializado, que en ningún caso excederá del tiempo de la pena de prisión impuesta, independientemente de las penas que correspondan por cualquier otro delito que resulte.*

*La educación o formación de una persona menor de dieciocho años, no será en ningún caso considerada justificación para cualquier forma de maltrato.*

*Artículo 252 (Pautas específicas de aplicación sobre las clases de violencia familiar y sobre la relación de pareja o, de hecho)*

*Para los efectos del artículo anterior, se entenderá:*

*I. Por violencia física: cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de sustancia, arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas, o ambas.*

*(Modalidades agravantes). En caso de que mediante la referida violencia se cause a la víctima una o más lesiones de las previstas en las fracciones II a III del artículo 200 de este código, se aumentará tres años de prisión al máximo de esa pena señalada en el artículo 251 de este código.*

*Más si mediante la referida violencia se causa a la víctima una o más lesiones de las previstas en las fracciones III a V del artículo 200 de este código, se aumentará cinco años de prisión al máximo de esa pena señalada en el artículo 251 de este código.*

*Y si se infiere a la víctima cualquiera de las lesiones previstas en las fracciones VI a VIII del artículo 200 de este código, se aumentará ocho años de prisión al máximo de esa pena señalada en el artículo 251 de este código.*

*II. Por violencia psicológica: cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio.*

***Alienación Parental, su definición***

*El Síndrome de Alienación Parental, o “SAP” por sus siglas, es un término acuñado por el doctor (psiquiatra) Richard Garner en 1985; se refiere a un desorden en los menores que consiste en el hecho de que, quienes lo padecen, insultan, agreden o denigran a uno de sus padres.*

*En materia legislativa, se refiere a la conducta del padre o la madre, quien por medio de manipulación sicológica, induce o estimula el odio y el rencor en el menor hacia el otro progenitor, esto por citarlo de forma simple y entendible.*

*Los objetivos y las razones de este proceder de parte del alienador, a decir de los especialistas, son, entre otros:*

*I.- Utilizar al menor o menores para realizar actos de venganza en contra del otro progenitor.*

*II.- Chantajear para obtener beneficios económicos.*

*III.- Impedir que el padre o madre afectados puedan convivir con el o los menores de forma sana y justa.*

*IV.- Trastornos o desórdenes emocionales en el padre alienador.*

*V.- Causar daños o perjuicio legales al padre o madre afectados.*

*VI.- Causar daño moral o descrédito público al padre o madre. Y;*

*VII.- Privar al menor de su derecho a convivir con el progenitor que no tiene la custodia permanente del mismo (generalmente, aunque puede ser al revés)*

*Desde luego, este tipo de manipulación puede provenir de otros parientes ajenos a los padres, como lo pueden ser los abuelos paternos o maternos, tíos y demás familiares, incluso tutores.*

***El Interés Superior del Niño y sus derechos***

*Como fue citado en ocasión de la reforma constitucional presentada por el Grupo del PAN (LX Legislatura) referente a incluir el Interés Superior del Niño en la Constitución local, en fecha 19 de mayo de 2015; “…en su conceptualización más sencilla, se define como el deber de todo estado, autoridad y servidor público en lo particular, de hacer todo a su alcance para garantizar los derechos de los menores, pero no sólo los que entendemos como derechos básicos; como lo puede ser la alimentación, la educación, la salud, el esparcimiento, y el acceso a la justicia; si no que se refiere al abanico más amplio de prerrogativas y derechos que se le puedan reconocer a los niños; esto incluye derechos como el de participación activa en la sociedad, el de acceso a la información, el derecho a ser escuchado en procesos judiciales o administrativos, el derecho a un ambiente libre de violencia, el derecho a no ser agredido en forma alguna en la escuela, el derecho a tener una familia, el derecho a contar con bienes (bajo ciertas reglas y límites), el derecho al nombre y a la identidad, y un amplio espectro de garantías que las autoridades que adoptan legislativa y administrativamente el “interés superior del niño”, deben brindar y asegurar a los menores…..”.*

*Al respecto, debemos hacer referencia a los siguientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:*

*Décima Época; Primera Sala; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1.*

*Tesis: 1a. CXXII/2012 (10a.)*

*Página: 260*

*INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU FUNCIÓN NORMATIVA COMO PRINCIPIO JURÍDICO PROTECTOR.*

*La función del interés superior del menor como principio jurídico protector, es constituirse en una obligación para las autoridades estatales y con ello asegurar la efectividad de los derechos subjetivos de los menores, es decir, implica una prescripción de carácter imperativo, cuyo contenido es la satisfacción de todos los derechos del menor para potencializar el paradigma de la "protección integral". Ahora bien, desde esta dimensión, el interés superior del menor, enfocado al deber estatal, se actualiza cuando en la normativa jurídica se reconocen expresamente el cúmulo de derechos y se dispone el mandato de efectivizarlos, y actualizado el supuesto jurídico para alcanzar la función de aquel principio, surge una serie de deberes que las autoridades estatales tienen que atender, entre los cuales se encuentra analizar, caso por caso, si ante situaciones conflictivas donde existan otros intereses de terceros que no tienen el rango de derechos deben privilegiarse determinados derechos de los menores o cuando en el caso se traten de contraponer éstos contra los de otras personas; el alcance del interés superior del menor deberá fijarse según las circunstancias particulares del caso y no podrá implicar la exclusión de los derechos de terceros. En este mismo sentido, dicha dimensión conlleva el reconocimiento de un "núcleo duro de derechos", esto es, aquellos derechos que no admiten restricción alguna y, por tanto, constituyen un límite infranqueable que alcanza, particularmente, al legislador; dentro de éstos se ubican el derecho a la vida, a la nacionalidad y a la identidad, a la libertad de pensamiento y de conciencia, a la salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado, a realizar actividades propias de la edad (recreativas, culturales, etcétera) y a las garantías del derecho penal y procesal penal; además, el interés superior del menor como principio garantista, también implica la obligación de priorizar las políticas públicas destinadas a garantizar el "núcleo duro" de los derechos.*

*Décima Época Registro: 2006593*

*Instancia: Primera Sala ; Jurisprudencia*

*Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional*

*Tesis: 1a./J. 44/2014 (10a.) Página: 270*

*INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS.*

*Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa "zona intermedia", haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. constitucional.*

*Décima Época Instancia: Primera Sala*

*Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I*

*Tesis: 1a. CVII/2014 (10a.)*

*Página: 546*

*INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. USO JUSTIFICADO DE LAS CATEGORÍAS PROTEGIDAS EN EL ARTÍCULO PRIMERO CONSTITUCIONAL, EN LAS CONTIENDAS QUE INVOLUCRAN LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS.*

*Cuando para determinar dónde se ubica el interés superior del niño el juzgador pondera alguna de las categorías protegidas por el artículo 1o. constitucional, como la salud, la religión, las preferencias sexuales, o la condición social de alguno de los progenitores, debe evaluarse estrictamente si el uso de las mismas está justificado, y en consecuencia, si su evaluación tiende a proteger el interés superior del niño. Un uso justificado de las categorías protegidas por la Constitución será aquel que evidencie, con base en pruebas técnicas o científicas, que dichas circunstancias tienen un impacto negativo en el bienestar y desarrollo del menor. Dicha situación debe ser probada y no especulativa o imaginaria. Por tanto, no pueden ser admisibles las especulaciones, presunciones, estereotipos o consideraciones generalizadas sobre las características de los progenitores.*

*Décima Época Registro: 2003069*

*Instancia: Primera Sala Jurisprudencia*

*Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1 Materia(s): Constitucional*

*Tesis: 1a./J. 30/2013 (10a.)*

*Página: 401*

*INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. PARA PRESERVARLO, EL JUZGADOR ESTÁ FACULTADO PARA RECABAR Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE NECESARIAS.*

*Con independencia de que la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio es uno de los aspectos procesales más relevantes y que con mayor cuidado debe observar el juzgador, tratándose de los procedimientos que directa o indirectamente trascienden a los menores y a fin de velar por su interés superior, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el juez está facultado para recabar y desahogar de oficio las pruebas necesarias para preservar dicho interés, practicando las diligencias que considere oportunas y conducentes para el conocimiento de la verdad respecto de los derechos controvertidos.*

*La custodia de los menores y sus muchos problemas en México y en el mundo*

*En la era moderna, la custodia de los hijos menores de edad es un tema que genera para los padres y el resto de los familiares de ambos serios y muy variados problemas, especialmente cuando se trata de divorcios o separaciones conflictivas o que deben resolverse luego de largas batallas en tribunales.*

*La legislación civil reconoce la figura de Guarda y Custodia de los menores para diversos casos y situaciones, especialmente los que se refieren a:*

*I.- Divorcio de los padres.*

*II.- Anulación del matrimonio.*

*III.- Ausencia de los padres, temporal o definitiva.*

*IV.- Riesgo para los menores ante conductas de los padres que no son correctas o representan peligro o riesgo de daño o daños para los hijos.*

*V.- Abandono de menores.*

*Y otros casos y circunstancias previstos en la ley.*

*Aquí debemos precisar que no deben confundirse dos conceptos de la legislación civil que, iguales en redacción, representan cosas totalmente diferentes:*

*A) La Guarda y Custodia de los menores de edad y;*

*B) La Guarda y Custodia de los bienes.*

*Atentos a lo señalado, es cosa común en los tribunales y juzgados del país, tanto locales como federales, dependiendo de la naturaleza del caso, y de la instancia en que se halle, así como de los recursos interpuestos, ventilar problemas relacionados con la asignación de la custodia de los menores.*

*En tres décadas la cantidad de divorcios en la sociedad mexicana ha aumentado considerablemente: de 4.4 por cada 100 matrimonios en 1980, a 16 por cada 100 en 2011, según Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Y; para los años recientes, la cifra es de 31.2 por cada cien matrimonios. Asimismo, la tendencia es a la alza a nivel nacional y por estados. Entre las principales causas se encuentran el divorcio incausado, con 60.4 por ciento; el de mutuo consentimiento, con 36 por ciento y la separación por dos años o más, con 1.4 por ciento.*

*El comportamiento al interior del país muestra que la principal causa corresponde al divorcio incausado en 21 entidades federativas y de mutuo consentimiento en las 11 restantes, todo esto en base a datos del INEGI.*

*De origen, a decir de la Asociación Padres Divorciados A. C. un 30% de los casos de divorcio están relacionados con situaciones relacionadas a la manipulación o Alienación Parental o Manipulación Parental (un término nuevo en México) Esto es, a decir de la A.C. ya existía, en estos casos, manipulación dentro del matrimonio.*

*La proporción de padres a los que les fue otorgada la custodia de los menores fue de un 89% a las mujeres, y casi un 4% para los padres. El resto a terceros distintos a ellos.*

*Datos del año 2016, señalaban que el 90% de los juicios de guardia u custodia se resuelven a favor de la madre, aunque en muchos casos es notorio que no pueden cumplir con tal papel.*

***Manipulación parental, un fenómeno que debe ser enfrentado***

*El fenómeno, a decir de los especialistas, no es nada nuevo y existe desde que existen los conflictos post matrimoniales y de otro tipo de uniones, como las relativas al concubinato.*

*Es un mecanismo de defensa, de ataque y de manipulación de los padres, en el cual, uno de los dos, utiliza al hijo o hijos para obtener o generar entre otras cosas:*

*I.- Beneficios económicos.*

*II.- Venganza de tipo emocional y sicológico en contra de la pareja o cónyuge.*

*III.- Generarle perjuicios o daños legales al otro progenitor.*

*IV.- Privar de sus derechos de custodia al padre o a la madre, según sea el caso.*

*V.- Privar de su derecho a la convivencia familiar al otro cónyuge.*

*VI.- Privar del mismo derecho a los hijos en relación a uno de los progenitores.*

*VII.- Generar odio y desprecio en los hijos hacia uno de los progenitores. Y,*

*VIII.- Obtener victorias legales en procesos o juicios del orden familiar como lo son: el divorcio, pensión alimenticia, custodia, patria potestad y otros.*

*Entre las razones principales.*

*Debe anotarse que en un reducido número de casos la manipulación de este tipo no proviene de alguno de los padres, sino de quienes tienen por disposición legal la custodia del menor, como pueden ser los abuelos.*

*En otros casos menos frecuentes, la inducción al odio puede provenir de terceros que no tienen la custodia del menor; pero sí contacto con éste debido al parentesco.*

*La manipulación parental en los menores genera consecuencias de largo plazo y devastadoras en muchos aspectos, pero; principalmente, en cuanto a la destrucción de los lazos y vínculos de afecto, respeto y amor entre padres e hijos; lazos que deben o deberían mantenerse por siempre.*

*A lo anterior debemos agregar los daños sicológicos y emocionales generados en los hijos; daños que afectarán sus vidas de modo irreparable si dichas conductas hacia ellos no son atacadas, frenadas y corregidas a tiempo.*

*En el presente, entidades como Nuevo León han dado algunos pasos hacia tratar de regular y sancionar la manipulación o alienación parental en sus códigos civiles; así las cosas, podemos encontrar que en el Código Civil de Nuevo León se introdujo una reforma en agosto del 2014, en el artículo 411, que dispone:*

*Art. 411.-…*

*Los que ejercen la patria potestad, aun cuando no tengan la custodia, tiene el derecho de convivencia con sus descendientes. El Ejercicio de este derecho queda supeditado a que no represente riesgo para el menor de edad y a la acreditación del cumplimiento de la obligación alimenticia.*

*Quien ejerza la custodia, debe procurar el respeto y el acercamiento constante de los menores de edad con el otro ascendiente que también ejerza la patria potestad. En consecuencia, quien ejerza la patria potestad, debe evitar en todo momento generar sentimientos negativos, de odio, desprecio, rencor o rechazo hacia uno de los progenitores.*

*Art. 504.- Serán separados de la tutela:*

*……….*

*VII.- Al que genere sentimientos negativos, de odio, desprecio, rencor o rechazo hacia uno de los progenitores…*

***La alienación parental en la Legislación Penal***

*La violencia familiar, como ya lo hemos visto, presenta una concepción y tipificación amplia en nuestro Código Penal, como en todos los códigos de la República y en el Federal.*

*Con los años, se pasó de limitar la violencia familiar a los golpes y agresiones física evidentes; así como los insultos, a formas antes invisivilizadas, como el maltrato sicológico, las amenazas, la intimidación, el chantaje económico y patrimonial, y desde luego todo lo relacionado con manipular a la víctima para causarle daños a ella o a terceros.*

*El 9 de febrero de 2017, el Congreso de la Unión aprobó un acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales de los estados de la República a incluir, en sus legislaciones familiares y civiles, la alienación parental como forma de violencia familiar. La proposición con puntos de acuerdo fue presentada por el Diputado Tomás Roberto Días Montoya, del Grupo Parlamentario del PRI, en fecha 20 de octubre de 2016; para ser dictaminada y votada luego, en el tiempo ya mencionado.*

***Derecho Comparado***

***CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR***

*Artículo 203. Violencia por alienación parental. Al que ejerciendo la custodia sobre el menor comunique hechos con el ánimo de causar el desprecio o cualquier acto de manipulación tendiente a provocar alienación parental encaminada a producir en el menor, rencor, rechazo o desprecio, hacia uno o ambos de los progenitores, se le impondrá tratamiento en libertad y de cien a doscientos días multa.*

***CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO.***

*ARTÍCULO 300. Comete el delito de violencia familiar quien ejerza algún acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, controlar o agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, sobre alguna persona a la que esté o haya estado unida, por un vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, tutela o curatela, concubinato o bien, que haya tenido o tenga alguna relación afectiva o sentimental de hecho, se le impondrán de un año a cinco años de prisión y multa de treinta y seis a doscientos ochenta y ocho veces la Unidad de Medida y Actualización, perderá el derecho de pensión alimenticia y los derechos que tenga respecto de la víctima, incluidos los de carácter sucesorio y en su caso, la prohibición de acudir o residir en lugar determinado así como la prohibición de comunicarse por cualquier medio con la víctima. Asimismo se le sujetará a tratamiento especializado psicológico, psiquiátrico o reeducativo según corresponda, independientemente de las penas que correspondan por cualquier otro delito.*

*….*

*….*

*….*

*Se considera violencia familiar la alienación parental de quienes tengan la patria potestad, tutela o custodia del menor de edad.*

*….*

*CODIGO PENAL DEL ESTADO DE GUERRERO*

*Artículo 198. Violencia familiar A quien teniendo la calidad de cónyuge, concubina o concubinario, pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, maltrate física o psicoemocionalmente a un miembro de la familia, o cuando exista alienación parental, se le impondrán de uno a cinco años de prisión, pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima por el doble del término de la pena de prisión impuesta, incluidos los de carácter sucesorio y prohibición de ir a un lugar determinado o residir en él.*

*Se entiende por Alienación Parental la manipulación o inducción que un progenitor realiza hacia su hijo, mediante la desaprobación o crítica tendiente a producir en el menor rechazo, rencor, odio, miedo o desprecio hacia el otro progenitor.*

*Este delito se perseguirá de oficio.*

*CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO*

*Artículo 178. Violencia familiar*

*Comete el delito de violencia familiar quien lleve a cabo conductas que agredan física, psicológica, patrimonial o económicamente, a alguna persona con la que se encuentre unida por vínculo matrimonial, de parentesco, por consanguinidad, afinidad, civil, concubinato, relación de pareja o familiar de hecho o esté sujeta a su custodia, protección o cuidado, o tenga el cargo de tutor o curador sobre la persona, o de aquellas personas que no reúnen los requisitos para constituir concubinato, siempre que hagan vida en común, dentro o fuera del domicilio familiar.*

*Se considerará como violencia familiar la alienación parental demostrada, respecto de sus hijos o adoptados. Se impondrá de uno a cinco años de prisión, suspensión de los derechos que tenga respecto de la víctima por el término de la pena de prisión impuesta, incluidos los de carácter sucesorio y prohibición de ir a un lugar determinado o residir en él.*

*Nuestra propuesta, encuentra que al investigar los alcances de los que se entiende por alienación parental, dicha figura se limita a los progenitores o padres del menor, al accionar infundiendo odio de parte de un padre hacia el otro. Pero, creemos que desde tal punto de vista es limitada, ya que el infundir odio hacia uno de los padres, no solo puede hacerlo el otro progenitor, sino terceras personas, como los abuelos, los tíos, hermanos mayores, etc. Por ello decidimos incluir una figura más amplia de este tipo de violencia, y no solo limitarla a lo que se entiende por alienación parental en su concepto básico.”*

**TERCERO.-** Quienes integramos la presente comisión dictaminadora efectuamos el estudio y análisis de la iniciativa, verificando que la misma tiene por objeto el de establecer sanciones equiparadas al delito de violencia familiar, con relación a las conductas que derivan en la manipulación reiterada a un menor para generar odio, rencor, rechazo o distanciamiento con el otro progenitor o ambos.

El promovente sustenta su propuesta en el razonamiento que deriva del Interés Superior del Niños y sus derechos, los cuales estimamos en esta Comisión que son aplicables al caso planteado, pues es importante que las leyes prevean aquellos supuestos en donde la violencia familiar se ejerce de forma indirecta hacia cualquiera de los conyugues, aun cuando estas conductas sean realizadas por conducto de un menor.

El artículo 251 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza tipifica la conducta de Violencia Familiar, y la define como “*a quien dentro o fuera del domicilio o del lugar en el que habite, ejerza violencia contra los derechos reproductivos, o violencia física, psicológica, patrimonial, económica y sexual, respecto al cónyuge o ex-cónyuge, concubina o ex-concubina, concubinario o ex-concubinario, compañera o ex-compañera civil, compañero o excompañero civil, pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, o pariente colateral consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado, así como contra el adoptante, adoptado o adoptada, o respecto a quien tenga relación de pareja o de hecho, o en contra de los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado de las primeras diez personas nombradas, al igual que contra cualquiera otra persona que esté sujeta a la custodia, guarda protección, educación o cuidado del sujeto activo, independientemente de que la violencia produzca o no lesiones*”.

Del análisis del artículo referido, es posible establecer una relación entre los elementos del tipo penal y sus resultados, es decir, de los sujetos que intervienen y la modalidad en la que lo hacen y los resultados que se producen. La violencia familiar se encuentra vinculada, como su propio apostillado lo indica, a la familia, sin embargo, el sujeto activo de la conducta típica se encuentra delimitado solo a quien lo ejerza de forma directa, independientemente de que este no produzca una lesión.

Por lo anterior, la conducta típica de violencia familiar se encuentra limitada a aquellos supuestos en donde quien consuma el delito, debe hacerlo de forma directa, aun cuando esta no produzca una lesión. Esto puede generar un supuesto en donde el sujeto activo consume una conducta que derive en violencia familiar a través de un tercero, el cual, en más de las veces, puede ser mediante un menor, específicamente los hijos menores, quienes desarrollan aversión y rechazo hacia el progenitor con quien mantienen una relación menos frecuente.

Lo anterior revela la necesidad de establecer sanciones a quienes hacen uso de los hijos menores para perjudicar o destruir la relación de éstos con alguno de sus progenitores, incluso con ambos si el supuesto se da a través de cualesquiera otra persona que no sean los padres..

No obstante lo anterior, atendiendo al principio de proporcionalidad estimamos que esta conducta no puede sancionarse en las mismas pautas que el delito de violencia familiar. Esto se debe a que dicho principio de proporcionalidad obliga a que las penas que se apliquen a cada conducta en el orden jurídico penal deban de ser congruentes con el resto de las penas establecidas.

Es decir que, imponer una sanción de igual medida a las que se prevén por el delito de violencia familiar es incongruente con el resto del orden jurídico y las penas establecidas, toda vez que, en principio, la conducta de violencia familia se materializa en detrimento directo a quienes se ejerce, por lo cual, el delito se consuma en el momento en que se manifiesta la violencia, lo cual, garantiza un resultado material, aunque estos no necesariamente sean lesiones físicas.

Por el contrario, cuando la violencia familiar se ejerce a través de un tercero menor de edad, esta conducta no puede garantizar que el resultado material del delito vaya a concretarse con la sola intervención del sujeto activo, pues depende, al final de cuentas, de la voluntad del menor. Esto implica profundizar sobre los tipos penales, es decir, para que la sanción a una persona que no interviene en el delito directamente debe analizarse si la intervención de la persona es lo suficientemente determinante que, de no haber intervenido, la conducta típica no se hubiera consumado.

En ese sentido, la intervención del menor no resulta de tal modo determinante, pues la alienación del menor no garantiza que este, a su vez y por voluntad propia, vaya a desarrollar rechazo o aversión hacia quien se ejerce la violencia. Por lo cual, establecer penalidades idénticas a las descritas para el delito de violencia familiar, resulta desproporcionado e innecesario.

Sin embargo, es importante tomar en consideración que los resultados y afectaciones derivadas de esta conducta son igualmente perjudiciales al orden social, pues representan una forma de violencia familiar indirecta y deben de sancionarse en términos de la legislación penal, por lo cual y en virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se **adiciona** un segundo párrafo, recorriendo los subsecuentes en su orden del artículo 251 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza para quedar como sigue:

**Artículo 251 (Violencia familiar)**

…

Se aplicarán de seis meses a tres años de libertad supervisada y multa de cien a quinientos días multa a las personas que manipulen de forma reiterada a un menor de edad para generarle odio, rencor, rechazo o distanciamiento de algunos de sus progenitores o de ambos; entendiendo por reiteración la acción constante y frecuente de parte del sujeto activo del delito en perjuicio de los intereses del menor y del progenitor o familiar afectado; en su caso, procederá además la perdida de los derechos de patria potestad, guarda y custodia, cuando el sujeto activo sea el titular de los mismos.

…

…

**TRANSITORIOS**

**ARTÍCULO ÚNICO.** - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 29 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se propone adicionar en lo conducente diversas fracciones y párrafos a los artículos 175 y 176 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Juan Antonio García Villa, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 8 del mes de mayo de 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se propone adicionar en lo conducente diversas fracciones y párrafos a los artículos 175 y 176 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Juan Antonio García Villa, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se propone adicionar en lo conducente diversas fracciones y párrafos a los artículos 175 y 176 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Juan Antonio García Villa, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*“Por medio de la presente iniciativa se propone reformar el Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza a fin de crear un marco jurídico eficaz, que permita el fincamiento de responsabilidades respecto de los delitos cometidos por servidores públicos contra el patrimonio de la administración pública, con el propósito de combatir la corrupción y la impunidad.*

*La rendición de cuentas es uno de los instrumentos para controlar el abuso de poder y garantizar que los gobernantes cumplan con los principios de transparencia, honestidad, eficiencia y eficacia. El Congreso del Estado efectúa la fiscalización a través de la Auditoría Superior del Estado y entre sus atribuciones se encuentra la de promover sanciones penales ante la autoridad competente y coadyuvar con ésta en los procesos penales correspondientes, por lo cual debe atender las disposiciones que en materia de derecho penal le sean aplicables.*

*Sin embargo, debido a que la fiscalización se realiza con posterioridad a la presentación de la Cuenta Pública, el órgano fiscalizador se encuentra con diversos obstáculos al promover el ejercicio de la acción penal en tiempo y de manera eficaz, toda vez que por la diversidad de operaciones llevadas a cabo durante las auditorías, la obtención y elaboración de los documentos necesarios para promover la acción penal se realizan después de que terminó el proceso de fiscalización y frecuentemente sucede que el término con el que se cuenta para ejercitar la acción penal es insuficiente.*

*En consecuencia, a fin de estar en línea con las reformas y avances en materia de procuración de justicia y para el caso considerando sólo los delitos de mayor trascendencia, es decir, los delitos que afectan el patrimonio de la hacienda pública, es preciso aumentar el periodo de preclusión y de prescripción a los delitos cometidos en contra de la administración pública. Por lo que se propone aumentar el término para la presentación de las denuncias y querellas, es decir, ampliar el tiempo para la preclusión del derecho de formular querellas y la prescripción de los delitos, así como el momento a partir del cual se inicia a computar el plazo para ambas figuras jurídicas.*

*Al respecto los artículos 175 y 176 del Código Penal del Estado de Coahuila establecen lo siguiente:*

*El art. 175: Que la prescripción es personal y extingue la acción penal, las penas y las medidas de seguridad por el simple transcurso del tiempo señalado en la ley, y dispone al efecto los términos para la prescripción de la acción penal, según el tipo de delito y sus modalidades (si es instantáneo, permanente, continuado o de tentativa punible), así como otros elementos.*

*Asimismo el art. 175 establece, según la naturaleza de la pena, el tiempo que ha de transcurrir para que opere la prescripción de la acción penal, que será: 1) Igual al promedio aritmético de la pena de prisión, aunque nunca será menor a tres años; 2) De un año si el delito no se sanciona con pena de prisión, y 3) Cuando se trate de concurso ideal de delitos, la prescripción atenderá a la pena mayor de prisión señalada para el delito más grave; y en los casos de concurso real de delitos, la prescripción empezará a correr a partir del día en que se cometieron los delitos y prescribirán separadamente para cada uno de ellos, así como otras reglas que al efecto previene este numeral.*

*Por cuanto hace al art. 176 del mencionado Código Penal, el precepto establece reglas especiales de extinción del derecho de querella, que puede precluir en un año o en tres años de acuerdo a las reglas que el precepto establece.*

*De acuerdo pues al art. 175 del Código Penal la acción prescribe en un término igual al promedio aritmético de la pena de prisión, que en ningún caso será menor a tres años. Y el art. 176 regula el plazo para que precluya el derecho de formular querellas, así como el momento a partir del cual se computa dicho plazo.*

*En los términos del citado art. 175, el plazo de prescripción con el que cuenta la autoridad es de tres años en todos estos supuestos, ya que tratándose de delitos cometidos en el ejercicio del servicio público la pena máxima en algunos casos es de un año. Este plazo, como ya quedó explicado, en un buen número de supuestos es insuficiente para solicitar el ejercicio de la acción penal, por lo que se propone aumentar el plazo para la prescripción a siete años de manera general en lugar de tres; asimismo este artículo establece que el término para la prescripción se contará a partir del día en que se consumó el delito, si es instantáneo; el día en que cesó la consumación, si el delito es permanente; y el día en que se realizó la última conducta, si el delito es continuado. Sin embargo, para el caso de la fiscalización de las cuentas públicas, tomar en cuenta estos momentos para el inicio del cómputo de la prescripción no es adecuado, ya que como se señaló anteriormente la autoridad fiscalizadora conoce a ciencia cierta del delito hasta que concluye el procedimiento de auditoría y durante este proceso ya inició el cómputo en perjuicio del cumplimiento de la función de la autoridad fiscalizadora, que es la de promover la sanción penal ante la autoridad competente respecto de los servidores que no hayan efectuado su función dentro de un marco de legalidad, por lo que se propone agregar como momento para el inicio del cómputo de la prescripción en el caso de delitos cometidos por servidores públicos, hasta que haya concluido el proceso de fiscalización.*

*Por su parte el artículo 176 del Código establece que el derecho de formular querellas precluye en algunos casos en un año, que se contará a partir del día siguiente al que se tenga conocimiento del delito, o en tres años a partir del día en que se consumó el delito si fuera de carácter instantáneo, o a partir del último día en que se ejecutó la última conducta si fuera delito continuado, o bien, a partir del día en que cesó la consumación si el delito fue permanente. Ahora bien, aún y cuando la ley correspondiente dispone que el plazo para la preclusión pudiera ser de uno o tres años, el término de tres años resulta incierto para el órgano técnico de fiscalización, es decir, para la Auditoría Superior del Estado, derivado del obstáculo con el que se encuentra a la hora de determinar el momento de la comisión de los delitos dentro del proceso de fiscalización ya que éstos pudieron cometerse en distintos momentos, resultando instantáneos, continuados y permanentes.*

*Por lo tanto, debe considerarse que el órgano encargado del proceso de fiscalización se ubica en el primer supuesto, es decir, cuenta con el término legal de un año para presentar la querella, toda vez que de acuerdo al marco jurídico vigente se tiene conocimiento del delito al momento de la fiscalización, de tal suerte que el criterio del Ministerio Publico tiene, como consecuencia, que el periodo durante el cual se desahoga el proceso de fiscalización transcurre en perjuicio de la entidad fiscalizadora, por lo que se propone que dicho cómputo debe comenzar al finalizar el proceso de fiscalización.*

*La propuesta de elevar a siete años el término para que opere la prescripción, corresponde al mismo de la reforma constitucional mediante la cual se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015 y el artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, misma que prevé para los actos u omisiones de los servidores públicos que incurran en responsabilidad frente al Estado, un periodo de prescripción mínimo de siete años, así como iniciar su cómputo a partir de que concluya el proceso de fiscalización, es decir, especificar en el ordenamiento jurídico que tratándose de delitos cometidos por servidores públicos, el término legal de la prescripción empezará a correr a partir de que se concluya la revisión correspondiente, por parte de los órganos competentes en materia de revisión de cuentas.*

*Lo anterior coadyuvará a que la administración de los recursos públicos en el Estado se realice con mejores criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, austeridad, transparencia y control, lo cual, por consecuencia, fortalecerá la rendición y revisión de cuentas.*

*Por lo tanto, frente a la necesidad de fortalecer el principio de legalidad, conforme al cual se deben desempeñar los servidores públicos, la rendición de cuentas y la transparencia, es oportuno contar en el Código Penal del Estado con una regulación adecuada respecto al tiempo con el que se cuenta para solicitar el ejercicio de la acción penal.*”

**TERCERO.-** Los integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, revisamos el contenido de la iniciativa, misma que busca reformar los artículos 175 y 176 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, con el objeto modificar el momento procesal en que empieza a computarse el periodo de prescripción en los delitos cometidos por servidores públicos o contra la función pública; asimismo, establecer un periodo de siete años para la prescripción de los delitos cometidos por servidores públicos en el ejercicio de su función, cualquiera que sea la modalidad de estos delitos y, modificar el momento en que empieza a computarse el plazo para la preclusión de la querella, estableciendo que la parte legitimada tiene conocimiento de dichos delitos hasta la conclusión de los procedimientos de revisión, auditoría u otros de naturaleza análoga, practicadas por los órganos facultados para ejercer esas funciones.

Para un mejor proveer, a continuación anexamos un cuadro comparativo, a fin de contrastar con la legislación vigente:

|  |  |
| --- | --- |
| **CÓDIGO PENAL DE COAHUILA DE ZARAGOZA** | |
| **LEY VIGENTE** | **PROPUESTA** |
| **Artículo 175 (Efectos de la prescripción)**  La prescripción es personal y extingue la acción penal y las penas y las medidas de seguridad, para lo cual bastará el transcurso del tiempo señalado en la ley.  La resolución respecto a la prescripción se dictará de oficio o a petición de parte.  Los términos para que opere la prescripción se duplicarán respecto de quienes se encuentren fuera del territorio del Estado de Coahuila de Zaragoza, si por dicha circunstancia no es posible concluir la investigación inicial o el proceso, o ejecutar la sentencia.  Las pautas generales para la prescripción de la acción penal son las siguientes:  **A.** (Términos para la prescripción de la acción penal)  Los términos para la prescripción de la acción penal serán continuos; en ellos se considerará el delito y, en su caso, con sus modalidades, y se contarán a partir de:  **I.** El día en que se consumó el delito, si es instantáneo.  **II.** El día en que cesó la consumación, si el delito es permanente.  **III.** El día en que se realizó la última conducta, si el delito es continuado.  **IV.** El momento en que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la acción debida, si se trata del delito de tentativa punible.  **V.** En los delitos cuyo tipo penal contemple la afectación a un menor de dieciocho años, el término de prescripción de la acción penal se duplicará, y empezará a correr al día siguiente de cuando el menor cumpla los dieciocho años.  **VI.** Cuando se trate de delitos contemplados en el Titulo Quinto del Libro Segundo de este Código, si el sujeto pasivo es una persona menor de edad o no tuviera la capacidad de comprender el significado del hecho o resistirlo, la acción penal será imprescriptible.  **B.** (Prescripción de la acción penal según la naturaleza de la pena)  La acción penal prescribirá:  **I.** En un período igual al término medio aritmético de la pena de prisión, incluidas las modalidades del delito cometido, pero en ningún caso será menor de tres años.  La regla del párrafo precedente se aplicará cuando la pena de prisión esté señalada como pena única, conjunta o alterna con otra diversa.  **II.** En un año, si el delito no se sanciona con pena de prisión.  **C.** (Prescripción de la acción penal en caso de concurso de delitos)  En los casos de concurso ideal de delitos, la acción penal prescribirá atendiendo a la pena mayor de prisión señalada para el delito más grave. Para determinar cuál delito tiene la mayor pena de prisión, se estará a lo previsto en la fracción I del artículo 91 de este código.  En los casos de concurso real de delitos, los plazos para la prescripción de la acción penal empezarán a correr a partir del día en que se cometieron los delitos, y prescribirán separadamente para cada uno de ellos.  **D.** (Necesidad de resolución judicial previa)  Cuando para ejercitar o continuar la acción penal sea necesaria una resolución previa de autoridad judicial, la prescripción comenzará a correr desde el día en que quede firme la resolución, con inclusión, en su caso, del juicio de amparo.  **E.** (Interrupción de la prescripción de la acción penal)  La prescripción de la acción penal se interrumpirá cuando durante la primera mitad del término de la misma, en la investigación inicial se obtenga uno o más datos de prueba respecto al delito, o para sustentar acusación contra el imputado, aunque la obtención se logre por autoridades federales, de otra entidad federativa o de la Ciudad de México. En tales casos, el término de la prescripción empezará a correr de nuevo al día siguiente de obtenidos los datos de prueba referidos.  La prescripción de la acción penal también se interrumpirá, cuando dentro de su término se inicie el procedimiento para la declaratoria de procedencia de servidores públicos, o por las diligencias que se practiquen para obtener la extradición internacional, o el requerimiento de entrega del imputado, previa orden de aprehensión o reaprehensión y con los demás requisitos constitucionales, que formalmente haga el Ministerio Público al Ministerio Público Federal o de otra entidad federativa o de la Ciudad de México, donde aquél se refugie, se localice o se encuentre detenido por el mismo delito o por otro.  En los casos del párrafo anterior, subsistirá la interrupción del término de prescripción de la acción penal, hasta en tanto se resuelva la declaratoria de procedencia o la extradición, o el Estado, el Ministerio público Federal, o de la entidad federativa o de la Ciudad de México, entregue o niegue la entrega, o desaparezca la situación legal del detenido que dé motivo al aplazamiento de su entrega. Si dados los supuestos anteriores el imputado no continúa detenido, el término de prescripción de la acción penal se reiniciará de nuevo a partir del día en que aquél quede libre, o del día en que desaparezca la situación que dio motivo a la interrupción.  Asimismo, el término de prescripción de la acción se interrumpirá cuando se aprehenda al imputado en virtud de la orden judicial correspondiente, o se le dicte a aquél, auto de vinculación a proceso, aun cuando no se le hubiera aprehendido, casos en los que la interrupción subsistirá mientras el imputado se encuentre vinculado al proceso.  En su caso, el término de prescripción de la acción penal comenzará a correr de nuevo, a partir del día en el que el procesado se fugue, si estaba en prisión preventiva, o del día en que el procesado dejó de comparecer sin causa justificada a una audiencia ante el juez, o del día en el que se halle que el procesado no reside en el domicilio que señaló para ser notificado, sin que avisara de alguno nuevo. | **Artículo 175.** …  . . .  . . .  . . .  . . .  **A.** (Términos para la prescripción de la acción penal)  . . .  **I.** a **VI**. …  **VII. Para efectos de los delitos de servidores públicos o contra la función pública, el término de prescripción de la acción penal empezará a computarse al día siguiente a aquel en que se notifique el resultado de la valoración de la solventación de las irregularidades previamente dadas a conocer al servidor público responsable.**  B. (Prescripción de la acción penal según la naturaleza de la pena)  …  **I.** a **II.** …  **III. En un período de siete años, cualquiera que sea la modalidad del delito cometido, tratándose de delitos cometidos por servidores públicos en el ejercicio de su función.**  **C.** a **E.** … |
| **Artículo 176 (Reglas especiales de extinción de la acción penal por preclusión del derecho de querella)**  El derecho para formular querella precluye en un año, y su preclusión extinguirá la acción penal. El año se contará a partir del día siguiente en el que cualquier persona con legitimación para formular la querella sepa del delito, o en tres años con independencia de esa circunstancia, a partir del día en que se consumó el delito, si éste fue instantáneo. Si el delito fue continuado, los tres años se computarán a partir del día en que se ejecutó la última conducta. Y si el delito fue permanente, los tres años se computarán a partir del día en que cesó la consumación.  Los términos de preclusión también aplicarán por no satisfacer requisitos de procedibilidad equivalentes a la querella, y su transcurso extinguirá la acción penal, aun cuando aquéllos estén contemplados en leyes federales en las que los jueces del Estado tengan competencia concurrente, y se computarán conforme a lo que previene el párrafo precedente respecto a la querella, salvo disposición legal específica. | **Artículo 176** …  …  …  **En el caso de los delitos de servidores públicos o contra la función pública, se entenderá que la parte legitimada tiene conocimiento de dichos delitos hasta la conclusión de los procedimientos de revisión, auditoría u otros de naturaleza análoga, practicadas por los órganos facultados para ejercer esas funciones. En ese caso el término de preclusión empezará a computarse al día siguiente a aquel en que se notifique el resultado de la valoración de la solventación de las irregularidades previamente dadas a conocer.** |

En relación a lo anterior, los integrantes de esta dictaminadora, efectuamos el análisis de la iniciativa de reforma, mediante la cual se propone modificar el Código Penal local en cuanto a las denuncias presentadas con motivo de un procedimiento de auditoría o análogos, nos permitimos mencionar lo siguiente:

* Tiene como propósito principalmente el siguiente: *“modificar el momento procesal en que empieza a computarse el periodo de prescripción en los delitos cometidos por servidores públicos o contra la función pública estableciendo que el término de prescripción de la acción penal empezará a computarse al día siguiente a aquel en que se notifique el resultado de la valoración de la solventación de las irregularidades previamente dadas a conocer al servidor público responsable; asimismo, establecer un periodo de siete años para la prescripción de los delitos cometidos por servidores públicos en el ejercicio de su función, cualquiera sea la modalidad de estos delitos y, modificar el momento en que empieza a computarse el plazo para la preclusión de la querella, estableciendo que la parte legitimada tiene conocimiento de dichos delitos hasta la conclusión de los procedimientos de revisión, auditoría u otros de naturaleza análoga, practicadas por los órganos facultados para ejercer esas funciones”*.

Ahora bien, consideramos que las modificaciones que se plantean resultan convenientes, toda vez que se refieren a cuestiones que han sido objeto de debates y en los cuales se han obtenido criterios favorables por parte de las autoridades jurisdiccionales federales, los cuales a efecto de que tengan mayor firmeza y menos probabilidades de variar, es conveniente que se respalden en una modificación legal en la que se establezca con claridad la forma en la que se computará el plazo para la presentación de las denuncias que deriven de las revisiones que realicen las instancias competentes, además de otro aspecto que consideramos oportuno, es en cuanto al plazo de prescripción que se propone, toda vez que con ello se homologa el plazo de prescripción que tienen las faltas administrativas graves, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO.** Se **adiciona** la fracción VII del apartado A y la fracción III del apartado B del artículo 175, y un tercer párrafo al artículo 176, del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 175** …

. . .

. . .

. . .

. . .

**A.** (Términos para la prescripción de la acción penal)

. . .

**I.** a **VI.** …

**VII.** Para efectos de los delitos de servidores públicos o contra la función pública, el término de prescripción de la acción penal empezará a computarse al día siguiente a aquel en que se notifique el resultado de la valoración de la solventación de las irregularidades previamente dadas a conocer al servidor público responsable.

**B.** (Prescripción de la acción penal según la naturaleza de la pena)

. . .

1. **a II.** …

**III.** En un período de siete años, cualquiera que sea la modalidad del delito cometido, tratándose de delitos cometidos por servidores públicos en el ejercicio de su función.

**Artículo 176 (Reglas especiales de extinción de la acción penal por preclusión del derecho de querella)**

. . .

. . .

En el caso de los delitos de servidores públicos o contra la función pública, se entenderá que la parte legitimada tiene conocimiento de dichos delitos hasta la conclusión de los procedimientos de revisión, auditoría u otros de naturaleza análoga, practicadas por los órganos facultados para ejercer esas funciones. En ese caso el término de preclusión empezará a computarse al día siguiente a aquel en que se notifique el resultado de la valoración de la solventación de las irregularidades previamente dadas a conocer.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.-** El presente decreto entrará en vigor a los treinta días naturales posteriores al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.-** Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este decreto.

Así lo acuerdan las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 29 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un segundo párrafo al numeral 4 de la fracción VII del artículo 102 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, de la Fracción Parlamentaria “Presidente Benito Juárez García”, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 29 del mes de abril de 2020, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la propuesta de iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un segundo párrafo al numeral 4 de la fracción VII del artículo 102 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, de la Fracción Parlamentaria “Presidente Benito Juárez García”, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un segundo párrafo al numeral 4 de la fracción VII del artículo 102 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, de la Fracción Parlamentaria “Presidente Benito Juárez García”, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S***

*“Las autoridades mexicanas, de todos los niveles y con independencia del partido a que pertenezcan, están obligadas a realizar un esfuerzo común para mitigar los efectos de la epidemia del coronavirus que hoy azota al país.*

*Politizar las medidas, acciones y programas de salud pública para enfrentar la pandemia es una irresponsabilidad criminal.*

*En estos momentos el país y nuestro Estado requiere unidad de acción para enfrentar, en las mejores condiciones, esta contingencia que ya ha cobrado la vida de más de mil quinientos connacionales.*

*Los cálculos de los modelos matemáticos estiman que se ha logrado evitar que el pico de la curva epidemiológica ocurriera en abril. Sin embargo, al ritmo actual de incidencia de los casos activos, se estima que, para mediados del próximo mes, el número de casos confirmados podría superar los cien mil.*

*Después de los ejemplos de subestimar los efectos de la pandemia, países como Italia y España han pagado un costo terrible. Los Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump tiene cifras desastrosas y, desafortunadamente, insiste en levantar las medidas de mitigación, lo que puede producir un rebrote de características catastróficas.*

*En este contexto, resulta inexplicable que autoridades municipales se nieguen a cumplir los decretos, acciones y programas que las autoridades sanitarias, tanto del nivel federal como del estatal, han instrumentado o expedido.*

*El Gobernador de Jalisco, ante la irresponsable actitud de algunos ayuntamientos de su entidad, que se rehúsan a cumplir las instrucciones de las autoridades sanitarias, lo ha insultado públicamente. En mi opinión el Gobernador de Jalisco se excedió en el uso del lenguaje, pero le asiste la razón ante la irresponsabilidad criminal de algunas autoridades municipales.*

*…*

*Por eso es importante señalar que en México no hay estado de excepción. No se limitan ni los derechos humanos ni los derechos políticos de la población. Lo que ocurre es que las autoridades sanitarias competentes han dictado medidas para mitigar la epidemia y proteger la salud de la población. Son medidas que tienden a salvoguardar el derecho a la salud.*

*…*

*…*

*El primer párrafo del dispositivo normativo citado establece: (y cito) “Promover y procurar la salud pública en el Municipio y auxiliar a las autoridades sanitarias estatales y municipales en la planeación y ejecución de sus disposiciones.” (fin de la cita)*

*La anterior disposición debería ser suficiente, pero ante la actitud bizarra, irresponsable y criminal de algunas autoridades municipales, se propone adicionar un segundo párrafo para señalar que en casos de epidemia declarada como grave por las autoridades sanitarias federales, el ayuntamiento estará obligado a cumplir las disposiciones, decretos y medidas dictadas por las autoridades sanitarias de la Federación y el Estado. Podrán inconformarse mediante la presentación de la controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad, pero la presentación de estos medios de inconformidad, bajo ninguna circunstancia, los eximirá de la obligación de cumplirlas y aplicarlas hasta en tanto no sean resueltas por la autoridad jurisdiccional competente.*

*Finalmente debo señalar que, en estos momentos críticos, donde está en riesgo la salud y la vida de la población, no es aceptable la frivolidad irresponsable y criminal de ninguna autoridad.*”

**TERCERO.-** Los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, nos abocamos al estudio de la propuesta de iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 102 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de establecer la obligatoriedad de aplicar y acatar, en caso de epidemia grave, los decretos, medidas y acciones instrumentadas y expedidas por las autoridades sanitarias federales y estatales.

Derivado de la declaración de pandemia por el COVID-19, el 11 de marzo pasado por la Organización Mundial de la Salud, se abrió la necesidad de instrumentar mecanismos que llevaran a una coordinación efectiva entre los distintos poderes y órdenes de gobierno bajo una directriz de inmediata respuesta ante este caso de emergencia sanitaria, ya que esta pandemia está obligando a modificar ritmos de vida y actividades de manera extraordinaria, por lo cual debe existir una corresponsabilidad entre Gobierno del Estado y los municipios, a fin de adoptar acciones extraordinarias para hacerle frente a la situación.

Es así que el caso particular del Estado de Coahuila de Zaragoza, al día de hoy, según datos del Plan Estatal de Prevención y Control Covid-19, del Gobierno del Estado, se han contabilizado un total de 3,760 casos. Asimismo, ante esta emergencia, el Gobierno del Estado ha emitido diversos decretos, acuerdos y protocolos, pudiendo mencionar los siguientes:

* ACUERDO mediante el cual se ajustan las actividades presenciales de los Calendarios Escolares aplicables para el Ciclo Escolar 2019-2020 en el Estado de Coahuila de Zaragoza. (17 MARZO)
* DECRETO mediante el cual se establecen medidas para la Prevención y Control de la propagación del COVID-19 en el Estado de Coahuila de Zaragoza. (19 MARZO)
* ACUERDO que establece la Integración, Atribuciones y Funcionamiento del Comité Técnico para la Prevención, Atención y Control del COVID-19 en el Estado de Coahuila de Zaragoza. (20 MARZO)
* ACUERDO mediante el que se emiten los Lineamientos para la Prevención y Control del COVID-19 en establecimientos comerciales, centros de trabajo y servicios funerarios, dentro del marco del Plan Estatal de Prevención y Control del COVID-19. (24 MARZO)
* DECRETO que reforma el Decreto mediante el cual se establecen medidas para la prevención y control de la propagación del COVID-19 en el Estado de Coahuila de Zaragoza. (31 MARZO)
* DECRETO por el que se emiten los Lineamientos para el manejo seguro y disposición de cadáveres con causa de muerte probable o confirmada por COVID-19. (7 ABRIL)
* DECRETO por el que se establece el uso obligatorio de cubre bocas como medida de prevención para evitar la propagación del COVID-19 en el Estado de Coahuila de Zaragoza. (22 ABRIL)
* DECRETO por el que se emiten las disposiciones relativas a la movilidad de las personas en el Estado de Coahuila de Zaragoza durante la contingencia COVID-19. (22 ABRIL)
* DECRETO que reforma el Decreto mediante el cual se establecen medidas para la prevención y control de la propagación del COVID-19 en el Estado de Coahuila de Zaragoza. (28 ABRIL)
* DECRETO que reforma el Decreto por el que se emiten los Lineamientos para el manejo seguro y disposición de cadáveres con causa de muerte probable o confirmada por COVID-19. (5 MAYO)
* ACUERDO mediante el cual se implementa el Centro Estatal de Contingencias COVID-19 (SARS-CoV-2) del Estado de Coahuila de Zaragoza. (6 MAYO)
* DECRETO que reforma el Decreto mediante el cual se establecen medidas para la prevención y control de la propagación del COVID-19 en el Estado de Coahuila de Zaragoza. (6 MAYO)
* ACUERDO que modifica el Acuerdo mediante el que se emiten los Lineamientos para la prevención y control del COVID-19 en establecimientos comerciales, centros de trabajo y servicios funerarios, dentro del marco del Plan Estatal de Prevención y Control del COVID-19. (8 MAYO)
* MOVILIDAD y Derechos Humanos, Acciones de Política Pública Estatal en el contexto de la emergencia sanitaria por el coronavirus SARS COV-2 (COVID-19). (8 MAYO)
* PROTOCOLO para la realización de actividades físicas al aire libre durante la emergencia sanitaria del COVID-19 (SARS-CoV-2). (21 MAYO)
* LINEAMIENTOS para la reactivación de las actividades comerciales, económicas y de servicios en el Estado de Coahuila de Zaragoza. (21 MAYO)
* LINEAMIENTOS de atención e implementación de buenas prácticas para los servicios turísticos ante la contingencia causada por COVID-19. (21 MAYO)
* DECRETO que reforma el Decreto mediante el cual se establecen medidas para a la prevención y control de la propagación del COVID-19 en el Estado de Coahuila de Zaragoza. (29 MAYO)

Como podemos observar, en el Estado se han venido redoblando esfuerzos para atender esta pandemia, por lo cual consideramos apropiado establecer como una obligación de los municipios, el acatar las disposiciones, decretos y medidas dictadas por las autoridades sanitarias de la Federación y el Estado, dejando a salvo el derecho de inconformarse mediante la presentación de la controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad, estipulando que dichas controversias no eximirán de la obligación de cumplirlas y aplicarlas hasta en tanto no haya una resolución por parte de la autoridad jurisdiccional competente.

Los integrantes de esta dictaminadora, estamos conscientes de que ante la emergencia sanitaria por la que estamos pasando, se requiere de un esfuerzo de integración y participación por parte de las autoridades de los 38 municipios del estado a fin de mitigar los efectos de esta pandemia.

Antes de finalizar con estas consideraciones estimamos necesario precisar que esta dictaminadora realizó algunos ajustes a efecto de dotar de mayor claridad la norma.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**Único.-** Se adiciona un segundo párrafo al numeral 4 de la fracción VII del artículo 102 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 102.** …

…

…

…

**I.** a **VI.** …

**VII.** …

1. al 3. …

4. …

En casos de emergencia sanitaria provocada por una pandemia o epidemia grave, declarada por las autoridades sanitarias federales o estatales, los ayuntamientos de manera coordinada darán cumplimiento a las disposiciones, decretos y medidas dictadas por estas autoridades. Podrán inconformarse mediante la presentación de la controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad de conformidad con las disposiciones aplicables.

5. al 9. …

**VIII**. a la **X.** …

**TRANSITORIOS**

**Primero.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza; y

**Segundo.-** Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Así lo acuerdan las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez (Secretario), Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 29 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 50 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 11 del mes de diciembre del año 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 50 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 50 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S***

*El 18 de julio de 2016 se expidió la Ley que crea el Sistema Nacional Anticorrupción así como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a partir de dicha fecha inicia el plazo para que las legislaturas de los Estados emitan sus sistemas Estatales.*

*En el ámbito estatal, el día 14 de julio de 2017 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila, la reforma constitucional al artículo 159 y la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, cumpliendo la Entidad Federativa con lo señalado en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.*

*Se publicaron en el medio oficial del Estado de Coahuila las siguientes leyes:*

* *Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila, publicada el día 11 de agosto de 2017.*
* *Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada el día 22 de septiembre de 2017.*
* *Se Reformó el Código Penal de Coahuila de Zaragoza, el día 27 de octubre de 2017.*
* *Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada el día 19 de diciembre de 2017.*
* *Y, el 11 de agosto de 2017, se reformo la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila, publicada el día 24 de abril de 1984.*

*Así también, en fecha 2 de enero del presente año, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, Acuerdo de coordinación en materia de control interno, fiscalización, prevención, detección, disuasión de hechos de corrupción y mejora de gestión gubernamental, entre la Secretaría de la Función Pública y El Estado de Coahuila, con el objeto de establecer actividades conjuntas para la implementación de acciones y mecanismos de coordinación entre éstos, a efecto de promover el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas al desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos federales, atendiendo la coordinación de trabajo efectiva, el fortalecimiento del control interno y la gestión gubernamental, evitar duplicidades y omisiones en el trabajo de los órganos de fiscalización, con una mayor cobertura y la máxima publicidad en los resultados de la misma, así como para prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción.*

*Para garantizar la sostenibilidad de esta reforma y del acuerdo firmado, se requiere del compromiso y la contribución de todas las instancias pertinentes en el estado, incluidos los municipios, incorporando de manera prioritaria las políticas y cambios legislativos necesarios para el buen funcionamiento del Sistema, por lo que es de suma importancia adecuar nuestra legislación vigente a lo establecido en la reforma de referencia.*

*No omito mencionar lo estipulado dentro del Artículo 10, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que entre sus disposiciones determina que: “Las Secretarías y los Órganos internos de control, y sus homólogas en las entidades federativas tendrán a su cargo, en el ámbito de su competencia, la investigación, substanciación y calificación de las Faltas administrativas.*

*Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como Faltas administrativas no graves, las Secretarías y los Órganos internos de control serán competentes para iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos previstos en esta Ley…”*

*Tomando en consideración que la rendición de cuentas es uno de los componentes esenciales en los que se fundamenta un gobierno confiable y transparente, debemos proporcionar a nuestros ayuntamientos todas las bases legales para el correcto ejercicio de sus funciones.*

*Para provocar el mayor impacto de la rendición de cuentas y la transparencia, se requiere continuar con el cambio cultural en la gestión administrativa, que, al fortalecerse, ayudará a recobrar la confianza en las instituciones públicas.*

*Es por ello y en base a lo establecido por el artículo Tercero Transitorio, párrafo quinto, de la referida Ley General de Responsabilidades Administrativas, mismo que textualmente cito:* ***“TERCERO:*** *la Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor al año siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto.*

*…*

*A la fecha de entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todas las menciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos previstas en las leyes federales y locales, así como en cualquier disposición jurídica, se entenderán referidas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. …”*

**TERCERO.-** Quienes integramos esta comisión dictaminadora efectuamos el estudio y análisis de la iniciativa de reforma así como de las consideraciones en la que encuentra sustento la misma, verificando que el proyecto normativo tiene por objeto adecuar el Código Municipal del Estado con la legislación general en materia de responsabilidades administrativas.

En el año 2015 se reformó el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente al nuevo sistema anticorrupción, manifestando que:

***Artículo 113.*** *El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:*

***I.*** *El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana;*

***II.*** *El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley, y*

***III.*** *Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la Ley:*

***a)*** *El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales;*

***b)*** *El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan;*

***c)*** *La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno;*

***d)*** *El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos;*

***e)*** *La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.*

*Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas.*

*Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.*

Derivado de lo anterior, durante 2016 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, como parte de la legislación secundaria de la reforma constitucional citada, La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Posteriormente en nuestro Estado, se llevaron a cabo las adecuaciones legislativas necesarias a fin de dar cumplimiento con lo estipulado en los ordenamientos ya mencionados, así como la publicación en el Diario Oficial de la Federación referente al “Acuerdo de Coordinación en Materia de Control Interno, Fiscalización, Prevención, Detección, Disuasión de Hechos de Corrupción y Mejora de la Gestión Gubernamental que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza”.

En base a lo precedente, dentro de la exposición de motivos se señala que, *“para garantizar la sostenibilidad de esta reforma y del acuerdo firmado, se requiere del compromiso y la contribución de todas las instancias pertinentes en el estado, incluidos los municipios, incorporando de manera prioritaria las políticas y cambios legislativos necesarios para el buen funcionamiento del Sistema, por lo que es de suma importancia adecuar nuestra legislación vigente a lo establecido en la reforma de referencia”.*

En atención a lo anterior, es que quienes dictaminamos acordamos analizar el objeto y los alcances de la iniciativa, observando lo siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| **VIGENTE** | **PROPUESTA** |
| **ARTÍCULO 50.** Los servidores públicos municipales serán responsables de los delitos o faltas administrativas que cometan en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, en atención a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Coahuila y demás leyes aplicables. El municipio será responsable solidario por los daños causados por sus servidores con motivo del ejercicio de sus atribuciones, en los términos del Código Penal y del Código Civil para el Estado de Coahuila. | **ARTÍCULO 50.** Los servidores públicos municipales serán responsables de los delitos o faltas administrativas que cometan en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, en atención a lo dispuesto en la ***Ley General de Responsabilidades Administrativas*** y demás leyes aplicables*.* El municipio será responsable solidario por los daños causados por sus servidores con motivo del ejercicio de sus atribuciones, en los términos del Código Penal y del Código Civil para el Estado de Coahuila. |
| **ARTÍCULO 68.** Terminado el proceso de entrega-recepción, el servidor público entrante deberá proceder a la verificación y validación física del contenido del acta administrativa de entrega recepción y sus anexos, en un plazo no mayor de treinta días hábiles contados a partir del acto de entrega.  Durante la validación y verificación, el servidor público que reciba podrá solicitar al servidor público que entregó, la información o aclaraciones adicionales que considere necesarias, tal solicitud deberá hacérsele por escrito y notificada en el domicilio que tenga registrado, el requerido deberá comparecer personalmente o por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de la notificación a manifestar lo que corresponda, en caso de no comparecer o no informar por escrito dentro del término concedido, el servidor público entrante deberá notificar tal omisión a la Contraloría Municipal para que proceda de conformidad con la Ley de Responsabilidades. Igualmente, las irregularidades encontradas deberán hacerse del conocimiento de la Contraloría Municipal.  En todo el proceso de entrega-recepción deberá estarse a lo establecido en la Ley de Entrega-Recepción del Estado y Municipios. | **ARTÍCULO 68.** …  Durante la validación y verificación, el servidor público que reciba podrá solicitar al servidor público que entregó, la información o aclaraciones adicionales que considere necesarias, tal solicitud deberá hacérsele por escrito y notificada en el domicilio que tenga registrado, el requerido deberá comparecer personalmente o por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de la notificación a manifestar lo que corresponda, en caso de no comparecer o no informar por escrito dentro del término concedido, el servidor público entrante deberá notificar tal omisión a la Contraloría Municipal para que proceda de conformidad con la ***Ley General de Responsabilidades Administrativas***. Igualmente, las irregularidades encontradas deberán hacerse del conocimiento de la Contraloría Municipal.  … |
| **ARTÍCULO 74.** Son causas de suspensión del mandato de alguno, de algunos o de todos los miembros del Ayuntamiento:  I. Incurrir en las responsabilidades administrativas establecidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza.  II. La incapacidad temporal física y/o mental para el desempeño del cargo.  III. Por faltar consecutivamente a tres sesiones ordinarias de Cabildo sin existir causa justificada.  IV. Por abandono de sus funciones en un término de quince días hábiles consecutivos, sin causa justificada.  V. La declaración de procedencia en materia de responsabilidad penal, en los términos de la ley de responsabilidades de los servidores públicos estatales y municipales, hasta en tanto culmine el proceso penal correspondiente. | **ARTÍCULO 74.** Son causas de suspensión del mandato de alguno, de algunos o de todos los miembros del Ayuntamiento:    I. Incurrir en las responsabilidades administrativas establecidas en la ***Ley General de Responsabilidades Administrativas***.  II a la IV…  V. La declaración de procedencia en materia de responsabilidad penal, en los términos de la ***Ley General de Responsabilidades Administrativas***, hasta en tanto culmine el proceso penal correspondiente. |
| **ARTÍCULO 75.** Son causas de revocación del mandato de alguno, de algunos o de todos los miembros del Ayuntamiento:  I. La resolución condenatoria dictada por el Congreso del Estado, en juicio político instaurado en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza. Serán causas específicas:  a). Los actos u omisiones que lesionan la integridad del territorio del estado o su soberanía, libertad e independencia interior.  b). El ataque sistemático a la forma de gobierno republicano, representativo y popular.  c). Las violaciones sistemáticas y graves a las garantías individuales y sociales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado.  d). El incumplimiento reiterado de las obligaciones que a los ayuntamientos impone la Constitución Política Local y las leyes que de ella emanan, cuando cause perjuicios graves al municipio o se trastorne el funcionamiento normal de la institución.  e). Las violaciones sistemáticas y graves a los planes, programas y presupuestos de la administración pública y a las leyes que regulan el manejo de los recursos económicos.  f). Promover o adoptar una forma de gobierno o bases de organización política distintas de las señaladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  II. La sentencia condenatoria que recaiga al proceso penal que se lleve a cabo, en el supuesto de la fracción V, del artículo anterior.  III. La incapacidad definitiva física y/o mental para el desempeño del cargo.  IV. Dejar de asistir, sin causa justificada, a cuatro sesiones ordinarias de Cabildo en forma continua o el abandono de sus funciones por un lapso de treinta días hábiles consecutivos, sin causa justificada. | **ARTÍCULO 75.** Son causas de revocación del mandato de alguno, de algunos o de todos los miembros del Ayuntamiento:  I. La resolución condenatoria dictada por el Congreso del Estado, en juicio político instaurado en los términos de la ***Ley General de Responsabilidades Administrativas***. Serán causas específicas:  …  II. a la IV. … |
| **ARTÍCULO 77.** El procedimiento para decretar la suspensión o revocación del mandato de alguno o de algunos de los miembros del Ayuntamiento o Consejo Municipal, se sujetará a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales y por la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila. | **ARTÍCULO 77.** El procedimiento para decretar la suspensión o revocación del mandato de alguno o de algunos de los miembros del Ayuntamiento o Consejo Municipal, se sujetará a lo dispuesto por la ***Ley General de Responsabilidades Administrativas***. |
| **ARTÍCULO 80.** El Congreso del Estado sólo podrá declarar que un ayuntamiento ha desaparecido, cuando éste se haya desintegrado o cuando ya no sea posible el ejercicio de sus funciones de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Federal y en la local del Estado, siendo causas específicas:  I. Que la mayoría de sus integrantes incurran en violaciones graves y reiteradas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Constitución Política del Estado.  II. La ausencia de la mayoría de los integrantes, tanto propietarios como suplentes, de manera que no se pueda integrar el Ayuntamiento.  III. La renuncia de la mayoría de sus integrantes y que no pueda integrarse el Ayuntamiento con los suplentes. La renuncia deberá ser calificada por el Congreso del Estado.  IV. La suspensión o revocación, por el Congreso del Estado, en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza y de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, de la mayoría de los integrantes de un Ayuntamiento, y que éste no pueda integrarse con los suplentes.  V. Por actos u omisiones de los integrantes del Ayuntamiento o Consejo Municipal que provoquen una situación grave y permanente que impida el ejercicio de las funciones del Ayuntamiento o Consejo Municipal, conforme con el orden constitucional federal o local. | **ARTÍCULO 80.** El Congreso del Estado sólo podrá declarar que un ayuntamiento ha desaparecido, cuando éste se haya desintegrado o cuando ya no sea posible el ejercicio de sus funciones de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Federal y en la local del Estado, siendo causas específicas:  I a la III. …  IV. La suspensión o revocación, por el Congreso del Estado, en los términos de la ***Ley General de Responsabilidades Administrativas***, de la mayoría de los integrantes de un Ayuntamiento, y que éste no pueda integrarse con los suplentes.  V. … |
| **ARTÍCULO 133.** Son facultades y obligaciones del Contralor Municipal:  I. Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación del ejercicio del gasto público municipal, fiscalizando el ingreso y su congruencia con el presupuesto de egresos.  II. Vigilar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado y aplicarla en los casos que proceda.  III. Aplicar las normas y criterios de control y evaluación, vigilando su cumplimiento.  IV. Establecer las bases generales para la realización de auditorías, inspecciones y evaluaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal y paramunicipal.  V. Designar a los auditores externos y proponer al Ayuntamiento, en su caso, a los Comisarios de los organismos descentralizados y entidades paramunicipales.  VI. Vigilar que los ingresos municipales sean enterados a la tesorería municipal conforme con los procedimientos contables y disposiciones legales aplicables.  VII. Dictaminar los estados financieros de la tesorería municipal y verificar sean remitidos al Congreso del Estado los informes trimestrales de la cuenta pública municipal.  VIII. Vigilar que los recursos federales y estatales asignados a los ayuntamientos se apliquen en los términos estipulados en las leyes, reglamentos, convenios, programas y manuales respectivos.  *(REFORMADA, P.O. 8 DE FEBRERO DE 2008)*  IX. Coordinarse con el Auditor Superior del Estado y con el órgano de control del Ejecutivo del Estado, para el cumplimiento de sus funciones.  X. Intervenir, para efectos de verificación y control, en los contratos que emanen de la celebración de convocatorias y licitaciones, y vigilar el cumplimiento de dichos contratos.  XI. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas de la Administración Pública Municipal.  XII. Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias.  *(REFORMADA, P.O. 1 DE JULIO DE 2005)*  XIII. Participar en la entrega-recepción de las unidades administrativas de las dependencias, entidades y fideicomisos públicos municipales y ejercer las atribuciones que le otorga la Ley de Entrega Recepción del Estado y Municipios.  XIV. Supervisar el inventario general de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio, verificando los datos de identificación y el destino de los mismos.  *(REFORMADA, P.O. 04 DE FEBRERO DE 2020)*  XV. Verificar que los Servidores Públicos Municipales cumplan con su obligación de presentar la declaración de situación patrimonial; así como el manifiesto de no conflicto de intereses de los proveedores y contratistas del municipio, verificando su contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes en los términos de las leyes aplicables.  Vigilando también que los servidores públicos municipales con cargos directivos, así como los integrantes del Cabildo no intervengan o participen indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor público, cuando tengan interés personal, familiar o de negocios.  XVI. Conocer e investigar los actos, omisiones y conductas de los servidores públicos para fincar responsabilidades administrativas, aplicando las sanciones correspondientes en los términos que las leyes señalen y, en su caso, turnar al Síndico los asuntos cuyos hechos se consideren constitutivos de delito a fin de que éste presente la denuncia y/o querella correspondiente ante el Ministerio Público, presentándole para tal efecto la colaboración que se le requiera.  XVII. Evaluar y coordinar los programas de modernización y mejoramiento de la Administración Pública Municipal.  XVIII. Proponer las medidas tendientes a la simplificación de los trámites y procedimientos internos de la administración pública municipal, así como los que ante el propio contralor deban efectuar los particulares con arreglo a las leyes.  XIX. Las demás que le señalen este código, las leyes y reglamentos aplicables, así como las que le asignen el Ayuntamiento y el Presidente Municipal. | **ARTÍCULO 133.** Son facultades y obligaciones del Contralor Municipal:  I. …  II. Vigilar el cumplimiento de la ***Ley General de Responsabilidades Administrativas*** y aplicarla en los casos que proceda.  III. a la XIV. …  XV. Verificar que los Servidores Públicos Municipales cumplan con su obligación de presentar la declaración de situación patrimonial en los términos de la ***Ley General de Responsabilidades Administrativas***. |

Es por todo lo anteriormente expuesto que quienes integramos esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, coincidimos con el iniciador de la presente propuesta de reforma, en la necesidad de modificar diversos artículos del Código Municipal, con el fin de remitirlos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el objeto de contribuir en el avance de un eficaz ejercicio de la gestión pública, a través de una legislación coherente y armónica adecuada al marco jurídico general.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se reforma el artículo 50, el segundo párrafo del artículo 68, las fracciones I y V del artículo 74, la fracción II y el primer párrafo de la fracción XV del artículo 133, del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 50.** Los servidores públicos municipales serán responsables de los delitos o faltas administrativas que cometan en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, en atención a lo dispuesto en laLey General de Responsabilidades Administrativasy demás leyes aplicables*.* El municipio será responsable solidario por los daños causados por sus servidores con motivo del ejercicio de sus atribuciones, en los términos del Código Penal y del Código Civil para el Estado de Coahuila.

**ARTÍCULO 68.** …

Durante la validación y verificación, el servidor público que reciba podrá solicitar al servidor público que entregó, la información o aclaraciones adicionales que considere necesarias, tal solicitud deberá hacérsele por escrito y notificada en el domicilio que tenga registrado, el requerido deberá comparecer personalmente o por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de la notificación a manifestar lo que corresponda, en caso de no comparecer o no informar por escrito dentro del término concedido, el servidor público entrante deberá notificar tal omisión a la Contraloría Municipal para que proceda de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Igualmente, las irregularidades encontradas deberán hacerse del conocimiento de la Contraloría Municipal.

…

**ARTÍCULO 74.** …

I. Incurrir en las responsabilidades administrativas establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

II. a IV. …

V. La declaración de procedencia en materia de responsabilidad política, en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales, hasta en tanto culmine el proceso penal correspondiente.

**ARTÍCULO 133.** …

I. …

II. Vigilar el cumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y aplicarla en los casos que proceda.

III. a XIV. …

XV. Verificar que los Servidores Públicos Municipales cumplan con su obligación de presentar la declaración de situación patrimonial en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás ordenamientos aplicables.

…

XVI. a XIX. …

**ARTÍCULO TRANSITORIO**

**ÚNICO.-** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 23 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y**  **FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman diversas disposiciones del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 17 del mes junio del año 2020, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman diversas disposiciones del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Quela Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman diversas disposiciones del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*Uno de nuestros principales deberes como legisladores es estar continuamente analizado y perfeccionando el marco normativo local, lo que nos obliga a estar atentos sobre los cambios sociales, económicos, culturales y por su puesto a las reformas Constitucionales Federales y los deberes legislativos que de las mismas emanan.*

*En el año 2009 se expidió la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ordenamiento reglamentario del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, en esta materia.*

*Otras importantes reformas que incidieron en materia de seguridad pública, en nuestro país fue la reforma en materia penal en el año 2008, mediante la cual se transformó el Sistema Penal, a uno acusatorio y oral, y en el año 2011 la reforma en materia de derechos humanos.*

*En este contexto, en el año 2016, se emitió una nueva Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, tomándose como base tal y como se expresa en la exposición de motivos “la ley modelo del sistema estatal de seguridad de las entidades federativas, propuesto por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, sin dejar a un lado aquellas disposiciones que son de probada eficiencia y han permitido alcanzar resultados en nuestro estado”.*

*En este mismo Decreto, en el que se creó la Ley estatal, se reformaron diversos artículos del Código Municipal, como fue el caso de los artículos 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 222, la fracción III del 224, 226 y 377 a efecto de hacerlos congruentes con las nuevas bases constitucionales, generales y legales en la materia. No obstante ello, observamos que algunos otros artículos de este Código, concernientes a la materia de seguridad pública no sufrieron modificación alguna, aun y cuando esto era necesario.*

*En este sentido, toda vez que es indispensable evitar antinomias y lagunas normativas, presentamos esta iniciativa con la finalidad de armonizar diversas disposiciones del Código Municipal con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y con la Ley Estatal en la materia.*

**TERCERO.-** Quienes integramos la presente comisión dictaminadora efectuamos el estudio y análisis de la iniciativa, verificando que la misma tiene por objeto el de modificar el artículo 123 del Código Municipal para armonizarlo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y con la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.

En este sentido, por lo que hace a su contenido, se plantea la reforma de la fracción tercera del artículo referido para establecer que, “[*c]uando así lo determine el Ayuntamiento, el modelo de seguridad adoptado podrá ser de una naturaleza jurídica distinta a la de dependencia centralizada; en aquellos municipios cuya capacidad presupuestaria y operativa lo permita conforme a lo previsto en este Código y en las demás disposiciones aplicabl*es”.

El promovente encuentra motivación para su propuesta en el hecho de que *“[e]n el año 2006 se expidió la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ordenamiento reglamentario del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública*, *así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, en esta materia.*

Asimismo en el año 2016, se emitió una nueva Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza,tomándose como base tal y como se expresa en la exposición de motivos *“la ley modelo del sistema estatal de seguridad de las entidades federativas, propuesto por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, sin dejar a un lado aquellas disposiciones que son de probada eficiencia y han permitido alcanzar resultados en nuestro estado”*. “*En este mismo Decreto, en el que se creó la Ley estatal, se reformaron diversos artículos del Código Municipal, como fue el caso de los artículos 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 222, la fracción III del 224, 226 y 377 a efecto de hacerlos congruentes con las nuevas bases constitucionales, generales y legales en la materia. No obstante ello, observamos que algunos otros artículos de este Código, concernientes a la materia de seguridad pública no sufrieron modificación alguna, aun y cuando esto era necesario”.* Como es el caso del artículo 123 de este ordenamiento.

Una vez analizado lo anterior quienes dictaminamos, previo a pronunciarnos sobre la procedencia de la propuesta revisamos las bases constitucionales, las disposiciones establecidas en la Ley General y en la ley local.

En este sentido se observa que la materia de seguridad, por lo que hace a los municipios encuentra fundamento en los artículos 21 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos que disponen lo siguiente:

***Artículo 21.*** *La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.*

*El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.*

*La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.*

*Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.*

*Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.*

*Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso.*

*El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.*

*El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.*

***La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.***

*Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público* ***y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:***

***a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.***

***b)*** *El establecimiento de un sistema nacional de información en seguridad pública a cargo de la Federación al que ésta, las entidades federativas y los Municipios,* ***a través de las dependencias******responsables de la seguridad pública****, proporcionarán la información de que dispongan en la materia, conforme a la ley. El sistema contendrá también las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el sistema.*

***c)*** *La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.*

***d)*** *Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública.*

***e)*** *Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.*

*La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, cuyos fines son los señalados en el párrafo noveno de este artículo, la coordinación y colaboración con las entidades federativas y Municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la Nación.*

*La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones.*

*La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y de las demás instituciones policiales se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior, y en lo conducente a la perspectiva de género.*

***Artículo 115.*** *Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo,**democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:*

***I.*** *Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.*

*Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.*

*Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos* ***(sic DOF 03-02-1983)*** *alegatos que a su juicio convengan.*

*Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley.*

*En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los Concejos Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos Concejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores;*

***II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.***

***Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.***

*El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:*

***a)*** *Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;*

***b)*** *Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento;*

***c)*** *Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de esta Constitución;*

***d)*** *El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y*

***e)*** *Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes.*

*Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del estado, o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores;*

***III.*** *Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:*

***a)*** *Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;*

***b)*** *Alumbrado público.*

***c)*** *Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;*

***d)*** *Mercados y centrales de abasto.*

***e)*** *Panteones.*

***f)*** *Rastro.*

***g)*** *Calles, parques y jardines y su equipamiento;*

***h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e***

***i)*** *Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.*

*Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.*

*Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste,* ***de manera directa o a través del organismo correspondiente,*** *se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio;*

*Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley.*

***IV.*** *Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:*

***a)*** *Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.*

*Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.*

***b)*** *Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.*

***c)*** *Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.*

*Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de las entidades federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.*

*Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.*

*Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.*

*Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;*

***V.*** *Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para:*

***a)*** *Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;*

***b)*** *Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;*

***c)*** *Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios;*

***d)*** *Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;*

***e)*** *Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;*

***f)*** *Otorgar licencias y permisos para construcciones;*

***g)*** *Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;*

***h)*** *Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e*

***i)*** *Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.*

*En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios. Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en los Municipios estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales, sin perjuicio de los convenios que puedan celebrar en términos del inciso i) de esta fracción;*

***VI.*** *Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia.*

***VII.******La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público.***

*El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o transitoriamente;*

***VIII.*** *Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios.*

*Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Artículo 123 de esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias.*

***IX.*** *Derogada.*

***X.*** *Derogada.*

Como se desprende de la lectura de estas disposiciones de la Constitución Federal, la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

Esta tarea gubernamental conforme a lo previsto en la Carta Magna exige un alto grado de coordinación entre las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, mismos que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por lo que hace particularmente a la seguridad pública a cargo de los municipios el artículo 115, la reconoce dentro del catálogo de servicios públicos y se prevé que la misma quedará sujeta a lo dispuesto por la Ley Estatal en la Materia.

En este contexto resulta imprescindible, para el estudio del tema que nos ocupa remitirnos a la Ley General del Sistema Nacional.

Así del análisis de sus disposiciones encontramos que efectivamente se desprende que los municipios podrán dar una naturaleza jurídica distinta a la de dependencia centralizada a sus instituciones de seguridad o cuerpos de policía, citamos a manera de ejemplo el artículo 27:

***Artículo 27.-*** *La Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública estará integrada por los titulares de las dependencias encargadas de la Seguridad Pública de la Federación, las entidades federativas y será presidida por el titular de la Secretaría, quien se podrá auxiliar del Comisionado Nacional de Seguridad.*

*La Conferencia contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el Presidente de la misma.*

*Los titulares de las* ***dependencias u órganos******en que se integren los cuerpos de policía de los municipios, podrán participar en la Conferencia, de conformidad con las reglas que la misma establezca.***

*El Comisionado Nacional de Seguridad será invitado permanente de la Conferencia, quien suplirá las ausencias del Secretario de Gobernación*

Este mismo ejercicio se replicó en la Ley local, encontrando disposiciones como los artículos 54 y 60, que señalan lo siguiente:

***Artículo 54. Integración***

*La Conferencia Estatal estará integrada por:*

***I.*** *El Secretario de Seguridad, quien la presidirá;*

***II.*** *El Subsecretario de Operación Policial, quien será el secretario técnico;*

***III.******Los Directores de seguridad pública municipal u órgano equivalente;***

***IV.*** *El Secretariado Ejecutivo.*

*Se podrá invitar a la Conferencia Estatal a otras instituciones de seguridad pública federal o estatal, personas, instituciones y representantes de la sociedad civil que por los temas a tratar, puedan exponer conocimientos y experiencias para el cumplimiento de los objetivos de la seguridad pública y procuración de justicia. Dicha participación será con carácter honorífico.*

***Artículo 60. Integración***

*Los Consejos Municipales estarán integrados por las personas titulares de:*

***I.*** *Presidencia Municipal, quien lo presidirá;*

***II.*** *Secretaría del Ayuntamiento, quien fungirá como secretario técnico;*

***III.*** *Regiduría de Seguridad Pública;*

***IV.*** *Tesorería;*

***V.******Dirección de Seguridad Pública Municipal u órgano equivalente; y***

***VI.*** *Cinco representantes de la sociedad civil de la comunidad de que se trate.*

*Los representantes de la sociedad civil, serán electos por el Cabildo del Municipio; por un periodo de 4 años, mismo que deberá de ejercerse en dos periodos constitucionales inmediatos, de tal manera que se permita la continuidad de las acciones. Los requisitos para ser representante de la sociedad civil, son los previstos por las fracciones I, II, V y VIII del artículo 30. La participación de los representantes de la sociedad civil es de carácter honorífico.*

*Los Consejos Municipales podrán invitar a representantes de las instituciones de seguridad pública de la entidad y de la Federación o de otras dependencias estatales o federales relacionadas con la seguridad pública, así como a personas, instituciones y representantes de la sociedad civil que por sus conocimientos y experiencia puedan contribuir al cumplimiento de los objetivos y fines de la seguridad pública. Su participación será con carácter honorífico.*

Así una vez agotado el estudio y análisis del marco normativo vigente, los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, coincidimos en la necesidad de armonizar el Código Municipal con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y con la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, pues dicho proceso es un deber jurídico emanado de la Constitución Federal y de la Norma General, indispensable para garantizar certeza, un mayor entendimiento del sistema jurídico y facilitar su cumplimiento.

Por último, dado el objeto de la reforma quienes dictaminamos coincidimos en que aunado a la modificación propuesta al artículo 123, existen otros artículos del Código Municipal que también deben reformarse como es el caso de los artículos 130, 131 y 210, por lo que se incluyen en el proyecto de Decreto contenido en el presente dictamen.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente proyecto de:

**D E C R E T O**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se reforman la fracción III del artículo 123, el artículo 130, el primer párrafo del artículo 131 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 210 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 123.** …

I. **…**

II. **…**

III. Dirección de Policía Preventiva Municipal. Cuando así lo determine el Ayuntamiento, la función de seguridad pública podrá proveerse a través de órganos de naturaleza jurídica distinta a la de dependencia centralizada; en aquellos municipios cuya capacidad presupuestaria y operativa lo permita conforme a lo previsto en este Código y en las demás disposiciones aplicables.

IV. **…**

**…**

**ARTÍCULO 130.** El titular de la Dirección de Policía Preventiva Municipal, u órgano equivalente, deberá ser persona de reconocida honorabilidad, no haber sido condenado por delito doloso o cuya sanción hubiere sido pena privativa de la libertad, además de las señaladas en este y otros ordenamientos legales aplicables.

**ARTÍCULO 131.** El Director de la Policía Preventiva Municipal, u órgano equivalente, tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

1. a XIII. **…**

**ARTÍCULO 210.** **…**

Cuando así lo determine el Ayuntamiento, la función de seguridad pública podrá proveerse a través de órganos de naturaleza jurídica distinta a la de dependencia centralizada; en aquellos municipios cuya capacidad presupuestaria y operativa lo permita conforme a lo previsto en este Código y en las demás disposiciones aplicables.

**TRANSITORIO**

**ÚNICO. -** El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 23 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación al oficio enviado por el Prof. Gilberto López Estrello, Secretario del R. Ayuntamiento de Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual insta se dé trámite correspondiente para que se realice la designación de quien habrá de sustituir a la C. Mariela Marín Contreras, al cargo de Octava Regidora de dicho Ayuntamiento; y

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 10 del mes de junio de 2020, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, el oficio enviado por el Prof. Gilberto López Estrello, Secretario del R. Ayuntamiento de Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual insta se dé trámite correspondiente para que se realice la designación de quien habrá de sustituir a la C. Mariela Marín Contreras, al cargo de Octava Regidora de dicho Ayuntamiento.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, el día 15 de junio del mismo año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, el oficio antes mencionado y sus anexos, para su estudio y dictamen; y

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión es competente para emitir el presente dictamen, lo anterior de acuerdo a lo previsto por los artículos 88 y 90 fracción VI, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO.-** Que el día 15 de enero de 2019 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila, la lista de integración de Cabildos de los Ayuntamientos electos que estarían en funciones durante el periodo de 2019-2021.

**TERCERO.-** Que conforme a la publicación mencionada, la C. Mariel Marín Contreras fue electo para desempeñar el cargo de Octava Regidor del R. Ayuntamiento de Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza.

**CUARTO.-** Que conforme a lo dispuesto por el artículo 67 fracciones XI, XVIII y XIX, en relación con el 158-U fracción I numeral 8 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y el artículo 90 fracciones V y VI de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es facultad de este Congreso, conceder licencias a los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos y nombrar a quienes deban suplir las faltas temporales o absolutas de los mismos.

**QUINTO.-** Que esta Comisión realizo el análisis del expediente formado con motivo del oficio enviado por el Prof. Gilberto López Estrello, Secretario del R. Ayuntamiento de Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual insta se dé trámite correspondiente para que se realice la designación de quien habrá de sustituir a la C. Mariela Marín Contreras al cargo de Octava Regidora de dicho Ayuntamiento.

**SEXTO.-** Que en fecha 14 de febrero del presente año, mediante Decreto Número 551, la Diputación Permanente del Congreso del Estado, otorgó una licencia mayor a quince días y por tiempo indefinido a la C. Mariela Marín Contreras, al cargo de Octava Regidora de Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza, por lo que le corresponde al Pleno del Congreso realizar la designación de quien habrá de cubrir el cargo por el tiempo que le fue otorgada la licencia, conforme a lo previsto en los artículos 58 y 59 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza y en el artículo 21 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**SÉPTIMO.-** Que la designación de quien habrá de fungir como Octava Regidora del Ayuntamiento, durante el período de tiempo que dure la licencia otorgada, se realizará por aquellos que figuren en la lista de suplentes, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 158-U fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila, el artículo 21 numeral 4 del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, y de los artículos 58 y 59 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que a la letra dicen:

***CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA***

*Artículo 158-U. Los Ayuntamientos tendrán las competencias, facultades y obligaciones siguientes:*

*I. En materia de gobierno y régimen interior:*

*1. Formular, aprobar y publicar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones; el Reglamento de Seguridad Pública Municipal deberá ser ajustado a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y a las Leyes federales y estatales aplicables.*

*2. Intervenir en el proceso legislativo constitucional u ordinario de conformidad con los artículos 59, 62 y 196 de esta Constitución.*

*3. Promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación las controversias constitucionales a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.*

*4. Promover ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad locales a que se refiere el artículo 158 de esta Constitución.*

*5. Formular, aprobar, controlar y evaluar el Plan de Desarrollo Municipal, con arreglo a la ley.*

*6. Nombrar entre los munícipes, comisiones permanentes y temporales, para la atención de los asuntos públicos, de conformidad con lo que establezca la ley de la materia y la reglamentación respectiva.*

*7. Actualizar la información demográfica, económica y social que coadyuve a la mejor toma de decisiones de gobierno y colaborar con las autoridades federales y estatales en la formación de censos y estadísticas de toda índole.*

*8. Conceder licencias hasta por quince días para separarse en lo individual de sus cargos, al presidente municipal, síndicos y regidores, En el caso de que las ausencias excedan de los plazos señalados, se requerirá autorización del Congreso del Estado.*

*9. Dictar, con el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos, las resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal, con arreglo a la ley.*

*10. Aprobar, con el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos, los actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al período del Ayuntamiento, con arreglo a la ley.*

*11. Integrar un Comité Municipal de Seguridad Pública y organizar rondines de seguridad y tranquilidad social. Para tal efecto, el presidente municipal aprobará la designación y el funcionamiento del personal que integre los rondines de seguridad pública, los que tendrán el carácter de policía auxiliar.*

*12. Turnar al Congreso del Estado o a la Diputación Permanente, en su caso, las renuncias y las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los miembros de los ayuntamientos y de los Concejos Municipales, para que se resuelva sobre las mismas, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y demás disposiciones aplicables. En estos casos, el Ayuntamiento respectivo deberá dar aviso al Ejecutivo del Estado.*

***…***

***CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA***

***Artículo 21.***

1. *Cuando se declare nula una elección o los integrantes de la fórmula triunfadora resultaren inelegibles, la convocatoria para la elección extraordinaria deberá emitirse dentro de los noventa días siguientes a la declaración de la misma.*
2. *En el caso de vacantes de miembros del Congreso, electos por el principio de mayoría relativa, el Instituto convocará a elecciones extraordinarias en un plazo de noventa días siguientes a la notificación de la diputación vacante.*
3. *Las vacantes de miembros del Congreso electos por el principio de representación proporcional deberán ser cubiertas por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido.*
4. *Las vacantes de presidentes, regidores y síndicos se cubrirán en la forma en que establece la Constitución y el Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza. Las de los regidores de representación proporcional se cubrirán por aquellos candidatos del mismo partido político que le sigan en el orden de la lista respectiva, después de habérsele asignado los que le hubieren correspondido.*

***CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA***

***ARTÍCULO 58.*** *En caso de que no se presenten a rendir protesta el síndico y los regidores electos, el Congreso mandará llamar a quienes figuren* **en la lista de suplentes***, y de entre éstos designará a quienes deban de cubrir las vacantes.*

*Cuando un regidor de representación proporcional no se presente a tomar posesión de su cargo, el Congreso del Estado mandará llamar al que siga en el orden dentro de la lista de preferencia de regidores que fue propuesta por el partido político o coalición de que se trate.*

***ARTÍCULO 59.*** *En caso de que la vacante se presente con posterioridad a la toma de protesta del presidente, síndico o alguno de los regidores de un ayuntamiento, se estará a lo dispuesto en los artículos anteriores.*

**OCTAVO.-** Que teniendo a la vista la lista de suplentes, publicada en el Periódico Oficial del Estado en fecha 15 de enero de 2019, corresponde ocupar el cargo a la C. María Concepción Favela Salazar, en virtud del lugar que ocupa en el orden dentro de dicho listado.

En virtud de lo anterior, esta Comisión somete a su consideración, discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Se designa a la C. María Concepción Favela Salazar, para desempeñar las funciones de Octava Regidora del R. Ayuntamiento de Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza, en sustitución de la C. Mariela Marín Contreras, cargo que deberá desempeñar a partir de que rinda la protesta de ley, por el periodo de tiempo que dure la licencia otorgada.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Comuníquese en forma oficial al R. Ayuntamiento del Municipio de Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza, la designación del C. María Concepción Favela Salazar, a efecto de que se le llame a rendir protesta y se incorpore a sus funciones como Octava Regidora del Ayuntamiento referido.

**ARTÍCULO TERCERO.-** Comuníquese lo anterior al Ejecutivo del Estado, para los efectos procedentes.

**T R A N S I T O R I O**

**ÚNICO.** Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 23 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad y de Desarrollo Urbano, Infraestructura, Transporte y Movilidad Sustentable de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adicionan y modifican diversas disposiciones del Código Municipal, a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, todas del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Emilio Alejandro deHoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila.

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 6 del mes de noviembre del año 2019, se acordó turnar a estas Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad y de Desarrollo Urbano, Infraestructura, Transporte y Movilidad Sustentable, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a estas Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad y de Desarrollo Urbano, Infraestructura, Transporte y Movilidad Sustentable, la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adicionan y modifican diversas disposiciones del Código Municipal, a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, todas del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Emilio Alejandro deHoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila., y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que estas Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad y de Desarrollo Urbano, Infraestructura, Transporte y Movilidad Sustentable, con fundamento en los artículos 90, 99,109, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, son competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adicionan y modifican diversas disposiciones del Código Municipal, a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, todas del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Emilio Alejandro deHoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S***

“*El envejecimiento y la urbanización de la población son dos tendencias globales que, juntas, constituyen fuerzas importantes que caracterizan el siglo XXI. A medida que las ciudades crecen, su proporción de residentes de 60 años de edad y más va en aumento. Las personas mayores son un recurso para sus familias, comunidades y economías en entornos de vida sustentadores y facilitadores.*

*La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el envejecimiento activo constituye un proceso que dura toda la vida y es afectado por varios factores que, por sí solos y en conjunto, favorecen la salud, la participación y la seguridad en la vida de los adultos mayores. Basada en este enfoque de la OMS hacia el envejecimiento activo, genera una guía para lograr que las ciudades se comprometan a ser más amigables con la edad, con el fin de aprovechar el potencial que representan las personas de edad para la humanidad.*

*Una ciudad amigable con los adultos mayores alienta el envejecimiento activo mediante la optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen y fortalecen el respeto y la promoción de sus derechos.*

*En términos prácticos, una ciudad amigable con la edad adapta sus estructuras y servicios para que sean accesibles e incluyan a las personas mayores con diversas necesidades y capacidades.*

*El mundo está envejeciendo rápidamente, para el año 2050 el número de personas de 60 años de edad y más como proporción de la población global se habrá duplicado, de 11% en el 2006 a 22%. Para entonces, por primera vez en la historia de la humanidad, habrá más personas mayores que niños (de 0–14 años de edad) en la población. Los países en desarrollo están envejeciendo a un ritmo mucho mayor que los países desarrollados, dentro de cinco décadas, poco más del 80% de las personas mayores del mundo vivirán en países en desarrollo, frente a 60% en el 2005.[[20]](#footnote-20)*

*IMSERSO es un organismo afiliado a la OMS, que coordina la Red de Ciudades y Comunidades amigables con las Personas Mayores. En la actualidad tiene 705 ciudades afiliadas en el mundo tales como La plata, Argentina, Río de Janeiro, Brasil, San José, Costa Rica, Londres, Suiza, solo por mencionar algunas. España es el país con más ciudades adheridas al proyecto, 156, en tanto que México tiene sólo una, que es Guadalajara.*

*De acuerdo al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) de las 112 millones 336 mil 528 personas que conforman el total de la Población en México, 10 millones 055 mil 379 personas tienen 60 años y más, y las Entidades con mayor proporción de personas adultas mayores son la Ciudad de México con el 11.3%, Oaxaca 10.7% y Veracruz con 10.4%.*

*Asimismo, los Estados con menor proporción de personas adultas mayores son Baja California con 6.8%, Baja California Sur con 6.6% y Quintana Roo con 4.8%.*

*Ahora bien, el INAPAM señala que la esperanza de vida a partir de los 60 años es de 22.9 años para las mujeres y de 20.9 años para los hombres, es decir, se prevé que las mujeres alcancen la edad de 83 años y los hombres de 81 años.*

*En proyecciones realizadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), éste señala que la población de México completará la última fase de la transición demográfica encaminándose a un crecimiento más reducido y a un perfil envejecido.*

*En ese sentido estima que:*

* ***La edad media pasará de 29 años en 2010 a 31 en 2020 y a 38 en 2050.***
* ***La población menor de 15 años disminuirá de 33.9 millones de personas en 2010 a 32.7 millones en 2020 y a 28.9 millones en 2050.***
* ***El grupo de adultos mayores (65 años y más), por su parte, aumentará su tamaño de 7.1 millones en 2010 a 9.8 millones en 2020 y a 23.1 millones en 2050.[[21]](#footnote-21)***

*Como todos sabemos el crecimiento urbano está asociado al desarrollo tecnológico y económico de un país, pero también a su enfoque de desarrollo social y por tanto a la atención de las personas.*

*Las ciudades, municipios y entidades de un país deben tener como prioridad en su planeación y desarrollo el mejoramiento de las condiciones de vida toda la población con un enfoque incluyente, ya que las ciudades son el centro de la actividad cultural, social y política.*

*Por tal razón las ciudades deben proveer estructuras y servicios que sostengan el bienestar y la productividad de sus residentes y particularmente de las personas mayores, que requieren de entornos de vida facilitadores y de apoyo para compensar los cambios físicos y sociales asociados al envejecimiento.*

*Una sociedad que no atiende a los abuelos y ancianos es una sociedad que no respeta los Derechos aquellos que forjaron su origen, y para evitar este descuido falta de sensibilidad, injusticia social y humana debemos seguir fortaleciendo mecanismos legales y operativos para lograr que las ciudades sean más amigables con los adultos mayores, como una respuesta necesaria y lógica para promover el bienestar y el aporte de los residentes urbanos de mayor edad.*

*Ahora bien, como lo marca la Ley de los derechos de adultos mayores, estos son, hombres y mujeres de 60 años o más, mientras que una persona con discapacidad es aquella que padece deficiencias, limitaciones a la actividad y restricciones a la participación, refiriéndose a los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una condición de salud) y los factores contextuales de ese mismo individuo (factores personales y ambientales), pero ésta se puede presentar en cualquier edad. Es importante diferenciar ambas definiciones para efectos de esta propuesta.*

*Recordemos lo dispuesto por nuestra Constitución Política Mexicana en su artículo Primero, que establece que todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación física, orientación sexual, tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades y asentamientos humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivos, equitativos, justos, incluyentes, democráticos y seguros, para el ejercicio pleno de sus derechos humanos, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.*

*Aunado a ello recordemos también cada uno de los compromisos internacionales que México ha suscrito a favor de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores que se encuentran también en el rango constitucional.*

*Con todos estos antecedentes y la convicción plena de fortalecer los derechoso de los adultos mayores, el objetivo de esta iniciativa es generar las condiciones para el desarrollo de una vida digna y de calidad para nuestros adultos mayores, así como para promover entre los ciudadanos una cultura de responsabilidad y respeto a los derechos de los demás, propiciando un desarrollo urbano adecuado para respeto de nuestras normas cívicas y de convivencia.*”

**TERCERO.-** Quienes integramos esta comisión dictaminadora efectuamos el estudio y análisis del objeto y contenido de la iniciativa de reforma, verificando que la misma busca promover el desarrollo de ciudades amigables para las personas adultas mayores, es decir ciudades que *“adapt[en] sus estructuras y servicios para que sean accesibles (…) a las personas mayores con diversas necesidades y capacidades”.*

En este orden de ideas los promoventes refieren que de acuerdo a datos del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores *(INAPAM) “de las 112 millones 336 mil 528 personas que conforman el total de la Población en México, 10 millones 055 mil 379 personas tienen 60 años y más” este mismo organismo “señala que la esperanza de vida a partir de los 60 años es de 22.9 años para las mujeres y de 20.9 años para los hombres, (…) [así], se prevé que las mujeres alcancen la edad de 83 años y los hombres de 81 años”.*

Por su parte el Consejo Nacional de Población (CONAPO), estipula que *“la población de México completará la última fase de la transición demográfica encaminándose a un crecimiento más reducido y a un perfil envejecido”* estimándose lo siguiente:

* ***La edad media pasará de 29 años en 2010 a 31 en 2020 y a 38 en 2050.***
* ***La población menor de 15 años disminuirá de 33.9 millones de personas en 2010 a 32.7 millones en 2020 y a 28.9 millones en 2050.***
* ***El grupo de adultos mayores (65 años y más), por su parte, aumentará su tamaño de 7.1 millones en 2010 a 9.8 millones en 2020 y a 23.1 millones en 2050.[[22]](#footnote-22)***

En este orden de ideas, los promoventes estiman necesario impulsar medidas legislativas y sentar las bases para el diseño de políticas públicas encaminadas a responder a las necesidades de este importante grupo poblacional, para “*generar las condiciones para el desarrollo de una vida digna y de calidad para nuestros adultos mayores, así como para promover entre los ciudadanos una cultura de responsabilidad y respeto a los derechos de los demás, propiciando un desarrollo urbano adecuado para respeto de nuestras normas cívicas y de convivencia”, proponiendo la reforma de 3 ordenamientos distintos, como son el Código Municipal, la* Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Quienes conformamos la presente comisión dictaminadora una vez que hemos agotado el estudio y análisis del contenido y alcances de la iniciativa coincidimos en laimportancia de generar las condiciones necesarias para garantizar a las personas adultas mayores el goce de todos sus derechos humanos.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**PRIMERO.-** Se adiciona la fracción VIII al artículo 142 del Código Municipal del Estado de Coahuila De Zaragoza, asimismo se adiciona segundo párrafo al artículo 143 del mismo ordenamiento para quedar como sigue:

**Artículo 142.** …

I. a VII. …

VIII. Crear ciudades amigables para adultos mayores con la finalidad de generar condiciones para un envejecer activo, que promueva la movilidad segura, participación ciudadana e integración social.

**Artículo 143.** …

Previo diagnóstico que permita identificar las necesidades por cubrir de acuerdo al tipo de población con que cuenta en su territorio, deberá en todo momento considerar el establecimiento de políticas públicas que apoyen el transporte, vivienda, participación social, respeto e inclusión social, participación cívica y empleo, comunicación e información, servicios comunitarios y de salud, espacios al aire libre y edificios, para adultos mayores.

**SEGUNDO.-** Se reforma el contenido del artículo 3, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, y se adiciona la fracción V, recorriendo las subsecuentes al artículo 5 y la fracción XVII, recorriendo la subsecuente al artículo 43 del mismo ordenamiento para quedar como sigue:

**Artículo 3.** Las dependencias y entidades encargadas de la aplicación, seguimiento y vigilancia de ésta Ley, en los términos de las disposiciones conducentes, organizarán, operarán, supervisarán y evaluarán la prestación de los servicios básicos de asistencia que se proporcionen a las personas adultas mayores, así como, en los términos previstos por esta Ley, aquellos que realicen las personas físicas o morales de los sectores social y privado, para lo cual deberán, en su caso, desarrollar programas de apoyo financiero y social, adaptar la infraestructura urbana de los municipios que componen el Estado de Coahuila, así como fomentar la participación de la sociedad en acciones a favor de las personas adultas mayores.

**Artículo 5.** …

I. a IV…

V. Ciudades Amigables para adultos mayores: aquellas que alientan el envejecimiento activo mediante optimización de oportunidades de salud, participación y seguridad, a fin de mejorar la calidad de vida de las personas mientras envejecen, proporcionando la infraestructura y servicios necesarios para la población de 60 años o más.

VI.Comisión. La Comisión Multidisciplinaria de Valoración del Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores.

VII. Integración social. El conjunto de acciones que realizan dependencias y entidades de la administración pública del estatal y municipal, las familias y la sociedad civil organizada, encaminadas a modificar y superar las condiciones que impidan a las personas adultas mayores su desarrollo integral.

VIII. Género. Valores, roles, atribuciones y representaciones que la sociedad, en nuestra cultura asigna a hombres y mujeres considerando la diferencia sexual entre ellos.

IX. Geriatría. Es la especialidad médica dedicada al estudio de las enfermedades propias de las personas adultas mayores.

X. Gerontología. El estudio científico sobre la vejez y de las cualidades y fenómenos propios de la misma.

XI. Instituto. El Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores.

XII. Ley. La presente Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Coahuila de Zaragoza.

XIII. Municipios. Los del Estado de Coahuila de Zaragoza.

XIV. Personas adultas mayores. Toda persona que cuente con sesenta años o más de edad y que, por cualquier motivo, se encuentre domiciliada o en tránsito en el territorio del Estado, sea cual fuere su condición física o mental, pudiéndose encontrar en las siguientes condiciones:

a) Independientes: cuando sean totalmente aptas para desarrollar actividades físicas, mentales o ambas sin ayuda permanente.

b) Semi dependiente: cuando sus condiciones físicas y mentales aún les permitan valerse por sí mismas, aunque requieran ayuda permanente parcial o representación de terceros.

c) Dependientes absolutos: cuando sufran de una enfermedad crónica o degenerativa por la que les imposibilite valerse por sí mismos y además requieran ayuda permanente total o la canalización a alguna institución de asistencia.

e) En situación de riesgo o desamparo: cuando por problemas de salud, abandono, carencia de apoyos económicos, familiares, contingencias ambientales o desastres naturales, requieran de asistencia y protección de las autoridades estatales, municipales y/o de la sociedad civil organizada.

XV. Perspectiva de Género. Las políticas, programas y acciones cuyo propósito es la promoción y generación de condiciones de igualdad y equidad de oportunidades entre las personas.

XVI. Tanatología. Los estudios encaminados a procurar una muerte digna con cuidados, paliativos biológicos, sicológicos y sociales.

XVII. Abandono. La falta de acción deliberada o no para atender de manera integral las necesidades de una persona mayor que ponga en peligro su vida o su integridad física, psíquica o moral.

XVIII. Convivencia Familiar: ambiente paz, respeto, comprensión y cooperación que nace entre los familiares de la persona adulto mayor, con el fin único de que la persona adulta mayor ejerza su derecho de vivir en familia.

XIX. Familia: Los parientes de las personas adultas mayores por afinidad o consanguinidad, atendiendo a lo dispuesto por las reglas de parentesco estipuladas en las leyes familiares y civiles vigentes en el Estado, así como el matrimonio, pacto civil de solidaridad, concubinato, sociedad de convivencia, o cualquier otra similar.

XX. Destitución familiar: Tratamiento de indiferencia o franca hostilidad como expresión de molestia hacia las personas mayores

XXI. Desarraigo familiar: Es la negativa de cuidar a la persona mayor y que deriva en su rotación por los diferentes domicilios de hijas e hijos o la institucionalización forzosa;

XXII. Violencia contra las Personas Adultas Mayores: Cualquier acción u omisión que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.

**Artículo 43.** …

1. **a XVI. …**

XVII**.**Promover que cada uno de los municipios del Estado de Coahuila se conviertan en ciudades amigables para adultos mayores y se establezcan los mecanismos de políticas públicas que apoyen el transporte, vivienda, participación social, respeto e inclusión social, participación cívica y empleo, comunicación e información, servicios comunitarios y de salud, espacios al aire libre y edificios.

XVIII. Los demás que fueren necesarios para garantizar la atención integral de las personas adulta mayores.

**TERCERO.-** Se reforma la fracción XXII del artículo 5, el segundo párrafo del artículo 32, la fracción X del artículo 81, la fracción II del artículo 163, el artículo 174, el inciso e) de la fracción V del artículo 192, el inicio e) de la fracción V del artículo 193, el inciso d) de la fracción V del artículo 194, el inciso d) de la fracción V del artículo 195, el inciso d) de la fracción V del artículo 196, el inciso e) de la fracción V del artículo 197, el inciso e) de la fracción V del artículo 198, y el artículo 285 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 5.** …

1. **a XXI.** …

**XXII.** El rescate, desarrollo y adecuación de los espacios públicos, la infraestructura, el equipamiento y los servicios en los centros de población, para que garanticen la seguridad, libre tránsito y accesibilidad que requieren las personas con discapacidad y adultos mayores, debiendo dar cumplimiento a lo establecido en la Ley para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad y a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores,ambas del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como de las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables en esta materia.

**Artículo 32.** …

Asimismo, incluir las adecuaciones para otorgar facilidades urbanísticas y arquitectónicas conforme a las necesidades de las personas con discapacidad y para adultos mayores, debiendo contemplar las directrices a que deban someterse los proyectos de construcciones o modificaciones respectivas, debiendo observarse las disposiciones aplicables en la materia.

**Artículo 81.** …

**I.** a **IX.** …

1. La construcción y adecuación de la infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos para garantizar la seguridad, libre tránsito y accesibilidad para toda la población, estableciendo los procedimientos de consulta a entidades públicas o privadas especialistas en atención a personas con discapacidad y adultos mayores sobre las características técnicas de los proyectos;
2. …

**Artículo 163.** …

1. …
2. Los conjuntos urbanos deberán sujetarse a las normas y disposiciones en materia de accesibilidad de las personas con discapacidad y adultos mayores;
3. a **VIII.** …

**Artículo 174.** Los fraccionamientos deberán sujetarse a las normas y disposiciones en materia de accesibilidad de las personas con discapacidad y adultos mayores.

**Artículo 192.** …

**I.** a **IV.** …

**V.** …

**a)** a **d)** …

1. Guarniciones y banquetas, debiendo cumplir con las normas de diseño para facilitar la circulación de personas con discapacidad y adultos mayores;
2. a **l)** …

**Artículo 193.** …

**I.** a **IV.** …

**V.** …

**a)** a **d).** …

**e)** Guarniciones y banquetas, debiendo contar con el diseño apropiado para facilitar la circulación de personas con discapacidad y adultos mayores;

**f)** a **l)**. …

**Artículo 194.** …

**I.** a **IV.** …

**V.** …

**a)** a **c).** …

**d)** Guarniciones y banquetas, debiendo contar con el diseño apropiado para facilitar la circulación de personas con discapacidad y adultos mayores;

**e)** a **j).** …

**Artículo 195.** …

**I.** a **IV.** …

**V.** …

**a)** a **c).** …

**d)** Guarniciones y banquetas, debiendo contar con el diseño apropiado para facilitar la circulación de personas con discapacidad y adultos mayores;

**e)** a **k)** …

**Artículo 196.** …

**I.** a **IV.** …

**V.**

**a)** al **c)** …

**d)** Guarniciones y banquetas, debiendo contar con el diseño apropiado para facilitar la circulación de personas con discapacidad y adultos mayores;

**e)** a la **k)** …

**Artículo 197.** …

**I.** a **IV.** …

**V.** …

**a)** a **d)** …

**e)** Guarniciones y banquetas, debiendo contar con el diseño apropiado para facilitar la circulación de personas con discapacidad y adultos mayores;

**f)** y **g)** …

**Artículo 198.** …

**I.** a **IV.** …

**V.** …

**a)** a **d)** …

**e)** Guarniciones y banquetas, debiendo contar con el diseño apropiado para facilitar la circulación de personas con discapacidad y adultos mayores;

**f)** y **g)** …

**Artículo 285.** En las construcciones destinadas a comercio, servicios, salud, educación, cultura, recreación, deportes y en general los equipamientos públicos y privados, así como en las banquetas en las vías públicas, deberán dejarse rampas para la circulación peatonal de personas con discapacidad y adultos mayores, así como lugares especiales en los estacionamientos, conforme a las disposiciones que rigen en esta materia en el Estado.

**ARTÍCULOS TRANSITORIOS**

**PRIMERO.-** Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.-** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad y de Desarrollo Urbano, Infraestructura, Transporte y Movilidad Sustentable de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda (Coordinadora), Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza (Coordinador), Dip. María Esperanza Chapa García (Secretaria), Dip. María Eugenia Cázares Martínez, Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares, Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández,Dip. Josefina Garza Barrera (Secretaria), Dip. Juan Antonio García Villa, Dip. Jesús Berino Granados.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 23 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA (COORDINADORA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA (SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y MOVILIDAD SUSTENTABLE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA (COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA**  **(SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Finanzas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a la Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, mediante la cual se solicita reformar los Artículos Primero y Segundo y adicionar los Artículos Tercero, Cuarto y Quinto todos del Decreto 834, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 18 de abril de 2017, y abrogar los Decretos 931 y 1004 publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, número 71 y número 90 de fecha 05 de septiembre y 10 de noviembre de 2017, respectivamente, a través del cual se autorizó al Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza a celebrar con la empresa “NL TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.” un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales para Alumbrado Público, con el objeto de que se lleve a cabo el “Proyecto de Prestación de Servicios Profesionales para Alumbrado Público”.

**RESULTANDO**

**ÚNICO. -** Que, en sesión celebrada por el Pleno del Congreso del Estado de fecha 23 de abril de 2020, se dio cuenta la mencionada Iniciativa y turnada a esta Comisión de Finanzas, para su estudio y dictamen.

**CONSIDERANDOS**

**PRIMERO. -** Que esta Comisión es competente para emitir el presente dictamen, conforme a lo dispuesto en los artículos 91, 116 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO. -** Que conforme a lo dispuesto por los Artículos 67 fracción XIV y 158-U fracción V, numeral 5, de la Constitución Política del Estado, así como el Artículo 102 fracción V numeral 5 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 8 fracción III, 19 y 20 la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 23 de la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios, corresponde al Congreso Local, autorizar los montos máximos por los cuales las entidades municipales, para la contratación de financiamientos y obligaciones. Asimismo, que los Ayuntamientos tendrán la obligación de enviar al Congreso del Estado para su estudio y aprobación, los proyectos de contratación de créditos que afecten los ingresos de la administración municipal.

**TERCERO. -** Existe en el Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, la necesidad de brindar servicios públicos municipales dignos, que realmente satisfagan las demandas de los ciudadanos, y de brindar por parte del Ayuntamiento servicios que sean de alta calidad, accesibles para todos y que, estos servicios públicos municipales sean permanentes, que su costo por el mantenimiento y operación no sea gravoso para las finanzas municipales. Que conforme a lo dispuesto por los preceptos anteriormente mencionados, los Ayuntamientos están facultados para realizar las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, evaluación, aprobación, control y prestación de los diferentes Servicios Públicos; que corresponde al Congreso del Estado, autorizar las contrataciones y modificaciones aprobadas por el Ayuntamiento conforme a las leyes aplicables, en los que se garantice el pago de las obligaciones a cargo de las Entidades Públicas, con cargo a las Participaciones Federales presentes y futuras provenientes del Fondo General de Participaciones que en derecho le correspondan al municipio y/o los ingresos locales Municipales destinados como fuente y/o garantía de pago.

Por lo antes mencionado, en el mes de octubre del año 2019 este Ayuntamiento solicitó la inscripción de la obligación contratada y autorizada previamente en los decretos que antecede, enviando la solicitud de inscripción mediante el sistema del Registro Público Único, solicitud que fue rechazada ya que no cuenta en su totalidad con lo que establecen los artículos, 23, 24, 26,49 51 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, 11, 27 de la Ley de Proyectos de para Prestación de Servicios para el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, 98 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 26, 30, 42 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.

**CUARTO. -** Congruente con lo anterior y derivado que este Ayuntamiento obtuvo por parte de este H. Congreso de Estado de Coahuila de Zaragoza la autorización mediante de decreto 834 publicado en el periódico oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza número 31 de fecha 18 de abril de 2017 en el cual autoriza la celebración de un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales para Alumbrado Público de fecha 8 de mayo de 2017, derivado de una licitación pública nacional, mediante la cual se buscó la mejor oferta del mercado, siendo así la empresa ganadora NL Technologies S.A. de C.V. decreto mediante el cual se aprobó lo siguiente:

***Artículo primero. -*** *Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, por conducto de su Presidente Municipal, Tesorero Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Síndico de Mayoría a celebrar con la empresa “NL TECHNOLOGIES S.A. DE C.V. “un Contrato de proyecto para Prestación de Servicios, con el objeto de que se lleve a cabo la renovación del sistema de alumbrado público municipal por equipos con tecnología LED, por una vigencia de hasta 20 años.*

***Artículo Segundo. -*** *De acuerdo con los términos y condiciones que se establecerán en el contrato respectivo y a cambio de una contraprestación, por una vigencia de hasta 20 años contados a partir de la fecha de suscripción del contrato señalado, conforme a lo establecido por los artículos 9 al 13 de la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.*

Por lo anterior expuesto se solicita a este H. Congreso del Estado, tenga a bien considerar nuestra solicitud de modificación al Decreto 834, toda vez que este no cumple en su totalidad con los requisitos establecido en el artículo 26 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios que a la letra dice:

***Artículo 26.*** *Para la inscripción en el Registro Público Único de las Obligaciones Relacionadas con Asociaciones Público Privadas, el Solicitante Autorizado deberá proporcionar lo siguiente:*

*I…*

*II. La autorización de las Obligaciones por parte de la Legislatura Local en el que se especifique lo siguiente:*

1. ***El monto autorizado;***
2. ***El plazo máximo autorizado del proyecto;***
3. ***El destino de la Obligación, especificando el proyecto;***
4. ***En su caso, la Fuente de Pago y la contratación de una Garantía de Pago para la Obligación;***
5. ***La vigencia de la autorización. En caso de autorizaciones específicas no podrá exceder el ejercicio fiscal siguiente. De no establecer una vigencia, se entenderá que la autorización sólo se podrá ejercer en el ejercicio fiscal en el que fue aprobada, y***
6. ***Que se autorizó por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura Local, y previo análisis del destino y capacidad de pago del Ente Público a cuyo cargo estaría la Obligación. En el caso del cumplimiento del requisito de la autorización de las dos terceras partes, se deberá adjuntar el documento emitido por la Legislatura Local mediante el cual se acredite el quórum de la votación;***

*III. ..*

*IV. ..*

*V…*

*VI…*

VIII…

X…

XI…

XII…

-

-

**QUINTO. -** Que este R. Ayuntamiento, comprometido con cumplir con lo que establece el artículo 49 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que a la letra dice

***Artículo 49.-*** *El Registro Público Único estará a cargo de la Secretaría y tendrá como objeto inscribir y transparentar la totalidad de los Financiamientos y Obligaciones a cargo de los Entes Público. Los efectos del Registro Público Único son únicamente declarativos e informativos, por lo que no prejuzgan ni validan los actos jurídicos por los cuales se celebraron las operaciones relativas.*

*Los Financiamientos y Obligaciones que deberán inscribirse, de manera enunciativa mas no limitativa, son: créditos, emisiones bursátiles, contratos de arrendamiento financiero, operaciones de factoraje, garantías, instrumentos derivados que conlleven una obligación de pago mayor a un año y contratos de Asociaciones Público Privadas. Tanto las garantías, como los instrumentos derivados antes referidos deberán indicar la obligación principal o el subyacente correspondiente, con el objeto de que el Registro Público Único no duplique los registros.*

*Para efectos de los artículos 22 y 32 bis 1 del Código de Comercio, el Registro Público Único constituye un registro especia. Asimismo, en el caso de Financiamientos y Obligaciones como fuente pago o garantía de pago participaciones, aportaciones federales, ingresos o derechos de cobro distintos de las contribuciones de los Entes Públicos, la inscripción de Financiamientos o la Obligación en el Registro Público Único bastará para que se entienda inscrito el mecanismo de Fuente de Pago o Garantía correspondiente.*

Por lo anterior antes expuesto, es necesario que esta administración municipal lleve a cabo los trámites correspondientes para la inscripción de la obligación contratada.

**SEXTO.** **-** Que las características en las que fue aprobado el decreto 834 publicado en el periódico oficial número 35 de fecha 18 de abril de 2017 y el decreto 931 publicado en el Periódico Oficial número 71 de fecha 5 de septiembre de 2017, no contemplan en su totalidad, los requisitos antes mencionados a fin de poder llevar a cabo la Inscripción en el Sistema del Registro Público Único.

**SÉPTIMO. -** Que conforme a lo que establece el artículo 30 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, para la inscripción en el Registro Público Único de Financiamientos u Obligaciones que tengan como Fuente de Pago participaciones federales, el Municipio deberá establecer en el instrumento jurídico los fondos a afectar, señalando el porcentaje de Afectación de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, así mismo indicar que incluye un fideicomiso, el cual cuenta con una Afectación general para el pago del Financiamientos u Obligaciones, por lo tanto para efectos de este registro el Contrato de Mandato que se autorizó mediante el decreto 1004 publicado el Periódico Oficial número 90 de fecha 10 de septiembre de 2017 no cumple con la disposición mencionada con antelación toda vez su naturaleza jurídica no permite que este instrumento afecte Participaciones Federales como fuente y garantía de pago conforme a lo que mandata el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y el artículo 51 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Por los motivos que se exponen en los considerandos que anteceden, se estima que se reúnen los elementos de juicio necesarios para elaborar el presente dictamen y una vez cumplido lo dispuesto por los Artículos 82, 83, 88 fracción III, 91, 116, 117 y 119 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, los integrantes de la Comisión de Finanzas sometemos a consideración de este H. Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO. – SE REFORMAN** los artículos primero y segundo; y **SE** **ADICIONAN** los artículos tercero, cuarto y quinto; todos del Decreto No. 834 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en fecha 18 de abril de 2017; **SE ABROGAN** los Decretos **931** y **1004**, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 71 y número 90 de fecha 05 de septiembre y 10 de noviembre de 2017, respectivamente, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO PRIMERO. -** Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza previo análisis del destino y de la capacidad de pago del municipio por conducto de los funcionarios legalmente facultados a contratar en los términos de la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, a celebrar un contrato con la empresa “NL TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.” ganadora del proceso competitivo celebrado, la cual presentó las mejores condiciones del mercado para renovar el parque de alumbrado público, con el objeto de que se lleve a cabo el “Proyecto de Prestación de Servicios Profesionales para Alumbrado Público”, cuyo destino es Inversión Pública Productiva por un monto de hasta $480,000,000.00 (Cuatrocientos ochenta millones de pesos 00/100 M.N.), por una vigencia de hasta 20 años (240 meses), misma que se actualizará de manera anual en un porcentaje del 5.796%; aplicada a partir del décimo tercer mes y en los años subsecuentes durante los primeros nueve años (108) meses y que a partir del año 10 (mes 109) este importe tendrá una actualización anual de 2.1% (dos punto uno por ciento); de acuerdo con los términos y condiciones que deberán establecerse en el contrato correspondiente, en los términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Lo anterior observando cabalmente las disposiciones jurídicas aplicables, tanto locales como federales para lo cual la vigencia de dicha autorización se establece con un vencimiento al 31 de diciembre de 2020.

**ARTÍCULO SEGUNDO. –** Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, para que establezca como fuente de pago de las obligaciones a su cargo derivadas de la contraprestación del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales para Alumbrado Público con la empresa “NL TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.”, el porcentaje necesario y suficiente de los ingresos de libre disposición municipales, estatales o federales y enunciativamente más no limitativamente las aportaciones federales y cualquier otro recurso federal presente o futuro. Así como garantía y/o fuente de pago un porcentaje suficiente de los ingresos derivados de las Participaciones Federales presentes y futuras que en derecho le correspondan al Fondo General de Participaciones al Municipio, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. Lo anterior con la finalidad de dar certeza al Inversionista Proveedor del cumplimiento al pago de las obligaciones derivadas del Contrato de referencia.

Se autoriza a los representantes legales del R. Ayuntamiento a suscribir los instrumentos jurídicos que sean necesarios y llevar a cabo los trámites administrativos para la implementación de las afectaciones señaladas en el párrafo anterior en términos de los artículos 81, 82 y 83 y demás aplicables de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás legislación aplicable.

**ARTÍCULO TERCERO. -** Asimismo, se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, a través de sus funcionarios municipales facultados a fin de constituir un fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago para que funja como mecanismo de pago, recepción, administración, del porcentaje necesario y suficiente de las participaciones federales presentes y futuras que en derecho le correspondan al municipio provenientes del fondo general de participaciones así como los ingresos presentes y futuros provenientes de la recaudación local para dar cumplimiento a las obligaciones de pago que se autorizan, y donde la división fiduciaria de una institución financiera actué como fiduciario, incluyendo que se celebren contratos, convenios instrucciones irrevocables, convenios de tercerización, mandatos, mecanismo o cualquier instrumento jurídico que se requiera para formalizar la afectación y aportación total para cumplir con las obligaciones que se contraten. Lo anterior, con el fin de dar transparencia al destino de los recursos mediante los cuales se paguen las obligaciones derivadas del Contrato de Prestación de Servicios.

**ARTÍCULO CUARTO. -** Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, a través de sus funcionarios municipales facultados para que realicen las acciones necesarias a fin de otorgar la autorización de la partida presupuestal plurianual, para el cumplimiento del pago de las obligaciones derivadas del Proyecto de Prestación de Servicios para Alumbrado Público, con el inversionista proveedor, durante la vigencia del contrato, siempre y cuando se ajuste a las disposiciones correspondientes.

Se autoriza a los representantes legales del Ayuntamiento a llevar a cabo las acciones que sean necesarias con la finalidad de presupuestar las erogaciones para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Proyecto de Prestación de Servicios para Alumbrado Público respectivo, en las leyes de ingresos y presupuesto de egresos del municipio.

**ARTÍCULO QUINTO. –** Una vez celebrado el contrato el Ayuntamiento informará al Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, sobre los términos en que éste fue celebrado en un término no mayor a 10 días hábiles.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO. –** Se deroga el Decreto No. 931 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 71 de fecha 05 de septiembre de 2017, por lo que el R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, deberá realizar las acciones e instrumentos jurídicos necesarios para dejar sin efectos el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales para Alumbrado Público a Largo Plazo, celebrado entre el R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza y la persona moral NL Technologies S.A. de C.V. de fecha 25 de septiembre de 2017.

**SEGUNDO. –** Se deroga el Decreto No. 1004 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 90 de fecha 10 de noviembre de 2017, por lo que el R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, deberá realizar las acciones e instrumentos jurídicos necesarios para dejar sin efectos el Contrato de Mandato Especial Irrevocable celebrado entre el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, el R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza y la persona Moral NL Technologies S.A. de C.V. de fecha 27 de septiembre del 2017.

**TERCERO. –** El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**CUARTO. –** Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Congreso del Estado de Coahuila, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 23 de junio de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LXI LEGISLATURA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** |
| Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga  Coordinadora | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Gabriela Zapopan Garza Galván  Secretaria | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Verónica Boreque Martínez González | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Rosa Nilda González Noriega | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |

**DICTAMEN** de la Comisión de Presupuesto de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante la cual solicita se reforme el contenido del Segundo Párrafo del Artículo 18 de la Ley Reglamentaria del Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila, planteada por la Diputada María Eugenia Cázares Martínez, conjuntamente con las y los Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”.

**RESULTANDO**

**PRIMERO. -** Que, en sesión celebrada por el Pleno del Congreso, el día 09 del mes de octubre del año 2019, se acordó turnar la iniciativa que nos ocupa a la Comisión de Presupuesto para su estudio y, en su caso, dictamen.

**SEGUNDO. -** Que, en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Presupuesto, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante la cual solicita se reforme el contenido del Segundo Párrafo del Artículo 18 de la Ley Reglamentaria del Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila, planteada por la Diputada María Eugenia Cázares Martínez, conjuntamente con las y los Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”,y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.** Que conforme a lo dispuesto en los Artículos 82, 83, 88 fracción V, 93, 116, 117 y 119 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, los integrantes de la Comisión de Presupuesto son competentes para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.** Que, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante la cual solicita se reforme el contenido del Segundo Párrafo del Artículo 18 de la Ley Reglamentaria del Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila, planteada por la Diputada María Eugenia Cázares Martínez, conjuntamente con las y los Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

La Ley Reglamentaria del Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza, establece lo siguiente:

CAPITULO CUARTO.

DE LA INICIATIVA, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

*ARTÍCULO 17. La persona Titular del Poder Ejecutivo deberá presentar a la consideración de la Legislatura del Estado, el proyecto de Presupuesto de Egresos, a más tardar el 30 de noviembre del año anterior al del Ejercicio Fiscal que corresponda, o hasta el día 15 del mes de diciembre cuando inicie su encargo en los términos de los artículos 77 y 105 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.*

*ARTÍCULO 18.- Una vez que la Legislatura del Estado haya aprobado la Ley de Ingresos, previa la discusión de la iniciativa correspondiente, presentada por el Poder Ejecutivo de conformidad con la Constitución Política Local, se procederá al examen y estudio del proyecto de Presupuesto de Egresos, por conducto de la Comisión respectiva.*

*(ADICIONADO, P.O. 17 DE AGOSTO DE 2007)*

*En el caso de no aprobarse alguna de las leyes de ingresos, continuarán en vigor las del año inmediato anterior del municipio o municipios de que se trate, con las actualizaciones que sean pertinentes de acuerdo al índice nacional de precios al consumidor.*

De la lectura de los dispositivos de este capítulo se colige de forma evidente que se refiere a la Ley de Ingresos del Poder Ejecutivo y no a las leyes de ingresos municipales, como se dispone en el segundo párrafo del artículo 18, con reforma publicada el 17 de agosto de 2007.

Al respecto, la Constitución Política del Estado contiene la perfecta distinción del trato para las leyes de ingresos municipales y las del Estado, en los artículos que se leen:

*Artículo 67. Son atribuciones del Poder Legislativo:*

*…..*

*XXXIII. Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado, los cuales deben estar armonizados con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, discutiendo primero los ingresos que deben decretarse para cubrir el ejercicio presupuestal, tomando en cuenta, entre otros elementos, los informes de la entidad de fiscalización superior.*

*…..*

*a)….*

*b)….*

*….*

*En el caso de no aprobarse la Ley de Ingresos o el Presupuesto de Egresos del Estado, continuarán en vigor las del año inmediato anterior, con las actualizaciones que sean pertinentes de acuerdo al índice de precios al consumidor.*

*Artículo 158-P. Los Municipios administrarán libremente su hacienda conforme a las bases siguientes:*

*I….*

*II. El Congreso del Estado discutirá y aprobará las leyes de ingresos de los Municipios, en los términos de las disposiciones aplicables. La deuda pública municipal se sujetará a los principios que establece esta Constitución y demás disposiciones aplicables;*

*(ADICIONADO P.O. 17 DE AGOSTO DE 2007)*

*En el caso de no aprobarse alguna de las leyes de ingresos, continuarán en vigor las del año inmediato anterior del municipio o municipios de que se trate, con las actualizaciones a que se refiere el tercer párrafo de la fracción XXXIII del artículo 67 de esta Constitución.*

Como se aprecia, por simple error, el legislador colocó como segundo párrafo del artículo 18 de la Ley Reglamentaria del Presupuesto de Egresos del Estado el que se refiere a las leyes de ingresos municipales, contemplado en el artículo 158-P de la Constitución local, cuando, debió ser el tercer párrafo del inciso b) de la fracción XXXIII del artículo 67 del mismo ordenamiento.

**TERCERO.** Esta Comisión de Presupuesto estima que a la presente Iniciativa con proyecto de decreto que nos ocupa, representa una acción que coadyuva a una mejor disposición jurídica, dentro de la Ley Reglamentaria del Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza y contribuye a homologar la mencionada Ley, con lo estipulado en el Artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Por los motivos que se exponen en los considerandos que anteceden, se estima que se reúnen los elementos de juicio necesario para elaborar el presente dictamen y una vez cumplido lo dispuesto por los Artículos 82, 83, 88 fracción V, 93, 116, 117 y 119 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, los integrantes de la Comisión de Presupuesto sometemos a consideración de este H. Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO:** Se reforma el segundo párrafo del Artículo 18 de la Ley Reglamentaria del Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza; para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 18.-** …

…

En el caso de no aprobarse la Ley de Ingresos o el Presupuesto de Egresos del Estado, continuarán en vigor las del año inmediato anterior, con las actualizaciones que sean pertinentes de acuerdo al índice de precios al consumidor.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.** Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 29 de junio de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO DE LA LXI LEGISLATURA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** |
| Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor. Coordinador | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda  Secretaria | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Juan Carlos Guerra López Negrete. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Blanca Eppen Canales. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Jesús Andrés Loya Cardona | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. José Benito Ramirez Rosas | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |

**DICTAMEN** de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo al Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 169, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, para el efecto de suprimir de dicho texto lo relativo a que se hablara hasta tres oradores en pro y otros tres en contra para hacer comentarios, al momento de la lectura de una iniciativa, planteada por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del “Partido Acción Nacional”.

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO. -** Que en la sesión celebrada el día 13 de Mayo de 2020, efectuada dentro del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año Legislativo del Congreso del Estado, se acordó turnar a esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por parte de la mesa directiva del Congreso del Estado, el Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 169, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO. -** Que en cumplimiento a dichos acuerdos, la Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado turnó a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, el Proyecto de Decreto a que se ha hecho referencia, para los efectos procedentes.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO. -** Que esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, es competente para emitir el presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 82, 88 fracción I, 89, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO.-** Las reformas propuestas fueron analizadas y consensuadas por las y los integrantes de esta Comisión, llegando a la conclusión que lo que se busca con esta reforma es un cambio de forma en el procedimiento legislativo contenido en el artículo 169 de la Ley Orgánica que rige los trabajos de la Asamblea Legislativa, para el efecto de suprimir de dicho texto, lo relativo a que se hablara hasta tres oradores en pro y otros tres en contra, para hacer comentarios, al momento de la lectura de una iniciativa, en los términos y condiciones en que expresamente lo funda y motiva su presentante.

Se llega a esa determinación, en atención a que el ponente de la iniciativa en comento sustenta su planteamiento en las siguientes consideraciones, “… conforme a las disposiciones constitucionales antes referidas, puede observarse que la discusión de una iniciativa de Ley o Decreto, solo es objeto de una discusión en el Pleno de la Asamblea Legislativa, y solo se requerirán dos discusiones en el caso de que una iniciativa aprobada sea regresada con observaciones por parte del Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, lo que formalmente se conoce como el **“Derecho de Veto del Ejecutivo”**, en donde el articulo 62, en sus fracciones II, y V, actualizan la hipótesis de una segunda discusión, en donde la iniciativa de Ley o de Decreto vetada, regresa a comisiones para que emita un nuevo dictamen, mismo que pasara desde luego a una segunda discusión, en donde podrá participar el propio Titular del Ejecutivo o el orador que para el efecto este designe, hipótesis especifica que como se puede ver involucra una doble discusión pero solo para ese tipo de casos. En ese sentido, resulta por demás necesario avalar la reforma que aquí se propone, porque tal y como esta estructurado actualmente el artículo 169, de la Ley Orgánica del Congreso, esto abre la puerta de forma innecesaria a una discusión de cualquier iniciativa al momento de su lectura en el Pleno de este Congreso, ya que tal hipótesis, como es de nuestro propio conocimiento, en lo que va de esta legislatura nunca se ha hecho uso de esa facultad legislativa, de hablar en pro o en contra de una iniciativa en el instante de la lectura que se haga de ella, puesto que lo que ahí se pueda decir sobre tal propuesta, bien puede hacerse en las comisiones al momento de su estudio y análisis, argumentaciones que de ser viables podrán ser tomados en cuenta para su dictaminación correspondiente, en donde aprobado el dictamen y pasado al pleno para su necesaria discusión, ahí sí, ese será el momento oportuno para la discusión y debate de la propuesta legislativa, tal y como expresamente lo establecen los artículos 188, 189, 190, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, y por lo tanto, como la premisa de tramite legislativo prevista en el artículo 169, inoportunamente daría pauta a una discusión que para ese momento resultaría innecesaria, y además está en desuso…”.

Conforme a la exposición de motivos expresada en la iniciativa que hoy se dictamina, es de advertirse, que efectivamente, como lo refiere el Diputado ponente, la actual disposición contenida en el artículo 169 multireferido, abre la puerta de forma inapropiada la discusión de una iniciativa al momento de su lectura en el Pleno de este Congreso, circunstancia que efectivamente, en lo que va de esta legislatura nunca se ha hecho uso de esa facultad legislativa, puesto que lo que ahí se pueda decir sobre tal propuesta, bien puede hacerse en las comisiones al momento de su estudio y análisis, elaborándose el dictamen correspondiente para pasarlo al pleno para su oportuna y debida discusión, donde es en ese momento, el correctamente dispuesto para la discusión y debate de la propuesta legislativa, tal y como expresamente lo establecen los artículos 188, 189, 190, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado.

Fortalece a la anterior consideración, el hecho de que el 19 de diciembre de 2014, la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila, aprobó por unanimidad una nueva Ley Orgánica del Congreso local, la cual fue publicada en el Periódico Oficial el 30 de diciembre del mismo año, y con la expedición de esta nueva ley, se dio paso a la creación de nuevas figuras legales, al mismo tiempo que se actualizaron algunas disposiciones, sin embargo al hacer una revisión integral de la referida ley, se advierten algunas imprecisiones como las que aquí se mencionan, las cuales se pretenden perfeccionar mediante la reforma sujeta a este análisis, y así se evite una discusión parlamentaria en un momento que no es el pertinente.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, estiman viable y procedente poner a consideración del H. Pleno del Congreso, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO:**

**ARTÍCULO ÚNICO:** Se reforma el artículo 169, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 169. En caso de que se de lectura a una Iniciativa conforme al artículo anterior, enseguida se turnara la iniciativa a la comisión que corresponda.**

**TRANSITORIOS**

**ARTÍCULO PRIMERO. -** La presente reforma entrará en vigor a partir de la expedición del presente Decreto.

**ARTÌCULO SEGUNDO. -** Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

**ARTÍCULO TERCERO. -** Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 23 de junio de 2020.

**POR LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTICULOS** | |
|  | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCION** | **SI** | **CUALES** |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(COORDINADOR)** |  |  |  |  |  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE (SECRETARIO)** |  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |  |  |  |  |  |
| **DIP. JESÚS ANDRES LOYA CARDONA** |  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** |  |  |  |  |  |
| **DIP. JUAN ANTONIO GARCIA VILLA** |  |  |  |  |  |
| **DIP. ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ** |  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** |  |  |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, respecto de la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona el artículo 120 BIS, a la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares del Grupo Parlamentario “Brígido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-**  Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 25 del mes de septiembre del año 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona el artículo 120 BIS, a la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, en materia del fortalecimiento de la transparencia de los trabajos realizados dentro de las Sesiones de las Comisiones del H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares del Grupo Parlamentario “Brígido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias es competente para emitir el presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 82, 89 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona el artículo 120 BIS, a la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza en materia del fortalecimiento de la transparencia de los trabajos realizados dentro de las Sesiones de las Comisiones del H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares del Grupo Parlamentario “Brígido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*“Cuando hablamos de gobierno, las características de apertura se refieren a un esquema de gobernanza que siguen los principios de la Declaración de la Alianza para el Gobierno Abierto:*

*• Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales.*

*• Apoyar la participación ciudadana.*

*• Aplicar los más altos estándares de integridad profesional en todos nuestros gobiernos, y*

*• Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas.*

*Dentro del Gobierno Abierto la rendición de cuentas es uno de los componentes esenciales en los que se fundamenta una administración confiable y transparente. La transparencia abre la información al escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar. De ahí que el trabajo realizado por cualquier sujeto obligado para rendir cuentas, reportar o explicar sus acciones, debe transparentarse para mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de la ciudadanía.*

*En palabras de Don Tapscott, una de las principales autoridades mundiales en materia de innovación, medios de comunicación y el impacto de la tecnología en el mundo económico y social. “Un gobierno abierto, es un gobierno que abre sus puertas al mundo, co-innova con todos, especialmente con los ciudadanos; comparte recursos que anteriormente estaban celosamente guardados, y aprovecha el poder de la colaboración masiva, la transparencia en todas sus operaciones, y no se comporta como un departamento o jurisdicción aislada, sino como una estructura nueva, como una organización verdaderamente integrada y que trabaja en red.”*

*En esta perspectiva, el acceso a la información contribuye a reforzar los mecanismos de rendición de cuentas y proporciona un ambiente de claridad democrática. La obligación de transparentar y otorgar acceso público a la información tiende puentes de comunicación entre las instituciones y las comunidades, al permitir a la ciudadanía participar en los asuntos públicos y realizar una revisión del ejercicio gubernamental.*

*México ha adecuado leyes y creado instituciones tanto a nivel federal como estatal, para generar una cultura de rendición de cuentas y transparencia del quehacer público a la ciudadanía. Los cambios culturales, el fortalecimiento de una ciudadanía más actuante y demandante nos tiene que llevar a una transformación profunda sobre la importancia de tener disponibilidad de información a corto y mediano plazo para que la rendición de cuentas sea una obligación cotidiana que no quede solo en el discurso.*

*El 4 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante la cual se homologaron principios, criterios y procedimientos para garantizar el derecho humano del acceso a la información pública y de igual manera se estableció la distribución de competencias entre el Instituto Nacional del Acceso a la Información Pública (INAI) y los órganos de transparencia de los estados.*

*Para nuestro Estado la Ley de Acceso a la Información Pública de Coahuila, dentro de su artículo 6°, específicamente en las fracciones II y III establece, para los sujetos obligados, entre ellos el poder legislativo, garantizar los mecanismos que permitan transparentar la gestión pública, mediante la difusión de la información que generen los mismos; así como a promover la generación y consolidación de una cultura de transparencia y rendición de cuentas para la ciudadanía y los servidores públicos.*

*Para provocar el mayor impacto de la rendición de cuentas y la transparencia, se requiere continuar con el cambio cultural en la gestión administrativa, que, al fortalecerse, ayudará a recobrar la confianza en las instituciones públicas de México mediante la apropiación masiva del derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos. En la aplicación de este derecho, los servidores públicos deberán aceptar que están sujetos a un escrutinio permanente, por cualquier persona, en cualquier momento y desde cualquier sitio en el que se encuentren, pero también se deberá reconocer que la información en posesión del gobierno es un bien público que se encuentra al alcance de todos.*

*Es inaplazable la necesidad que nuestro estado se encamine al 100 % hacia un gobierno abierto refrendando el compromiso constante para enfrentar los nuevos desafíos que significa garantizar que las instituciones estén a la altura de una ciudadanía cada vez más participativa y activa en todo lo referente a los asuntos públicos*

*La difusión de los trabajos que realizamos dentro de nuestro trabajo legislativo a través de las herramientas tecnológicas promueve la mejoría de los canales de comunicación con la ciudanía a través de las redes sociales y plataformas digitales, con ello se cumpliría con las disposiciones del denominado “gobierno abierto” establecidas dentro del artículo 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública para nuestro Estado.*

*Khemvirg Puente, Coordinador del Centro de Estudios Políticos de la UNAM. Especialista en Poder Legislativo, miembro de la Organización Fundar (2018), en su análisis sobre el porqué de un parlamento abierto nos dice:*

*“El Parlamento abierto es un nuevo modelo de representación política, es un mecanismo alternativo y moderno de interacción entre los representantes y los representados. En esta nueva relación se busca que la asamblea representativa abra de par en par las puertas de sus procedimientos internos a la participación de la sociedad; que sus decisiones sean transparentes y estén plenamente justificadas; que exista disposición y colaboración para que su desempeño sea sometido al escrutinio y la fiscalización; que empleen plataformas digitales para facilitar la interacción ciudadana en cada una de sus funciones; y que adopten altos estándares de responsabilidad, ética e integridad en la actividad parlamentaria.”*

*Este H. Congreso del Estado es uno de los sujetos obligados ante la Ley de Acceso a la Información y, por lo tanto, es también sujeto a ser evaluado., dentro del Diagnóstico denominado “Diagnóstico de Parlamento Abierto en México”, Coahuila resulto ser uno de los 14 estados que fueron calificados con un 100% sobre “legislación a favor de un gobierno abierto”, sigamos en ese tenor, que nuestro estado se distinga por, en todo momento, legislar a favor de los ciudadanos que han puesto su confianza en quienes aquí los representamos.*

*Transmitir y hacer públicas las reuniones de las diferentes Comisiones en las que se trabaja en este H. Congreso, dan a la ciudadanía un debido acceso al derecho a la información pública y ello será un claro ejemplo del compromiso de ésta legislatura de cumplir con la obligación constitucional de dar y ofrecer máxima publicidad a los actos realizados en favor de un mejor Coahuila.*

*Unidad Democrática de Coahuila, busca siempre trabajar en pro de la formalidad, obligatoriedad y cumpliendo en todo momento con los preceptos básicos de los gobiernos democráticos: La rendición de cuentas, la transparencia de las decisiones y acuerdos que afectan directamente a los ciudadanos de nuestro Estado”.*

**TERCERO.-** Quienes integramos esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, nos abocamos al estudio de las consideraciones en las que se funda y motiva el proyecto de reforma y coincidimos con la importancia de fortalecimiento de la transparencia de los trabajos realizados dentro de las Sesiones de las Comisiones del H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, para que dicha implementación permita que la ciudadanía conozca los trabajos que se realizan al interior del Congreso sobre todo en donde se discuten los asuntos con más detalle, ponderación e investigación, es decir, al interior de los Comités.

De igual forma coincidimos con el impacto positivo, que de acuerdo a la exposición de motivos, este tipo de medidas traerías en aspectos como la transparencia, principio que debe imperar en nuestros trabajos legislativos bajo la premisa de la máxima publicidad; lo anterior en congruencia con el derecho de los ciudadanos, respecto del acceso a la información, para que puedan conocer quienes atienden los trabajos de los comités, cuál es su participación específica y de que manera se pronuncian en los temas en particular.

Aunado a lo anterior, consideramos positiva la idea de que al darle a conocer al ciudadano esta información, estadística al detalle nos permitirá dar un paso firme hacia adelante en la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos de Coahuila; así como en la conformación de un ordenamiento actualizado y acorde a las circunstancias que le permita a este Órgano Legislativo contar con una mayor eficacia para el ejercicio de los acuerdos que emite, sus alcances y consecuencias.

Lo anterior se fortalece en virtud del mandato del artículo 7 de nuestra constitución local que en su artículo séptimo numeral quinto nos dice que *“Toda persona tiene derecho a la información pública. La garantía de acceso a la información pública, es un derecho fundamental que comprende difundir, investigar y recabar información pública, y se definirá a partir de los principios siguientes:*

*V.* ***La obligación de transparencia del Poder Público*** *o cualquier otra entidad que utilice, reciba o disponga de recursos públicos, en los términos de la ley”.*

Por ello, quienes integramos esta comisión dictaminadora coincidimos en que se adicione al ordenamiento interno de este Poder Legislativo las medidas necesarias para dar un primer paso hacia una transición de transparentar el ejercicio del poder público bajo el principio de máxima publicidad. Ahora bien, la propuesta de la comisión es establecer la posibilidad de la transmisión a través de los medios digitales de los trabajos de comisión, y en cuanto al segundo párrafo del proyecto de decreto en la iniciativa propuesta, éste sería objeto de regulación en el Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, el cual a la fecha de la presentación de la presente iniciativa no había sido aprobado, luego entonces el articulado se acota solamente a un párrafo que establece la posibilidad de llevar a cabo esta modalidad, siempre y cuando así lo apruebe la mayoría de los integrantes de la comisión.

En este contexto, quienes dictaminamos hoy la presente iniciativa encontramos oportuna la reforma de adición en cuestión.

Una vez realizadas estas consideraciones y agotado el estudio sobre el contenido, alcances y constitucionalidad de la reforma, los integrantes de esta comisión dictaminadora estamos de acuerdo en la importancia de adicionar las disposiciones mencionada para brindar mayor transparencia a los trabajos al interior de las comisiones.

Por las consideraciones antes expuestas, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO.**

**UNICO. -** Se adiciona el artículo 120 bis, a la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 120 bis.** En la medida de las posbilidades, y cuando así lo apruebe la mayoría de sus integrantes, las reuniones de las comisiones que no tengan el carácter de privadas en los términos de la presente Ley, se transmitirán en vivo a través del uso de la tecnología informática, en el portal de internet y/o plataformas oficiales, mismas que deberán ser videograbadas para que estén disponibles de forma pública.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** Las presentes reformas entrarán en vigor a partir de la expedición del presente Decreto.

**SEGUNDO.** Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

**TERCERO.** Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 23 de junio 2020.

**POR LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
|  | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUÁLES** |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(COORDINADOR)** |  |  |  |  |  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |  |  |  |  |  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** |  |  |  |  |  |
| **DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA** |  |  |  |  |  |
| **DIP. ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ** |  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** |  |  |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo al Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo 55, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, para el efecto de que se disponga expresamente en dicho artículo, que se consideraran Diputados Independientes, también a aquellos que por su decisión personal, libre unilateral y manifiesta, dejen de pertenecer al partido político que los postuló y se declaren independientes, sin que tengan que presentar documento alguno en donde se asiente la aceptación de su renuncia por parte del partido político donde militaron, planteada por el Diputado José Benito Ramírez Rosas, de la Fracción Parlamentaria “Venustiano Carranza Garza”.

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO. -** Que en la sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2019, efectuada dentro del Segundo Periodo Ordinario del Segundo Año Legislativo del Congreso del Estado, se acordó turnar a esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por parte de la mesa directiva del Congreso del Estado, el Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo 55, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO. -** Que en cumplimiento a dicho acuerdo, la Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado turnó a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, el Proyecto de Decreto a que se ha hecho referencia, para los efectos procedentes.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO. -** Que esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, es competente para emitir el presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 82, 88 fracción I, 89, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO.-** La reforma propuesta fue analizada y consensuada por las y los integrantes de esta Comisión, llegando a la conclusión que lo que se busca con la misma, es que quede establecido de forma expresa en el artículo 55 de la Ley Orgánica, que se considerara Diputado Independiente, también a aquellos que por su decisión personal, libre, unilateral y manifiesta, dejen de pertenecer al partido político que los postulo y se declaren independientes, sin que tengan que presentar documento alguno en donde se asiente la aceptación de su renuncia por parte del partido político donde militaron, en los términos y condiciones en que expresamente lo funda y motiva su presentante.

Se llega a esa determinación, en atención a que el Diputado ponente de la iniciativa en comento sustenta su planteamiento en las siguientes consideraciones, “… Es una realidad innegable que muchos ordenamientos legales vigentes en nuestro país, incluso la propia Constitución Política federal, contienen lo que se ha dado en llamar lagunas jurídicas o vacíos legales, así como inconsistencias que en no pocas ocasiones son motivo de fuertes controversias, debido a interpretaciones encontradas e incluso abusos que suele generar su aplicación, convirtiendo, paradójicamente, al ejercicio del derecho en una práctica incierta. Es precisamente en casos como este cuando el trabajo legislativo adquiere relevancia, ya que por lo general el tratamiento a estas contradicciones o limbos jurídicos exigen dar un sentido determinado a lo ya dispuesto, pero en otros casos lo único que se requiere es el sentido común de los legisladores, si bien se trata de procurar leyes más modernas y justas. Por supuesto, la Ley Orgánica del Congreso Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, no escapa a este tipo de imperfecciones, de manera que en esta es posible encontrar claros ejemplos de lagunas legales, así como de problemas de redacción e incluso enunciados y normas que suelen constituir verdaderas contradicciones. De suerte que todo ordenamiento legal siempre es susceptible de perfeccionamiento, ya sea porque deba ser armonizado con otras leyes, precisado, acotado, complementado, contextualizado o actualizado. Uno de esos defectos, que por cierto hace mucho tiempo debió haberse enmendado, tiene qué ver con una inaceptable obligatoriedad o condicionante establecida para el caso de los diputados o diputadas que buscan declararse independientes, pues dicha disposición da pie a la violación de diversos derechos fundamentales y ordenamientos legales. Me refiero al artículo 55 de la Ley Orgánica que rige a este Poder Legislativo, particularmente a su cuarto párrafo, donde se establece que, para el efecto de declarársele oficialmente independiente, el diputado o diputada deberá demostrar la aceptación formal de su renuncia al partido político que le postuló, lo cual sostiene que es contrario a la Ley y a la Jurisprudencia…”

Conforme a la exposición de motivos expresada en la iniciativa que hoy se dictamina, es de advertirse, que efectivamente, como lo refiere el Diputado ponente, la actual disposición contenida en el artículo 55, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, en su párrafo cuarto actualmente establece que se consideraran Diputados o Diputadas independientes aquellos que participaron en el proceso electoral como candidatos independientes o aquellos que dejen de pertenecer al partido político que los postuló y se declaren independientes, debiendo presentarse en este segundo caso la aceptación de su renuncia por el partido político que lo postulo, tal disposición jurídica riñe con la legalidad que deben de distinguir a las normas jurídicas, en atención a que efectivamente, la naturaleza jurídica de la renuncia implica el legítimo derecho de ejercer un acto unilateral de la voluntad, que no precisa la aceptación de ninguna persona o ente público o privado para surtir sus plenos efectos jurídicos, tal y como doctrinalmente lo sostiene el Jurista Ernesto Gutiérrez y González, en su obra titulada “Derecho de las Obligaciones”, de ahí, que efectivamente, como lo sostiene el Diputado ponente de la iniciativa en estudio, la renuncia que haga un Legislador o Legisladora a su Grupo Parlamentario y al partido político que los postulo, de ninguna manera debe de estar sujeta a la aceptación de estos para que surta sus plenos efectos jurídicos, ya que ello sería ir en contra de la propia naturaleza y esencia jurídica de tal acto unilateral de la voluntad, como es la renuncia, además de que dicha condición contraviene el orden jurídico aplicable a este tipos de supuestos, tal y como lo ha resuelto el Tribunal Federal Electoral de nuestro País.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia que a la letra dice:

**AFILIACIÓN. LA RENUNCIA A LA MILITANCIA SURTE EFECTOS DESDE EL MOMENTO DE SU PRESENTACIÓN ANTE EL PARTIDO POLÍTICO.**

De la interpretación de los artículos 35 y 41, párrafo segundo, Base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el derecho fundamental de afiliación tiene una dimensión o modalidad positiva relativa al acto de afiliarse **a** un determinado partido político, y otra negativa, concerniente **a** dejar de pertenecer al mismo. En ese contexto, cuando un ciudadano ejerce su derecho de separarse del partido político, exteriorizando por los medios idóneos su voluntad de dejar de formar parte de un instituto político, **a** través de la **renuncia**, la **dimisión** a la **militancia** surte efectos desde el momento de su presentación ante el partido político de que se trate, sin necesidad de que sea aceptada material o formalmente por parte del instituto político; lo anterior es así, debido **a** que la **renuncia** entraña la manifestación libre, unilateral y espontánea de la voluntad o deseo de apartarse de la calidad de militante a un determinado ente político. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. [SUP-JDC-24/2010](http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2010/JDC/SUP-JDC-00024-2010.htm).—Actor: Javier Flores Macías.—Órgano responsable: Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática.—17 de febrero de 2010.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Ernesto Camacho Ochoa, Jorge Orantes López y Erik Pérez Rivera. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. [SUP-JDC-809/2016](http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/JDC/SUP-JDC-00809-2016.htm).—Actora: Ana Teresa Aranda Orozco.—Órgano responsable: Comisión de Afiliación del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional.—2 de marzo de 2016.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. Recurso de apelación. [SUP-RAP-246/2018](http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/RAP/SUP-RAP-00246-2018.htm).—Recurrente: Encuentro Social.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.—4 de septiembre de 2018.—Unanimidad de votos.—Ponente: Reyes Rodríguez Mondragón.—Ausente: José Luis Vargas Valdez.—Secretario: Sergio Iván Redondo Toca. La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de agosto de dos mil diecinueve, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, estiman viable y procedente poner a consideración del H. Pleno del Congreso, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO:**

**ARTÍCULO ÚNICO:** Se reforma el párrafo cuarto del artículo 55, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 55.- ...**

**...**

**...**

**Para los efectos de esta ley, se consideran Diputados o Diputadas independientes aquellos que participaron en el proceso electoral como candidatos independientes o que, por su decisión personal, libre, unilateral y manifiesta, dejen de pertenecer al partido político que los postuló y se declaren independientes, sin que tengan que presentar, en este segundo caso, documento alguno en donde se asiente la aceptación de su renuncia por parte del partido político donde militaron.**

**...**

**TRANSITORIOS**

**ARTÍCULO PRIMERO. -** La presente reforma entrará en vigor a partir de la expedición del presente Decreto.

**ARTÌCULO SEGUNDO. -** Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

**ARTÍCULO TERCERO. -** Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 23 de junio de 2020.

**POR LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTICULOS** | |
|  | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCION** | **SI** | **CUALES** |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(COORDINADOR)** |  |  |  |  |  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE (SECRETARIO)** |  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |  |  |  |  |  |
| **DIP. JESÚS ANDRES LOYA CARDONA** |  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** |  |  |  |  |  |
| **DIP. JUAN ANTONIO GARCIA VILLA** |  |  |  |  |  |
| **DIP. ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ** |  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** |  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Juan Antonio García Villa, conjuntamente con los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 11 de marzo del 2020, se acordó turnar a esta Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Juan Antonio García Villa, conjuntamente con los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza; y,

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 94, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Juan Antonio García Villa, conjuntamente con los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

El marco jurídico vigente en Coahuila en materia de rendición de cuentas y fiscalización superior establece que cuando la Auditoría Superior del Estado, con motivo de las auditorías que practica, advierte la comisión de irregularidades, formulará a las dependencias o entidades los pliegos de observaciones y pliegos de recomendaciones, derivadas de las auditorías.

Las entidades que reciben dichos pliegos, de acuerdo a lo que ahora establecen los artículos 40 y 42 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, disponen de un plazo improrrogable de 15 días hábiles para solventar las observaciones y atender las recomendaciones, respectivamente.

En torno a este punto, se observa un generalizado incumplimiento de lo expresamente establecido en la ley. Es decir, que en 15 días hábiles, que en la práctica equivalen a tres semanas cuando menos, las entidades auditadas no presentan a la Auditoría Superior del Estado la documentación, los argumentos o demás evidencias para demostrar que las irregularidades que se les señalan no son tales o fueron atendidas.

Así, en el tomo Ejecutivo del Informe de Resultados correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública de 2017, la Auditoría Superior del Estado se lamenta de que en dicho año “prevaleció insuficiencia en el interés administrativo para solventar (las) observaciones realizadas, no obstante contar (las entidades auditadas) con plazos legalmente establecidos para tal efecto” (ob. cit., pág. 78), que como se señaló es de 15 días hábiles no sujetos a prórroga.

En dicho Informe de 2017 la propia Auditoría Superior del Estado da cuenta del porcentaje de observaciones que cada una de las 144 entidades auditadas dejó sin solventar ese año. Por grupos de entidades, los 38 municipios del estado dejaron sin solventar, en promedio, el 62.8 por ciento de sus observaciones; los sistemas de aguas y saneamiento el 51.4 por ciento, en promedio, tampoco las solventaron, y las dependencias del Ejecutivo, es decir, del gobernador, el 74.6 por ciento estuvieron en la misma situación, o sea, no se solventaron.

Un año después, en el Informe de Resultados del año 2018, la Auditoría Superior modificó su tesis. Al volverse a presentar una bajísima respuesta en la solventación de observaciones, ahora plantea “que el plazo de 15 días hábiles que actualmente se les otorga (a las entidades auditadas) por parte de la Auditoría Superior, representa un periodo muy corto de tiempo considerando las diversas funciones que tienen asignadas, así como las ordinarias”.

“Bajo estas premisas –sigue diciendo la Auditoría Superior- resulta indispensable que las entidades públicas cuenten con una mayor oportunidad para responder por las observaciones y recomendaciones determinadas con motivo de las revisiones correspondientes” (Informe Ejecutivo 2018, pág. 51).

En consonancia con lo anterior, el órgano técnico de este Congreso plantea lo siguiente: “se propone a esa (LXI) Legislatura que se otorguen facultades a la Auditoría Superior para ampliar los plazos para solventar los pliegos de observaciones y para atender los pliegos de recomendaciones…” (Ibid, pág. 52).

“Para tal efecto, se sugiere un esquema bajo el cual se otorgue un plazo adicional de seis meses respecto a las revisiones de las cuentas públicas 2017, 2018 y 2019, con el propósito de que tanto la Administración Pública del Estado, como las administraciones públicas municipales, presenten mayores elementos para solventar las observaciones que les fueron determinadas…” (Ibid, pág. 53).

Aunque no está suficientemente clara la propuesta que sobre el punto hace la Auditoría Superior, pues parece que sólo sugiere que la ampliación del plazo para solventar observaciones se limite a las revisiones de las cuentas públicas de los mencionados ejercicios de 2017, 2018 y 2019 y no como norma de carácter general y permanente que tal periodo sea de seis meses, del contexto del problema parece desprenderse, sin embargo, que en efecto los 15 días hábiles que para solventar observaciones y atender recomendaciones contempla la ley en Coahuila, son insuficientes.

Sólo diez entidades federativas del país contemplan un plazo superior al de Coahuila, a saber: Aguascalientes, Durango, Sonora y Zacatecas lo establecen en 20 días hábiles (aunque en Sonora es de 15 a 20 días hábiles), Nuevo León y Tlaxcala lo fijan en 30 días naturales, y en la Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco y el Estado de México el plazo es de 30 días hábiles. (Ver cuadro)

En ningún estado del país el plazo concedido por la ley para solventar observaciones es superior a 30 días hábiles, que es equivalente a seis semanas. En consecuencia, parece más que razonable, en atención al problema del cual se queja la Auditoría Superior del Estado, que en Coahuila dicho plazo se establezca en 40 días hábiles, sin prórroga. Se propone establecer el plazo en días hábiles –como lo establece la mayoría de los estados- y no en días naturales, para evitar que la terminación del plazo caiga en día inhábil.

Por lo anterior, se propone reformar la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, para que en Coahuila el plazo concedido para solventar observaciones y atender los pliegos de recomendaciones se establezca en 40 días hábiles, sin prórroga. Se propone establecer el plazo en días hábiles –como lo establece la mayoría de los estados- y no en días naturales, para evitar que la terminación del plazo caiga en día inhábil.

Con lo anterior se busca mejorar el proceso de fiscalización superior con un verdadero cumplimiento por parte de todas las entidades que integran la Administración Pública Estatal y Municipal, logrando una mejor gestión gubernamental y uso de los recursos públicos, que contribuyan al buen gobierno.

**TERCERO.-** Que los integrantes de esta Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, realizamos el análisis de la presente iniciativa, mediante la cual se propone reformar diversos preceptos de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos que la mencionada Iniciativa de Decreto reúne los elementos necesarios para elaborar el presente dictamen, por lo que estimamos pertinente emitir y poner a consideración de este H. Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO.** Se reforman los artículos 35, fracción XIII, 37 fracción IV, 40 y 42, primer párrafo, de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 35. …**

I a XII. …

XIII. Con posterioridad a la conclusión de la visita domiciliaria, la Auditoría Superior emitirá, en su caso, el pliego de observaciones, así como el pliego de recomendaciones correspondientes, los cuales se notificarán a la entidad visitada, la que contará con un plazo de 40 días hábiles improrrogables para presentar los documentos, libros, registros o demás evidencias que solventen las observaciones y atiendan las recomendaciones contenidas en dichos pliegos;

**Artículo 37. …**

I a III. …

IV. Una vez agotada la revisión de los documentos, datos, sistemas, libros, registros e informes requeridos, la Auditoría Superior dará por concluida la revisión de gabinete. Posteriormente, en su caso, emitirá los pliegos de observaciones y/o recomendaciones correspondientes, los cuales se notificarán al titular o representante legal de la entidad, quien contará con un plazo de 40 días hábiles improrrogables, para presentar los documentos, libros o registros que solventen las observaciones y/o recomendaciones contenidas en dichos pliegos;

**Artículo 40. …**

Las entidades, dentro de un plazo improrrogable de 40 días hábiles deberán solventar los pliegos de observaciones ante la Auditoría Superior. Cuando los pliegos de observaciones no sean solventados dentro del plazo señalado o la documentación, argumentos o demás evidencias presentadas no sean suficientes para solventar las observaciones, la Auditoría Superior procederá en los términos de lo dispuesto por el artículo 69 de esta ley.

**Artículo 42. …**

Las entidades, dentro de un plazo improrrogable de 40 días hábiles deberán atender los pliegos de recomendaciones ante la Auditoría Superior.

…

…

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.** Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

**TERCERO.** A partir del tercer día posterior al de la entrada en vigor del presente decreto, las entidades auditadas dispondrán de veinte días hábiles para solventar las observaciones y atender las recomendaciones que tengan pendientes ante la Auditoría Superior del Estado, correspondientes a la cuenta pública de 2017.

**CUARTO.** A partir del día siguiente en que concluyan los veinte días hábiles a que hace referencia el Transitorio anterior, las entidades auditadas dispondrán de veinte días hábiles para solventar las observaciones y atender las recomendaciones que tengan pendientes ante la Auditoría Superior del Estado, correspondientes a la cuenta pública de 2018.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Juan Antonio García Villa, (Coordinador), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga (Secretaria), Dip. María Eugenia Cázares Martínez, Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Jaime Bueno Zertuche y Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 24 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA PÚBLICA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA**  **(SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen que expide la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, de la LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto planteada por el Diputado Jesús Andrés Loya Cardona, del Grupo Parlamentario “General Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se reforma el numeral 2 y se adiciona el numeral 3 al artículo 5º, y se reforma el primer párrafo del artículo 6º de la Ley de Cardioprotección para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con el propósito de impulsar la capacitación constante en el uso de los desfibriladores automáticos externos, y...**

**RESULTANDO**

**PRIMERO. -** Que, en la sesión celebrada por el Pleno del Congreso del Estado, el día 06 de mayo de 2020, se desahogó lo relativo al trámite de la primera lectura de la iniciativa contenida en el presente dictamen.

**SEGUNDO. -** Que, en la citada sesión, por acuerdo del Pleno, se turnó a estaComisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, dicha iniciativa para los efectos de hacer el estudio correspondiente y proceder, en su caso, a su aprobación.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. -** Que esta Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, con fundamento en los artículos 100, 163, 164 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO. -** Que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2 y se adiciona el numeral 3 al artículo 5º, y se reforma el primer párrafo del artículo 6º de la Ley de Cardioprotección para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con el propósito de impulsar la capacitación constante en el uso de los desfibriladores automáticos externos, en función de la siguiente...

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

*Las enfermedades cardiovasculares representan un grave problema de salud pública. Son definidas por la Organización Mundial de la Salud como desórdenes del corazón y los vasos sanguíneos, y se han convertido en la principal causa de muerte en todo el mundo. Uno de cada tres decesos en el mundo son resultado de estas enfermedades. Por su parte, México ocupa el tercer lugar en mortalidad por enfermedades cardiovasculares en América Latina; se estima que estos padecimientos representan el 20.7% del total de muertes en adultos, seguida por la diabetes (14%) y tumores malignos (11.9%).*

*Coahuila ubica el séptimo lugar de las entidades con mayor tasa de defunciones registradas por enfermedades del corazón, con 12.9 por cada 10 mil habitantes, estando por arriba de la media nacional de acuerdo con los últimos reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicados en 2019.*

*Estos datos resultan alarmantes, más aún, considerando que la mayoría de las enfermedades del corazón son prevenibles.*

*A nivel nacional como local, se han realizado enormes esfuerzos por difundir los principales factores de riesgo asociados con las enfermedades cardiovasculares, tales como el consumo de alcohol, el tabaquismo, el consumo de sal, el sedentarismo, una dieta malsana, la preexistencia de hipertensión arterial y la obesidad. En congruencia, se han implementado acciones de prevención, tales como la introducción de un nuevo impuesto que grava el consumo de alimentos con alto contenido de azúcar, restricciones legislativas para inhibir el consumo de sal, así como la expedición de leyes de cardioprotección, como sucedió en Coahuila en el año 2018.*

*Si bien son muchas las enfermedades cardiovasculares, como lo son la hipertensión arterial, enfermedades cerebrovasculares, enfermedad vascular periférica, insuficiencia cardíaca, cardiopatía reumática, cardiopatía congénita y las miocardiopatías, la cardiopatía coronaria también conocida como infarto al miocardio es el más común, pues una de cada cuatro personas con dicha patología fallece.*

*La información médica muestra claramente que, cuando se presenta una arritmia cardiaca maligna, cada minuto que el corazón de la persona permanece con fibrilación ventricular, las posibilidades de sobrevivencia se reducen un 10%, dependiendo ésta de una serie de intervenciones críticas que, si se omiten o retrasan, comprometen seriamente las posibilidades de vida del paciente. En ese sentido, la Ley de Cardioprotección del Estado de Coahuila de Zaragoza fue sin duda un gran acierto, promoviendo en el Estado la reanimación cardiopulmonar, a partir del uso del desfibrilador externo automático (DEA) en espacios públicos o eventos en los que se concentran altas cantidades de personas, convirtiéndolos en sitios cardioprotegidos.*

*Siguiendo con la buena praxis emprendida por este ordenamiento, la presente iniciativa busca impulsar una cultura de capacitación constante de por lo menos el 30% del personal que labora, vive o frecuenta estos espacios o edificios, así como además la instalación de material ilustrativo para el correcto uso y mantenimiento de los desfibriladores externos automáticos.*

**TERCERO. –** Que los diputados y las diputadas integrantes de la Comisión de Salud, Medio Ambiente Recursos Naturales y Agua, una vez analizada la referida exposición, estamos de acuerdo con sus términos, mismos que concuerdan con las siguientes consideraciones:

De entrada, destacamos la importancia de dar una respuesta rápida y eficiente, mediante el uso correcto del desfibrilador automático externo, el cual consiste en un dispositivo electrónico, no dañino, que permite analizar la actividad eléctrica del corazón y establecer si la persona cursa con fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, ayudando a revertirla a través de una descarga eléctrica, normalizando el ritmo cardiaco del paciente.

Es así como se puede salvar la vida de la persona afectada en edificios o eventos públicos y, así mismo, abrir la oportunidad de que sea trasladada a un hospital para recibir una oportuna atención especializada. La experiencia internacional indica que los desfibriladores externos automáticos duplican la supervivencia por paro cardiaco.

Según lo ha señalado el director del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en más de cuarenta años se ha observado una evolución y una transformación de la epidemia cardiovascular en México, lo que significa que en un futuro próximo tendremos una población de pacientes jóvenes infartados, siendo su prevención y control un reto para el sistema de salud mexicano.

Con relación a los factores de riesgo, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSAUT 2006) reporta una prevalencia significativa de 17 millones de personas con hipertensión arterial, así como 15 millones con aumento de los niveles de colesterol o concentraciones de triglicéridos; seis millones con diabetes mellitus; 35 millones con sobrepeso y/u obesidad y 15 millones con tabaquismo. No por nada, los padecimientos cardiovasculares se ubican como la primera causa de muerte (prevenible) en México.

En virtud de lo anterior, convenimos con el proponente en que es necesario reforzar los diferentes aspectos del trabajo preventivo relacionados con este tipo de padecimientos, principalmente a partir del manejo del referido desfibrilador, para cuyo uso, definitivamente, se requiere capacitar al mayor número posible de personas disponibles para su aplicación.

**CUARTO. –** Que, en virtud de todo lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora considera procedente la iniciativa contenida en el presente dictamen, por lo que expide y, a su vez, pone a consideración del Honorable Congreso del Estado, el siguiente...

**PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO. -** Se reforma el numeral 2 y se adiciona el numeral 3 al artículo 5º, y se reforma el primer párrafo del artículo 6ºde la Ley de Cardioprotección del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 5.** …

1. …
2. Contar dentro del personal a su cargo, **con un mínimo de 30 por ciento de** personas **del inmueble** **y/o del evento** capacitadas en el uso de los desfibriladores automáticos externos e instruidos en las técnicas de reanimación cardiopulmonar, de conformidad a lo establecido en el Reglamento respectivo.
3. **Promover la capacitación, perfeccionamiento y actualización constante de su personal, sobre el manejo de los desfibriladores automáticos externos, resucitación cardiopulmonar y primeros auxilios.**

**Artículo 6.** Los desfibriladores automáticos externos deberán situarse en lugares de fácil acceso y adecuadamente señalizados, colocando sus instrucciones **en idioma español** de manera clara y visible, **así como material ilustrativo, tanto de su manejo, como de la técnica de resucitación pulmonar,** de tal forma que se facilite su uso a cualquier persona, estos dispositivos deberán estar adecuadamente protegidos para su mayor seguridad y conservación.

…

**ARTÍCULOS TRANSITORIOS**

**PRIMERO. -** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO. -** Se concede un plazo de noventa días naturales, contados a partir de la publicación del presente Decreto, para que los administradores de los inmuebles a que se refiere la presente ley, capaciten a las personas que al efecto se designen.

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 19 de junio de 2020**

**COMISIÓN DE SALUD, MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y AGUA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES**  **(SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen que expide la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, de la LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto planteada por el Diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se modifica el contenido de la fracción XI, recorriendo su actual contenido a la que sigue, que se crea, quedando como la fracción XII; modificando a su vez el párrafo segundo de esta fracción del artículo 275 de la Ley Estatal de Salud, en relación a la instalación de los filtros de control sanitario; y...**

**RESULTANDO**

**PRIMERO. -** Que, en la sesión celebrada por el Pleno del Congreso del Estado, el día 06 de mayo de 2020, se desahogó lo relativo al trámite de la primera lectura de la iniciativa contenida en el presente dictamen.

**SEGUNDO. -** Que, en la citada sesión, por acuerdo del Pleno, se turnó a estaComisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, dicha iniciativa para los efectos de hacer el estudio correspondiente y proceder, en su caso, a su aprobación.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. -** Que esta Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, con fundamento en los artículos 100, 163, 164 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO. -** Que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el contenido de la fracción XI, recorriendo su actual contenido a la que sigue, que se crea, quedando como la fracción XII; modificando a su vez el párrafo segundo de esta fracción del artículo 275 de la Ley Estatal de Salud, en relación a la instalación de los filtros de control sanitario, según la siguiente...

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

*II.- La Ley General de Salud, en cuanto a emergencias sanitarias, establece lo siguiente:*

*TITULO DECIMO*

*Acción Extraordinaria en Materia de Salubridad General*

*CAPITULO UNICO*

*Artículo 184.- La acción extraordinaria en materia de salubridad general será ejercida por la Secretaría de Salud, la que deberá integrar y mantener permanentemente capacitadas y actualizadas brigadas especiales que actuarán bajo su dirección y responsabilidad y tendrán las atribuciones siguientes:*

1. *Encomendar a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a los profesionales, técnicos y auxiliares de las disciplinas para la salud, el desempeño de las actividades que estime necesarias y obtener para ese fin la participación de los particulares.*
2. *Dictar medidas sanitarias relacionadas con reuniones de personas, entrada y salida de ellas en las poblaciones y con los regímenes higiénicos especiales que deban implantarse, según el caso;*

*Destaca la referencia del artículo 184 a” integrar y mantener permanentemente capacitadas y actualizadas brigadas especiales”.*

*Por su parte, y para lo que nos interesa, la Ley Estatal de Salud, dispone lo siguiente en relación a emergencias sanitarias:*

*TITULO DECIMO QUINTO*

*MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA Y SANCIONES*

*CAPITULO I*

*MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA*

*Artículo 273. Se consideran medidas de seguridad, las disposiciones que dicte la Secretaría de Salud del Estado y los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia, de conformidad con los preceptos de esta Ley y demás disposiciones aplicables, para proteger la salud de la población. Las medidas de seguridad se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, correspondieren.*

*Artículo 274. Son competentes para ordenar o ejecutar medidas de seguridad, la Secretaría de Salud y los municipios en el ámbito de su competencia. La participación de los municipios estará determinada por esta Ley, por los convenios que celebren con el Gobierno del Estado y por lo que dispongan otros ordenamientos legales.*

*Artículo 275. Son medidas de seguridad sanitaria las siguientes:*

1. *El aislamiento;*
2. *La cuarentena;*
3. *La observación personal;*
4. *La vacunación de personas;*
5. *La vacunación de animales;*
6. *La destrucción o control de insectos y otra fauna transmisora y nociva;*
7. *La suspensión de trabajos o servicios;*
8. *El aseguramiento o destrucción de objetos, productos o substancias;*
9. *La desocupación o desalojo de casas, edificios, establecimientos y, en general, de cualquier predio;*
10. *La prohibición de actos de uso, y*
11. *Las demás de índole sanitaria que determinen las autoridades sanitarias del Estado, que puedan evitar que se causen o continúen causando riesgos o daños a la salud.*

*Son de inmediata ejecución las medidas de seguridad señaladas en el presente artículo.*

*Artículo 276. Se entiende por aislamiento, la separación de personas infectadas, durante el período de transmisibilidad, en lugares y condiciones que eviten el peligro de contagio. El aislamiento se ordenará por escrito, por la autoridad sanitaria competente, previo dictamen médico y durará el tiempo estrictamente necesario para que desaparezca el peligro.*

*Artículo 277. Se entiende por cuarentena la limitación a la libertad de tránsito de personas sanas que hubieren estado expuestas a una enfermedad transmisible, por el tiempo estrictamente necesario para controlar el riesgo de contagio. La cuarentena se ordenará por escrito, por la autoridad sanitaria competente, previo dictamen médico y consistirá en que las personas expuestas no abandonen determinado sitio o se restrinja su asistencia a determinados lugares.*

*Artículo 278. La observación personal consiste en la estrecha supervisión sanitaria de los presuntos portadores, sin limitar su libertad de tránsito, con el fin de facilitar la rápida identificación de la infección o enfermedad transmisible.*

*En otras dos iniciativas relativas a temas de seguridad pública, hemos hecho hincapié en las utilidades de los protocolos, al tenor de lo siguiente:*

*El protocolo, cuando es de carácter operativo (actuación), es un instrumento que establece pasos, formas y lineamientos o reglas a observar para llevar a cabo determinada actividad, determinado proceso, o un conjunto de acciones con miras a un fin preciso.*

*Y no debe confundirse con los protocolos de conducta, etiqueta, diplomacia o comunicación.*

*Beneficios de un protocolo*

1. *Darle forma, agilidad y eficiencia a un proceso.*
2. *Dotar de legalidad plena al actuar de la autoridad.*
3. *Reconocer y respetar los derechos de las personas destinatarias del protocolo.*
4. *Medir y evaluar el impacto generado por el accionar de las autoridades. Y;*
5. *Respetar el debido proceso en los casos donde dicha garantía forma parte de la naturaleza y alcances del protocolo en cuestión.”* ***Fin de la cita textual.***

*En los hechos, durante la pandemia que enfrentamos a causa del Covid-19, entre las medidas de prevención y contención implementadas por el gobierno las autoridades sanitarias del gobierno del estado, tenemos los filtros sanitarios o retenes (filtros de control sanitario). En estos, de acuerdo a lo establecido en el “DECRETO por el que se emiten las disposiciones relativas a la movilidad de las personas en el Estado de Coahuila de Zaragoza durante la contingencia COVID-19.”; se dispuso lo siguiente:*

*Artículo 4…*

*…*

*El personal responsable de los filtros de control sanitario, deberá medir la temperatura, formular preguntas relacionadas con los síntomas del COVID-19 y verificar el cumplimiento de las medidas de prevención establecidas por las autoridades federales y estatales, entre otras que la autoridad sanitaria acuerde, con el objeto de contener la propagación de dicha enfermedad.*

*Artículo 5. Los filtros de control sanitario estarán en funcionamiento en los horarios que determinen las autoridades competentes, y deberán estar integrados por lo menos, con personal del sector salud, de seguridad, de protección civil y de apoyo, que para tal efecto se designe.*

*Las acciones que se realicen por las autoridades en los filtros de control sanitario, deberán efectuarse con absoluto respeto a los derechos humanos, y de acuerdo a los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad, debiendo mantener informada a la población sobre los mismos.*

*Sin embargo, hemos podido verificar de manera personal y directa, que en la mayoría de estos filtros sanitarios, justamente lo que no hay, es personal médico, ni personas debidamente capacitadas para llevar a cabo las tareas que establece la Ley General de Salud, la Ley Estatal de Salud y el Decreto del gobernador que ya hemos mencionado.*

*Solo policías, y en algunos casos personal de protección civil, que actúan a como Dios les da a entender, con total discrecionalidad, y muchas veces rebasados por el agotamiento y el hastío.*

*Esto conlleva a un ineficaz funcionamiento de estos filtros, y al atropello a los derechos humanos de los automovilistas.*

*Son muchas las quejas y peticiones que como legisladores nos ha tocado recibir de parte de la ciudadanía en tal sentido: que se coloque a personal médico en los filtros, que se cuente con un protocolo de actuación concreto y no se permita la discrecionalidad y la ocurrencia.*

*Todo esto en bien de todos, de los ciudadanos, de las autoridades, de quienes son responsables de los filtros, y en bien de cumplir mejor los objetivos finales, que son la prevención y contención del Covid-19.*

**TERCERO. –** Que los diputados y las diputadas integrantes de la Comisión de Salud, Medio Ambiente Recursos Naturales y Agua, una vez analizada la referida exposición de motivos, estamos de acuerdo con sus términos, mismos que concuerdan con el siguiente análisis:

Efectivamente, con motivo de la fase 3 de la actual contingencia, el 22 de abril pasado el Gobierno del Estado decretó un paquete de medidas para *“salvaguardar la salud y la vida de los coahuilenses”,* y para reforzar los filtros de revisión sanitaria en Coahuila”, que suman alrededor de cuatrocientos, principalmente en Saltillo, Torreón y Monclova.

Dentro de los objetivos de dichas actividades preventivas, se incluye la reducción de la movilidad y el uso obligatorio de cubrebocas, para detener precisamente los contagios por coronavirus.

*“Proteger la vida de los ciudadanos, que es un derecho humano de primera jerarquía, es el propósito de las acciones emprendidas”* para enfrentar la pandemia, habría dicho el gobernador Miguel Ángel Riquelme. Las prevenciones se estrecharían en puestos fijos, vialidades urbanas, carreteras estatales y en los accesos a las ciudades, donde además habría trabajo de perifoneo y recorridos públicos de vigilancia sanitaria.

Desde entonces se ha anunciado la participación de personal de salud de los tres niveles de gobierno, del ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado.

En reunión interinstitucional celebrada el 25 de abril en San Pedro de las Colonias, se acordó darle mayor difusión al contenido del decreto, de forma que quienes participan en los filtros de revisión sanitaria, según afirmó la administración de Riquelme Solís, conozcan los fundamentos de sus actuaciones, con el fin de que atiendan e informen bien a la ciudadanía.

El mandatario se ha referido al reconocimiento que la ONU hizo a su administración por ser la primera Entidad *en desarrollar varios principios de derechos humanos en un decreto sobre medidas de emergencia*, como son las relacionadas con la movilidad ciudadana durante la actual cuarentena.

Sin embargo, constantemente los medios de comunicación tradicionales, tanto como los digitales, siguen dando cuenta de deficiencias en el funcionamiento de dichos filtros sanitarios, en donde, a diferencia de lo que expresa la ONU, con la deficiente protección por parte de la autoridad sanitaria, se estaría violando precisamente el derecho a la salud.

Pero, más allá de estas consideraciones, es importante que este Poder Legislativo se asegure de que los puestos de revisión sanitaria, con motivo de la presencia del Covid-19, cuenten con el personal calificado, tal como previsto en el referido acuerdo, y ofrezcan un servicio eficiente, de ahí nuestro apoyo a favor de la iniciativa contenida en el presente dictamen.

**CUARTO. –** Que, en virtud de todo lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora considera procedente la iniciativa contenida en el presente dictamen, por lo que expide y, a su vez, pone a consideración del Honorable Congreso del Estado, el siguiente...

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO:** Se **reforma** la fracción XI y el segundo párrafo del artículo 275, se **adiciona** la fracción XII del artículo 275, de la **Ley Estatal de Salud** para quedar como sigue:

Artículo 275…

I a la X…

XI. **Los filtros de control sanitario;**

**XII. Las demás de índole sanitaria que determinen las autoridades sanitarias del Estado, que puedan evitar que se causen o continúen causando riesgos o daños a la salud.**

**Son de inmediata ejecución las medidas de seguridad señaladas en el presente artículo.**

**Las autoridades encargadas de implementar la medida de seguridad prevista en la fracción XI, deberán establecer los protocolos necesarios para su ejecución.**

**…**

**ARTÍCULOS TRANSITORIOS**

**PRIMERO. -** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

**SEGUNDO. -** Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 19 de junio de 2020**

**COMISIÓN DE SALUD, MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y AGUA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES**  **(SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen que expide la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, de la LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto planteada por la Diputada Graciela Fernández Almaraz, del Grupo Parlamentario “General Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por el que se adiciona el artículo 8º bis a la Ley de Prevención del Suicidio para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de incluir a la Secretaría de Educación en las acciones concretas para prevenir el suicidio; y...**

**RESULTANDO**

**PRIMERO. -** Que, en la sesión celebrada por el Pleno del Congreso del Estado, el día 06 de mayo de 2020, se desahogó lo relativo al trámite de la primera lectura de la iniciativa contenida en el presente dictamen.

**SEGUNDO. -** Que, en la citada sesión, por acuerdo del Pleno, se turnó a estaComisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, dicha iniciativa para los efectos de hacer el estudio correspondiente y proceder, en su caso, a su aprobación.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. -** Que esta Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, con fundamento en los artículos 100, 163, 164 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO. -** Que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 8 bis a la Ley de Prevención del Suicidio para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de incluir a la Secretaría de Educación en las acciones concretas para prevenir el suicidio, de conformidad con la siguiente...

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

*El suicidio inicia con la formación y enlace de las ideas en sus diversas expresiones como lo son por ejemplo los pensamientos autodestructivos, la planeación de un acto que pone en riesgo su vida y el deseo de muerte, lo que provoca intentos suicidas y culminan desgraciadamente en la mayoría los casos en suicidios consumados.*

*Por lo que se considera un problema de salud mental, muchos médicos y especialistas en la materia así lo definen, está situación viene derivada de un sufrimiento psíquico que padecen las personas, que los imposibilita a la hora de tener que solucionar conflictos en sus relaciones interpersonales, en sus finanzas, en relación con el sentirse solos o bien los imposibilita para salir de situaciones de acoso o abusos psicológicos.*

*Dichas situaciones pueden ser patologías psiquiátricas, de las cuales existe una gran variedad, entre ellas se catalogan los trastornos mentales como la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno límite de la personalidad, las adiciones por ejemplo el alcoholismo o el abuso de sustancias.*

*Los efectos del suicidio van más allá del acto en sí, esto repercute y tiene un efecto duradero en el círculo familiar, amigos y entre la misma comunidad, donde este resida, es decir es un problema de salud pública también.*

*Este problema no discrimina, por extracto social, por creencias religiosas, por género, por edad, es una situación que debemos tratarla como lo que es un problema de salud, del cual se puede salir victorioso llevando un buen tratamiento, para ayudar y sanar a las personas, siempre y cuando se haya detectado a tiempo, se trate con la privacidad y ética adecuada, en un ambiente en donde la persona con ideas suicidas se sienta contenida y protegida por su entorno más cercano.*

*Existen factores que pueden contribuir a que una persona tome la decisión de atentar contra su vida, ciertos estados psicológicos pueden incrementar este riesgo, como las ideas de minusvalía y desesperanza, depresión y ansiedad. También influye una pobre capacidad de resolver problemas, pérdida de capacidades que antiguamente se tenían y poco control de los impulsos.*

*De la investigación que llevamos a cabo para motivar y justificar esta iniciativa, encontramos que existen factores de riesgo que influyen en las personas con ideas suicidas, siendo principalmente los siguientes:*

* *Depresión y otros trastornos de salud mental.*
* *Trastorno por consumo de alcohol o drogas o contar con antecedentes en la familia de dichas adiciones.*
* *Violencia familiar, incluyendo abuso físico o sexual.*
* *Padecer alguna enfermedad médica, incluyendo dolor crónico.*
* *Acontecimientos estresantes de la vida, como pérdida del trabajo, problemas financieros, pérdida de un ser querido o ruptura de una relación, entre otros.*
* *Antecedentes familiares de problemas de salud mental, así como antecedentes de suicidios dentro de la misma.*
* *Contar con armas en el hogar.*
* *Estar o haber salido recientemente de prisión o cárcel.*

*También los especialistas en el tema de salud mental afirman que algunas personas pueden compartir sus pensamientos suicidas con los demás, pero otros intentan ocultarlo, es por ello que esto último puede que algunos signos sean más difíciles de detectar, nos hablan también de algunas señales de advertencia del suicidio, las cuales incluyen:*

* *Sentirse vacío, sin esperanza, atrapado o como si no hubiera alguna razón para vivir, o tener un dolor insoportable.*
* *Dormir muy poco o demasiado, mostrar cambios de humor extremos.*
* *Consumir más alcohol o drogas.*
* *Actuar ansioso o agitado o comportarse en forma imprudente.*
* *Hablar sobre querer morir o suicidarse.*
* *Hablar sobre ser una carga para los demás, mostrar ira o hablar de buscar venganza.*
* *Alejarse de la familia o amigos o sentirse aislado.*
* *Hacer un plan o buscar una manera de suicidarse, por ejemplo, hacer una búsqueda en internet.*
* *Comprar un arma o acumular píldoras.*
* *Decir adiós a los seres queridos, poner las cosas en orden.*

*De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, en el 2016, el suicidio fue la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años en todo el mundo, más del 79% de los suicidios en todo el mundo tuvieron lugar en países de ingresos bajos y medianos, datos de recabados de la OMS.*

*En el mundo se estima que, los casos de suicidio han aumentado un 60% en los últimos 50 años, y en la actualidad se estima que cada minuto ocurre un suicidio en el mundo, además que debemos de recalcar que de cada 1 que logra terminar con su vida existen 20 personas que lo intentan, las estadísticas acerca de los intentos de suicidio también son preocupantes y más aún si se considera que por cada caso de intento de suicidio que recibe ayuda en un centro de salud, se estima que existen cuatro intentos no reportados, ni atendidos.*

*En México, el INEGI indica que los adolescentes son el grupo más vulnerable, por problemas relacionados con la depresión, ansiedad, daño neurológico, consumo de sustancias adictivas y problemáticas tanto económicas como familiares, que esto desencadena con un sinfín de problemas y posteriormente el suicidio.*

*De acuerdo con la información recopilada por el INEGI, destaca que el índice de mortalidad en Coahuila por suicidios tiene una incidencia de 6.5 personas por cada cien mil habitantes coahuilenses, es por ello por lo que es de vital importancia seguir avanzando en normas que coadyuven a lograr detectar a tiempo este tipo de conductas suicidas, principalmente entre los adolescentes, a fin de brindarles atención y tratamiento oportuno.*

*El principal reto que tenemos todos como coahuilenses es tratar de ayudar a quienes están pasando por este problema de salud, y aún más difícil es detectar a las personas que tienen esta situación, pero no lo han desarrollado o han navegado con el silencio interior.*

*Como se ha mencionado en otras ocasiones en esta misma tribuna, una primera línea son los profesores, maestros y todo aquel personal que trabaja en las instituciones educativas, quienes pasan gran parte del día, y escuchan muchas de las ocasiones las pláticas ya sean en general o particularmente de un adolescente.*

*Es por eso que, esta propuesta propone integrar a la Secretaría de Educación del Estado para que coadyuve a detectar y posteriormente, remita a los estudiantes en riesgo, para que sean atendidas por el personal altamente especializado en nuestro Estado, y tratar de mitigar y sofocar las repercusiones que conlleva el perder un ser querido, mediante el acto del suicidio.*

*Cabe destacar que esta prevención será mediante un esfuerzo colectivo en el cual se incluyen alumnos, padres de familia, personal docente y plantilla que labora en las entidades educativas públicas y privadas, el Sistema Estatal de Salud y todos aquellos a quienes le corresponda el tratamiento, prevención y reinserción con la sociedad.*

*La OMS advierte que el confinamiento obligatorio, causado por la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, se podrían aumentar los índices de depresión y suicidios.*

*Por lo que los conmino a realizar una reflexión profunda, con el objeto de seguir generando estrategias adecuadas para la atención de esta triste situación que permea en todos los niveles de nuestra población, y juntos apoyar esta iniciativa de reforma que presento ante ustedes compañeros.*

**TERCERO. –** Que los diputados y las diputadas integrantes de la Comisión de Salud, Medio Ambiente Recursos Naturales y Agua, una vez analizada la referida exposición de motivos, estamos de acuerdo con sus términos, en razón de las siguientes consideraciones:

En principio, es pertinente enfatizar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley en comento, son funciones de la Secretaría de Salud, entre otras, las siguientes:

*Capacitar, de manera sistemática y permanente en la detección oportuna de personas en situación de riesgo suicida, al personal del sistema estatal de salud, así mismo, a los docentes del sector educativo...* (fracción I), igualmente, *establecer convenios de colaboración coordinada contra el suicidio con instituciones públicas, entidades de la iniciativa privada, centros de socorro, asociaciones religiosas, asociaciones de padres de familia, sociedad civil y organizaciones no gubernamentales* (fracción IV)*; encabezar a un órgano multidisciplinario e interinstitucional, en el que estarán representados, además del sector salud, la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación y el sistema estatal de seguridad pública, bajo el objetivo de evaluar y fortalecer periódicamente las acciones derivadas de la observancia de la presente ley...* (fracción VI).

Por otra parte, se prevé en el *“artículo 8º.- Como acciones concretas para inhibir el suicidio, la Secretaría de Salud deberá: I. Poner en práctica programas periódicos de capacitación al personal médico, operativo y administrativo de los sectores educativo, gubernamental y penitenciario, principalmente, a fin de desarrollar entre ellos habilidades preventivas.”*

*Artículo 9º.- Sin menoscabo de su economía o dignidad, toda persona que presente conducta suicida, o bien, que haya fallado en su intento de suicidarse****,*** *tiene derecho a recibir de manera inmediata atención médica profesional por parte de personal calificado de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.*

*Artículo 13.- En el caso de tratarse del intento de suicidio de un niño, niña o adolescente, es obligación de la institución médica que primero conozca del caso dar aviso del incidente* *a la* *Procuraduría de Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), en aras de salvaguardar sus derechos.*

*Artículo 16.- La capacitación incluirá un programa de formación a los trabajadores de la salud, educación, seguridad, justicia y centros de reinserción social, esto, en las distintas áreas de atención preventiva, tanto como en los servicios terapéuticos a los deudos de los suicidas.*

Como se puede advertir en el articulado que se cita de la Ley de Prevención del Suicidio en la Entidad, el contenido de este ordenamiento expresa de manera implícita la importancia de los diferentes sectores sociales en el combate a la incidencia suicida, entre los cuales destaca el sistema educativo, al cual se le asignan diversas responsabilidades en dicha tarea.

Con todo y eso, la iniciativa en cuestión sugiere señalar, de manera más detallada y directa, el involucramiento de la autoridad educativa y del personal docente y administrativo de los planteles escolares, en la prevención del suicidio, lo cual nos parece congruente si vemos que, según estadísticas oficiales, la población en edad temprana, principalmente los adolescentes y jóvenes, es el segmento más proclive a cometer suicidio.

Con base en el presente análisis, es que respaldamos el proyecto en comento, al que sólo le hemos hecho algunos ajustes menores que no afectan el sentido del mismo, con objeto de que los textos propuestos sean más compatibles con el contenido de la ley.

**CUARTO. –** Que, en virtud de todo lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora considera procedente la iniciativa contenida en el presente dictamen, por lo que expide y, a su vez, pone a consideración del Honorable Congreso del Estado, el siguiente...

**PROYECTO DE DECRETO**

**UNICO. -** Se adiciona el artículo 8º bis a la Ley de Prevención del Suicidio para el Estado de Coahuila de Zaragoza,para quedar como sigue:

**Artículo 8º bis. -** Como acciones concretas para prevenir el suicidio, la Secretaría de Educación deberá:

1. Realizar, bajo la asesoría de la autoridad sanitaria, un plan y estrategias de prevención de la conducta suicida en estudiantes.
2. Promover la capacitación del personal del sector educativo que lleve a cabo la Secretaría de Salud, para la detección oportuna de niños, niñas, y adolescentes con tendencia suicida, o bien, que hayan intentado suicidarse.
3. Elaborar un protocolo para la atención oportuna a alumnos con conducta suicida.
4. Realizar campañas de orientación en el sector educativo, principalmente en zonas con alto índice de suicidios entre su población, que vayan dirigidos directamente a su comunidad educativa.
5. Impulsar la participación de madres y padres de familia o tutores, en acciones para prevenir el suicidio.
6. Las demás que se considere necesarias poner en marcha para el beneficio de toda la comunidad escolar.

**T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.** Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 19 de junio de 2020**

**COMISIÓN DE SALUD, MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y AGUA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES**  **(SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen que expide la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, de la LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto planteada por la Diputada María Esperanza Chapa García, del Grupo Parlamentario “General Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por el que se reforma la fracción IX del Inciso B y el Inciso D del artículo 5, así como la fracción VI del artículo 11 de la Ley para la Prevención, Atención y Combate del Sobrepeso y Obesidad para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de adecuar el reenvío correcto de las acciones que corresponden al instituto estatal de la juventud acorde a la legislación estatal vigente, y...**

**RESULTANDO**

**PRIMERO. -** Que, en la sesión celebrada por el Honorable Pleno del Congreso del Estado, el día 03 de junio de 2020, se desahogó lo relativo al trámite de la primera lectura de la iniciativa contenida en el presente dictamen.

**SEGUNDO. -** Que, en la citada sesión, por acuerdo del Pleno, se turnó a estaComisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, dicha iniciativa para los efectos de hacer el estudio correspondiente y proceder, en su caso, a su aprobación.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. -** Que esta Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, con fundamento en los artículos 100, 163, 164 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO. -** Que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del Inciso B y el Inciso D del artículo 5, así como la fracción VI del artículo 11 de la Ley para la Prevención, Atención y Combate del Sobrepeso y Obesidad para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de adecuar el reenvío correcto de las acciones que corresponden al instituto estatal de la juventud acorde a la legislación estatal vigente, en conformidad con la siguiente...

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

*El 19 de diciembre de 2017, se publicó mediante Decreto 1136, en el Periódico Oficial del Estado la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila, en la misma se suprimió la entonces Secretaría de la Juventud y se atribuye a la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, el formular y ejecutar políticas encaminadas al desarrollo integral de la juventud que impacten e incidan en los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo.*

*Derivado de lo anterior, el 12 de enero de 2018 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto por el que se crea el Instituto Estatal de la Juventud, órgano desconcentrado, con autonomía técnica y de gestión adscrito a la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social.*

*El Instituto Estatal de la Juventud se creó con la finalidad de impulsar la transversalidad del diseño, operación, desempeño y ejecución de políticas de la juventud, mediante la coordinación de esfuerzos, de recursos humanos y materiales para el alcance de los objetivos comunes y que logren acciones complementarias a favor de la juventud Coahuilense.*

*En virtud de lo anterior, se llevaron a cabo reformas a diversos ordenamientos legales para adecuar las disposiciones en el que se hacía referencia a la Secretaría de la Juventud, sin embargo la* *Ley para la Prevención, Atención, y Combate del Sobrepeso y Obesidad para el Estado de Coahuila aún sigue haciendo referencia a la Secretaría de la Juventud, por lo que esta iniciativa, plantea reformar el artículo 5 Inciso B, fracción IX, el Inciso D, y el artículo 11 fracción VI, que aún señalan a la Secretaría de la Juventud, a fin de adecuar el reenvío correcto de las acciones que corresponden al Instituto Estatal de la Juventud.*

*Por ello la importancia de que nuestros ordenamientos jurídicos sean coincidentes con las metas y objetivos que se buscan en nuestro Estado para el bienestar social.*

**TERCERO. –** Que los diputados y las diputadas integrantes de la Comisión de Salud, Medio Ambiente Recursos Naturales y Agua, una vez analizada la referida exposición, estamos de acuerdo con sus términos, mismos que concuerdan con las siguientes consideraciones:

En principio, consideramos que, para los efectos de una buena coordinación interinstitucional, pero sobre todo para que la aplicación de los programas de bienestar social de la Entidad, es necesario precisar en el marco legal respectivo, tanto los términos, como la designación de cada instancia a través de la cual deben canalizarse los apoyos de asistencia y desarrollo.

Ciertamente, el Icojuve favorece la transversalidad del diseño, operación, desempeño y ejecución de políticas públicas para el desarrollo de la juventud, con base en la capitalización de esfuerzos y la coordinación de recursos humanos y materiales. En función de ello, se plantea precisar que no es a una secretaría, sino a un instituto, al que debería referirse la Ley para la Prevención, Atención, y Combate del Sobrepeso y Obesidad para el Estado de Coahuila.

**CUARTO. –** Que, en virtud de todo lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora considera procedente la iniciativa contenida en el presente dictamen, por lo que expide y, a su vez, pone a consideración del Honorable Congreso del Estado, el siguiente...

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO. -** Se reforma la fracción IX del Inciso B y el Inciso D del artículo 5, así como la fracción VI del artículo 11 de la Ley para la Prevención, Atención y Combate del Sobrepeso y Obesidad para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 5.** …

A. …

I. a la X. …

B. …

I. a la VIII …

IX. Trabajar conjuntamente con **el Instituto Estatal de la Juventud** en la elaboración de estadísticas que permitan cuantificar la población estudiantil afectada por el sobrepeso y la obesidad y consecuentemente sirvan para la elaboración de los planes y programas estatales de prevención y combate al sobrepeso y la obesidad;

De la X. a la XII. …

C. …

De la I. a la VI. …

D. A través de**l Instituto Coahuilense de la Juventud**:

De la I. a la VI. …

E. …

De la I**.** a la VI. …

**Artículo 11. …**

De la I. a la V. …

VI. El o la Titular **del Instituto Estatal de la Juventud**;

De la VII. a la X. …

…

…

…

…

**ARTÍCULOS TRANSITORIOS**

**ÚNICO. -** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 19 de junio de 2020**

**COMISIÓN DE SALUD, MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y AGUA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES**  **(SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen de la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, de la LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto planteado por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, por el que se reforma la fracción III del artículo 65 A de la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en materia de campañas de esterilización.**

**RESULTANDO**

**PRIMERO. -** Que, en la sesión celebrada por el Honorable Pleno del Congreso del Estado, el día 21 de mayo de 2020, se desahogó lo relativo al trámite de la primera lectura de la iniciativa contenida en el presente dictamen.

**SEGUNDO. -** Que, en la citada sesión, por acuerdo del Pleno, se turnó a estaComisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, dicha iniciativa para los efectos de hacer el estudio correspondiente y proceder, en su caso, a su aprobación.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. -** Que esta Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, con fundamento en los artículos 100, 163, 164 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO. -** Que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 65 A de la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en materia de campañas de esterilización, en conformidad con la siguiente...

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

*De acuerdo con académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestro país es el que tiene mayor población de perros en América Latina sin embargo menos de la mitad de ellos tiene hogar o refugio. Según datos de la Secretaría de Salud en el año 2012 existían alrededor de 22 millones de animales de compañía en su mayoría perros, de los cuales más de 10 millones vivían en las calles.*

*En el año 2019 la cifra se ha incrementado de forma alarmante pues de acuerdo con la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (AMMVEPE) se estima que en la actualidad hay alrededor de 28 millones de animales de compañía de los cuales el 70%, es decir unos 25 millones, se encuentran en las calles, además esta cifra crece un 20% anual, según las estimaciones de la asociación.*

*En el mismo sentido, el Director de la asociación civil “Defensa Animal”, Emmanuel Pedraza, sostiene que anualmente más de 500 mil perros y gatos son abandonados en las calles, debido a los dueños que pierden interés o no pueden cuidarlos. A esto se le suma también la cantidad de animales de compañía que se pierden y no son encontrados por sus dueños, lo cual incrementa el número de animales en las calles.*

*Además, los especialistas en el cuidado de los animales señalan que una de las causas de origen de que haya animales callejeros se debe a la falta de empatía de los mexicanos hacia el sufrimiento de otros seres, las pocas políticas públicas para su protección y a una cultura sobre la responsabilidad social que se ha deteriorado por la falta de valores.*

*Más allá del sufrimiento y la baja expectativa de vida y salud de los animales en situación de calle, existe también un problema de salud pública debido a los focos de infección que pueden surgir de los animales callejeros tales como enfermedades, plagas de parásitos y el exceso de heces en las vías públicas, por ejemplo, en la ciudad de México se calcula que al día se recogen cerca de 700 toneladas de materia fecal canina.*

*Los seres humanos somos los principales responsables de que existan animales en situación de calle, de hecho, en 1994, la Organización Panamericana de la Salud cambió el título de perro callejero a “perro de dueño irresponsable”, ya que la gran mayoría de los estos animales llegan a la vía pública debido a que sus propietarios ya no los quieren en sus casas porque dejan de considerarlos graciosos o tiernos, o porque no pueden asumir los gastos que implica el cuidado del animal; además de los que llegan a la calle por extravío.*

*En nuestro Estado existen cerca de 300 mil animales en situación de calle de acuerdo a las estimaciones realizadas por las asociaciones civiles locales, lo que nos obliga como legisladores a presentar respuestas claras que ayuden a disminuir esta problemática en cada uno de los municipios de la entidad. Por lo que, sin dejar de hacer énfasis en la esterilización responsable por parte de los dueños y en las campañas de concientización sobre la adopción en lugar de la venta de animales de compañía; se deben establecer mecanismos para que las autoridades realicen acciones de esterilización de animales en situación de calle con el objetivo de disminuir su número y así evitar el sufrimiento innecesario de las nuevas camadas y los problemas de salud que las mismas puedan generar.*

**TERCERO. –** Que los diputados y las diputadas integrantes de la Comisión de Salud, Medio Ambiente Recursos Naturales y Agua, una vez analizada la referida exposición, estamos de acuerdo con sus términos, mismos que concuerdan con las siguientes consideraciones:

Como se sabe, no es la primera vez que, a través de una iniciativa, como la que comprende el presente dictamen, se busca resolver los serios problemas sanitarios y ambientales derivados de la proliferación de animales que, abandonados por sus dueños, pasan a estar en situación de calle.

Los esfuerzos institucionales para controlar la acelerada reproducción de animales de compañía, que luego se ven deambulando en la vía pública o en el medio rural, siguen siendo insuficientes.

Dos ejemplos de ello son las campañas de esterilización de mascotas que regularmente realiza la Secretaría de Salud estatal, así como el Programa de Cuidado y Protección de Animales de Compañía, encabezado por la Secretaría de Medio Ambiente en Coahuila.

Esta última dependencia reconoce públicamente que, en la Entidad, seis de cada 10 familias cuentan con por lo menos un perro, en tanto, estima que en el Estado existen más de un millón de animales, de los cuales alrededor de 300 mil viven en condiciones de calle, lo cual representa un problema de salud pública, al ser trasmisores de enfermedades y de parásitos.

En cuanto a los problemas ambientales que ocasionan las mascotas, principalmente perros y gatos, figuran: la producción de heces fecales al aire libre, la contaminación por basura que dispersan, el consumo que hacen de fauna silvestre y, en algunos casos, de ganado, entre otros.

En Coahuila, tanto la SMA, como la SS, cuentan con diversas estrategias para contrarrestar la reproducción canina y felina, así mismo, para procurar el bienestar animal.

Desde luego, dichos programas pueden ser implementadas en coordinación con los 38 gobiernos municipales de Coahuila, tal como ha sucedido en algunas de sus regiones, lo que, de paso, significaría una reducción en la carga económica que significarían para los ayuntamientos, por ejemplo, las campañas de vacunación, desparasitación y esterilización de mascotas.

Se trata, pues, de disminuir el nacimiento no deseado de perros y gatos, mediante campañas de esterilización y prevención de zoonosis; de educar a los dueños de animales de compañía en el fomento de una cultura de respeto a las mascotas; de promover la estricta observancia de la Ley de Protección de Animales de Coahuila de Zaragoza; y de sumar la participación de los profesionales de la salud animal, de asociaciones civiles y de personas que, de manera voluntaria, luchan por el bienestar animal.

**CUARTO. –** Que, en virtud de todo lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora considera procedente la iniciativa contenida en el presente dictamen, por lo que expide y, a su vez, pone a consideración del Honorable Congreso del Estado, el siguiente...

**PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO. -** Se reforma la fracción III del artículo 65 A de la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 65 A.-** Los ayuntamientos del Estado que cuenten o no cuenten con un Centros de Control Animal, Antirrábicos o análogos podrán convertirse en CARA, que, además de las funciones que les confieren esta ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, tendrán como objetivos generales y actividades principales, las siguientes:

I. ... a la II. ...

III. Reducir y controlar la reproducción de los animales en situación de calle por medio de la esterilización obligatoria. **Cada municipio, en la medida de sus posibilidades y en coordinación con las secretarías de Salud y de Medio Ambiente, realizará por lo menos una campaña de esterilización obligatoria cada seis meses, debiendo poner algún tipo de distintivo a cada animal en situación de calle que haya sido esterilizado, así como llevar un reporte del número y condición de salud de los animales esterilizados mismo que será presentado a la Secretaría de Salud;**

IV. ... a la XVI. ...

**ARTÍCULOS TRANSITORIOS**

**PRIMERO. -** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO. -** Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 19 de junio de 2020**

**COMISIÓN DE SALUD, MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y AGUA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES**  **(SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen de la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto planteada por la Diputada Blanca Eppen Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se modifica la fracción I del artículo 25; y, se modifica el artículo 31, todos de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza, en relación con la elaboración e implementación de programas, políticas y acciones para la adaptación al cambio climático derivados del Plan Estatal y de esta Ley, atendiendo de manera especial a las poblaciones ubicadas en zonas de alto riesgo, y se deberán respetar irrestrictamente los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones de vulnerabilidad y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional, además de promover la participación ciudadana, procurando siempre la equidad de género y la representación de las poblaciones más vulnerables al cambio climático, indígenas, personas con discapacidad, académicas e investigadores para la toma de decisiones, y...**

**RESULTANDO**

**PRIMERO. -** Que, en la sesión celebrada por el Honorable Pleno del Congreso del Estado, el día 16 de octubre de 2018, se desahogó lo relativo al trámite de la primera lectura de la iniciativa contenida en el presente dictamen.

**SEGUNDO. -** Que, en la citada sesión, por acuerdo del Pleno, se turnó a estaComisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, dicha iniciativa, para los efectos de hacer el estudio correspondiente y proceder, en su caso, a su aprobación.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. -** Que esta Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, con fundamento en los artículos 100, 163, 164 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO. -** Que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción I del artículo 25; y, se modifica el artículo 31, todos de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza, en relación con la elaboración e implementación de programas, políticas y acciones para la adaptación al cambio climático derivados del Plan Estatal y de esta Ley, atendiendo de manera especial a las poblaciones ubicadas en zonas de alto riesgo, y se deberán respetar irrestrictamente los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones de vulnerabilidad y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional, además de promover la participación ciudadana, procurando siempre la equidad de género y la representación de las poblaciones más vulnerables al cambio climático, indígenas, personas con discapacidad, académicas e investigadores para la toma de decisiones, conforme a la siguiente...

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

*La Organización de las Naciones Unidas establece que el mayor desafío de la humanidad en el siglo XXI será el Cambio Climático porque “amenazan la producción de alimentos, hasta el aumento del nivel del mar, que incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas, los efectos del cambio climático son de alcance mundial y de una escala sin precedentes. Si no se toman medidas drásticas desde hoy, será más difícil y costoso adaptarse a estos efectos en el futuro”.*

*Estos cambios han afectado el clima a nivel mundial; por ello, Naciones Unidas en su Quinto Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático presentaron el siguiente resultado:*

* *De 1880 a 2012 la temperatura media mundial aumentó 0,85 °C.*
* *Los océanos se han calentado, las cantidades de nieve y hielo han disminuido y el nivel del mar ha subido. De 1901 a 2010, el nivel medio mundial del mar ascendió 19 cm, ya que los océanos se expandieron debido al hielo derretido por el calentamiento. La extensión del hielo marino en el Ártico ha disminuido en cada década desde 1979, con una pérdida de 1,07 × 106 km2 de hielo cada diez años.*
* *Debido a la concentración actual y a las continuas emisiones de gases de efecto invernadero, es probable que el final de este siglo presencie un aumento de 1–2° C en la temperatura media mundial en relación con el nivel de 1990 (aproximadamente 1,5–2,5°C por encima del nivel preindustrial). Así, los océanos se calentarán y el deshielo continuará. Se estima que el aumento del nivel medio del mar será de entre 24 y 30 centímetros para 2065 y de 40 a 63 centímetros para 2100 en relación al periodo de referencia de 1986-2005. La mayoría de los efectos del cambio climático persistirán durante muchos siglos, incluso si se detienen las emisiones.*

***Marco Legal Internacional y nacional***

*El Estado Mexicano ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el 11 de marzo de 1993, con el “el compromiso cuantitativo de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para regresar, en el año 2000, a los volúmenes de emisión que tenían en 1990 y mantenerse en esos niveles”.*

*También las Naciones Unidas propusieron el Protocolo de Kyoto, que nuestro país ratifico en el año 2000. Dicho Protocolo establece que se adoptaran las siguientes medidas:*

1. *Fomento de la eficiencia energética en los sectores pertinentes de la economía nacional;*
2. *Protección y mejora de los sumideros y depósitos de los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, teniendo en cuenta sus compromisos en virtud de los acuerdos internacionales pertinentes sobre el medio ambiente; promoción de prácticas sostenibles de gestión forestal, la forestación y la reforestación;*
3. *Promoción de modalidades agrícolas sostenibles a la luz de las consideraciones del cambio climático;*
4. *Investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y renovables de energía, de tecnologías de secuestro del dióxido de carbono y de tecnologías avanzadas y novedosas que sean ecológicamente racionales;*
5. *Reducción progresiva o eliminación gradual de las deficiencias del mercado, los incentivos fiscales, las exenciones tributarias y arancelarias y las subvenciones que sean contrarios al objetivo de la Convención en todos los sectores emisores de gases de efecto invernadero y aplicación de instrumentos de mercado;*
6. *Fomento de reformas apropiadas en los sectores pertinentes con el fin de promover unas políticas y medidas que limiten o reduzcan las emisiones de los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal;*
7. *Medidas para limitar y/o reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal en el sector del transporte;*
8. *Limitación y/o reducción de las emisiones de metano mediante su recuperación y utilización en la gestión de los desechos así como en la producción, el transporte y la distribución de energía;*

*Finalmente, la Naciones Unidas estableció el Acuerdo de París que propone:*

1. *Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático;*
2. *Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos; y*
3. *Situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.*

***Marco legal nacional***

*Derivado de loa anterior es que el ámbito federal se publicó el 6 de junio de 2012, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Cambio Climático, que tiene por objeto:*

1. *Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero;*
2. *Regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para lograr la estabilización de sus concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático considerando en su caso, lo previsto por el artículo 2o. de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y demás disposiciones derivadas de la misma;*
3. *IV. Reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente a los efectos adversos del cambio climático, así como crear y fortalecer las capacidades nacionales de respuesta al fenómeno;*
4. *Fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e innovación y difusión en materia de adaptación y mitigación al cambio climático;*
5. *Establecer las bases para la concertación con la sociedad, y*
6. *Promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono. Regular las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático;*

*En dicha ley en comento se establece incluir dos principios básicos: los derechos de las personas que pueden encontrarse en condiciones de vulnerabilidad y la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres ante el cambio climático, como podemos verlo en los siguientes dos artículos:*

*Artículo 26. En la formulación de la política nacional de cambio climático se observarán los principios de:*

*…*

*Al adoptar medidas para hacer frente al cambio climático, se deberán respetar irrestrictamente los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones de vulnerabilidad y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional.*

*Asimismo, en su artículo 71 indica que:*

*Artículo 71. Los programas de las Entidades Federativas en materia de cambio climático establecerán las estrategias, políticas, directrices, objetivos, acciones, metas e indicadores que se implementarán y cumplirán durante el periodo de gobierno correspondiente de conformidad con la Estrategia Nacional, el Programa, las disposiciones de esta Ley y las demás disposiciones que de ella deriven.*

*Los programas de las Entidades Federativas se elaborarán al inicio de cada administración, procurando siempre la equidad de género y la representación de las poblaciones más vulnerables al cambio climático, indígenas, personas con discapacidad, académicos e investigadores.*

***El Cambio Climático en Coahuila***

*De acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Coahuila, el diagnóstico que presenta por los efectos del cambio climático será el siguiente:*

1. *Los escenarios climáticos proyectados para nuestro Estado no son nada favorables, si no se atiende la problemática lo antes posible, Coahuila será un Estado en donde las sequias, los incendios forestales y las inundaciones serán eventos cotidianos, presentándose temperaturas altas de hasta los 450C y heladas de hasta los -220C en zonas donde nunca se habían presentado temperaturas tan extremas como estas.*
2. *El sector agrícola será uno de los más afectados por el Cambio Climático, se calcula que la superficie con buenas condiciones para cultivos se reducirá hasta un 50%; esto claramente afectará la posibilidad de alimentar a una población creciente y demandante de recursos.*
3. *Se estima que 50% de la vegetación sufrirá modificaciones así mismo se proyecta la pérdida de hasta el 30% de las especies endémicas del Estado.*

*Por ello, se publicó en el Diario Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza -el 25 de enero de 2013-, la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza.*

*Dicha Ley tiene seis objetivos generales, que son:*

1. *El fomento de una cultura de información, atención, prevención y cuidado de las personas que promueva una transformación en los hábitos y costumbres a fin de disminuir su condición de vulnerabilidad frente a los efectos del fenómeno de cambio climático;*
2. *El establecimiento de las bases de coordinación entre autoridades de los distintos órdenes de gobierno y con la sociedad, en acciones de adaptación y mitigación al fenómeno de cambio climático;*
3. *El establecimiento de políticas públicas estatales con criterios transversales en materia de adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático;*
4. *La promoción continua de las acciones de adaptación y mitigación al fenómeno de cambio climático derivadas del trabajo y coordinación entre sociedad y gobierno;*
5. *El aprovechamiento y cuidado de los recursos naturales mediante la concientización y participación ciudadana y el desarrollo del sector productivo de la entidad, en un esquema de sustentabilidad, y*
6. *Asegurar que las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático coadyuvan al desarrollo económico y mejora la calidad de vida de los ciudadanos.*

*En nuestra Ley se establece de forma general la atención de los grupos vulnerables, toda vez que así lo indica el siguiente artículo:*

*Artículo 25. Los recursos del Fondo serán aplicados a:*

1. *La elaboración e implementación de programas, políticas y acciones para la adaptación al Cambio climático derivados del Plan Estatal y de esta ley, atendiendo de manera especial a las poblaciones ubicadas en zonas de alto riesgo y a los grupos vulnerables;*

*Si bien la legislación de nuestra entidad establece de manera general la atención a la población de los grupos vulnerables pero no atiende ni el principio de “Al adoptar medidas para hacer frente al cambio climático, se deberán respetar irrestrictamente los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones de vulnerabilidad y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional” que se establece en el artículo 26 de la Ley General de Cambio Climático.*

*Tampoco nuestra Ley incluye que “Los programas de las Entidades Federativas se elaborarán al inicio de cada administración, procurando siempre la equidad de género y la representación de las poblaciones más vulnerables al cambio climático, indígenas, personas con discapacidad, académicos e investigadores”, tal y como lo propone la Ley General de Cambio Climático en su artículo 71.*

*Es importante mencionar que el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, publicó el 25 de julio de 2018, sus Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México en la que hace la recomendación a la federación y a todas las entidades federativas en materia de cambio climático, para que:*

*44. El Comité recomienda al Estado parte que:*

*…*

1. *De conformidad con su recomendación general núm. 37 (2018) sobre las dimensiones de género de la reducción del riesgo de desastres en el contexto del cambio climático, fomente la participación de las mujeres en los procesos de adopción de decisiones y recuperación en casos de desastre en todos los planos, especialmente el local, y siga esforzándose por incorporar una perspectiva de género en todas las políticas de desarrollo sostenible y en la reducción del riesgo de desastres y la gestión posterior a los desastres.*

*Es por las consideraciones y razonamientos expuestos, que estimo necesario la presente iniciativa, a efectos de realizar las propuestas necesarias para que esta sea la prioridad de atender las personas en condiciones de vulnerabilidad, pero incluyendo la perspectiva de género a las políticas que atienden el problema del cambio climático en nuestra entidad.*

**TERCERO. –** Que los Diputados y las Diputadas integrantes de la Comisión de Salud, Medio Ambiente Recursos Naturales y Agua, una vez analizada la referida exposición, estamos de acuerdo con sus términos, mismos que concuerdan con las siguientes consideraciones:

El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023 contempla una estrategia general de desarrollo dividida en cuatro ejes rectores, los cuales dieron nombre a los grandes capítulos del Plan. En cada uno de ellos se plantean objetivos generales y específicos, así como diversas estrategias.

En particular, el tercero de estos ejes plantea, de manera textual, un desarrollo económico sustentable, con base en *el fomento económico, el empleo, el desarrollo urbano y la protección al medio ambiente*.

En materia de desarrollo social incluyente y participativo, se prevé atender los temas de pobreza, oportunidades de desarrollo, servicios educativos, científicos, tecnológicos, culturales, deportivos, de salud y los relacionados con la vivienda y los servicios básicos. En este rubro, se hace alusión, específicamente, a la *atención a personas en situación de vulnerabilidad y el desarrollo integral de las familias*.

Tal como lo ventila el Plan Estatal de Desarrollo vigente, la extensión territorial, el clima, la topografía y variedad de ecosistemas, aunado a la vocación industrial, minera y energética, plantean un verdadero reto para consolidar a Coahuila como un estado sustentable, donde el derecho de sus habitantes a disfrutar de un medio ambiente sano sea garantizado.

El 17 por ciento de la superficie del Estado se encuentra bajo un esquema de protección a la biodiversidad; ocupa el tercer lugar, a nivel nacional, en extensión de áreas naturales protegidas; así mismo, tiene el segundo sitio en superficie bajo manejo sustentable, mediante Unidades de Manejo para la Conservación y el Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre, con 23.9% del territorio.

Sin embargo, Coahuila presenta importantes pasivos ambientales. En este sentido, es digno destacar, con datos oficiales, que la actividad industrial y la generación de energía eléctrica mediante el consumo de carbón sitúan al Estado en el segundo lugar nacional de emisiones de gases de efecto invernadero, con una generación de 13 toneladas por habitante. En efecto, estos gases son los principales generadores del fenómeno que conocemos como cambio climático.

La propia administración pública estatal reconoce incluso que *el servicio de disposición de residuos domésticos municipales cubre 78.2% de la población, lo que coloca a la entidad en el lugar 19 en el contexto nacional*.

Por otro lado, el agua, como recurso natural, muestra un alto grado de presión, de tal manera que alrededor de 35% de los acuíferos están sobreexplotados y 88% de la población se ubica en zonas con acuíferos en esta condición. Es preciso procurar el equilibrio de los acuíferos, explorar nuevas fuentes de abastecimiento, eficientar la distribución e impulsar programas de agua limpia y uso racional del agua, pues además se tiene un déficit de 15 cabeceras municipales sin tratamiento de aguas residuales.

Dada esta realidad en materia de desarrollo económico sustentable y de estrategias para reducir los impactos negativos al medio ambiente y atenuar el efecto invernadero, consideramos que la presente iniciativa propone alternativas claras, desde el quehacer legislativo, a la necesidad de redoblar los esfuerzos institucionales y sociales en la atención a las recomendaciones de la ONU y de las autoridades ambientales nacionales para revertir el cambio climático, también desde la perspectiva de equidad de género y de que ello abone al cumplimiento de los derecho humanos.

**CUARTO. –** Que, en virtud de todo lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora considera procedente la iniciativa contenida en el presente dictamen, por lo que expide y, a su vez, pone a consideración del Honorable Congreso del Estado, el siguiente...

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO. -** Se modifica la fracción I del artículo 25; y, se modifica el artículo 31, todos de la Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

Artículo 25...

I. La elaboración e implementación de programas, políticas y acciones para la adaptación al Cambio climático derivados del Plan Estatal y de esta ley, atendiendo de manera especial a las poblaciones ubicadas en zonas de alto riesgo y **se deberán respetar irrestrictamente los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones de vulnerabilidad y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional;**

…

Artículo 31. El Gobierno del Estado promoverá la participación de la ciudadanía, **procurando siempre la igualdad de género y la representación de las poblaciones más vulnerables al cambio climático, indígenas, personas con discapacidad, académicos e investigadores** para la toma de decisiones y en el desarrollo, implementación y verificación del Plan Estatal, así como en las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático.

**…**

**TRANSITORIO**

**ÚNICO. -** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 19 de junio de 2020**

**COMISIÓN DE SALUD, MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y AGUA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES**  **(SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen que expide la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, de la LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto planteada por la Diputada Diana Patricia González Soto, del Grupo Parlamentario “General Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por el que se reforma la fracción I del artículo 8 de la Ley de Prevención del Suicidio para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de fortalecer las acciones de prevención de la Secretaría de Salud, en materia educativa, y...**

**RESULTANDO**

**PRIMERO. -** Que, en la sesión celebrada por el Pleno del Congreso del Estado, el día 03 de junio de 2020, se desahogó lo relativo al trámite de la primera lectura de la iniciativa contenida en el presente dictamen.

**SEGUNDO. -** Que, en la citada sesión, por acuerdo del Honorable Pleno, se turnó a estaComisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, dicha iniciativa, para los efectos de hacer el estudio correspondiente y proceder, en su caso, a su aprobación.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. -** Que esta Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, con fundamento en los artículos 100, 163, 164 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO. -** Que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 8 de la Ley de Prevención del Suicidio para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de fortalecer las acciones de prevención de la Secretaría de Salud, en materia educativa, en conformidad con la siguiente...

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

*El suicidio es considerado un problema de salud pública y es un fenómeno que se ha presentado a través de los años a la vista de varias comunidades, en la mayoría de los casos nunca se observa más allá de los factores superficiales, son diversos los factores que pueden llevar a tomar esa decisión. La violencia familiar, acoso escolar, personas con capacidades diferentes, personas con un trastorno depresivo que no son atendidos, el suicidio no solo tiene causas personales, sino que obedece también a factores socioculturales que influyen en la conducta de las personas.*

*La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el acto suicida como “todo hecho por el que el individuo se causa así mismo una lesión, cualquiera que sea el grado de intención letal y del conocimiento del verdadero móvil”.*

*El suicidio está considerado mundialmente como una de las variantes de violencia con más prevalencia. No obstante, es preciso destacar que este hecho no constituye simplemente la muerte del individuo, sino que existen unos comportamientos y acciones específicas que se encuentran alrededor del mismo, y que preceden a la propia muerte en sí. Resulta crucial conocer estas conductas a nivel profesional, para poder detectarlas a tiempo y de esta forma intervenir de manera inmediata, con el fin de evitar que continúe la evolución de este proceso que resulta tan devastador.*

*Es un hecho que el suicidio es un proceso que comienza con previas manifestaciones en la conducta del sujeto, las cuales denotan un deseo de autodestrucción. Estos pensamientos van en aumento dentro de la mente del suicida hasta que se perpetra el acto.*

*Las ideas suicidas se consideran como un conjunto de pensamientos previos, intrusivos y reiterativos que un individuo presenta sobre como provocar su propia muerte, de qué manera realizarlo, que objetos usar, que métodos utilizar y en qué circunstancias hacer el hecho.*

*Las conductas suicidas abarcan una gran serie de actividades y/o actitudes que los individuos pueden llegar a evidenciar. Es importante destacar que las conductas suicidas no se tratan de conductas estáticas, sino que el sujeto puede atravesar distintas etapas o situaciones a lo largo del tiempo, alguna de estas situaciones son posibles ser identificadas como lo son: autolesiones, intento de suicidio, suicidio frustrado, accidental e intencional.*

*La Organización Mundial de la Salud, en su estudio del suicidio 2019, informa que ochocientos mil personas en el mundo se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo, el suicidio se puede producir a cualquier edad, en el 2016 fue la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años de edad en todo el mundo.*

*El suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años, después de los accidentes de tránsito.*

*Los suicidios son prevenibles. Existen medidas que se pueden adoptar entre la población, la coordinación y colaboración de múltiples sectores de la sociedad, como lo son la salud, la educación, el trabajo, el comercio, la justicia, el derecho, la defensa, las políticas y los medios de comunicación.*

*Estadísticas del INEGI para la Prevención del Suicidio presentada en el 2019. Por entidad federativa, se observa que Chihuahua tiene la tasa más alta con 10.7 suicidios por cada 100 mil habitantes; le siguen Aguascalientes y Sonora con 10.1 y 9.1, respectivamente. Por otro lado, las entidades con la tasa más baja de suicidio son Guerrero (1.9), Veracruz (2.6) y Oaxaca (3.1)., según comportamiento de indicador de 2014 a 2017.*

*En México, las estadísticas de mortalidad de 2017 reportan que, del total de fallecimientos, 6,494 fueron por lesiones autoinfligidas, lo que constituye 0.9% del total de muertes. Con ello, la tasa de suicidios 2017 es de 5.2 fallecimientos por cada 100 mil habitantes.*

*Respecto al sexo de las personas fallecidas por suicidio, los hombres presentan una tasa de suicidio de 8.7 por cada 100 mil hombres y en tanto las mujeres es de 1.9 por cada 100 mil.*

*En cuanto a las edades de los fallecidos, los jóvenes de 20 a 24 años ocupan la tasa más alta con 9.3 por cada 100 mil jóvenes entre estas edades, en cuanto las mujeres el grupo de 15 a 19 años presentan la tasa de suicido de 4.0 por cada 100 mil mujeres.*

*Esto señala que los jóvenes son quienes están más vulnerables a tener un comportamiento suicida. Algunos expertos señalan que esto se debe a que hay características biológicas, psicológicas y sociales muy específicas que experimentan los adolescentes y jóvenes que los llevan a padecer mayores dificultades emocionales.*

*La tasa estandarizada de suicidios por entidad federativa 2017, indica que Coahuila tiene 6.3 por cada 100 mil habitantes, siendo 5.2 la media nacional.*

*Por considerarse un tema importante y con estadísticas delicadas en Coahuila, el Gobierno de Estado se ha ocupado en establecer en diversas legislaciones la atención y prevención del suicidio en varios ámbitos de la comunidad, como lo es en la Ley Estatal de Educación, en la cual recientemente se reformo un párrafo referente a la labor de trabajo social en el ámbito educativo siendo la primera instancia que busque la atención de los problemas personas de cualquier alumnos para intervenir oportunamente con protocolos de prevención del suicidio.*

*Así mismo en Coahuila, contamos con una Ley de Prevención del Suicidio, la cual tiene como objetivo la disminución de la incidencia del suicidio a través de la atención preventiva, mediante el tratamiento adecuado a las víctimas potenciales y que es objeto de este proyecto de iniciativa.*

*Es por ello que consideramos necesario fortalecer las estrategias de prevención, ante la conducta suicidio dentro del ámbito educativo, en este sentido la prevención requiere ofrecer a través de la capacitación e instalación de protocolos de actuación entornos de información general sobre la conducta suicida, por lo que los programas periódicos de capacitación al sector educativo de los niveles de educación básica y media de sistema educativo estatal y dirigidos a los trabajadores sociales especialistas en psicología como lo indica la Ley Estatal de Educación o mediante cualquier otro profesionista deberán de establecer en conjunto con la Secretaría de Salud los protocolos de prevención del suicidio, con el objeto de intervenir oportunamente en la atención de los alumnos.*

**TERCERO. –** Que los diputados y las diputadas integrantes de la Comisión de Salud, Medio Ambiente Recursos Naturales y Agua, una vez analizada la referida exposición de motivos, estamos de acuerdo con sus términos, mismos que concuerdan con las siguientes consideraciones:

Valoramos la observación que se hace en cuanto al preocupante dato estadístico relativo a que, a nivel nacional, los jóvenes de entre 20 y 24 años ocupan la tasa más alta de suicidios, con 9.3 por cada 100 mil jóvenes con dichas edades. Respecto de las mujeres, el grupo con edades de 15 a 19 años presentan un índice de 4.0 por cada 100 mil jovencitas.

Con base en dicha realidad, compartimos la inquietud de reforzar las políticas, estrategias y programas preventivos contemplados en la “ley anti suicidio” de nuestro Estado, considerando que precisamente entre los estudiantes de secundaria, preparatoria y de nivel superior, se acentúan las ideas suicidas, pues en este segmento poblacional prevalecen características biológicas, psicológicas y sociales muy particulares, que suelen conducir a adolescentes y jóvenes a severas crisis emocionales.

Damos la bienvenida a esta nueva iniciativa, por aportar un importante elemento que viene a reforzar la efectividad en la aplicación del ordenamiento en comento, en conjunto con la Ley Estatal de Educación, que también contempla la implementación de protocolos dentro del ámbito educativo afines a los propósitos del presente proyecto de reforma.

Convenimos con la proponente en que se requieren mejores entornos de asistencia e información sobre la conducta suicida, por lo que los referidos programas de capacitación deben establecer, en conjunto con la Secretaría de Salud, protocolos de prevención del suicidio, con el objeto de intervenir oportunamente en la atención de los alumnos de educación básica, media e incluso del nivel superior, si consideramos los rangos de edad citados en la información estadística aportada en dicha iniciativa.

**CUARTO. –** Que, en virtud de todo lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora considera procedente la iniciativa contenida en el presente dictamen, por lo que expide y, a su vez, pone a consideración del Honorable Congreso del Estado, el siguiente...

**PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO. –** Se reforma la fracción I del artículo 8 de la Ley de Prevención del Suicidio para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

Artículo 8º.- ...:

1. Poner en práctica programas periódicos de capacitación al personal médico, operativo y administrativo de los sectores educativo, gubernamental y penitenciario, principalmente, a fin de desarrollar entre ellos habilidades preventivas. **Los programas periódicos de capacitación al sector de educación básica y media del Sistema Educativo Estatal, serán impartidos a los trabajadores sociales especialistas en psicología o a través de un área especializada en la materia dentro del plantel educativo, a fin de establecer en conjunto los protocolos de prevención del suicidio, con el objeto de intervenir oportunamente en la atención de los alumnos como lo establece la Ley Estatal de Educación.**

II. a la IV. ...

**ARTÍCULOS TRANSITORIOS**

**ÚNICO. -** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 19 de junio de 2020**

**COMISIÓN DE SALUD, MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y AGUA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES**  **(SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |

**DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO DE LA LXI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PRESENTADA POR LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO "GRAL. ANDRÉS S. VIESCA", DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DEL DIPUTADO JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA, POR LA QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 9º DE LA LEY PARA EL FOMENTO A LA GASTRONOMÍA EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON EL OBJETO DE GENERAR VÍNCULOS ENTRE LA PRODUCCIÓN GANADERA, AGRÍCOLA, PESQUERA Y APÍCOLA DEL ESTADO CON EL COMERCIO E INDUSTRIA GASTRONÓMICA LOCAL.**

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.–** Que en la Décima Cuarta Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones, del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, celebrada el día 27 de mayo de 2020, se presentó la iniciativa que motiva este Dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se adiciona la fracción XIV al artículo 9º de la Ley para el Fomento a la Gastronomía en el Estado de Coahuila de Zaragoza, fue turnada a esta Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, para efectos de hacer el estudio correspondiente y proceder, en su caso, a la realización del dictamen respectivo.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, con fundamento en los artículos 83, 95, 116 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, es competente para emitir el presente Dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la Iniciativa mediante la cual se plantea una reforma a la Ley para el Fomento a la Gastronomía en el Estado de Coahuila de Zaragoza, se realizó bajo la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

El desarrollo económico de un Estado se manifiesta de formas diversas. Cada comunidad tiene un sector o industria que posee la fortaleza y dinamismo para crear riqueza y mantener la prosperidad o bienestar económico de sus habitantes. Es tarea de los gobiernos identificarlas e implementar políticas públicas que las consoliden en el mercado. Uno de estos rubros es el turismo.

Hay distintos tipos de turismo, uno de ellos es el turismo gastronómico, uno de los segmentos más dinámicos y con mayor crecimiento de la industria. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, más de un tercio del gasto de un turista está dedicado a la comida. Esta organización define al turismo gastronómico como “un tipo de actividad turística que se caracteriza porque el viajero experimente durante su viaje actividades y productos relacionados con la gastronomía del lugar.” Además de las experiencias culinarias auténticas, puede incluir actividades como visitar productores locales, participar en festivales gastronómicos o asistir a clases de cocina. Uno de los subtipos de este turismo es el enoturismo o turismo del vino, una rama en la que Coahuila ha destacado con premios internacionales.

Esto es una muestra de la inmensa riqueza de nuestra entidad, que se ha abierto camino a nivel nacional e internacional gracias a la capacidad de invención de sus ciudadanos y a la grandeza de nuestros recursos. Combinados, ambos factores nos vuelven referente en la producción de alimentos de gran calidad. Conocedores de ello, en los años recientes se han sumado esfuerzos y recursos para rescatar, impulsar, salvaguardar y difundir la gastronomía coahuilense.

El Programa Estatal de Desarrollo Económico y Turismo 2017-2023, expedido por el gobierno que encabeza Miguel Ángel Riquelme Solís lo confirma. En este documento se plasma la ruta para incrementar la competitividad de nuestro Estado y fortalecer la economía de las familias coahuilenses, incluyendo el aprovechamiento del potencial turístico de todas las regiones, la vinculación entre los diversos actores del sector público y privado, y el impulso al emprendedurismo.

Bajo ese enfoque, una de las primeras acciones realizadas por el Gobernador del Estado, fue la instalación del Grupo de Trabajo Estatal de la Política de Fomento de la Gastronomía de Coahuila, presidido por la entonces Secretaría de Economía y Turismo, con el objetivo de fortalecer la cocina tradicional y el arte culinario como un atractivo turístico y de desarrollo. Poco después, siguió la expedición de la Ley para el Fomento a la Gastronomía en el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada el 09 de abril de 2019.

La unión de estrategias ha logrado que cada vez más personas visiten el Estado para conocer nuestro patrimonio cultural y disfrutar nuestra gastronomía. Como resultado, el turismo internacional se ha acrecentado pasando en 2011 de 455,576 visitantes internacionales a 1,638,787 visitantes en 2016, es decir, un incremento de 1,182,211 turistas de diferentes partes del mundo en los últimos seis años. Asimismo, el turismo nacional, es decir, los visitantes que vienen a Coahuila de las diferentes entidades federativas pasó de 2,793,018 turistas en 2011 a 4,437,138 en 2016, un crecimiento del 59% en seis años.

Los turistas exigen cada día productos más locales, ecológicos, biológicos y sostenibles. En Coahuila se han creado inigualables platillos con productos locales e ingredientes que son la base de verdaderas maravillas culinarias. Esto se logra en parte gracias a la fortaleza nativa de las regiones que producen algunos granos, frutas y productos animales, lo que ha llevado a ubicarse dentro de los primeros lugares en México en cuanto a producción se refiere.

Así, la entidad figura como uno de los principales motores en la producción de alimentos y la industria agroalimentaria dentro del país. A nivel nacional ocupamos el segundo lugar en la producción de leche de vaca con el 12.1% del volumen nacional, en producción de leche de caprino con el 27.3% y melón con el 20.8% del total nacional. Tercer lugar, en la producción de nuez con 14,500 toneladas, algodón con más de 104 mil pacas y carne de caprino con el 9.8% del volumen nacional.

La inmensa extensión territorial de nuestro Estado permite al gobierno planificar de forma estratégica las diferentes fortalezas que las regiones ofrecen. Así, de acuerdo con el Programa Estatal de Desarrollo Rural, 2017-2023, se identificaron las siguientes:

• En agricultura, se ha logrado excelentes resultados en muchos cultivos como: el melón, el algodón, la uva, la nuez, la manzana, el tomate, el sorgo y maíz forrajero, en cuanto a la agricultura y fruticultura.

• En el tema ganadero, hay excelentes productores de leche de vaca y sus derivados, de leche de cabra, de carne de caprinos, de becerros al destete para exportación en pie, y en avicultura destacamos también.

• En lo referente a pesca en el Estado y a pesar de contar con muy pocos cuerpos de agua, estamos fortaleciendo esta actividad para beneficio económico y alimenticio de la zona.

• La apicultura en Coahuila apoya la producción agrícola y frutícola, pues las abejas son el agente fundamental para que se realice la polinización de esos cultivos.

• En lo forestal, las especies no maderables como la lechuguilla, la candelilla, el orégano y el mezquite también son un referente y fortaleza para muchos recolectores en el estado de Coahuila.

Estamos convencidos que para posicionar con éxito a la industria gastronómica se requiere entablar una estrecha colaboración entre las instituciones y todos los eslabones necesarios para desarrollar los productos turísticos: los productores agrícolas y ganaderos, los pescadores, los distribuidores, los mercados, los restaurantes, los chefs, los hoteles y las asociaciones sectoriales. En ese sentido, se debe vincular de forma permanente con el desarrollo de los productores coahuilenses, de forma tal que se apoye al sector rural y se impulse a nuestros productores al siguiente nivel, aprovechando mejor nuestros recursos naturales y fortaleciendo los ingresos de las comunidades ejidales de Coahuila.

Por todo lo anterior, la presente iniciativa busca reformar la Ley para el Fomento a la Gastronomía en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objetivo de incorporar como uno de los objetos de la Política Estatal el promover la vinculación de las actividades ganaderas, agrícolas, pesquera y apícola del Estado con el comercio e industria gastronómica local para satisfacer la demanda de insumos.

Con ello contribuiríamos de forma efectiva a reactivar estos sectores tan importantes, que actualmente atraviesan una situación crítica debido a las consecuencias económicas que está dejando a su paso la pandemia ocasionada por el COVID-19.

**TERCERO. –** Que esta Comisión se avocó al estudio de la iniciativa presentada, así como a la relevancia que conlleva realizar la reforma planteada a la Ley para el Fomento a la Gastronomía en el Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo que consideramos viable realizar las siguientes consideraciones:

1. Que en el pasado reciente, esta Legislatura reconoció, mediante un Decreto Legislativo, a la Comida Tradicional Coahuilense como Patrimonio Cultural Intangible de nuestro estado, lo que destaca la labor de las Diputadas y Diputados que la integramos por fomentar el turismo gastronómico en nuestra entidad.
2. Que el trabajo de esta Legislatura también ha sido en torno a promover el turismo enológico en Coahuila, mismo que se vio reflejado al incluir el Enoturismo y la promoción que esto conlleva, en la Ley de Turismo de nuestro Estado.
3. Que la función que cumple el sector primario no siempre es visible y reconocida, pero en situaciones excepcionales, como las actuales, es cuando se pone en valor el gran trabajo que realiza. No en vano, cubre una de las necesidades básicas del ser humano para poder sobrevivir: la alimentación. Puede considerarse el punto de partida de cualquier economía. Las actividades que se desarrollan en él son imprescindibles. Es el trabajo de agricultores, ganaderos, pescadores, entre otros, y todo el sector de la distribución, lo que hace posible que todos los días dispongamos de productos que llevar a la mesa.

**CUARTO. –** Que, en virtud de todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, estiman pertinente emitir el siguiente:

**D I C T A M E N**

**ÚNICO.-** Se adiciona la fracción XIV al artículo 9º de la Ley para el Fomento de la Gastronomía en el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 9.- …**

**l.** a **XIII.** …

**XIV.** Generar vínculos entre la producción ganadera, agrícola, pesquera y apícola del Estado con el comercio e industria gastronómica local para satisfacer la demanda de insumos, y promocionar la cocina sostenible con productos de proximidad.

**T R A N S I T O R I O S**

**Primero.** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**Segundo.** Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.

Así lo acuerdan las y los Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo de la LXI Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los 10 días del mes de junio de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO,**

**COMPETITIVIDAD Y TURISMO.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | |
| **DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ**  **(SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
|  |  |  |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
|  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
|  |  |  |
| **DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
|  |  |  |

**DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO DE LA LXI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA” DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DEL DIPUTADO JESÚS BERINO GRANADOS, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON EL OBJETO DE FOMENTAR Y ESTIMULAR LA GENERACIÓN DE EMPLEOS ALINEADOS CON LOS PARAMETROS DE ‘TRABAJO DECENTE’ ESTABLECIDO POR LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO.**

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.–** Que en la Décima Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones, del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, celebrada el día 29 de abril de 2020, se presentó la iniciativa que motiva este Dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma la fracción I del artículo 4 y el inciso a) de la fracción III del artículo 11 y se adiciona la fracción XXII al artículo 3 de la Ley de Desarrollo Económico del Estado de Coahuila de Zaragoza, fue turnada a esta Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, para efectos de hacer el estudio correspondiente y proceder, en su caso, a la realización del dictamen respectivo.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, con fundamento en los artículos 83, 95, 116 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, es competente para emitir el presente Dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la Iniciativa mediante la cual se plantea una reforma a la Ley de Desarrollo Económico del Estado de Coahuila de Zaragoza, se realizó bajo la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Inicio citando las palabras de Ban Ki-moon, entonces Secretario General de las Naciones Unidas, en el Día Mundial de la Justicia Social, (2014):

“La experiencia nos enseña que el crecimiento económico por sí solo no es suficiente. Debemos hacer más para empoderar a las personas gracias al trabajo decente, apoyarlas a través de la protección social, y garantizar que las voces de los pobres y los marginados sean escuchadas.”

Por lo que unir el crecimiento económico con un trabajo decente, potencializa el desarrollo de nuestra economía, y es aquí donde encontramos la oportunidad de incluir el término “trabajo decente” en nuestra Ley de Desarrollo Económico del Estado de Coahuila de Zaragoza.

El trabajo decente es la oportunidad que tiene el trabajador de acceder a un empleo productivo que le genere un ingreso justo, que le dé la certeza de contar con la seguridad de un lugar de trabajo en un entorno sostenible, que cuente con la protección social para él y su familia, que le proporcione las mejores herramientas para su desarrollo personal e integración social a través de la capacitación constante; que le permita también expresar sus ideas, organizarse y participar de una manera activa en la decisiones que afecten su vida y tener acceso a la igualdad de oportunidades.

Aunado a lo anterior, cuando un trabajador ve todos estos elementos integrados, genera mayor productividad en el desempeño de sus labores y en consecuencia propicia el crecimiento de la empresa para la cual trabaja.

Teniendo esto presente, se origina una base sólida para que los gobiernos se sitúen en posibilidades de impulsar economías sostenibles, innovadoras, dinámicas y enfocadas en las personas, justo como lo está llevando a cabo nuestro Gobierno Estatal.

El trabajo decente se ha convertido en un objetivo universal, que se ha integrado a las declaraciones de los derechos humanos, a las resoluciones de la ONU, asimismo se ha incluido en el Documento de la Cumbre Mundial (2005), en la Segunda Década de las Naciones Unidas para la erradicación de la pobreza (2008-2017), en la Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible (2011) y en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (2015).

En nuestro país, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 2, integró la definición de trabajo decente, de la siguiente manera y cito textual:

“Artículo 2o.- Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales.

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.

El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva…”.

Es importante que esta definición se encuentre dentro de nuestra Ley de Desarrollo Económico del Estado, por que como lo hemos expresado, un trabajo decente, trae como consecuencia la calidad en el trabajo, elevando así la competitividad productiva de nuestro Estado.

La presente administración del Ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, dentro de su Plan de Desarrollo 2017-2023, integra en su tercer Eje Rector “Desarrollo Económico Sustentable”, la promoción económica, la competitividad, así como el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresa y por supuesto el empleo, entre muchos otros objetivos de este eje.

Sus acciones se han orientado a diversificar la inversión en los distintos sectores productivos, también se ha buscado la inversión en países de América del Norte, Europa y Asia, teniendo como resultados indicadores muy alentadores, ya que en lo que va de la administración se han consolidado 76 nuevos proyectos de inversión nacional y extranjera, por aproximadamente 3,282 millones de dólares, con el firme compromiso de generar más de 29,135 nuevos empleos.

Por lo que, en el tercer trimestre del 2019, nos situamos en el tercer lugar a Nivel Nacional, por el 3% de crecimiento económico que tuvo nuestra entidad.

Nuestro Estado goza de una estabilidad laboral sin precedentes, en los primeros 10 meses del 2019, se generaron 14,799 nuevos empleos formales, según el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Sumado a lo anterior y como muestra de la justicia y la paz laboral que son elementos indispensables para la creación de empleos, en el marco del centenario de la Organización Internacional del Trabajo, el Gobernador del Estado en el primer mes de este año, firmó el Pacto Coahuila 2020, siendo el primer Estado en el país en firmar dicho documento, colocándose como un referente en América Latina.

Pacto que integra compromisos de la OIT, de los tres poderes del Estado, de los 3 niveles de Gobierno, de la sociedad civil, de los sindicatos y de las camáras empresariales, con el fin de promocionar el diálogo social y el trabajo decente, con el objetivo de afianzar un Estado estable y productivo.

Por lo anteriormente expuesto, es que justificamos y motivamos, nuestra propuesta de reforma a la Ley de Desarrollo Económico del Estado, para que seamos coherentes con la materia laboral que nos rige, integrando no solo un término, sino la inclusión de condiciones bajo las cuales los empleadores deben proporcionar a sus trabajadores un trabajo decente, para que a su vez los empleadores gocen de incentivos y estímulos, haciendo con ello una perfecta unión, para un óptimo desarrollo económico de nuestra entidad.

**TERCERO. –** Que esta Comisión se avocó al estudio de la iniciativa presentada, así como a la relevancia que conlleva realizar las reformas planteadas a la Ley de Desarrollo Económico del Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo que consideramos viable realizar las siguientes consideraciones:

1. Que es dable considerar la reforma planteada, sobre todo por el hecho que señala el ponente al referir que dicho término ya se encuentra contemplado en la Ley Federal del Trabajo.
2. Que en la Recomendación General No. 41, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con fecha 14 de octubre de 2019, y publicada en el Diario Oficial de la Federación, el ente advierte que “El trabajo decente debe basarse en los cuatro objetivos estratégicos de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), todos de igual importancia: a) promover el empleo creando un entorno institucional y económico sostenible; b) adoptar y ampliar medidas de protección social seguridad social y protección de los trabajadores- que sean sostenibles y adoptadas a las circunstancias nacionales; c) promover el diálogo social y el tripartismo; y, d) respetar, promover y aplicar los principios y derechos fundamentales en el trabajo, que revisten particular importancia, no sólo como derechos sino también como condiciones propicias, necesarias para la plena realización de todos los objetivos estratégicos”.

Así mismo señala que “el trabajo decente es posible de alcanzar con un eficiente sistema de justicia laboral, ya que la justicia laboral aplica directamente los principios y derechos fundamentales en el trabajo contemplados en normas internacionales o en la legislación nacional, los cuales son esenciales para la dignidad humana de los trabajadores y, sobre todo, para el cumplimiento de los derechos individuales y colectivos de la persona trabajadora. Asimismo, es importante la difusión de la legislación y los incentivos para su debido cumplimiento”.

1. Que, el artículo 2º de la Ley Federal del Trabajo, además de lo que señala el ponente en la Exposición de Motivos de la Iniciativa que funda el presente dictamen, particulariza el trabajo decente en los siguientes casos: a) trabajadores del campo; b) trabajadores domésticos; c) trabajo en el extranjero; d) trabajo en minas, y e) trabajo de menores.

**CUARTO. –** Que, en virtud de todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, estiman pertinente emitir el siguiente:

**D I C T A M E N**

**ÚNICO.** Se reforma la fracción I del artículo 4 y el inciso a) de la fracción III del artículo 11 y se adiciona la fracción XXII al artículo 3 de la Ley de Desarrollo Económico del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 3.-**

**I. a la XXI.-…**

**XXII.- Trabajo decente:** Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.

**Artículo 4.-**

I. Promover y generar nuevas fuentes de empleos y consolidar las existentes, **con trabajo decente para todos;**

**II. a la XIII. ...**

**Artículo 11.-**

**I. a la II. …**

**III. …**

a. Promover **un trabajo decente, con** la capacitación y adiestramiento de los trabajadores, para generar una planta productiva que permita a las empresas una producción con mejor calidad de manera más eficaz y eficiente, lo cual se llevará a cabo conforme a los lineamientos que al efecto emita el Servicio Nacional de Empleo a través de la Secretaría del Trabajo.

**T R A N S I T O R I O S**

**Primero.** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**Segundo.** Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.

Así lo acuerdan las y los Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo de la LXI Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los 10 días del mes de junio de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO,**

**COMPETITIVIDAD Y TURISMO.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | |
| **DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ**  **(SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
|  |  |  |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
|  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
|  |  |  |
| **DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
|  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión para la Igualdad y no Discriminación, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a una Iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se adicionan y modifican diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza**; con objeto de reforzar las facultades de las autoridades con acciones encaminadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y modernizar las disposiciones relacionadas a los derechos laborales y de maternidad;** Planteada por la Diputada Diana Patricia González Soto, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben; y,

**RESULTANDO**

**PRIMERO. -**  Que en Sesión celebrada por el pleno el día 23 de abril del presente año, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto mencionada en el proemio de este dictamen

**SEGUNDO. -** Que en cumplimiento a dicho acuerdo, la iniciativa fue remitida a esta Comisión para efectos de estudio y dictamen.

**TERCERO. -** Que conforme a lo dispuesto en el Artículo 103, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, esta Comisión es competente para dictaminar sobre dicha propuesta; y,

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO. -** Que la propuesta de la promovente se basa en realizar diversas modificaciones y adiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con la finalidad de:

I.- “Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual”;

II.- “Establecer convenios de coordinación y concertación con los sectores públicos, sociales y privados en materia de asistencia social”;

III.- “La promoción de campañas de información en los centros de trabajo sobre los tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres, así como de las instituciones que atienden a las víctimas”;

IV.- “Reconocer e incentivar a las empresas a través de la Secretaría del Trabajo, que se abstengan de solicitar a las mujeres certificados de no gravidez”; Y,

V.- “Garantiza que se brinde atención medica obstétrica, ginecológica y pediátrica durante el embarazo, parto y puerperio a las mujeres recluidas en centros penitenciarios;”

Entre otros derechos.

**SEGUNDO. -** Que la iniciativa mencionada se funda en las siguientes consideraciones:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

En varios medios informativos se ha advertido sobre el aumento de la violencia doméstica y sobre la desigualdad que enfrentamos las mujeres en esta contingencia por el Covid-19.

La representante de ONU-Mujeres en México, indicó que de acuerdo a los datos que la propia Secretaría de Gobernación ha emitido, existe un 25% aproximado de incremento de llamadas a la línea 911 que atienden a víctimas de violencia de género, mientras que la Red Nacional de Refugios (RNR) ha recibido al menos un 60% más de solicitudes de apoyo.

Actualmente hemos sido testigos de la discriminación hacia el personal femenino de salud, el impacto económico en los hogares sostenido por una mujer, la desigualdad del rol de cuidados que tiene que enfrentar la mujer, así como el incremente de sufrir violencia domestica por el confinamiento de las personas en sus hogares.

El instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) se encuentra alertando sobre el incremento de las agresiones dentro del ámbito familia derivado de la crisis sanitaria por el contagio del coronavirus, según estadísticas en el rubro de salud el 80 por porciento de las enfermeras son mujeres, un 40 por ciento de los médicos son mujeres por lo que las mujeres están enfrentando un doble rol tanto laboral como familiar.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, tiene por objeto el establecer la coordinación entre la Federación, las entidades Estatales y los Municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación.

La violencia contra las Mujeres es cualquier acción u omisión, basada en su género, que nos cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público.

Existen diversas formas, modalidades y manifestaciones de la violencia, por lo que se buscó contar con una legislación especializada en atenderla desde una perspectiva de género que consiste en una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres.

Se propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género.

Se promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; para contribuir a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones.

Se busca empoderar a la Mujer, eliminando cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades.

En lo que respecta a nuestro Estado de igual manera, se cuenta con una Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la cual establece los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a la:

• La igualdad formal;

• La igualdad sustantiva;

• El interés superior de la niñez;

• El libre desarrollo de la personalidad;

• La no revictimización;

• El respeto a la dignidad humana de las mujeres;

• La no discriminación;

• La libertad de las mujeres; y la

• La transversalidad de la perspectiva de género;

• La integración de las mujeres a la vida democrática y productiva del Estado; y

• La debida diligencia.

En cuanto a las acciones para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las Mujeres, las entidades públicas en nuestro Estado, tienen funciones específicas que atender estableciendo políticas públicas encaminadas a eliminar la violencia contra la mujeres por ello que consideramos importante adicionar la elaboración de protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación y atención a la discriminación ya sea por feminicidios, trata de personas o por la comisión de cualquier delito, en este mismo rubro establecimos la importancia de informar a la víctima de algún delito cuando la persona generadora de violencia recupere su libertad a fin de que esté en condiciones de tomar las medidas pertinentes, esto es, que conozcan que quien les ha vulnerado sus derechos ejerciendo violencia sobre ella, ha recuperado su libertad, para que de considerarlo pertinente, acuda a las Instituciones correspondientes para garantizar que no habrá reincidencia por parte de la persona generadora de violencia.

Así mismo las acciones del Estado y los municipios estarán encaminadas a la prevención, efectuando acciones de asistencia social, por lo que consideramos importante adicionar que sea a través de convenios de coordinación con los sectores públicos, sociales o privados.

En cuanto a la distribución de competencias en materia de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia es importante facultar a través de la Secretaría del Trabajo, el promover campañas informativas en los centros de trabajo, dando a conocer el tipo y modalidades de violencia contra las mujeres, informando las dependencias que existen para la atención a víctimas y reconocer e incentivas a toda empresa que se abstenga de solicitar a las mujeres certificados de no gravidez, así mismo orientar a las receptoras de violencia laboral sobre la promoción de denunciar e informar sobre las instituciones que contamos en Coahuila para defenderlas como lo es el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer.

Siguiendo en el ámbito de competencias y con el fin de establecer dentro de las responsabilidades de la Secretaría de Seguridad Pública en materia de acceso a las mujeres a una vida sin violencia, en coordinación con la Secretaria de Salud se brinde o se continúe optimizando y brindando atención medica obstétrico ginecológica y pediátrica durante el embarazo, parto y puerperio a las mujeres que se encuentran recluidas en los centros penitenciarios de nuestro Estado, esto es que la mujer recluida y su hijo o hija en gestación y posteriormente al nacimiento, reciban atención médica que les garantice el derecho a la vida y su bienestar físico, lo cual es totalmente acorde con los derechos humanos tanto de las personas privadas de su libertad por mandato judicial, como de los niños y niñas, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en las leyes que de ella se emanan.

En lo referente de la atención a víctimas contempladas en nuestra legislación vigente de la Ley de Acceso a la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, consideramos importante señalar que la atención en materia de violencia contra las mujeres consiste en brindarles atención de servicios médicos, psicológicos, jurídicos y sociales con calidad y calidez para su empoderamiento, el desarrollo integral de sus potenciales y el acceso efectivo a su derechos, era importante establecer que serán gratuitos y expeditos, con el fin de que no se pueda lucrar con las víctimas de violencia ofreciendo servicios como los citados con anterioridad aprovechándose de la vulnerabilidad en la que se encuentra la mujer violentada.

Por ultimo y con el fin de reforzar los servicios integrales que proporciona el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres del Estado, consideramos necesario que tengan acceso al servicio de las bolsas de trabajo que el Gobierno a través de la Secretaría del Trabajo pueda proporcionarles con el fin de obtener una remuneración, también consideramos importante el que no se obligue a la víctima en participar en mecanismos de mediación a través de la conciliación con la persona generadora de violencia.

**TERCERO. -** Analizada la propuesta, procedimos a realizar las siguientes consideraciones:

I.- Los objetivos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, de acuerdo con el artículo 1 de dicho ordenamiento, son:

*…establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…*

Asimismo, este ordenamiento dispone en el apartado de derechos laborales, lo siguiente:

*ARTÍCULO 11.- Constituye violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la Víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, las conductas referidas en la Ley Federal del Trabajo, la explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el período de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de género.*

*ARTÍCULO 20 Ter. - La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas:*

*…*

*XV. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, o impedir o restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia de maternidad o de cualquier otra licencia contemplada en la normatividad;*

*ARTÍCULO 46 Bis. Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social:*

*I. Impulsar acciones que propicien la igualdad de oportunidades y la no discriminación de mujeres y de hombres en materia de trabajo y previsión social;*

*…*

*IV. Diseñar y difundir materiales que promuevan la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en los centros de trabajo;*

II.- En un sentido amplio, las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto la federal como las promulgadas por las entidades federativas y la Ciudad de México, son ordenamientos que deben responder a las necesidades que se derivan y comprenden todas las modalidades de la violencia contra la mujer, además de las consecuencias que se generan por este fenómeno. Es así como los poderes legislativos deben velar por la actualización constante y en tiempo oportuno de este tipo de ordenamientos, en aras de ofrecer a las mujeres una regulación normativa eficaz, integral y acorde con las realidades que sufren y enfrentan cada día.

III.- En el cuadro que presentamos enseguida, ilustra de modo preciso las propuestas de la autora de la iniciativa y la forma en que se encuentran redactadas actualmente dichas disposiciones, con la salvedad las adiciones que plantea. No leeremos el contenido del cuadro, pero queda para consulta de los interesados:

LDAMVLVC Propuesta

|  |  |
| --- | --- |
| Artículo 12. Las entidades públicas deberán condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Del mismo modo aplicarán por todos los medios apropiados y sin demora las políticas públicas encaminadas a eliminar la violencia contra la mujer. Con este fin, deberán:  I a la XIX.. | Artículo 12. … :  I. a la XIX..- …  XX.- Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual;  XXI.- Informar de inmediato a la víctima cuando la persona generadora de violencia recupere su libertad, a fin de que esté en condiciones de tomar las medidas pertinentes. |
| Artículo 15. Las acciones que lleven a cabo el Estado y los municipios, estarán encaminadas a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y tendrán como función:  …  VI. Efectuar acciones de asistencia social que contribuyan a su pleno desarrollo, en coordinación con las entidades correspondientes, según sea el caso; | Artículo 15. … :  I. a la V..- …  VI. Efectuar acciones de asistencia social que contribuyan a su pleno desarrollo, en coordinación con las entidades correspondientes, según sea el caso; a través de convenios de coordinación y concertación con los sectores públicos, sociales y privados en la materia;  VII. a la XI. .- … |
| Artículo 48. Para cumplir con el objeto de esta Ley, la persona Titular del Ejecutivo del Estado, a través de las entidades estatales correspondientes, tendrá las siguientes atribuciones:  I a la XIV… | Artículo 48. … :  I. a la XIV. .- …  XV.- A través de la Secretaría del Trabajo, Promover campañas de información en los centros de trabajo sobre los tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres, así como de las instituciones que atienden a las víctimas;  XVI.- Reconocer e incentivar a las empresas a través de la Secretaría del Trabajo, que se abstengan de solicitar a las mujeres certificados de no gravidez;  XVII.- En Coordinación con la Secretaría del Trabajo, Orientar a las receptoras de violencia laboral sobre las instituciones que prestan atención y protección a las mujeres; y  XVIII.- Las demás previstas en esta Ley y demás disposiciones aplicables. |
| Artículo 51. Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública:  I a la IX… | Artículo 51. … :  I. a la IX. .- …    X.- La Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con la Secretaría de Salud, brinde atención medica obstétrico ginecológica y pediátrica, durante el embarazo, parto y puerperio a las mujeres recluidas en centros penitenciarios, esto es, que la mujer recluida y su hijo o hija en gestación y posterior al nacimiento, reciban atención médica que les garantice el derecho a Ia vida y su bienestar físico;  XI. Las demás previstas para el cumplimiento de esta Ley. |
| Artículo 60. Las medidas de atención en materia de violencia contra las mujeres consisten en brindar servicios médicos, psicológicos, jurídicos y sociales con calidad y calidez para su empoderamiento, el desarrollo integral de sus potencialidades y el acceso efectivo a sus derechos. | Artículo 60. Las medidas de atención en materia de violencia contra las mujeres consisten en brindar servicios médicos, psicológicos, jurídicos y sociales con calidad y calidez para su empoderamiento, el desarrollo integral de sus potencialidades y el acceso efectivo a sus derechos, los cuales deberán ser gratuitos y expeditos; |
| Artículo 68. Los servicios integrales que se proporcionan en el Centro son:  I a la V… | Artículo 68. … :  I.- a la V..- …  VI.- Las mujeres podrán acceder al servicio de las bolsas de trabajo que existan en el Estado, para tener una actividad laboral remunerada;  VII.- Las víctimas no podrán ser obligadas a participar en mecanismos de conciliación con la persona generadora de violencia;  VIII.- Informar de inmediato a la víctima cuando la persona generadora de violencia recupere su libertad, a fin de que esté en condiciones de tomar las medidas pertinentes. |

**CUARTO. –**  Es así como, luego de analizar las propuestas, consideramos que son viables y que, con algunos ajustes y precisiones que esta comisión propone, se estima que es un proyecto que cumple con plantear adecuaciones necesarias en la materia.

**QUINTO. -** Atentos a lo señalado, los integrantes de esta Comisión tenemos a bien presentar al Pleno para su aprobación el presente:

**Proyecto de Decreto**

**ARTÍCULO ÚNICO. -** Se adicionan las fracciones XX y XXI al artículo 12; se reforma la fracción VI del artículo 15; se reforma la fracción XV recorriéndola a la fracción XVIII y se adicionan las fracciones XVI y XVII al artículo 48; se reforma la fracción X recorriendo su contenido a la XI del artículo 51; se reforma el último párrafo del artículo 60; y se adicionan las fracciones VI, VII y VIII al artículo 68, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

Artículo 12…

I. a la XIX…

XX. Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual; para colaborar en los procesos de investigación con las autoridades competentes.

XXI. Informar de inmediato a la víctima cuando la persona generadora de violencia recupere su libertad, a fin de que esté en condiciones de tomar las medidas pertinentes.

…

Artículo 15. … :

I. a la V …

VI. Efectuar acciones de asistencia social que contribuyan a su pleno desarrollo, en coordinación con las entidades correspondientes, según sea el caso; a través de convenios de coordinación y concertación con los sectores públicos, sociales y privados en la materia;

VII. a la XI …

Artículo 48…

I. a la XIV …

XV. A través de la Secretaría del Trabajo, Promover campañas de información en los centros de trabajo sobre los tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres, así como de las instituciones que atienden a las víctimas;

XVI. Reconocer e incentivar a las empresas a través de la Secretaría del Trabajo, que se abstengan de solicitar a las mujeres certificados de no gravidez.

XVII. En Coordinación con la Secretaría del Trabajo, Orientar a las receptoras de violencia laboral sobre las instituciones que prestan atención y protección a las mujeres; y

XVIII. Las demás previstas en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

…

Artículo 51. … :

I. a la IX. .- …

X.- En coordinación con la Secretaría de Salud, implementar acciones para brindar atención medica obstétrica y ginecológica; así como pediátrica, durante el embarazo, parto y puerperio a las mujeres recluidas en centros penitenciarios, a fin de garantizar que la mujer recluida y su hijo o hija en gestación y posterior al nacimiento, reciban atención médica que les garantice el derecho a Ia vida y su bienestar físico;

XI. Las demás previstas para el cumplimiento de esta Ley.

…

Artículo 60. Las medidas de atención en materia de violencia contra las mujeres consisten en brindar servicios médicos, psicológicos, jurídicos y sociales con calidad y calidez para su empoderamiento, el desarrollo integral de sus potencialidades y el acceso efectivo a sus derechos, los cuales deberán ser gratuitos y expeditos.

…

Artículo 68. …

I.- a la V …

VI.- Facilitar el acceso de las mujeres al servicio de las bolsas de trabajo que existan en el Estado, para tener una actividad laboral remunerada;

VII.- Orientar a las víctimas para que no sean obligadas a participar en mecanismos de conciliación con la persona generadora de violencia;

VIII.- Informar de inmediato a la víctima cuando la persona generadora de violencia recupere su libertad, a fin de que esté en condiciones de tomar las medidas pertinentes.

…..

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan las Diputadas integrantes de la Comisión para la Igualdad y no Discriminación de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila. En la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza a los días del mes de junio de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | |
| **DIP. BLANCA EPPEN CANALES**  **(COORDINADORA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
|  |  |  |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO**  **(SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
|  |  |  |
| **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
|  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión para la Igualdad y no Discriminación, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a una Iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se modifica el contenido de la fracción VIII del artículo 8 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza**; con objeto de armonizar éste con lo dispuesto en los artículos 20 Bis y 20 Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia**. Planteada por la Diputada Blanca Eppen Canales, conjuntamente con las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional; y,

**RESULTANDO**

**PRIMERO. -**  Que en Sesión celebrada por el pleno el día 29 de abril del presente año, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto mencionada en el proemio de este dictamen

**SEGUNDO. -** Que en cumplimiento a dicho acuerdo, la iniciativa fue remitida a esta Comisión para efectos de estudio y dictamen.

**TERCERO. -** Que conforme a lo dispuesto en el Artículo 103, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, esta Comisión es competente para dictaminar sobre dicha propuesta; y,

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO. -** Que la propuesta de la promovente se basa en modificar el contenido de la fracción VIII del artículo 8 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con la finalidad de dotar a dicho apartado legal de un concepto más actualizado de Violencia Política en Razón de Género, y al mismo tiempo, establecer una abanico mayor y completo de supuestos que configuran este tipo de violencia.

**SEGUNDO. -** Que la iniciativa mencionada se funda en las siguientes consideraciones:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

El lunes 13 de abril del presente, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.”

En este paquete de reformas, el legislador federal introduce, amplía, moderniza y desarrolla los alcances y naturaleza de lo que se considera Violencia Política contra la Mujer en razón de Género; incluyendo, de acuerdo a cada ordenamiento modificado, los procesos que habrán de implementarse, las medidas cautelares, la sanciones y los derechos político-electorales de las mujeres necesarios para garantizar su derecho a la igualdad sustantiva en todo proceso electoral o de corte político (procesos que no son electorales propiamente hablando, pero se relacionan con el derecho a votar o ser votada, opinar, reunirse, protestar, encabezar movimientos y organizaciones, etc.)

Para esta iniciativa en concreto, nos interesa de manera objetiva la reforma correspondiente a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en lo consignado en los artículos siguientes:

*CAPÍTULO IV BIS*

*DE LA VIOLENCIA POLÍTICA*

*ARTÍCULO 20 Bis.- La violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.*

*Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella.*

*Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta Ley y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares.*

*ARTÍCULO 20 Ter.- La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas:*

*I. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres;*

*II. Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles, en razón de género;*

*III. Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidaturas o para cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones y actividades;*

*IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular información falsa o incompleta, que impida su registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;*

*V. Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas, electorales o jurisdiccionales, con la finalidad de menoscabar los derechos políticos de las mujeres y la garantía del debido proceso;*

*VI. Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular, información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;*

*VII. Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad;*

*VIII. Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales;*

*IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos;*

*X. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base en estereotipos de género;*

*XI. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue electa o designada;*

*XII. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a cualquier puesto o encargo público tomen protesta de su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto;*

*XIII. Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o propios, que sean violatorios de los derechos humanos;*

*XIV. Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de actividades distintas a las atribuciones propias de la representación política, cargo o función;*

*XV. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, o impedir o restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia de maternidad o de cualquier otra licencia contemplada en la normatividad;*

*XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos;*

*XVII. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad;*

*XVIII. Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad o a la ley;*

*XIX. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos;*

*XX. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad;*

*XXI. Imponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad, o*

*XXII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos electorales. La violencia política contra las mujeres en razón de género se sancionará en los términos establecidos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas.*

Como lo hemos señalado antes en dos iniciativas para armonizar disposiciones locales con lo dispuesto en leyes generales, “en la práctica legislativa, armonizar supone deberes a cumplir para eliminar todos los obstáculos que impiden el correcto funcionamiento de una ley, de acuerdo a lo establecido en los ordenamientos superiores que disponen el deber de llevar a cabo el proceso multicitado. Esto implica:

Derogar, modificar o eliminar porciones normativas de una ley.

Actualizar conceptos y definiciones.

Adicionar nuevos contenidos.

Crear figuras u órganos de autoridad.

Establecer procedimientos. Y;

Abrogar de forma completa un texto normativo, o crear uno totalmente nuevo.

En contra parte, no cumplir con un proceso de armonización plasmado en un Tratado, Constitución o Ley General, genera diversos conflictos legislativos y jurídicos; entre otros:

La contradicción normativa o conflicto entre leyes; que deriva en problemas de inconstitucionalidad y en la nulidad o invalidez de los actos jurídicos generados, y en su caso de las porciones normativas afectadas de inconstitucionalidad.

Lagunas legislativas, en especial cuando no se contemplan soluciones para los casos concretos que la ley establece o se presenta un vació de procedimiento.

La redundancia en la legislación, que es cuando se crean normas que pueden ser coherentes con otra ley, pero incompatibles en cuanto a funcionalidad.

La falta de certeza en la aplicación de la norma.

Ausencia de efectividad en el ejercicio de los derechos. Y;

Dificultad o imposibilidad de aplicación.” **Fin de la cita.**

La violencia política contra la mujer en razón de género es una realidad vergonzosa en este país, uno de los temas pendientes en materia de igualdad sustantiva y de justicia para las mujeres que hasta hace poco se empezó a abordar en las agendas legislativas federal y locales.

Para ilustrar la relevancia de este fenómeno, nos permitimos tomar algunos fragmentos de la exposición de motivos de una reforma al Código Penal del Estado, que adiciona el artículo 239 Bis, para crear el delito de Violencia Política en Razón de Género; presentada, aclaramos, mucho antes del paquete de reformas federales a que hacemos referencia en la presente (13 de abril de 2020), en fecha 26 de junio de 2019; pues en el tema de la violencia política en razón de género, debemos destacar que las entidades federativas como Chihuahua y Querétaro se adelantaron a la Federación, fenómeno que ocurre a veces con relativa frecuencia en avances y modernidad legislativa (los estados lo hacen primero)

**Inicio de cita textual** “El documento “Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género”, elaborado por las instituciones y organismos siguientes: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE), Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM); refiere lo siguiente:

“La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.

La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida.

Los ataques hacia las mujeres por ser mujeres tienen como trasfondo la descalificación y una desconfianza sistemática e indiferenciada hacia sus capacidades y posibilidades de hacer un buen trabajo o ganar una elección.

Para identificar la Violencia Política en contra de las Mujeres en razón de Género, es necesario verificar que estén presentes los siguientes cinco elementos:

1.- El acto u omisión se base en elementos de género, es decir:

I. Se dirija a una mujer por ser mujer,

II. Tenga un impacto diferenciado y desventajoso en las mujeres; y/o

III. Las afecte desproporcionadamente.

2.- Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.

3.- Se dé en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público, (sin importar el hecho de que se manifieste en el ámbito público o privado, en la esfera política, económica, social, cultural, civil, etcétera; tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, en la comunidad, en un partido o institución política).

4.- Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico.

5.- Sea perpetrado por cualquier persona o grupo de personas -hombres o mujeres-, en particular: integrantes de partidos políticos, aspirantes, precandidatos(as), candidatos(as) a cargos de elección popular o de dirigencia partidista; servidores(as) públicos(as), autoridades gubernamentales, funcionarios(as) o autoridades de instituciones electorales; representantes de medios de comunicación; el Estado o sus agentes.

La violencia política contra la mujer en razón de su género está presente en todos los sectores, en todas las regiones y en todos los niveles culturales. Se manifiesta de formas que pueden parecer “normales” a simple vista, como puede ser el control institucional de un partido político, que aprovecha sus estructuras y discurso para “considerar” y darles mayor preferencia a los hombres en las candidaturas o precandidaturas, con independencia de la paridad. En otros casos, se manifiesta de manera casi invisible, al establecer “perfiles” no reconocidos por la ley, que limiten de manera evidente a las mujeres en las candidaturas o, a un cierto grupo de ellas.

Se manifiestas también al destacar el perfil de los hombres por encima de las mujeres en los actos masivos de los partidos relacionados con la selección de precandidatos o candidatos por medio de sus órganos colegiados.

De formas más evidentes y notorias, se manifiesta con discursos de odio, burla o descalificación hacia la capacidad de las mujeres para ocupar cargos públicos. Con ataques sistemáticos, incluso encomendados a terceros, de tal suerte que los verdaderos instigadores se ocultan en éstos, y así emprenden las campañas de desprestigio y descalificación contra la mujer que aspira a ocupar un cargo público.

Los ataques al honor, reputación y vida privada de una mujer son otro instrumento utilizado para cometer violencia política en contra de ellas, y diezmarlas en su ánimo de ocupar cargos públicos. Muchas veces, en estos ataques o campañas llegan a participar otras mujeres.

De acuerdo al Protocolo a que ya hemos hecho referencia, las manifestaciones de violencia política contra la mujer en razón de género, abarcan las conductas siguientes:

a) Causen la muerte de la mujer por participar en la política (femicidio/ feminicidio).

b) Agredan físicamente a una o varias mujeres con objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos.

c) Agredan sexualmente a una o varias mujeres o produzcan el aborto, con objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos.

d) Realicen proposiciones, tocamientos, acercamientos o invitaciones no deseadas, de naturaleza sexual, que influyan en las aspiraciones políticas de la mujer y/o en las condiciones o el ambiente donde se desarrolla la actividad política y pública.

e) Amenacen, asusten o intimiden en cualquier forma a una o varias mujeres y/o a sus familias, y que tengan por objeto o resultado anular sus derechos políticos, incluyendo la renuncia al cargo o función que ejercen o postulan.

f) Restrinjan o anulen el derecho al voto libre y secreto de las mujeres.

g) Difamen, calumnien, injurien o realicen cualquier expresión que denigre a las mujeres en el ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública y/o limitar sus derechos políticos.

h) Amenacen, asusten o intimiden en cualquier forma a una o varias mujeres y/o a sus familias, y que tengan por objeto o por resultado menoscabar sus derechos políticos.

i) Amenacen, agredan o inciten a la violencia contra las defensoras de los derechos humanos por razones de género, o contra aquellas defensoras que protegen los derechos de las mujeres.

j) Usen indebidamente el derecho penal sin fundamento, con el objeto de criminalizar la labor de las defensoras de los derechos humanos y/o de paralizar o deslegitimar las causas que persiguen.

k) Discriminen a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos, por encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, licencia por maternidad o de cualquier otra licencia justificada, de acuerdo a la normativa aplicable.

l) Dañen, en cualquier forma, elementos de la campaña electoral de la mujer, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad.

m) Proporcionen a los institutos electorales datos falsos o información incompleta de la identidad o sexo de la persona candidata y designada, con objeto de impedir el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.

n) Restrinjan los derechos políticos de las mujeres debido a la aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas jurídicos internos violatorios de la normativa vigente de derechos humanos.

o) Divulguen imágenes, mensajes o revelen información de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, por cualquier medio físico o virtual, en la propaganda político-electoral o en cualquier otra que, basadas en estereotipos de género transmitan y/o reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad y discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública y/o limitar sus derechos políticos.

p) Obstaculicen o impidan el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos.

q) Impongan sanciones injustificadas y/o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad.

r) Limiten o nieguen arbitrariamente el uso de cualquier recurso y/o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad.

s) Obliguen a la mujer a conciliar o a desistir cuando se encuentre en un proceso administrativo o judicial en defensa de sus derechos políticos.

t) Eviten, por cualquier medio, que las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos asistan a cualquier actividad que implique la toma de decisiones, en igualdad de condiciones.

u) Proporcionen a la mujer, en el ejercicio de sus derechos políticos, información falsa, errada o imprecisa y/u omitan información que induzca al inadecuado ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad.

v) Restrinjan el uso de la palabra de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, impidiendo el derecho a voz, de acuerdo a la normativa aplicable y en condiciones de igualdad.

w) Impongan por estereotipos de género la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo o posición, que tengan como resultado la limitación del ejercicio de la función política.

El sitio WEB del periódico Excélsior, en su edición de fecha 28 de abril del año 2019, refiere la siguiente noticia:

…

Crece 276% violencia contra mujeres

Los avances en materia de paridad de género, producto de la reforma político-electoral de 2013-2014, surtieron efectos sin precedentes en la participación política de las mujeres, quienes después del 1 de julio de 2018 ocupan el 48 y 49% de espacios en la Cámara de Diputados y en el Senado, respectivamente.

Tanto la inclusión igualitaria de la mujer en los principales órganos de dirección del Poder Ejecutivo y Legislativo, al igual que su derecho a ejercer actividades políticas o cargos de elección libres de cualquier tipo de violencia, siguieron enfrentando resistencias que ponen en riesgo el ejercicio efectivo de sus derechos político-electorales. Una alerta en ese sentido es que la mayor parte del crecimiento de la violencia política durante los primeros tres meses de 2019 se focalizó en las mujeres”, destaca el documento…” **Fin de la cita textual.**

En la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la disposición que contiene lo relativo a la violencia política contra la mujer, es la siguiente:

*Artículo 8. Los tipos de violencia contra las mujeres son:*

*…*

*VIII. Violencia política: Es toda acción u omisión y conducta agresiva cometida por una o varias personas, por sí o a través de terceros, que causen daño en contra de una mujer, en ejercicio de sus derechos político electoral. Se consideran actos de violencia política, entre otros, aquellos que:*

*a) Impongan por estereotipos de género la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo;*

*b) Asignen responsabilidades de género que tengan como resultado la limitación del ejercicio de la función político-pública;*

*c) Eviten por cualquier medio que las mujeres electas, titulares o suplentes, o designadas a una función pública, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones, impidiendo o suprimiendo el derecho a voz y voto en igualdad de condición que los hombres;*

*d) Impidan o restrinjan su reincorporación al cargo cuando hagan uso de una licencia justificada;*

*e) Restrinjan el uso de la palabra, en las sesiones u otras reuniones y su participación en comisiones, comités y otras instancias inherentes a su cargo, conforme a la reglamentación establecida;*

*f) Impongan sanciones injustificadas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos;*

*g) Discriminen a la autoridad electa designada o en el ejercicio de la función político-pública, por encontrarse en estado de embarazo o parto;*

*h) Divulguen o revelen información personal y privada, de las mujeres candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de funciones político-públicas, con el objetivo de menoscabar su dignidad como seres humanos y utilizar la misma para obtener contra su voluntad la renuncia o licencia al cargo que ejercen o postulan; y*

*i) Cualquier otro acto que limite o restrinja la participación política de las mujeres;*

Si bien, se pueden hacer un comparativo a dos columnas para apreciar de modo gráfico las diferencias entre ambos ordenamientos; no es necesario, ya que esto salta a la vista.

Es así, que consideramos necesaria y justificada esta propuesta de armonización.

**TERCERO. -** Analizada la propuesta, procedimos a realizar las siguientes consideraciones:

I.- La violencia política contra la mujer en nuestro país es una realidad que vulnera los derechos de participación, expresión y voluntad política y comunitaria de las mujeres. Afecta de manera preponderante a sectores de mujeres que pertenecen a las clases media, media baja y baja; así como a las comunidades indígenas.

II.- Este tipo de violencia inhibe y coarta derechos como: el acceder a cargos públicos de elección popular; a cargos de elección distinta a la popular, como aquellos donde el proceso de selección se lleva por medio de consultas públicas y filtros realizados por entidades o poderes públicos.

Asimismo, impide la participación de la mujer en la vida comunitaria, especialmente en los procesos en donde la voz y el voto ciudadano son tomados en cuenta para integrar comisiones, consejos comités ciudadanos, sociedades de padres de familia, asociaciones civiles y todo tipo de organización donde la base de su estructura, conformación y toma de decisiones es la democracia.

La historia en los usos y costumbres de las comunidades indígenas no es diferente; es un tema conocido las violaciones graves a los derechos políticos y comunitarios de las mujeres al seno de estos pueblos.

III.- Sin embargo, debemos tomar en cuenta y dimensionar la doble afectación a los derechos de la mujer que se sufre con la violencia política en razón de género. Es doble porque no sólo limita y coarta los derechos ya mencionados, sino que, además, se generan daños y afectaciones diversas en el proceso que lleva a los autores de dichas violaciones a vulnerar e impedir el derecho de las mujeres a una libre y plena participación en la vida política de su municipio y estado, así como en su comunidad; y nos referimos a afectaciones como las siguientes:

1. Amenazas e intimidación, que pueden producir daños sicológicos y emocionales.
2. Campañas de desprestigio que afectan el honor, la dignidad y la reputación de las mujeres.
3. Agresiones físicas y verbales, que generan un abanico amplio de daños y consecuencias de corto, mediano y largo plazo.
4. Conflictos al interior de la familia de la mujer afectada.
5. Lesiones y, en no pocos casos, pérdida de la vida.

Esto solo por citar los aspectos principales. La violencia política contra la mujer es un acto despreciable que, en todos los casos, produce variadas afectaciones y, las consecuencias a su vez pueden ser prolongadas en el tiempo e incluso definitivas.

IV.- Esta forma de violencia es, además, un atentado contra la democracia de nuestro país, de nuestro estado, de nuestros municipios y comunidades. ¿Por qué? Al vulnerar el derecho de las mujeres a la participación libre y plena en los procesos políticos, se conculca el derecho a votar y ser votado que tienen todos los mexicanos; se crea un círculo vicioso equiparable a cualquier forma conocida de fraude electoral.

Privar a una mujer del derecho de acceder a cargos públicos por medio de actos de intimidación, descalificación, desprestigio o en base a incumplimiento de la ley y la inobservancia de los derechos humanos es, en todo sentido, un atentado a la democracia.

V.- Las reformas publicadas el 13 de abril en el Diario Oficial de la Federación, relativas a las adecuaciones y adiciones realizadas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, recogen, suman y reflejan el esfuerzo conjunto de muchas mujeres, organizaciones de las sociedad civil, luchadoras sociales y defensoras de los derechos humanos, así como de hombres comprometidos con esta causa, para avanzar en pro de lograr erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas, pero, en este caso, especialmente, la que nos interesa, la violencia política en razón de género. Este paquete de reformas es el fruto del trabajo y consenso de legisladoras y legisladores de todas las fuerzas políticas de este país que unificaron sus voces con un solo objetivo.

**CUARTO. –**  Es así como, esta dictaminadora considera viable y necesaria la propuesta que se analiza, ya que permite que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza cuente con el concepto más actualizado y completo de Violencia Política en Razón de Género, mismo que es concordante en materia federal con todos los ordenamientos que conforman el paquete de reformas publicado el 13 de abril del presente año en el Diario Oficial de la Federación.

**Quinto.-** Atentos a lo señalado, los integrantes de esta Comisión tenemos a bien presentar al Pleno para su aprobación el presente:

**Proyecto de Decreto**

**ARTÍCULO ÚNICO. -** Se modifica el contenido de la fracción VIII del artículo 8 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

Artículo 8…

I a la VII…

VIII. Violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella.

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta Ley y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares.

La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas:

a). Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres;

b). Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles, en razón de género;

c). Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidaturas o para cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones y actividades;

d). Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular información falsa o incompleta, que impida su registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;

e). Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas, electorales o jurisdiccionales, con la finalidad de menoscabar los derechos políticos de las mujeres y la garantía del debido proceso;

f). Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular, información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;

g). Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad;

h). Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales;

i). Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos;

j). Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base en estereotipos de género;

k). Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue electa o designada;

l). Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a cualquier puesto o encargo público tomen protesta de su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto;

m). Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o propios, que sean violatorios de los derechos humanos;

n). Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de actividades distintas a las atribuciones propias de la representación política, cargo o función;

o). Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, o impedir o restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia de maternidad o de cualquier otra licencia contemplada en la normatividad;

p). Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos;

q). Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad;

r). Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad o a la ley;

s). Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos;

t). Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad;

u). Imponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad; o

v). Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos electorales.

La violencia política contra las mujeres en razón de género se sancionará en los términos establecidos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas.

…..

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan las Diputadas integrantes de la Comisión para la Igualdad y no Discriminación de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila. En la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza a los días del mes de junio de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | |
| **DIP. BLANCA EPPEN CANALES**  **(COORDINADORA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
|  |  |  |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO**  **(SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
|  |  |  |
| **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
|  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la propuesta de iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 29 y 116 fracción IV inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 23 del mes de abril de 2020, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la propuesta de iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, el día 04 de mayo del mismo año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la propuesta de iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 29 y 116 fracción IV inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la propuesta de iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 29 y 116 fracción IV inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S***

*“El sistema electoral mexicano se ha construido con base en un fuerte entramado de normas jurídicas que buscan dar legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad equidad e independencia a los procesos electorales como a las instituciones que se encargan de llevarlos a cabo.*

*No obstante, como en todo sistema legal, pueden existir casos en los que la realidad no siempre puede atender a lo que la norma jurídica establece por más que la norma jurídica sea de interpretación literal. Los casos fortuitos o de fuerza mayor no previstos en la norma obligan a los operadores jurídicos a buscar mecanismos para solucionar problemas reales que desgraciadamente y sin la voluntad de los sujetos de la norma, sobrepasan los límites de las leyes.*

*Tal es el caso reciente acuerdo del Consejo General del INE, número 83/2020 , en el cual se aprobó por unanimidad, la atracción de los procesos electorales locales de las entidades federativas de Coahuila e Hidalgo, y en el cual, también se decidió la suspensión temporal de los procesos electorales en ambos estados.*

*Desde luego, compartimos la decisión tomada por el Instituto Nacional Electoral, la cual es a todas luces necesaria e imperativa en un contexto de pandemia global como la que desgraciadamente nos ha tocado vivir con el Covid 19. El hecho de que el Consejo General del INE haya tomado esta medida en favor del derecho de la salud, como el mismo Consejero Presidente Lorenzo Córdova Villanelo ha mencionado, es una decisión de estado y un precedente nunca antes visto en nuestra historia democrática, en favor de la vida y la integridad personal de miles de coahuilenses e hidalguenses.*

*Sin embargo, y no obstante lo anterior, es importante destacar que tal acuerdo puede controvertir las reglas constitucionales que en materia electoral están dispuestas por el artículo 116 fracción IV inciso a) de la Constitución Federal, en las cuales se ordena que:*

*“Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de junio del año que corresponda”.*

*Como se puede observar la Constitución es bastante clara y específica sobre el día en el cual se deben celebrar los comicios, y como si esto fuera poco, las normas electorales secundarias, son incluso más específicas al señalar las horas en la cuales se debe recibir la votación, siendo este plazo entre las 8:00 am y las 6:00 pm de la jornada electoral que corresponda.*

*Pero además la protección de los derechos político-electorales está reforzada por el artículo 29 de la Constitución Federal que establece que ni siquiera en estado de emergencia estos derechos pueden ser suspendidos, tal disposición también es convencional pues en los mismos términos lo suscribe la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 27.2.*

*De ahí que, si nos ciñéramos literalmente a lo establecido por los artículos 29 y 116 de la Constitución cualquier aplazamiento, suspensión temporal o pospuesta de los comicios podrían ser impugnados por los ciudadanos o partidos interesados, ya que el máximo ordenamiento del país, no deja lugar a dudas sobre las reglas que deben seguirse en los procesos electorales.*

*La pregunta que debemos hacernos aquí es si la pandemia ¿es una causa que fuerza mayor que bajo algunas condiciones puede vencer a la norma constitucional para proteger un derecho que se considera de mayor valor como lo es el derecho a la salud? Desde nuestra perspectiva sí, por lo que, consideramos responsable, necesaria y adecuada la decisión tomada por el Consejo General del INE, de suspender los procesos electorales en curso.*

*A pesar de ello debemos hacer notar que la norma constitucional a nivel nacional tiene que cambiar de tal forma que los casos fortuitos o de fuerza mayor estén contemplados en la norma jurídica con el objeto de que en un escenario futuro similar, las instituciones electorales tengan una vía constitucional efectiva que pueda hacer frente a tal situación, sin que esta pudiera devenir en algún vicio de inconstitucionalidad.*

*Es por estos motivos que el día de hoy, sometemos a consideración de este Honorable Congreso, la presente propuesta de iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 29 y 116 de la Constitución para establecer la posibilidad de aplazar los procesos electorales cuando las condiciones de gravedad, caso fortuito o de fuerza mayor, puedan poner en riesgo la vida, la integridad o la salud de los electores, como se está viviendo en la actualidad.”*

**TERCERO.-** Los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, nos abocamos al estudio de la propuesta de iniciativa que reforma los artículos 29 párrafo segundo y 116 fracción IV inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral, y para un mejor análisis, a continuación anexamos un cuadro comparativo de la reforma en comento:

|  |  |
| --- | --- |
| **LEY VIGENTE** | **PROPUESTA DE REFORMA** |
| **Artículo 29.** En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde.  En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.  La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación.  Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión.  Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez. | **Artículo 29**. …  En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.  …  …  … |
| **Artículo 116.** El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.  Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:  **I.** Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años y su mandato podrá ser revocado. Las Constituciones de los Estados establecerán las normas relativas a los procesos de revocación de mandato del gobernador de la entidad.  La elección de los gobernadores de los Estados y de las Legislaturas Locales será directa y en los términos que dispongan las leyes electorales respectivas.  Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho.  Nunca podrán ser electos para el período inmediato:  **a)** El gobernador sustituto constitucional, o el designado para concluir el período en caso de falta absoluta del constitucional, aun cuando tenga distinta denominación;  **b)** El gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquier denominación, supla las faltas temporales del gobernador, siempre que desempeñe el cargo los dos últimos años del periodo.  Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece la Constitución Política de la Entidad Federativa.  **II.** El número de representantes en las legislaturas de los Estados será proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en los Estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda de este número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya población sea superior a esta última cifra.  Las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los diputados a las legislaturas de los Estados, hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.  Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.  Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución.  Los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en sus constituciones locales, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación de los presupuestos de egresos de los Estados, establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables.  Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público.  El titular de la entidad de fiscalización de las entidades federativas será electo por las dos terceras partes de los miembros presentes en las legislaturas locales, por periodos no menores a siete años y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades.  La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura del Estado, a más tardar el 30 de abril. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación cuando medie solicitud del Gobernador, suficientemente justificada a juicio de la Legislatura.  Las Legislaturas de los Estados regularán los términos para que los ciudadanos puedan presentar iniciativas de ley ante el respectivo Congreso.  **III.** El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas.  La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados.  Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación.  Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica.  Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado **(sic DOF 17-03-1987)** el tiempo que señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados.  Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo.  **IV.** De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que:  **a)** Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de junio del año que corresponda. Los Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por esta última disposición;  **b)** En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad;  **c)** Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, conforme a lo siguiente y lo que determinen las leyes:  **1o.** Los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de dirección superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos políticos concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz; cada partido político contará con un representante en dicho órgano.  **2o.** El consejero Presidente y los consejeros electorales serán designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en los términos previstos por la ley. Los consejeros electorales estatales deberán ser originarios de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, y cumplir con los requisitos y el perfil que acredite su idoneidad para el cargo que establezca la ley. En caso de que ocurra una vacante de consejero electoral estatal, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral hará la designación correspondiente en términos de este artículo y la ley. Si la vacante se verifica durante los primeros cuatro años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el período. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un consejero para un nuevo periodo.  **3o.** Los consejeros electorales estatales tendrán un período de desempeño de siete años y no podrán ser reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus funciones y podrán ser removidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por las causas graves que establezca la ley.  **4o.** Los consejeros electorales estatales y demás servidores públicos que establezca la ley, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia. Tampoco podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones en cuya organización y desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante los dos años posteriores al término de su encargo.  **5o.** Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar de magistrados, quienes serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, en los términos que determine la ley.  **6o.** Los organismos públicos locales electorales contarán con servidores públicos investidos de fé pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley.  **7o.** Las impugnaciones en contra de los actos que, conforme a la base V del artículo 41 de esta Constitución, realice el Instituto Nacional Electoral con motivo de los procesos electorales locales, serán resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme lo determine la ley.  **d)** Las autoridades electorales competentes de carácter administrativo puedan convenir con el Instituto Nacional Electoral se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales;  **e)** Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan reconocido el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2°., apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución.  **f)** Las autoridades electorales solamente puedan intervenir en los asuntos internos de los partidos en los términos que expresamente señalen;  El partido político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, le será cancelado el registro. Esta disposición no será aplicable para los partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales;  **g)** Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. Del mismo modo se establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes;  **h)** Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones de sus militantes y simpatizantes;  **i)** Los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, conforme a las normas establecidas por el apartado B de la base III del artículo 41 de esta Constitución;  **j)** Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la duración de las campañas será de sesenta a noventa días para la elección de gobernador y de treinta a sesenta días cuando sólo se elijan diputados locales o ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales;  **k)** Se regule el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de los candidatos independientes, garantizando su derecho al financiamiento público y al acceso a la radio y la televisión en los términos establecidos en esta Constitución y en las leyes correspondientes;  **l)** Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Igualmente, que se señalen los supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación;  **m)** Se fijen las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados locales y ayuntamientos, así como los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales, y  **n)** Se verifique, al menos, una elección local en la misma fecha en que tenga lugar alguna de las elecciones federales;  **o)** Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como las sanciones que por ellos deban imponerse.  **p)** Se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular, en los términos del artículo 35 de esta Constitución.  **V.** Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Los Tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales.  Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de los Estados, se observará lo previsto en las Constituciones respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos;  **VI.** Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias; y  **VII.** La Federación y los Estados, en los términos de ley, podrán convenir la asunción por parte de éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario.  Los Estados estarán facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a efecto de que éstos asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones a las que se refiere el párrafo anterior.  **VIII.** Las Constituciones de los Estados establecerán organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o. de esta Constitución y la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.  **IX.** Las Constituciones de los Estados garantizarán que las funciones de procuración de justicia se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos. | **Artículo 116.** …  …  **I.** a **III.** …  **IV.** …   1. Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de junio del año que corresponda, **salvo en los casos en los que exista una causa grave, caso fortuito o de fuerza mayor que ponga en riesgo la vida, la salud o la integridad de los electores o torne imposible la realización de los comicios. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, será la autoridad responsable acordar la suspensión temporal del proceso electoral del que se trate, siempre y cuando la decisión sea tomada por la mayoría calificada de sus integrantes, bajo los estrictos principios de idoneidad, necesidad y estricta proporcionalidad.** Los Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por esta última disposición; 2. a  **p)** …   **V.** a **IX.** … |

En México, el derecho electoral se encuentra regulado en diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo son el artículo 35, en el cual se reconocen los derechos fundamentales de los ciudadanos mexicanos, tales como el derecho a votar, ser votado y de asociación; el 39 y 40 que definen al régimen político mexicano como una democracia representativa; el 41, donde se ratifica el papel de las elecciones competidas en la democracia representativa mexicana y se establecen las bases para la formación de partidos políticos, la competencia por el poder y la organización de las elecciones, el 99 que instituye las bases para la calificación de las elecciones y la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos; asimismo los artículos 116 y 122, objetos de reforma en la propuesta de iniciativa que nos ocupa, y en los cuales se estipula que los principios establecidos en la organización y calificación de las elecciones a nivel federal deben prevalecer en las elecciones locales de los 32 estados.

El sistema electoral mexicano es un conjunto de medios por los cuales la voluntad de los que vivimos en una sociedad se transforma en órganos de representación política, generando órganos de gobierno a través del voto, es decir, es una estructura por medio de la cual los ciudadanos pueden elegir a los representantes.

Como se señala en la exposición de motivos de la promovente, *“el sistema electoral mexicano se ha construido con base en un fuerte entramado de normas jurídicas que buscan dar legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad equidad e independencia a los procesos electorales como a las instituciones que se encargan de llevarlos a cabo”*. Ahora bien, como todo ordenamiento jurídico, se requiere de una constante actualización y adecuación, para que sea acorde a las necesidades y la realidad que prevalezca en el país, como lo es actualmente la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de pandemia por el Coronavirus (COVID-19) desde el pasado el 11 de marzo.

Ante esa emergencia sanitaria que está representando un caso fortuito o de fuerza mayor, el Consejo General del INE, publicó un Acuerdo, aprobando de forma unánime la atracción de los procesos electorales tanto del Estado de Coahuila como el de Hidalgo, decidiendo una suspensión temporal de los procesos que estaban previstos en dichas entidades federativas, medida que consideramos fue oportuna, ya que con esta acción se antepuso la salud y seguridad de las y los ciudadanos.

Sin embargo, dicha decisión, se opone a lo que en materia electoral, dispone la Constitución General en los artículos 116 fracción IV) inciso a), mismo que menciona que la jornada comicial tenga lugar “*el* *primer domingo de junio del año que corresponda”*.

Asimismo, el artículo 29 de la Constitución General, en relación al ejercicio de los derechos políticos, menciona que en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, los mismos no pueden ser suspendidos ni restringidos, lo cual también contraviene con el acuerdo del Consejo General del INE, ya mencionado anteriormente. Es por ello que los integrantes de esta dictaminadora, secundamos la propuesta de iniciativa, a fin de reformar los artículos 29 y 116, adecuando así nuestra Constitución, ante la nueva realidad que estamos viviendo a nivel mundial, dejando un precedente para cualquier escenario que en algún futuro se llegue a presentar.

Además como lo señala la promovente, la *“norma constitucional a nivel nacional tiene que cambiar de tal forma que los casos fortuitos o de fuerza mayor estén contemplados en la norma jurídica, con el objeto de que en un escenario futuro similar, las instituciones electorales tengan una vía constitucional efectiva que pueda hacer frente a tal situación, sin que esta pudiera devenir en algún vicio de inconstitucionalidad”*.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**A C U E R D O**

**ÚNICO.-** Se aprueba que la LXI Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de la facultad que le concede la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presente una iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 29 párrafo segundo y 116 fracción IV inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; para quedar en la forma siguiente:

**ÚNICO.-** Se reforman los artículos 29 párrafo segundo y 116 fracción IV inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 29…

En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. No se considerará suspensión o restricción de los derechos políticos cuando por las causas que prevé el inciso a) de la fracción IV del artículo 116, sea necesaria la suspensión temporal de los procesos electorales.

**Artículo 116.** …

**I.** …

**III.** …

**IV.** De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que:

**a)** Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de junio del año que corresponda, salvo en los casos en los que exista una causa grave, caso fortuito o de fuerza mayor que ponga en riesgo la vida, la salud o la integridad de los electores o torne imposible la realización de los comicios. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, será la autoridad responsable acordar la suspensión temporal del proceso electoral del que se trate, siempre y cuando la decisión sea tomada por la mayoría calificada de sus integrantes, bajo los estrictos principios de idoneidad, necesidad y estricta proporcionalidad. Los Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por esta última disposición;

**b)** a **p)** …

**V.** a **IX.** …

**T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.-** Por lo expuesto y fundado, instrúyase a la Oficialía Mayor de este Congreso, para que la presente propuesta de iniciativa sea remitida a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para los trámites correspondientes.

**SEGUNDO.-** Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez (Secretario), Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**DICTAMEN** de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Desarrollo Rural de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la propuesta de iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, planteada por la Diputada Graciela Fernández Almaraz, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 05 del mes de junio del año en curso, se acordó turnar a estas Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Desarrollo Rural, la propuesta de iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, el día 06 de junio del presente año, se turnó a estas Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Desarrollo Rural, la propuesta de iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, planteada por la Diputada Graciela Fernández Almaraz, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben; y,

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que estas comisiones unidas, con fundamento en los artículos 90, 98, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, son competentes para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la propuesta de iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, planteada por la Diputada Graciela Fernández Almaraz, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa en las consideraciones siguientes:

**EXPOSICION DE MOTIVOS.**

*“En los últimos años la actividad rural, tanto agrícola como ganadera, se enfrenta a diferentes barreras a la hora de desarrollarse y evolucionar. El problema del relevo generacional es uno de ellos, pero no es el único ni el más grave. Aún siguen existiendo graves desigualdades en todo el mundo respecto de la vida en el campo en comparación con las ciudades, en ese sentido, resulta indispensable que los actores políticos de todos los niveles trabajemos de forma coordinada, con el fin de reducir las diferencias entre el nivel de vida de los campesinos, sobre todo aquellos que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad.*

*Como desarrollo rural podemos entender un proceso que busca el de cambio social y de crecimiento económico sostenible para un progreso permanente de la comunidad rural. El objetivo final es mejorar la calidad de vida de estas sociedades y conservar al mismo tiempo el medio ambiente.[[23]](#footnote-23)*

*Según el Informe sobre seguimiento mundial 2013 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), se confirmó que la brecha rural-urbana en todo el planeta continúa. Analfabetismo, falta de asistencia sanitaria y la pobreza son sólo algunos de los factores comunes en el entorno rural. Pese a estas condiciones, los apoyos, ayudas y otros estímulos para las zonas rurales han descendido dos tercios en las últimas décadas. [[24]](#footnote-24)*

*De la misma forma, un estudio publicado por la UNESCO en el año 2010, determinó que “las zonas rurales son el hogar de la mayoría de los pobres del planeta, quienes viven con menos de un dólar diario, carecen de sistemas sanitarios e incluso de agua potable; son más vulnerables a los fenómenos atmosféricos extremos como inundaciones o sequías que llegan a provocar grandes hambrunas; cuatro de cada cinco de los más de 172 millones de niños y niñas sin escolarizar en el mundo, viven en áreas rurales, y existen fuertes discriminaciones hacia las niñas; y la gran mayoría de los cerca de 800 millones de analfabetos, jóvenes o adultos, pertenecen al mundo rural”.[[25]](#footnote-25)*

*En nuestro país la situación no es mejor pues según se desprende del trabajo de investigación “La pobreza rural en México”, el 28 por ciento de los habitantes en zonas rurales se encuentra en niveles de pobreza extrema y el 57 por ciento en situación de pobreza moderada[[26]](#footnote-26), lo que nos da un panorama nada agradable de la situación.*

*Cabe mencionar que el artículo 27 constitucional establece una protección especial para los pobladores de las tierras comunales, ejidales y los pueblos indígenas, lo cual, obliga a las autoridades a tomar todo tipo de medidas que promuevan, protejan y garanticen los derechos de tales personas.*

*De igual forma, el artículo 2º apartado B de la Carta Magna hace hincapié en la necesidad de proteger a las comunidades y pueblos indígenas, y en específico tal norma sostiene que es deber del Estado Mexicano:*

* *Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades.*
* *Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.*

*Es por estas razones que los integrantes del Partido Revolucionario Institucional, preocupados y ocupados en la situación que viven miles de campesinos en situación de vulnerabilidad, proponemos que la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable, sea modificada con el fin de establecer políticas públicas, estímulos fiscales y otras acciones y proyectos gubernamentales transversales que beneficien de manera especial a los grupos sociales de alta vulnerabilidad como campesinos de zonas rurales de alta y muy alta marginación así como a los que pertenezcan a algún pueblo indígena.”*

**TERCERO.-** El espacio rural es un tejido económico social que comprende un conjunto de personas, territorio, cultura y actividades diversas, comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos, el cual asegura la conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales.

Como se manifiesta en la exposición de motivos “*En los últimos años la actividad rural, tanto agrícola como ganadera, se enfrenta a diferentes barreras a la hora de desarrollarse y evolucionar. El problema del relevo generacional es uno de ellos, pero no es el único ni el más grave. Aún siguen existiendo graves desigualdades en todo el mundo respecto de la vida en el campo en comparación con las ciudades, en ese sentido, resulta indispensable que los actores políticos de todos los niveles trabajemos de forma coordinada, con el fin de reducir las diferencias entre el nivel de vida de los campesinos, sobre todo aquellos que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad”.*

En la actualidad, para avanzar hacia un futuro sostenible, ya sea erradicando la pobreza extrema, el hambre, así como conseguir una educación de calidad, igualdad entre géneros y reducir la perdida de los recursos medio ambientales, resulta necesario implementar una atención prioritaria al desarrollo rural y a los pueblos indígenas.

De acuerdo al programa de Fomento a la Agricultura y del Desarrollo Rural Sostenible, proporcionado por la Organización de las Naciones Unidas, afirma que “*para el año 2025, el 83% de la población mundial, que según se prevé será de unos 8.500 millones de personas, vivirá en países en desarrollo. Ahora bien, la capacidad de recursos y tecnologías disponibles para satisfacer las demandas de alimentos y otros productos básicos agrícolas de esta población en constante crecimiento sigue siendo incierta.*

*Con el fin de crear las condiciones para la agricultura y el desarrollo rural sostenibles es preciso reajustar considerablemente la política agrícola, ambiental y macroeconómica, a nivel tanto nacional como internacional, en los países desarrollados y en los países en desarrollo. El principal objetivo de la agricultura y el desarrollo rural sostenibles es aumentar la producción de alimentos de manera sostenible y mejorar la seguridad alimentaria. Esto requerirá la adopción de iniciativas en materia de educación, la utilización de incentivos económicos y el desarrollo de tecnologías nuevas y apropiadas, para así garantizar suministros estables de alimentos nutricionalmente adecuados, el acceso de los grupos vulnerables a esos suministros y la producción para los mercados; el empleo y la generación de ingresos para aliviar la pobreza; y la ordenación de los recursos naturales y protección del medio ambiente”.*

Por su parte, el Acuerdo Nacional para el Campo reconoce al sector rural como un sector estratégico para la nación y como una parte fundamental de la soberanía y seguridad alimentaria del país; y que tiene por objeto establecerse como una prioridad para la sociedad mexicana, su desarrollo y como un orden de justicia social el reconocer lo que ha aportado al desarrollo del país; que fortalezca el tejido social, económico, productivo y agrario de la sociedad rural para la incorporación de su población al desarrollo nacional y que, construya una nueva relación Estado-sujetos rurales y el reconocimiento pleno de derechos, en donde se amplíe la participación de los actores rurales y sus organizaciones en el diseño de las políticas públicas y en la operación de sus instrumentos, reconociendo en todo momento que la población urbana y la rural tienen los mismos derechos humanos, ciudadanos, económicos, sociales y culturales.

Es por ello, que quienes aquí dictaminamos coincidimos con la importancia de establecer que las familias mexicanas dedicadas a producir bienes y servicios en el medio rural, alcancen y mantengan un nivel de bienestar y calidad de vida dignos, haciendo de éste un espacio atractivo para la vida y en general para todas las acciones esenciales al desarrollo.

Una vez agotado el estudio, y efectuadas las consideraciones que anteceden, los integrantes de estas Comisiones unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Desarrollo Rural, estimamos que la propuesta es procedente, puesto que de aprobarse la misma, se coadyuvará a que en el ámbito que nos ocupa, existan las suficientes opciones productivas para que las familias rurales cuenten con un entorno económico y social en respeto a los recursos naturales y se consigan los satisfactores económicos, sociales, ambientales y familiares en sus propias comunidades y que; las diversas actividades económicas desarrolladas en el medio rural sean redituables y se sitúen con un alto margen de competitividad y sustentabilidad, tanto en la economía global como en el abastecimiento interno.

Por las consideraciones que anteceden se estima pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**A C U E R D O**

**ÚNICO.-** Se aprueba que la LXI Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de la facultad que le concede la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presente una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable; para quedar en la forma siguiente:

**ÚNICO.-** Se reforma el primer párrafo, la fracción I y se adiciona un último párrafo del artículo 7o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

**Artículo 7o.-** Para impulsar el desarrollo rural sustentable, el Estado promoverá la capitalización del sector mediante obras de infraestructura básica y productiva, y de servicios a la producción, así como a través de apoyos directos a los productores y estímulos fiscales que les permitan realizar las inversiones necesarias para incrementar la eficacia y eficiencia de sus unidades de producción, mejorar sus ingresos y fortalecer su competitividad.

…

**I.** Promover la eficacia y eficiencia económica de las unidades de producción y del sector rural en su conjunto;

**II.** a la **VI.** …

De manera transversal, las políticas públicas, estímulos fiscales y otras acciones gubernamentales y proyectos que promuevan la capitalización del sector rural y la inversión de infraestructura deberán dar preferencia a las a las zonas de alta y muy alta marginación y a las poblaciones económica y socialmente débiles; así como comunidades y pueblos indígenas.

**T R A N S I T O R I O**

**PRIMERO.-** Por lo expuesto y fundado, instrúyase a la Oficialía Mayor de este Congreso, para que la presente propuesta de iniciativa sea remitida a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para los trámites correspondientes.

**SEGUNDO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

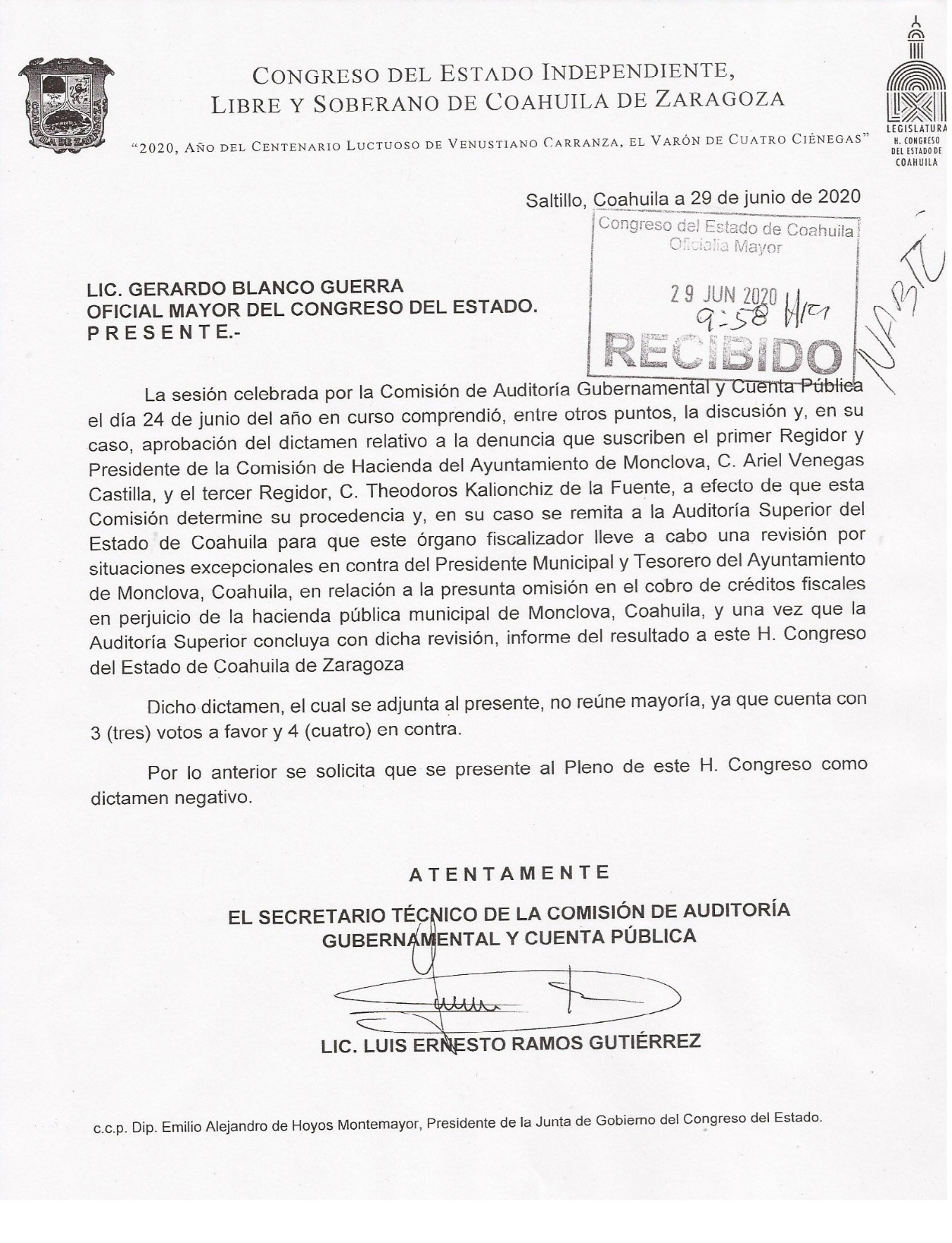
Así lo acuerdan los Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y Desarrollo Rural, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza, Dip. Rosa Nilda González Noriega (Coordinadora), Dip. Graciela Fernández Almaraz. (Secretaria), Dip. Juan Carlos Guerra López Negrete, Dip. Jesús Berino Granados.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 29 de junio de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA**  **(COORDINADORA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ**  **(SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

****

**DICTAMEN** de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la denuncia que suscriben el primer Regidor y Presidente de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Monclova, C. Ariel Venegas Castilla, y el tercer Regidor, C. Theodoros Kalionchiz de la Fuente, a efecto de que esta Comisión lleve a cabo una revisión por situación excepcional en contra de Presidente Municipal y Tesorero del Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, en relación a la presunta omisión en el cobro de créditos fiscales en perjuicio de la Hacienda Pública Municipal de Monclova, Coahuila, y una vez que la Auditoría Superior concluya con dicha revisión informe del resultado a este H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza; y

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en la sesión celebrada por la Pleno del Congreso el 18 de diciembre del 2019 se acordó turnar a esta Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, el documento descrito en el proemio del presente Acuerdo, para efectos de estudio y dictamen.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 82, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente Acuerdo.

**SEGUNDO.-** Que el escrito presentado por los ediles del municipio de Monclova es con el fin de solicitar a la Auditoría Superior del Estado, para que lleve a cabo una revisión por situaciones excepcionales en el Ayuntamiento de Monclova, en relación a las siguientes irregularidades:

**a)** El Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, el primero de septiembre de 2011 inició un procedimiento administrativo de ejecución contra **Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable,** con el requerimiento para el pago por expedición de licencias para colocación y uso de anuncios y carteles publicitarios.

**b)** Manifiestan los denunciantes tener pleno conocimiento de que se emitió una resolución por la que se determinaron créditos fiscales con número de oficio TE-286-11, dictado en el expediente TM/LC/01/11, en cuyo rubro señala **“Derecho por la expedición de licencias para la colaboración** (sic, debe decir colocación) **y uso de anuncios y carteles publicitarios (en la vía pública)”**, emitido y firmado por el Tesorero Municipal de Monclova en funciones en el año 2011, y que el monto exigible de los citados créditos fiscales asciende a **$68,994,578.86 M.N. (sesenta y ocho millones novecientos noventa y cuatro mil quinientos setenta y ocho pesos 86/100M.N.)**

**c)** Ante ello, la empresa Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable solicitó la protección de la justicia federal mediante los Juicio de Amparo números 373/2012 y 384/2014 en los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, respectivamente, **los cuales resolvieron negar la protección de la justicia de la Unión,** mediante sentencias emitidas en los años de 2014 y 2017.

**d)** En virtud de haberse resuelto la cuestión relativa a la constitucionalidad del procedimiento de ejecución fiscal, con las sentencias respectivas en todas las instancias, desde el mes de octubre de 2017 el Ayuntamiento de Monclova está en posibilidad legal de hacer efectivos los créditos fiscales por el monto de **$68,994,578.86 M.N.** más las actualizaciones correspondientes que adeuda la empresa Teléfonos de México.

**e)** Por lo anterior los quejosos manifiestan que han solicitado en diversas ocasiones **al C. Jesús Alfredo Paredes López y al C.P. Juan Carlos Terrazas Hernández, Presidente Municipal y Tesorero del Ayuntamiento de Monclova, Coahuila,** respectivamente, la información relativa a las gestiones de cobro de los créditos fiscales antes señalados, sin que hasta la fecha hayan recibido respuesta.

**f)** En consecuencia, existe la presunción de que no se ha realizado acción alguna de ejecución fiscal para hacer efectivos los citados créditos fiscales en detrimento de la Hacienda Pública Municipal de Monclova, y en contravención con lo previsto en los artículos 104 inciso E) fracción IV y 129 fracción II del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**TERCERO.-** Que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza en sus artículos 60 y 62, prevé la figura de la revisión por situación excepcional así como los requisitos necesarios para la procedencia de las denuncias, al tenor de lo siguiente:

***Artículo 60.*** *Cuando se presenten denuncias debidamente fundadas o por otras circunstancias pueda suponerse la presunta recaudación, administración, manejo, custodia, aplicación o ejercicio irregular de recursos públicos o de su desvío, la Auditoría Superior podrá realizar revisiones, durante el ejercicio fiscal en curso, de conceptos específicos vinculados de manera directa a las denuncias o circunstancias, o requerir a las entidades para que a través de sus órganos internos de control lleven a cabo dichas revisiones. El requerimiento deberá aportar indicios probatorios razonables, mediante los cuales se presuma que la irregularidad cometida ocasionó un daño o perjuicio a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades. Las denuncias a que se refiere el párrafo anterior deberán presentarse ante la Comisión, la cual determinará su procedencia y, en caso de ser legalmente procedente, las remitirá a la Auditoría Superior para que por sí o por conducto de los órganos internos de control, inicie la revisión por situaciones excepcionales.*

Procede atender esta denuncia mediante la realización de una revisión por situación excepcional durante el ejercicio fiscal en curso, toda vez que no se encontró antecedente sobre este caso en los Informes de Resultados correspondientes a las revisiones a las cuentas públicas de los ejercicios 2017 y 2018, ni que se haya efectuado revisión o inspección alguna posterior, por no aparecer así indicado en los Programas Anuales de Auditorías Visitas e Inspecciones relativos a los ejercicios 2019 y 2020, presentados por esa Auditoría Superior del Estado.

***Artículo 62.*** *Las denuncias que se presenten en los términos del artículo anterior deberán cumplir con los siguientes requisitos:*

1. *Constar por escrito;*

Se presentó documento por escrito el cual fue recibido el 27 de diciembre de 2019 en esta Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública.

1. *Señalar la entidad y/o servidores públicos a quien o quienes se imputan los hechos;*

En su denuncia se imputan los hechos a los servidores públicos, C. Jesús Alfredo Paredes López y al C.P. Juan Carlos Terrazas Hernández, Presidente Municipal y Tesorero del Ayuntamiento de Monclova, Coahuila**,** respectivamente.

1. *Nombre, firma autógrafa y domicilio del promovente para oír y recibir notificaciones, ubicado en la ciudad donde se encuentre el Congreso;*

El escrito de denuncia se encuentra debidamente suscrito por los dos integrantes ya mencionados del cuerpo edilicio del municipio de Monclova, además de establecer domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Saltillo en la calle La Palmilla numero150 de la colonia Real de Peña .

1. *La descripción de los hechos o demás circunstancias que supongan la presunta recaudación, administración, manejo, custodia, aplicación o ejercicio irregular de recursos públicos o de su desvío;*

La descripción de los hechos se encuentra plasmada en el documento de la denuncia, los cuales ya han sido detallados en el Considerando Segundo del presente Acuerdo.

1. *Señalar el o los supuestos de procedencia de la denuncia a que se refiere el artículo anterior;*

Los quejosos establecen que existe un daño patrimonial a la hacienda pública del municipio de Monclova por un monto de $68,994,578.86 M.N. (sesenta y ocho millones novecientos noventa y cuatro mil quinientos setenta y ocho pesos 86/100M.N.).

Además señalan actos u omisiones por parte de los servidores públicos antes señalados, que pudieran ser constitutivos de delitos.

1. *Aportar los elementos de convicción o de prueba suficientes para fundar el supuesto de procedencia de la denuncia.*

Se anexan al escrito de denuncia varias documentales, consistentes en ejecutorias emitidas por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y Civil del Octavo Circuito a fin de acreditar la resolución en la cual se determinaron los créditos fiscales, documentales que constan de 122 fojas.

Asimismo, con el fin de acreditar que ha solicitado al Tesorero Municipal la información relative al cobro o estatus que guardan los créditos fiscales, se incluyen copias de dos oficios signados por el regidor C. José Ariel Venegas Castilla.

Sobre el particular, esta Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública después del análisis de los requisitos legales de procedencia que debe reunir todo escrito de denuncia, determina la procedencia y su respectiva remisión a la Auditoría Superior del Estado para que por sí o por conducto del respectivo órgano interno de control, inicie la revisión por situación excepcional.

**CUARTO.-** Que en virtud de todo lo anteriormente expuesto, esta Comisión considera que la denuncia en cuestión es procedente, por lo que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, emite el siguiente:

**D I C T A M E N**

**PRIMERO.-** Remítase copia del expediente que obra en los archivos de la Secretaría Técnicade esta Comisión, a la Auditoría Superior del Estado, para que en el ámbito de su competencia inicie una revisión por situación excepcional con el fin de que investigue las presuntas irregularidades que se describen en la denuncia que lo compone y en caso de resultar ciertas, en uso de sus facultades, finque las sanciones correspondientes o promueva las acciones legales adecuadas ante las autoridades competentes .

**SEGUNDO.-** La Auditoría Superior el Estado deberá rendir un informe al Congreso, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, una vez que concluya con la revisión por situación excepcional.

**TERCERO.-** Notifíquese a los interesados sobre la emisión del presente dictamen.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Juan Antonio García Villa, (Coordinador), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga (Secretaria), Dip. María Eugenia Cázares Martínez, Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor y Dip. Jaime Bueno Zertuche.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 24 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA PÚBLICA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | |
| **DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
|  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA (SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
|  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
|  |  |  |
| **DIP. ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
|  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
|  |  |  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
|  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Deporte y Juventud, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a una Iniciativa de Decreto por **la cual** **se adicionan los Artículos 16 Bis., 16 Bis. 1, 16 Bis. 2, 16 Bis. 3, 16 Ter., 16 Ter. 1, 16 Ter. 2 y 16 Ter. 3, 16 Quater; creando una nueva fracción XIV recorriendo la actual a la XVII, creando las fracciones XV, y XVI, del artículo 29; todos de la Ley para el Desarrollo Integral de la Juventud del Estado de Coahuila de Zaragoza**; planteada por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel”. Y;

**RESULTANDO**

**PRIMERO. -**  Que en Sesión celebrada por el Pleno el día 09 de enero del año 2020, se acordó turnar a la Comisión de Deporte y Juventud la iniciativa de decreto con el objetivo ya descrito en el proemio de la presente.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento a dicho acuerdo, la mencionada iniciativa fue remitida a esta Comisión para efectos de estudio y dictamen

**TERCERO. -** Que conforme a lo dispuesto en el Artículo 101, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, esta comisión es competente para dictaminar sobre dicha propuesta; y,

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO. -** Que la propuesta del autor se basa en establecer en el ordenamiento **en cita la creación de un Consejo Ciudadano en Materia de Seguimiento de Políticas Públicas del Estado; y de Consejos Regionales y Municipales de similar naturaleza.**

**SEGUNDO. -** Que la iniciativa mencionada se funda en las siguientes consideraciones:

**Exposición de Motivos**

Por muchas generaciones se nos ha dicho y hecho creer a la juventud, que es el futuro de México, que seremos la esperanza de este país y que nosotros sacaremos delante de todas las adversidades a esta gran nación, bueno, ese fututo nos ha alcanzado el día de hoy, y corrijo lo dicho, basado en hechos y no en palabras, la juventud es el presente de México, somos 40 millones de jóvenes, de los cuales en Coahuila somos 924,254 es decir el 2.34% de la juventud del país, (12 a 29 años) de una población de 120 millones de mexicanos, es decir, somos una tercera parte de la población, somos la esperanza de este país, en la actualidad la juventud mexicana pone y ha puesto en alto a nuestro país en muchos rubros, como los son el científico y tecnológico, ganándose concursos de innovación y robótica, haciéndose investigación de alto impacto para la sociedad, en educación, ganándose medallas en matemáticas, física, lógica matemática, en cultura, deporte, etc... y nosotros hemos sacamos adelante a esta gran nación de todas las adversidades, y el mejor ejemplo de ello ha ocurrido el pasado 8 y 19 de septiembre, donde la sociedad en general ha apoyado a todos los damnificados, sin embargo los jóvenes son los que han puesto un mayor entusiasmo para ayudar, organizando centros de acopio, recolección y donación de víveres, recolección y donación de dinero, la juventud ha reconstruido a este país, así es que por esto estoy confiado y repito, que la juventud es el presente de nuestro país.

Hay que empoderar a la juventud, Coahuila posee una gran calidad humana, los Coahuilenses somos excepcionales, y sus jóvenes aún más. La juventud ha adquirido una gran capacidad para analizar y resolver problemáticas gracias a los avances tecnológicos que han surgido, ya que estos nos permiten estar más y mejor informados, dotando a la juventud de herramientas para poder trabajar y desempeñarse en cualquier ámbito, ya sea en un rol productivo o social.

¿Cómo vamos a empoderar a la juventud?, primero tenemos que escuchar, saber que piensan y que dicen, esto lo vamos a lograr a través de la apertura del gobierno local y de todas sus dependencias, para que el joven y en general el Coahuilense tenga la confianza y certeza de que la gente que los lidera desde el gobierno entiende y percibe la problemática igual que el joven o el ciudadano que va a solicitar ayuda.

Los jóvenes somos parte muy importante de la sociedad, tanto en ámbitos productivos, como de inclusión social, innovación tecnológica, cultural, medio ambiente, derechos humanos, etc…

El Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en Materia de Juventud (CONSEPP) es un órgano colegiado de consulta y opinión que empodera a las juventudes en general.

El CONSEPP del Instituto Coahuilense de la Juventud, es un órgano que tiene por objeto conocer el cumplimiento dado a los programas dirigidos a las y los jóvenes tanto del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE) y de los Institutos o Coordinaciones Municipales de la Juventud, como de las demás Secretarías y Entidades de los tres niveles de gobierno, opinar sobre los mismos, recabar la opinión de los ciudadanos interesados en políticas públicas en materia de juventud y presentar sus resultados y opiniones a la o el Director General del Instituto Coahuilense de la Juventud, formulando, en su caso las propuestas correspondientes.

El cargo de consejero es honorífico y totalmente ciudadano.

La dicha incorporación del artículo 9° Bis. Permitirá al instituto coahuilense de la juventud instalar un consejo juvenil ciudadano, para que éste pueda brindar asesoría, así como proponer, evaluar y dar dirección y sentido a los programas del instituto o secretaria coahuilense de la juventud (ICOJUVE).

Además, estos consejos permiten el empoderamiento de las juventudes del estado, desde las más privilegiadas, hasta las más vulnerables, ya que permite que estas sean escuchadas, y se atienda las necesidades primordiales por parte de las autoridades correspondientes.

La instalación de los consejos municipales y regionales, permitirán que se tengan panoramas y perspectivas más claras con respecto al panorama actual de la juventud, del estado y sus municipios, yendo más allá de calificar las políticas públicas en materia de juventud, sino las políticas en materia de seguridad, salud, educación, economía, desarrollo social, innovación, cultura, deporte, etc…

Es importante la instalación de estos consejos ya que también se pueden lograr grandes avances en las agendas de tanto del gobierno estatal, como de los locales, por ejemplo, en materia de prevención del suicidio, los mismos jóvenes de cada municipio, y cada región, podrían desarrollar en conjunto con los expertos en la materia, soluciones a las problemáticas generadas por el suicidio, o en cuestión de embarazos en menores, o en combate a la obesidad y sobre peso, o en materia de seguridad.

La dinámica hoy en día por parte de los gobiernos de los tres niveles es incorporar a la toma de decisiones a las juventudes, lo cual genera tomar diferentes perspectivas y puntos de vista, incentiva al órgano gubernamental a modernizarse, actualizarse y tomar decisiones con perspectivas incluyentes, diversas y ciudadanas.

En saltillo, el consejo municipal ha trabajado implementado campañas de prevención y detección de VIH/SIDA, entrega de morrales para sustituir bolsas de plástico, realizado platicas y talleres para combatir el suicido, brigadas de entrega de juguetes, foros de protección ambiental, foros para empoderar a las mujeres, a los emprendedores y a las juventudes, entre otros más. Esto es solo un poco de lo mucho que puede aportar el tener un consejo ciudadano de juventud en cada municipio, por más pequeño que sea, no importa si son 30 jóvenes como en saltillo o 5, lo importante es que se escuche a la juventud y se trabaje con ellos.

**TERCERO. -** Analizada la iniciativa, esta Comisión desea expresar las siguientes consideraciones:

La propuesta se basa en realizar las siguientes adiciones a la Ley para el Desarrollo Integral de la Juventud del Estado de Coahuila de Zaragoza; las cuales no leeremos para efectos de abreviar, pero constan para consulta de los interesados, y nos remitimos a las consideraciones:

*1.- ARTÍCULO 16 BIS. EL INSTITUTO COAHUILENSE DE LA JUVENTUD, DEBERÁ INSTALAR UN CONSEJO CIUDADANO DE SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE JUVENTUD, QUE TRABAJARÁ DE FORMA COLEGIADA, Y TENDRÁ POR OBJETO CONOCER EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A LOS JÓVENES, TANTO DEL*

*INSTITUTO DE LA JUVENTUD, COMO DE LAS DEMÁS SECRETARÍAS Y ENTIDADES, OPINAR SOBRE LOS MISMOS, RECABAR LA OPINIÓN DE LOS CIUDADANOS INTERESADOS EN POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE JUVENTUD Y PRESENTAR SUS RESULTADOS Y OPINIONES AL TITULAR DEL INSTITUTO, FORMULANDO, EN SU CASO, LAS PROPUESTAS CORRESPONDIENTES.*

*2.- ARTÍCULO 16 BIS 1. EL CONSEJO CIUDADANO DE SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE JUVENTUD DEL ESTADO DEBERÁ ESTAR INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA:*

*1.- POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO, QUIEN LO PRESIDIRÁ DE FORMA HONORARIA.*

*2.- POR UNA MESA DIRECTIVA INTEGRADA POR UN PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO, ELECTOS POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO.*

*3.- POR VEINTE REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES JUVENILES DEL ESTADO, Y DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO.*

*CON LA FINAL DE BUSCAR PLURALIDAD EN LA CONDUCCIÓN Y TRABAJO DEL CONSEJO, LA MESA DIRECTIVA DEBERÁ RENOVARSE CADA AÑO.*

*LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DURARÁN EN SU CARGO HASTA DOS AÑOS Y SUS NOMBRAMIENTOS SERÁN HONORÍFICOS, POR LO QUE NO SE PERCIBIRÁ REMUNERACIÓN ALGUNA EN SU DESEMPEÑO.*

*3.- ARTÍCULO 16 BIS 2. LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO NO PODRÁN SER PARTE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO, O DE CUALQUIER OTRA ENTIDAD PERTENECIENTE AL GOBIERNO ESTATAL O MUNICIPAL MIENTRAS EJERZAN ESTA RESPONSABILIDAD.*

*4.- ARTÍCULO 16 BIS 3. EL ESTADO, A TRAVÉS DEL INSTITUTO, PROPORCIONARÁ AL CONSEJO LAS INSTALACIONES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODAS LAS FACILIDADES PARA SU OPERATIVIDAD.*

*5.- ARTÍCULO 16 TER. LOS INSTITUTOS O DIRECCIONES MUNICIPALES DE JUVENTUD, DEBERÁN INSTALAR UN CONSEJO CIUDADANO DE SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE JUVENTUD, QUE TRABAJARA DE FORMA COLEGIADA, Y TENDRÁ POR OBJETO CONOCER EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A LOS JÓVENES, TANTO DEL INSTITUTO O DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUVENTUD, COMO DE LAS DEMÁS SECRETARÍAS, INSTITUTOS Y ENTIDADES, OPINAR SOBRE LOS MISMOS, RECABAR LA OPINIÓN DE LOS CIUDADANOS INTERESADOS EN POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE JUVENTUD Y PRESENTAR SUS RESULTADOS Y OPINIONES AL TITULAR DEL INSTITUTO O DIRECCIÓN, FORMULANDO, EN SU CASO, LAS PROPUESTAS CORRESPONDIENTES.*

*6.- ARTÍCULO 16 TER 1. EL CONSEJO CIUDADANO DE SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE JUVENTUD DEL MUNICIPIO DEBERÁ ESTAR INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA:*

*1.- POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO O DIRECCIÓN, QUIEN LO PRESIDIRÁ DE FORMA HONORARIA.*

*2.- POR UNA MESA DIRECTIVA INTEGRADA POR UN PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO, ELECTOS POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO.*

*3.- POR EL NUMERO DE REPRESENTANTES QUE CADA MUNICIPIO CONSIDERE NECESARIOS, PROVENIENTES DE ORGANIZACIONES JUVENILES DEL MUNICIPIO, Y DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO.*

*CON LA FINAL DE BUSCAR PLURALIDAD EN LA CONDUCCIÓN Y TRABAJO DEL CONSEJO, LA MESA DIRECTIVA DEBERÁ RENOVARSE CADA AÑO.*

*LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DURARÁN EN SU CARGO HASTA DOS AÑOS Y SUS NOMBRAMIENTOS SERÁN HONORÍFICOS, POR LO QUE NO SE PERCIBIRÁ REMUNERACIÓN ALGUNA EN SU DESEMPEÑO.*

*7.- ARTÍCULO 16 TER 2. LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO NO PODRÁN SER PARTE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO O DIRECCIÓN, O DE CUALQUIER OTRA ENTIDAD PERTENECIENTE AL GOBIERNO ESTATAL O MUNICIPAL MIENTRAS EJERZAN ESTA RESPONSABILIDAD.*

*8.- ARTÍCULO 16 TER 3. EL AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DEL INSTITUTO O DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUVENTUD, PROPORCIONARÁ AL CONSEJO, LAS INSTALACIONES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODAS LAS FACILIDADES PARA SU OPERATIVIDAD.*

*9.- ARTÍCULO 16 QUATER. EL INSTITUTO COAHUILENSE DE LA JUVENTUD, DEBERÁ INSTALAR SEIS CONSEJOS CIUDADANOS DE SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE JUVENTUD, UNO POR CADA REGIÓN DEL ESTADO, DICHOS CONSEJOS TRABAJARAN DE FORMA AUTÓNOMA UNO DE OTRO, COLEGIADA, Y TENDRÁ POR OBJETO CONOCER EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A LOS JÓVENES, TANTO DEL INSTITUTO COAHUILENSE DE LA JUVENTUD, COMO DE LAS DEMÁS SECRETARÍAS Y ENTIDADES, OPINAR SOBRE LOS MISMOS, RECABAR LA OPINIÓN DE LOS CIUDADANOS INTERESADOS EN POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE JUVENTUD Y PRESENTAR SUS RESULTADOS Y OPINIONES AL TITULAR DEL INSTITUTO, FORMULANDO, EN SU CASO, LAS PROPUESTAS CORRESPONDIENTES.*

*10.- ARTÍCULO 16 QUATER 1. LOS CONSEJOS REGIONALES CIUDADANOS DE SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE JUVENTUD DEL ESTADO DEBERÁN ESTAR INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA:*

*1.- POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO, QUIEN LO PRESIDIRÁ DE FORMA HONORARIA.*

*2.- POR UNA MESA DIRECTIVA INTEGRADA POR UN PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO, ELECTOS POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO REGIONAL.*

*3.- POR TRES CONSEJEROS PROVENIENTES DE CADA CONSEJO MUNICIPAL DE CADA REGIÓN.*

*LAS REGIONES Y SEDE COMPRENDIDAS POR CADA CONSEJO REGIONAL SON:*

*A) SURESTE, SALTILLO*

*B) LAGUNA, TORREÓN*

*C) CENTRO, MONCLOVA*

*D) DESIERTO, CUATRO CIÉNEGAS*

*E) CARBONÍFERA, MÚZQUIZ*

*F) NORTE, PIEDRAS NEGRAS*

*CON LA FINAL DE BUSCAR PLURALIDAD EN LA CONDUCCIÓN Y TRABAJO DEL CONSEJO, LA MESA DIRECTIVA DEBERÁ RENOVARSE CADA AÑO.*

*LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DURARÁN EN SU CARGO HASTA DOS AÑOS Y SUS NOMBRAMIENTOS SERÁN HONORÍFICOS, POR LO QUE NO SE PERCIBIRÁ REMUNERACIÓN ALGUNA EN SU DESEMPEÑO.*

*11.- ARTÍCULO 16 QUATER 2. LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO REGIONAL NO PODRÁN SER PARTE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO O DIRECCIÓN, O DE CUALQUIER OTRA ENTIDAD PERTENECIENTE AL GOBIERNO ESTATAL O MUNICIPAL MIENTRAS EJERZAN ESTA RESPONSABILIDAD.*

*12.- ARTÍCULO 16 QUATER 3. EL ESTADO Y EL AYUNTAMIENTO SEDE DE CADA CONSEJO REGIONAL, A TRAVÉS DEL INSTITUTO COAHUILENSE Y EL INSTITUTO O DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUVENTUD, PROPORCIONARÁN AL CONSEJO REGIONAL, LAS INSTALACIONES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODAS LAS FACILIDADES PARA SU OPERATIVIDAD.*

*13.- EL INSTITUTO COAHUILENSE DE LA JUVENTUD DEBERÁ PROMOVER LA AMPLITUD Y SUFICIENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS POR PARTE DE TODO EL ÁMBITO DEL PODER EJECUTIVO, A FAVOR DE LA JUVENTUD, TALES COMO:*

*DEL I… AL XIII…*

*XIV. PROMOVER, COORDINAR Y APOYAR EL ESTABLECIMIENTO DE CONSEJOS MUNICIPALES DE LA JUVENTUD Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS MISMOS EN LOS PROGRAMAS DEL INSTITUTO.*

*XV. CREAR EL CONSEJO CIUDADANO DE SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE JUVENTUD A NIVEL ESTATAL.*

*XVI. CREAR LOS CONSEJOS REGIONALES CIUDADANOS DE SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE JUVENTUD.*

*XVII…*

I.- Si bien, el promovente ofrece un cuadro que contiene a las entidades federativas que contemplan consejos ciudadanos, lo cierto es que pudimos apreciar que en casi todos los casos se limitan a consejos estatales, y no regionales y municipales; ya que crear tantos consejos resultaría en una cantidad enorme de figuras de este tipo y en una subdivisión abrumadora de los temas que cada consejo debe abordar, para pasar luego al tema de una coordinación muy compleja e impráctica, contraria al objetivo de simplificación y accesibilidad que debe imperar en la estructura de la administración pública.

II.- El promovente no establece las atribuciones del Consejo Estatal Ciudadano, solo una vaga referencia muy genérica de lo que debe hacer. Y con esto queda un vacío legal insalvable, al no contar el Consejo Estatal con atribuciones específicas.

III.- La conformación de los consejos regionales y municipales propuestos es accidentada y con faltantes.

IV.- Crear consejos para darle seguimiento a las políticas públicas rompe la línea de tiempo en varios sentidos, más bien deberían colaborar en la creación de políticas públicas; y el seguimiento sería por añadidura.

V.- La iniciativa presenta un problema notable de desconexión e integración con la ley vigente, ya que al crear estas figuras, por técnica legislativa, se debe adecuar el marco legal existente a las nuevas figuras, y modificar aspectos como: los organismos ya existentes, las atribuciones de las autoridades que se establecen en la ley, la correlación entre artículos y los ajustes que permitan hacer concordar todos los contenidos de la ley en atención a la inserción de estas nuevas figuras y atribuciones, lo cual no se hace en este proyecto.

**CUARTO. -** Atentos a lo señalado, las integrantes de esta Comisión tenemos a bien presentar al Pleno para su aprobación el presente:

Dictamen

Único: Se considera inviable y, por ende, no aprobada la iniciativa analizada en el presente dictamen.

Así lo acuerdan las Diputadas integrantes de la Comisión de Deporte y Juventud de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila, a los 25 de Junio de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE DEPORTE Y JUVENTUD**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DIPUTADOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCION** |
| GERARDO ABRAHAM AGUAD GÓMEZ |  |  |  |
| EDGAR GERARDO SANCHEZ GARZA |  |  |  |
| FERNANDO IZAGUIRRE VALDEZ |  |  |  |
| DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA |  |  |  |
| DIP. MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 313 bis al Código Penal de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 29 del mes de abril del presente año, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, en fecha 04 de mayo del mismo año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 313 bis al Código Penal de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 313 bis al Código Penal de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S***

*“Solidaridad, empatía, colectividad y afecto. Estos son los valores que alrededor del mundo, ponen en práctica todas las personas como forma de agradecimiento a todo el personal médico que actualmente se encuentra en la primera línea de batalla contra la propagación y mitigación del virus SARS COV 2, que genera el coronavirus COVID- 19.*

*En el caso de México, en los últimos días y conforme aumenta el número de contagios por coronavirus y por ende las salas de urgencia de los hospitales se ven cada día más saturadas y algunas colapsadas, el personal médico además de lidiar con las preocupaciones que genera el trabajar en instalaciones con poco personal y con saturación y desabasto de equipos médicos y de protección, ahora están siendo víctimas de violencia por familiares de pacientes con cuadros de coronavirus que necesariamente y por protocolo tienen que ser aislados. Lo anterior no solo resulta en una agresión, sino que incluso pone en riesgo su vida al poder ser contagiados por el virus.*

*En lo que va de esta Legislatura, hemos sido testigos de cómo han sido presentadas en esta tribuna, múltiples iniciativas que van en favor de erradicar la violencia de cualquier tipo, sobre todo aquella que se presente en contra de un determinado sector de la sociedad que resulta vulnerable ante la adversidad. El día de hoy no es la excepción y ante la falta de un tipo penal específico para el caso particular es que venimos a presentar la presente iniciativa con el fin de brindar la máxima garantía de seguridad a quienes desde el primer frente de batalla arriesgan día con día sus vidas para salvar la de los demás.*

*Por ello, esta iniciativa lo que pretende es enmendar el problema a los que miles de personas que dedican su vida al servicio están expuestos, ante las agresiones que se han originado en los últimos días por motivo de la pandemia del coronavirus, y es que ni la ignorancia ni el desconocimiento de los protocolos por parte de los familiares de los pacientes con coronavirus justifica la más mínima agresión a quienes tienen que estar concentrados y con la máxima atención de sus conocimientos en el cumplimiento de los protocolos de cuidado y de atención a los pacientes que portan el COVID 19.*

*Estas manifestaciones de violencia han generado la pregunta de si el gobierno es capaz de brindar protección a las personas que arriesgan sus vidas para mantener a nuestra entidad saludable, por lo que en vez de preocuparnos o preguntarnos, nos estamos ocupando y estamos otorgando por medio de esta iniciativa las herramientas necesarias para poder garantizar la protección e integridad a todo aquel personal que sea parte de una institución de salud pública o privada.*

*Otros estados como Jalisco, Tlaxcala, Colima, Oaxaca y Yucatán han tomado cartas en el asunto y en el interior de sus Congresos locales, han presentado iniciativas que operen en favor del personal médico y su integridad, nosotros estamos haciendo lo propio con esta iniciativa.*

*Y es que, incluso la representación de la Organización de las Naciones Unidas en nuestro país, a través de su Coordinador Residente, ha declarado que si existe un grupo a quien hay que proteger hoy en día, es justamente al personal de la salud a quien debería de implementarse toda acción y programa que garanticen su integridad.*

*Bajo este contexto, en el debido ejercicio de nuestra responsabilidad conferida por el pueblo de ser representantes populares, debemos proveer los medios necesarios para fortalecer el marco jurídico local, de tal manera que no se susciten este tipo de acciones inmorales en contra de personas.*

*Con esta iniciativa estaremos inhibiendo cualquier manifestación de violencia contra miembros o integrantes de instituciones de salud pública o privada, y estaremos marcando un hecho sin precedentes en nuestro estado y lo más importante, velaremos por aquellos que se encuentran en el primer frente de batalla y quienes exponen su vida para salvar la de los demás.*

*Además, bajo la adición que se propone, se pretende que se garantice la integridad de todo el personal de salud, es decir, aquellos médicos, enfermeros; así como al resto de los miembros de las instituciones de salud pública o privada en el ejercicio de sus funciones, puesto que en todos, desde todas las trincheras de las instituciones de salud, recae la gran responsabilidad de garantizar la salud de la sociedad, sobre todo en momentos de crisis y de pandemia que ha afectado a todo el mundo.*”

**TERCERO.-** Quienes integramos la presente comisión legislativa, efectuamos el estudio y análisis de la iniciativa objeto del presente dictamen, la cual tiene como finalidad garantizar la integridad del personal de salud de las instituciones de salud tanto pública como privada, en el ejercicio de sus funciones.

En la actualidad, nos afrontamos una emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, la cual ha causado una crisis humana y sanitaria sin precedentes, y con ello nos enfrentamos numerosos desafíos por proteger la salud y la integridad de las personas, sin menoscabo de salvaguardar sus derechos humanos, y aunque si bien es cierto, la Constitución General reconoce los derechos humanos fundamentales de las personas, es obligación del Estado, que se garantice el ejercicio pleno de los mismos, ello mediante mecanismos que permitan conservar, cumplir y desarrollar el goce de los derechos.

Ahora bien, ante la emergencia sanitaria, hemos podido constatar que el disfrute de esos derechos, se han visto vulnerados para las personas que desempeñan un cargo, profesión, oficio, o actividad relacionada con la prestación de servicios de salud, pues han sido víctimas de actos discriminatorios, e incluso han sido objeto de agresiones que han atentado en contra de su seguridad e integridad física, mediante agresiones perpetradas en su contra por personas que ante el miedo de ser contagiadas por el virus que causa el COVID-19, reaccionan de manera injustificable violenta.

Ante esto, consideramos importante resaltar que el personal médico trabaja todos los días arriesgando su propia vida por salvar la de otras personas, sin embargo, en diversos países, incluido México, algunos sectores de la población han tomado actitudes hostiles contra médicos y enfermeras por temor a ser infectados, lo que atenta contra los derechos y la seguridad del personal de la salud, registrándose diversos ataques cuando médicos y enfermeras van camino a su trabajo o incluso ya laborando, contabilizándose hasta el momento, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 47 agresiones en 22 entidades del país: Ciudad de México, Estado de México, Yucatán, San Luis Potosí, Sinaloa, Jalisco, Puebla, Morelos, Coahuila, Guerrero, Quintana Roo y Durango, siendo la entidad que mayor cantidad de agresiones registra Jalisco, con siete eventos.

Estos eventos, han despertado el temor de médicos, enfermeros y enfermeras, laboratoristas, camilleros, personal de limpieza y administrativo del ramo de la salud, lo cual es plenamente justificado, ya que además de las agresiones de que son objeto, también se enfrentan a la escasez de equipo apropiado para atender a las personas con Covid 19, lo cual los coloca en peligro de enfermarse y enfermar a sus familias con el virus, incluso poniendo en riesgo su vida por salvar la de otros, ya que se encuentran en la primera línea de batalla y son pieza clave para vencer esta terrible pandemia que nos ha afectado a todos en tantos sentidos, y no solo han tenido que enfrentarse a los enormes retos que su profesión les presenta, sino que además tienen que enfrentarse con el miedo de ser insultados, agredidos y segregados al salir a la calle.

Es por ello, que quienes dictaminamos condenamos cualquier acto de discriminación y agresión contra el personal que labora en los centros de salud, y consideramos que estos actos son sin lugar a dudas indignantes e inadmisibles y deben ser erradicados y castigados.

Lo cual nos lleva a coincidir con el promovente en la imperiosa necesidad de adicionar un artículo 313 Bis al Código Penal, para fijar como delito contra la seguridad de profesiones y la prestación pública de servicios, ***la violencia contra miembros o integrantes de instituciones de salud pública o privada,*** imponiendo de tres meses a dos años de prisión y de doscientos a quinientos días multa, a quien ejerza violencia contra un miembro o integrante de instituciones de salud pública o privada, por razón de sus funciones o para obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales. Asimismo,en la referida adición, se establece que si la violencia ejercida ocasiona una o más lesiones de las previstas en las fracciones II a VIII del artículo 200 del código, las cuales son: lesiones leves; lesiones leves extendidas; lesiones graves por cicatriz permanentemente notable en la cara; lesiones graves por disminución o entorpecimiento permanentes de una facultad o de la función de un órgano o miembro; lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida, lesiones gravísimas por pérdida de funciones, miembros u órganos y lesiones gravísimas por parálisis, enfermedad incurable o deformidad grave, se aplicarán las reglas del concurso de delitos.

Los integrantes de esta dictaminadora, estimamos oportuno la emisión de normas jurídicas que permitan salvaguardar la integridad del personal de salud, refrendando nuestro compromiso de garantizar a las y los trabajadores de la salud, un trato digno y respetuoso por parte de pacientes, familiares, así como de la población en general, pues es su derecho ejercer lícitamente sus funciones, de una manera libre y sin discriminación alguna.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se adiciona el artículo 313 bis al Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza para quedar como sigue:

**Artículo 313 bis (Violencia contra trabajadores de instituciones de salud pública o privada).**

Se impondrá de tres meses a dos años de prisión y de doscientos a quinientos días multa, a quien ejerza violencia en contra de quien labore en instituciones de salud pública o privada, por razón de sus funciones o para **injustificadamente** obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes.

Si la violencia a que se refiere el párrafo precedente ocasiona una o más lesiones de las previstas en las fracciones II a VIII del artículo 200 de este código, se aplicarán las reglas del concurso de delitos.

**TRANSITORIO**

**ARTÍCULO ÚNICO.** El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 29 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**ACUERDO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA ELEGIR A CINCO DE NUEVE INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN, ENCARGADA DE DESIGNAR AL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN; DIRIGIDA A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

La Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 167 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; en los artículos 18 y Tercero Transitorio de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como en los artículos 82, 85, 90, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, es competente para emitir el presente acuerdo; y

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que el 14 de julio de 2017, se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, los Decretos 903 y 904, respectivamente, por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y por el que se expide la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO.-** Que en el artículo 18 y en el artículo tercero transitorio de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza, se señala que el Congreso del Estado constituirá una Comisión de Selección integrada por nueve mexicanos, residentes del Estado, por un periodo de tres años, de los cuales cinco serán propuestos por Instituciones de Educación Superior y de Investigación del Estado y cuatro por Organizaciones de la Sociedad Civil.

**TERCERO.-** Que con fecha 28 de agosto del año 2017, la Sexagésima Legislatura, expidió el Decreto número 921, mediante el cual se nombró como integrantes de la Comisión de Selección que designaría al Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, a los ciudadanos siguientes:

Por las Instituciones de Educación Superior y de Investigación:

1. Carlos Alberto Arredondo Sibaja
2. Roberto Cabello Elizondo
3. María del Carmen Ruíz Esparza Contreras
4. Jesús Contreras García
5. Blas José Flores Dávila

Por las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza:

1. Ana Cecilia Mata Rodríguez
2. Sergio Fernando Alanís Ortega
3. Sergio Dávila Flores
4. Luis Fernando García Abusaíd

**CUARTO.-** Que posteriormente y derivado de la renuncia presentada por los C.C. Roberto Cabello Elizondo y Sergio Dávila Flores, se emitió un segundo Decreto identificado bajo el número 951, en el que se designó al C. Luis Alfonso Carrillo González, en sustitución del C. Roberto Cabello Elizondo y al C. Jesús María Ramón Aguirre, en sustitución del C. Sergio Dávila Flores.

**QUINTO.-** Que conforme a lo dispuesto en los decretos 921 y 951, ambos del 2017, la referida Comisión de Selección encargada de designar al Consejo, quedó finalmente integrada de la siguiente manera:

Por las Instituciones de Educación Superior y de Investigación, los ciudadanos:

1. Carlos Alberto Arredondo Sibaja
2. Luis Alfonso Carrillo González
3. María del Carmen Ruíz Esparza Contreras
4. Jesús Contreras García
5. Blas José Flores Dávila

Por las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza, los ciudadanos:

1. Ana Cecilia Mata Rodríguez
2. Sergio Fernando Alanís Ortega
3. Jesús María Ramón Aguirre
4. Luis Fernando García Abusaíd

**SEXTO.-** Que en sesiones celebradas por la Diputación Permanente del Congreso del Estado, los días 10 y 14 de agosto de 2018, a través de sus respectivos informes de correspondencia, se dio cuenta de las renuncias con el carácter de irrevocable presentadas por los C.C. Blas José Flores Dávila y María del Carmen Ruíz Esparza Contreras, al cargo que venían desempeñando como integrantes de la Comisión de Selección, encargada de nombrar al Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción; ambos ciudadanos elegidos en el apartado de Instituciones de Educación Superior y de Investigación.

**SÉPTIMO.-** Que en razón de lo anterior, en fecha 04 de junio de 2019, se emitió el Decreto número 284, en el que se designó a los CC. Héctor Alejandro Gil Muller y Eiko Gavaldón Oseki como integrantes de la Comisión de Selección, quedando ésta conformada de la siguiente manera:

Por las Instituciones de Educación Superior y de Investigación, los ciudadanos:

1. Carlos Alberto Arredondo Sibaja
2. Luis Alfonso Carrillo González
3. Eiko Gavaldón Oseki
4. Jesús Contreras García
5. Héctor Alejandro Gil Muller

Por las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza, los ciudadanos:

1. Ana Cecilia Mata Rodríguez
2. Sergio Fernando Alanís Ortega
3. Jesús María Ramón Aguirre
4. Luis Fernando García Abusaíd

**OCTAVO.-** Que, tal y como se refirió previamente el artículo 18 y el artículo tercero transitorio de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza, señalan que los nueve integrantes de la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila, durarán en su encargo tres años, plazo que está próximo a vencer.

**NOVENO.-** Que en atención a lo anterior, y toda vez que corresponde la renovación de la totalidad de los integrantes de la Comisión de Selección encargada de nombrar al Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, acordamos emitir la siguiente:

**CONVOCATORIA PÚBLICA**

**EL CONGRESO DEL ESTADO, INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 167 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA; Y EN LOS ARTÍCULOS 18 Y TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA:**

**C O N V O C A**

A las Instituciones de Educación Superior y de Investigación del Estado de Coahuila de Zaragoza, a que propongan candidatas y candidatos a efecto de integrar la Comisión de Selección encargada de nombrar al Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, de conformidad con las siguientes:

**B A S E S**

**PRIMERA.-** De acuerdo con lo dispuesto en el inciso a), fracción I del artículo 18 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Congreso del Estado acuerda los requisitos de elegibilidad para designar a cinco de los nueve ciudadanas y ciudadanos mexicanos que formarán parte de la Comisión de Selección encargada de nombrar al Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, quienes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

**a)** Ser ciudadano(a) mexicano(a), en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

**b)** Haber residido en el Estado durante los dos años anteriores al día de la designación.

**c)** Gozar de buena reputación y no haber sido condenado(a) por delito que amerite pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.

**d)** Contar con credencial para votar con fotografía.

**e)** No haber desempeñado el cargo de Gobernador(a), Secretario(a), Procurador(a) General de Justicia en el Estado, Fiscal General, Senador(a) o Diputado(a) Federal, durante los últimos cinco años inmediatos a la fecha de su designación.

**f)** Haber destacado por su contribución en materia de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

**SEGUNDA.-** La Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, será la encargada de recibir las propuestas de candidatas y candidatos a ocupar alguno de los cinco de nueve cargos para formar parte de la Comisión de Selección encargada de designar al Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, y para dar cumplimiento a la Base Primera de esta Convocatoria, las instituciones deberán presentar sus propuestas las cuales deberán acompañarse de la siguiente documentación:

**1.** Curriculum Vitae, en el que se precise la fecha de su nacimiento, los datos generales y número telefónico de la candidata o candidato; y que contenga principalmente experiencia profesional, académica o administrativa en materia de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción (original).

**2.** Acta de nacimiento original y copia certificada ante Notario Público de la credencial con fotografía para votar, por ambos lados, expedida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral; de la candidata o candidato propuesto.

**3.** Carta firmada por la candidata o candidato propuesto, en donde manifieste su voluntad expresa de participar en el proceso de selección, así como una exposición breve de su proyecto de trabajo y una descripción de las razones que justifican su idoneidad para el cargo (original).

**4.** Carta bajo protesta de decir verdad en que manifieste no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; o que haya cometido robo, fraude, falsificación, abuso de confianza o cualquier otro que lastime la buena fama en el concepto público (original).

**5.** Carta bajo protesta de decir verdad, en que manifieste que no se encuentra suspendido o privado en el ejercicio de sus derechos civiles o políticos (original).

**6.** Carta bajo protesta de decir verdad en que manifieste no haber desempeñado el cargo de Gobernador(a), Secretario(a), Procurador(a) General de Justicia en el Estado, Fiscal General, Senador(a) o Diputado Federal, durante los últimos cinco años inmediatos a la fecha de su designación (original).

**7.** Carta bajo protesta de decir verdad en que manifieste que: "he leído y acepto las bases, procedimientos y deliberaciones de la convocatoria para ocupar alguno de los cinco de nueve cargos para integrar la Comisión de Selección que designará al Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción" (original).

**8.** Documentos que respalden que ha destacado por su contribución en materia de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción (original).

Dichos documentos deberán contar con firma autógrafa de la candidata o candidato. Los originales, podrán ser requeridos en cualquier momento del proceso por la Comisión Dictaminadora para realizar el cotejo de los mismos con las copias exhibidas.

Las propuestas que presenten las Instituciones de Educación Superior y de Investigación del Estado, se realizarán por conducto del Titular de la respectiva Institución, mediante escrito firmado.

**TERCERA.-** La documentación a la que se refiere la Base anterior, se presentará en la oficina de la Oficialía Mayor del Congreso del Estado, ubicada en Boulevard Francisco Coss S/N esquina con Álvaro Obregón, Zona Centro, Saltillo, Coahuila de Zaragoza, C.P. 25000, del 01 de julio al 10 de julio de 2020, en un horario de las 10:00 a las 18:00 horas.

**CUARTA.-** Agotada la etapa de recepción, la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, verificará que los documentos recibidos acrediten los requisitos a que se refiere la Base Segunda de la presente Convocatoria, validando aquellas propuestas que cumplan con los requisitos, formando un listado de las mismas, pudiéndose apoyar para este proceso en la Secretaría Técnica de la Comisión o en algún ente público o privado especializado en dichos procesos de verificación. La falta de alguno de los documentos requeridos o su presentación, fuera del tiempo y forma establecidos, será motivo suficiente para no validarse.

**QUINTA.-** El listado descrito en la Base anterior, de candidatas y candidatos para formar parte de la Comisión de Selección encargada de nombrar al Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, será publicado en la página electrónica del Congreso del Estado.

**SEXTA.-** La Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, acordará el formato, metodología y los horarios de las comparecencias, en su caso, de las personas propuestas, las cuales serán transmitidas mediante la página electrónica del Congreso.

**SÉPTIMA.-** La Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, hará el análisis de las propuestas y elaborará un listado de las y los candidatos idóneos. Dicho listado no será vinculatorio en la decisión que tome el Pleno del Congreso.

Previo a la reunión del Pleno, se publicará el listado de las candidatas y los candidatos idóneos en la página electrónica del Congreso.

**OCTAVA.-** El Pleno del Congreso del Estado, con base en el listado que le remita la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, aprobará el nombramiento de las personas que formarán parte de la Comisión de Selección.

**NOVENA.-** Publíquese la presente Convocatoria, en la página electrónica del Congreso del Estado, a partir de la fecha de su aprobación, y hasta el 10 de julio de 2020; en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza y en al menos dos de los diarios de circulación estatal.

**DÉCIMA.-** Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 29 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**ACUERDO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA ELEGIR A CUATRO DE NUEVE INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN, ENCARGADA DE DESIGNAR AL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN; DIRIGIDA A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

La Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 167 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; en los artículos 18 y Tercero Transitorio de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como en los artículos 82, 85, 90, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, es competente para emitir el presente acuerdo; y

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que el 14 de julio de 2017, se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, los Decretos 903 y 904, respectivamente, por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y por el que se expide la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO.-** Que en el artículo 18 y en el artículo tercero transitorio de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza, se señala que el Congreso del Estado constituirá una Comisión de Selección integrada por nueve mexicanos, residentes del Estado, por un periodo de tres años, de los cuales cinco serán propuestos por Instituciones de Educación Superior y de Investigación del Estado y cuatro por Organizaciones de la Sociedad Civil.

**TERCERO.-** Que con fecha 28 de agosto del año 2017, la Sexagésima Legislatura, expidió el Decreto número 921, mediante el cual se nombró como integrantes de la Comisión de Selección que designaría al Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, a los ciudadanos siguientes:

Por las Instituciones de Educación Superior y de Investigación:

1. Carlos Alberto Arredondo Sibaja
2. Roberto Cabello Elizondo
3. María del Carmen Ruíz Esparza Contreras
4. Jesús Contreras García
5. Blas José Flores Dávila

Por las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza:

1. Ana Cecilia Mata Rodríguez
2. Sergio Fernando Alanís Ortega
3. Sergio Dávila Flores
4. Luis Fernando García Abusaíd

**CUARTO.-** Que posteriormente y derivado de la renuncia presentada por los C.C. Roberto Cabello Elizondo y Sergio Dávila Flores, se emitió un segundo Decreto identificado bajo el número 951, en el que se designó al C. Luis Alfonso Carrillo González, en sustitución del C. Roberto Cabello Elizondo y al C. Jesús María Ramón Aguirre, en sustitución del C. Sergio Dávila Flores.

**QUINTO.-** Que conforme a lo dispuesto en los decretos 921 y 951, ambos del 2017, la referida Comisión de Selección encargada de designar al Consejo, quedó finalmente integrada de la siguiente manera:

Por las Instituciones de Educación Superior y de Investigación, los ciudadanos:

1. Carlos Alberto Arredondo Sibaja
2. Luis Alfonso Carrillo González
3. María del Carmen Ruíz Esparza Contreras
4. Jesús Contreras García
5. Blas José Flores Dávila

Por las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza, los ciudadanos:

1. Ana Cecilia Mata Rodríguez
2. Sergio Fernando Alanís Ortega
3. Jesús María Ramón Aguirre
4. Luis Fernando García Abusaíd

**SEXTO.-** Que en sesiones celebradas por la Diputación Permanente del Congreso del Estado, los días 10 y 14 de agosto de 2018, a través de sus respectivos informes de correspondencia, se dio cuenta de las renuncias con el carácter de irrevocable presentadas por los C.C. Blas José Flores Dávila y María del Carmen Ruíz Esparza Contreras, al cargo que venían desempeñando como integrantes de la Comisión de Selección, encargada de nombrar al Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción; ambos ciudadanos elegidos en el apartado de Instituciones de Educación Superior y de Investigación.

**SÉPTIMO.-** Que en razón de lo anterior, en fecha 04 de junio de 2019, se emitió el Decreto número 284, en el que se designó a los CC. Héctor Alejandro Gil Muller y Eiko Gavaldón Oseki como integrantes de la Comisión de Selección, quedando ésta conformada de la siguiente manera:

Por las Instituciones de Educación Superior y de Investigación, los ciudadanos:

1. Carlos Alberto Arredondo Sibaja
2. Luis Alfonso Carrillo González
3. Eiko Gavaldón Oseki
4. Jesús Contreras García
5. Héctor Alejandro Gil Muller

Por las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza, los ciudadanos:

1. Ana Cecilia Mata Rodríguez
2. Sergio Fernando Alanís Ortega
3. Jesús María Ramón Aguirre
4. Luis Fernando García Abusaíd

**OCTAVO.-** Que, tal y como se refirió previamente el artículo 18 y el artículo tercero transitorio de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza, señalan que los nueve integrantes de la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila, durarán en su encargo tres años, plazo que está próximo a vencer.

**NOVENO.-** Que en atención a lo anterior, y toda vez que corresponde la renovación de la totalidad de los integrantes de la Comisión de Selección encargada de nombrar al Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, acordamos emitir la siguiente:

**CONVOCATORIA PÚBLICA**

**EL CONGRESO DEL ESTADO, INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 167 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA; Y EN LOS ARTÍCULOS 18 Y TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA:**

**C O N V O C A**

A las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza, a que propongan candidatas y candidatos a efecto de integrar la Comisión de Selección encargada de nombrar al Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, de conformidad con las siguientes:

**B A S E S**

**PRIMERA.-** De acuerdo con lo dispuesto en el inciso b), fracción I del artículo 18 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Congreso del Estado acuerda los requisitos de elegibilidad para designar a cuatro de los nueve ciudadanas y ciudadanos mexicanos que formarán parte de la Comisión de Selección encargada de nombrar al Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, quienes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

**a)** Ser ciudadano(a) mexicano(a), en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

**b)** Haber residido en el Estado durante los dos años anteriores al día de la designación.

**c)** Gozar de buena reputación y no haber sido condenado(a) por delito que amerite pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.

**d)** Contar con credencial para votar con fotografía.

**e)** No haber desempeñado el cargo de Gobernador(a), Secretario(a), Procurador(a) General de Justicia en el Estado, Fiscal General, Senador(a) o Diputado(a) Federal, durante los últimos cinco años inmediatos a la fecha de su designación.

**f)** Haber destacado por su contribución en materia de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

**SEGUNDA.-** La Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, será la encargada de recibir las propuestas de candidatas y candidatos a ocupar alguno de los cuatro de los nueve cargos para formar parte de la Comisión de Selección encargada de designar al Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, y para dar cumplimiento a la Base Primera de esta Convocatoria, las organizaciones deberán presentar sus propuestas las cuales deberán acompañarse de la siguiente documentación:

**1.** Curriculum Vitae, en el que se precise la fecha de su nacimiento, los datos generales y número telefónico de la candidata o candidato; y que contenga principalmente experiencia profesional, académica o administrativa en materia de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción (original).

**2.** Acta de nacimiento original y copia certificada ante Notario Público de la credencial con fotografía para votar, por ambos lados, expedida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal Electoral; de la candidata o candidato propuesto.

**3.** Carta firmada por la candidata o candidato propuesto, en donde manifieste su voluntad expresa de participar en el proceso de selección, así como una exposición breve de su proyecto de trabajo y una descripción de las razones que justifican su idoneidad para el cargo (original).

**4.** Carta bajo protesta de decir verdad en que manifieste no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; o que haya cometido robo, fraude, falsificación, abuso de confianza o cualquier otro que lastime la buena fama en el concepto público (original).

**5.** Carta bajo protesta de decir verdad, en que manifieste que no se encuentra suspendido o privado en el ejercicio de sus derechos civiles o políticos (original).

**6.** Carta bajo protesta de decir verdad en que manifieste no haber desempeñado el cargo de Gobernador(a), Secretario(a) o Procurador(a) General de Justicia en el Estado, Fiscal General, Senador(a) o Diputado(a) Federal, durante los últimos cinco años inmediatos a la fecha de su designación (original).

**7.** Carta bajo protesta de decir verdad en que manifieste que: "he leído y acepto las bases, procedimientos y deliberaciones de la convocatoria para ocupar alguno de los cuatro de nueve cargos para integrar la Comisión de Selección que designará al Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción" (original).

**8.** Documentos que respalden que ha destacado por su contribución en materia de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción (original).

Dichos documentos deberán contar con firma autógrafa de la candidata o candidato. Los originales, podrán ser requeridos en cualquier momento del proceso por la Comisión Dictaminadora para realizar el cotejo de los mismos con las copias exhibidas.

Las propuestas que presenten las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado, se realizarán por conducto de su representante legal, mediante escrito firmado.

**TERCERA.-** La documentación a la que se refiere la Base anterior, se presentará en la oficina de la Oficialía Mayor del Congreso del Estado, ubicada en Boulevard Francisco Coss S/N esquina con Álvaro Obregón, Zona Centro, Saltillo, Coahuila de Zaragoza, C.P. 25000, del 01 de julio al 10 de julio de 2020, en un horario de las 10:00 a las 18:00 horas.

**CUARTA.-** Agotada la etapa de recepción, la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, verificará que los documentos recibidos acrediten los requisitos a que se refiere la Base Segunda de la presente Convocatoria, validando aquellas propuestas que cumplan con los requisitos, formando un listado de las mismas, pudiéndose apoyar para este proceso en la Secretaría Técnica de la Comisión o en algún ente público o privado especializado en dichos procesos de verificación. La falta de alguno de los documentos requeridos o su presentación, fuera del tiempo y forma establecidos, será motivo suficiente para no validarse.

**QUINTA.-** El listado descrito en la Base anterior, de candidatos para formar parte de la Comisión de Selección encargada de nombrar al Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, será publicado en la página electrónica del Congreso del Estado.

**SEXTA.-** La Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, acordará el formato, metodología y los horarios de las comparecencias, en su caso, de las personas propuestas, las cuales serán transmitidas mediante la página electrónica del Congreso.

**SÉPTIMA.-** La Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, hará el análisis de las propuestas y elaborará un listado de las y los candidatos idóneos. Dicho listado no será vinculatorio en la decisión que tome el Pleno del Congreso.

Previo a la reunión del Pleno, se publicará el listado de las candidatas y los candidatos idóneos en la página electrónica del Congreso.

**OCTAVA.-** El Pleno del Congreso del Estado, con base en el listado que le remita la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, aprobará el nombramiento de las personas que formarán parte de la Comisión de Selección.

**NOVENA.-** Publíquese la presente Convocatoria, en la página electrónica del Congreso del Estado, a partir de la fecha de su aprobación, y hasta el 10 de julio de 2020; en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza y en al menos dos de los diarios de circulación estatal.

**DÉCIMA.-** Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Así lo acuerdan las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Diputado Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 29 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**ACUERDO** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo al escrito mediante el cual se presenta una iniciativa popular en la que se brinde cursos de defensa personal para mujeres, suscrita por los C.C. Félix Gerardo Cabello Dueñas y Rodrigo Cervantes Rocha; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 18 de diciembre de 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa popular a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo en fecha 20 de diciembre del mismo año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, el escrito mediante el cual se presenta una iniciativa popular en la que se brinde cursos de defensa personal para mujeres, suscrita por los C.C. Félix Gerardo Cabello Dueñas y Rodrigo Cervantes Rocha, para que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, se encargue de cumplir con el trámite para resolver sobre su procedencia, y en caso de considerarse procedente, se realice el turno correspondiente para el estudio y dictamen de la misma, de conformidad a la disposición legal antes citada.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 82, 90 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente acuerdo.

**SEGUNDO.-** Que la Ley de Participación Ciudadana en su Artículo 42, establece los requisitos necesarios para la procedencia de las iniciativas populares, el cual dispone lo siguiente:

***ARTÍCULO 42. LOS REQUISITOS DE LA INICIATIVA POPULAR.*** *Toda iniciativa popular que se tramite ante la autoridad competente en los términos previstos en esta ley, deberá reunir los requisitos siguientes:*

*I. Presentarse por escrito.*

*II. Dirigirse a la autoridad competente para conocer de la iniciativa.*

*III. Presentarse con exposición de motivos y con proyecto de articulado.*

*IV. Señalar un domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y/o notificaciones, en el lugar donde resida la autoridad competente para conocer de la iniciativa.*

*V. Nombre y firma de quien la presenta.*

*El solicitante podrá designar un representante para oír y recibir notificaciones, mismo que podrá ser facultado para realizar todos los actos correspondientes al trámite de la iniciativa popular.*

**TERCERO.-** Que los integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos en la importancia de promover la participación ciudadana en los procesos legislativos, por lo que estamos convencidos de que las iniciativas populares deben ser analizadas con base en los principios de democracia, legalidad, libertad, propersona, equidad, confianza, solidaridad y corresponsabilidad.

En este sentido los integrantes de la presente comisión realizamos el estudio de las iniciativas populares, desde una perspectiva favorable al ciudadano.

**CUARTO.-** Que esta Comisión de Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia, revisó que la iniciativa popular cumpliera con todos y cada uno de los requisitos enunciados en el considerando segundo, concluyendo que la misma, no reúne el requisito enunciado en la fracción III del ya citado artículo 42 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, al carecer del proyecto de articulado.

**QUINTO.-** Que una vez que ha sido analizada la iniciativa en comento, esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 116 y 117 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, emite el siguiente:

**A C U E R D O**

**PRIMERO.-** Que el escrito mediante el cual se presenta una iniciativa popular en la que se brinde cursos de defensa personal para mujeres, suscrita por los C.C. Félix Gerardo Cabello Dueñas y Rodrigo Cervantes Rocha, no reúne el requisito enunciado en la fracción III del ya citado artículo 42 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, al carecer del proyecto de articulado.

**SEGUNDO.-** De conformidad a lo dispuesto por el artículo 43 fracción II numerales, 2 y 5 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, notifíquese a los interesados el resolutivo de este acuerdo en el domicilio que señalan en su escrito de iniciativa y asimismo, hágaseles saber que cuenta con un plazo no mayor a 15 días hábiles para presentar la información relativa al requisito faltante.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 23 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Acuerdo de la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, del Honorable Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo planteado por la Diputada Graciela Fernández Almaraz, mediante el cual “se exhorta respetuosamente a los 38 Municipios del Estado para que, en la medida de sus posibilidades, refuercen las medidas sanitarias, con apego a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en cuestión de limpieza, desinfección y sanitización, ahora que inició la reactivación de actividades, especialmente en las áreas que se reactivaron al público, que son de su competencia, para avanzar con éxito en esta nueva normalidad”.**

**RESULTANDO**

**PRIMERO. -** Que, en la sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 21 de mayo de 2020, se desahogó lo relativo al trámite de la primera lectura de la proposición con punto de acuerdo contenida en el presente Acuerdo.

**SEGUNDO. -** Que, en la citada sesión, por acuerdo del Pleno, se turnó a estaComisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua el planteamiento al que se ha hecho referencia para los efectos de hacer el estudio correspondiente y proceder, en su caso, a su aprobación.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. -** Que esta Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, con fundamento en los Artículos 100, 163, 164 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente Acuerdo.

**SEGUNDO. -** Que la Proposición con Punto de Acuerdo, mediante el cual “se exhorta respetuosamente a los 38 Municipios del Estado para que, en la medida de sus posibilidades, refuercen las medidas sanitarias, con apego a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en cuestión de limpieza, desinfección y sanitización, ahora que inició la reactivación de actividades, especialmente en las áreas que se reactivaron al público, que son de su competencia, para avanzar con éxito en esta nueva normalidad”, al tenor de la siguiente...

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

*Día con día nos hemos estado adecuando a las medidas de prevención que nos ha indicado la Secretaría de Salud, así como a todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que se han emitido, respecto a las formas de prevenir la propagación del COVID-19 en los ambientes laborales, en los supermercados, en las instituciones bancarias, y en los espacios públicos y privados.*

*Por acuerdo de la Secretaría de Salud Federal, en la mayoría de los casos la Jornada Nacional de Sana Distancia, hasta el momento estaría acabando el 31 de mayo, es decir a partir del día 1° de junio del presente año, se reactivarán las actividades, hablando a nivel nacional.*

*Por lo que hace a nuestro Estado, en cada una de las diferentes regiones del mismo, se ha elaborado un plan de reactivación económica con seguridad sanitaria, siendo el inicio de dichos planes este pasado 18 de mayo, claro con sus características especiales para cada una de ellas, pero en su mayoría, todas las regiones han vuelto a reactivarse paulatinamente económicamente hablando.*

*Es por eso por lo que debemos de garantizar a toda nuestra población, áreas libres de COVID-19, ya que los coahuilenses se han comportado de una manera excepcional en este confinamiento y eso ha permitido seguir avanzando en la lucha por combatir este virus.*

*Todos debemos de redoblar esfuerzos y hacer nuestra tarea para poder garantizar esto, es por eso que todos los municipios, en la medida de sus posibilidades deberán seguir reforzando las medidas sanitarias teniendo en cuenta muy especialmente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en este caso para evitar la propagación del COVID-19, en las áreas que son de su competencia, como por ejemplo los mercados al aire libre, los parques y lugares públicos, y los diferentes edificios municipales que tienen atención al público.*

*Por lo que sugerimos limpiar, desinfectar y sanitizar las áreas que en las que tienen competencia los ayuntamientos, y que se han reactivado o vayan a reactivarse, esto con el fin de poder garantizar a todos los coahuilenses el libre desarrollo de sus actividades.*

*Según un estudio publicado en el mes de marzo del año en curso, del New England Journal of Medicine, el Covid-19 puede permanecer vivo hasta 3 horas en el aire, hasta 4 horas en superficies de cobre, hasta 24 horas en superficies de cartón y hasta 3 días en superficies de plástico y acero inoxidable.*

*Aun cuando sabemos que el virus que causa COVID-19 parece propagarse de manera fácil y sostenible, es decir su propagación es comunitaria, esto significa que las personas que han sido infectadas con el virus no están seguras de cómo o dónde se infectaron, se requiere que no aumentemos las probabilidades, dejando a un lado las medidas sanitarias que se deben llevar a cabo en los lugares públicos.*

*Para la OMS (Organización Mundial de la Salud) y otros organismos de salud como el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades USA, y para las autoridades sanitaria del país en todos los niveles de gobierno, es importante que se conozca la diferencia entre limpiar, desinfectar y sanitizar.*

*Me permitiré dar una breve explicación del significado de cada una de estas actividades:*

* ***Limpiar*** *elimina gérmenes, suciedad e impurezas de superficies u objetos. La limpieza funciona usando jabón (o detergente) y agua para eliminar físicamente los virus, gérmenes o bacterias de las superficies. Este proceso no necesariamente los mata, pero disminuye su número y el riesgo de propagar la infección.*
* ***Desinfectar*** *mata virus, gérmenes o bacterias en superficies u objetos. La desinfección funciona mediante el uso de productos químicos. Este proceso no necesariamente limpia las superficies sucias, pero al matar los virus, gérmenes o bacterias, puede reducir aún más el riesgo de propagación de la infección, y*
* ***Sanitización*** *reduce el número de virus, gérmenes o bacterias en superficies u objetos a un nivel seguro, según lo juzgado por los estándares o requisitos de salud pública. Este proceso funciona limpiando y desinfectando superficies u objetos para reducir el riesgo de propagación de la infección.*

*En base a ello, proponen limpiar y desinfectar superficies y objetos que se tocan con frecuencia, esto significa desinfectar diariamente (varias veces en un mismo día), las superficies y los objetos que se tocan con frecuencia.*

*Algunas instalaciones también pueden requerir la desinfección diaria de varios objetos, los procedimientos estándar a menudo requieren desinfectar áreas específicas de las instalaciones.*

*Otra recomendación es limpiar inmediatamente las superficies y los objetos que estén visiblemente sucios, si las superficies u objetos están sucios con fluidos corporales o sangre, habrá que usar guantes y otras precauciones estándar para evitar entrar en contacto con el fluido, después de esto hay que retirar el derrame y luego limpiar y desinfectar la superficie.*

*Por último, las autoridades sanitarias, nos recomiendan que hagamos simplemente la limpieza y desinfección de rutina. Es importante hacer coincidir sus actividades de limpieza y desinfección con los tipos de virus, gérmenes o bacterias que desea eliminar. Hoy sabemos que Covid-19 puede vivir y potencialmente infectar a una persona hasta 3 días después de haber sido depositado en una superficie.*

*Sin embargo, no es necesario cerrar las instalaciones para limpiar o desinfectar todas las superficies y reducir la propagación del virus.*

*Los virus son relativamente frágiles, por lo que las prácticas estándar de limpieza y desinfección son suficientes para eliminarlos.*

*Los procesos especiales de limpieza y desinfección, que incluyen limpiar paredes y techos, usar frecuentemente desodorizadores de aire ambiental y fumigar, no son necesarios ni recomendados, ya que estos procesos pueden irritar los ojos, la nariz, la garganta y la piel; agravar el asma; y causar otros efectos secundarios graves.*

*La capacitación para el uso productos de manera segura, es fundamental, para quienes lleven a cabo estas actividades, tengan todas las precauciones debidas para el mayor bien de ellos y lograr la óptima utilización de estos.*

*Reconocemos la labor excepcional que han llevado a cabo tanto el Ejecutivo del Estado, como su gabinete, así como las y los alcaldes de nuestra entidad, sabemos el sin fin de reuniones y de estrategias que llevan a cabo para salir triunfantes de esta crisis, por lo que pedimos seguir como hasta ahora de manera coordinada en este regreso a la nueva normalidad, que sin duda alguna lo haremos bien.*

*El trabajo es doble y debemos de actuar lo más pronto posible, en beneficio de todos nuestros ciudadanos Coahuilenses.*

**TERCERO. –** Que las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, Medio Ambiente Recursos Naturales y Agua, hemos analizado detenidamente la proposición con punto de acuerdo contenida en el presente Acuerdo, por lo que nos permitimos presentar las conclusiones a que hemos llegado, bajo las siguientes consideraciones:

En la argumentación presentada por la Diputada proponente se incluyen conceptos y medidas compatibles con la denominada Guía Informativa para Presidentes Municipales sobre Covid-19, difundida para su observancia por la Secretaría de Salud federal desde el pasado 31 marzo.

Las referidas disposiciones están diseñadas para ser aplicadas en un escenario de dispersión comunitaria con el registro, no de miles, sino de cientos de personas contagiadas por COVID-19, como es el caso de gran parte de los municipios de Coahuila.

En efecto, a través de dicha guía del Gobierno de México, se instruye a los ayuntamientos del país a poner en práctica, de manera coordinada, entre otras, las siguientes medidas preventivas, acordes también con los criterios y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud:

* *Implementar una estrategia que asegure el abastecimiento de los insumos y servicios básicos hacia la población (luz, agua, recolección de basura, gas, seguridad pública).*
* *Distribuir a las diferentes áreas del ayuntamiento, de acuerdo a su función, los materiales, insumos o recursos con que cuenta el municipio para responder a los diferentes escenarios del COVID 19.* (…)
* *Aplicar el protocolo de apoyo a posibles casos graves (medidas preventivas; contacto municipal; unidad de salud; medio de transporte y seguimiento).*
* *Asegurar que los baños públicos de las oficinas municipales cuenten con agua, jabón, papel para secarse las manos.*
* *Asegurar que las oficinas de atención al público cuenten con gel antibacterial con base de alcohol al 60%, limpiar y desinfectar el lugar diariamente de acuerdo a los lineamientos para la mitigación y prevención del COVID-19 en espacios cerrados. Colocar en lugares visibles material con las medidas de prevención.*
* *En la medida de lo posible, brindar apoyo en escuelas, restaurantes y centros comerciales entre otros, para que cuenten con la infraestructura para cumplir con las medidas básicas de higiene.*
* *Implementar los criterios de sano distanciamiento de acuerdo al tipo de escenario* y, por otra parte*, proceder a la desinfección de áreas como transporte público, sitios de concentración poblacional, escuelas, sitios de trabajo, entre otros.*

Tales disposiciones encuadran con lo dispuesto en la Ley Estatal de Salud: *artículo 1º. - La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto la protección de la salud, así como establecer las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud proporcionados por el Estado y la concurrencia de éste y sus municipios en materia de salubridad local, en términos del Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Salud. Es de aplicación en el Estado de Coahuila*.

Luego también, se establece en el artículo 4º: *En los términos de la Ley General de Salud y de la presente Ley, corresponde al Estado de Coahuila:*

*A. En materia de Salubridad General: (...) XII. La salud ocupacional y el saneamiento básico; XIII. La prevención y el control de enfermedades transmisibles;*

*B. En materia de Salubridad Local: I. Mercados y centros de abasto; II. Construcciones, excepto la de los establecimientos de salud; III. Cementerios, crematorios y funerarias; IV. Limpieza pública; V. Rastros; VI. Agua potable y alcantarillado; VII. Establos, granjas avícolas, porcícolas, apiarios y establecimientos similares; VIII. Prostitución; IX. Reclusorios o Centros Penitenciarios; X. Baños y albercas públicos; XI. Centros de reunión y espectáculos; XII. Establecimientos dedicados a la prestación de servicios como peluquerías, salones de belleza o estéticas, centros de masaje y otros similares; XIII. Tintorerías y lavanderías; XIV. Guarderías, asilos y casas hogar; XV. Establecimientos para el hospedaje; XVI. Transporte estatal y municipal; XVII. Gasolinerías; (...)*

*Artículo 12. Corresponde al Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de Salud del Estado:*

*B. En materia de Salubridad Local: I. Ejercer la vigilancia y control sanitario de los establecimientos y servicios a que se refiere el Artículo 4o. apartado "B" de esta Ley y verificar su cumplimiento; II. Dictar las normas técnicas en materia de salubridad local; (...) IV. Llevar a cabo los programas y acciones que en materia de salubridad local se implanten; V. Promover, orientar, fomentar y apoyar las acciones en materia de salubridad local a cargo de los municipios, con sujeción a las políticas nacional y estatal de salud y a los convenios que al efecto se celebren; (...)*

**CUARTO. –** Que, en virtud de todo lo anteriormente expuesto, esta Comisión considera que la Proposición en cuestión es procedente, por lo que se expide y se pone a consideración del Honorable Congreso del Estado el siguiente...

**ACUERDO**

**ÚNICO. - Se exhorta respetuosamente a los 38 Municipios del Estado, para que, en la medida de sus posibilidades, refuercen las medidas sanitarias, con apego a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en cuestión de limpieza, desinfección y sanitización, ahora que inició la reactivación de actividades, especialmente en las áreas que se reactivarán al público, que son de su competencia, para avanzar con éxito en esta nueva normalidad.**

Así lo suscriben las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua del Honorable Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los 19 días del mes de junio de 2020**

**COMISIÓN DE SALUD, MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y AGUA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES**  **(SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

1. <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r28806.pdf> [↑](#footnote-ref-1)
2. <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r28806.pdf> [↑](#footnote-ref-2)
3. UNICEF. Ver. <https://www.unicef.es/causas/derechos-ninos/convencion-derechos-ninos>. [↑](#footnote-ref-3)
4. Gutiérrez y González, Ernesto, *El patrimonio. El pecuniario y el moral o derechos de la personalidad y derecho sucesorio*, 3a. ed., México, Porrúa, 1990, p. 779 [↑](#footnote-ref-4)
5. Mendoza Martínez, Lucía Alejandra, *La acción civil del daño moral* / México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014, p. 24-25 [↑](#footnote-ref-5)
6. Mendoza Martínez, Lucía Alejandra, Op. Cit. p. 26 [↑](#footnote-ref-6)
7. La Constitución mexicana y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconocen que si es de interés superior del menor estar separado de su familia, la autoridad debe proceder a ello. No obstante, se debe preferir, siempre que sea posible, que aquellos siempre estén con su familia. [↑](#footnote-ref-7)
8. Cada vez es más frecuente la existencia de varias estructuras familiares, diferentes a la que solía ser la más frecuente: la familia encabezada por una pareja casada en primeras nupcias y con hijos comunes. Véase *Pliego F. Familias y bienestar en sociedades democráticas. México: Porrúa. 2012.* [↑](#footnote-ref-8)
9. Véase Informe Movilidad Social en México 2019 (pág. 25). Disponible en: <https://ceey.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/Informe-Movilidad-Social-en-México-2019..pdf> [↑](#footnote-ref-9)
10. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (México: INEGI, 2014). Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/enut/2014/default.html# [↑](#footnote-ref-10)
11. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) realizada por INEGI, para el tercer trimestre de 2019, del total de la población ocupada, 56.5 % reportó tener un empleo informal y 7.8 % estar en condiciones de subocupación. Disponible en: <https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/resultados_ciudades_enoe_2019_trim3.pdf> [↑](#footnote-ref-11)
12. Resultados disponibles en <https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf> [↑](#footnote-ref-12)
13. Véase *Conclusiones principales sobre las familias, las políticas familiares y los Objetivos de Desarrollo Sostenible*, del Centro de Investigación Innocenti, UNICEF, 2018. El Centro de Investigación Innocenti de UNICEF es la principal entidad investigativa del UNICEF. Disponible en: <http://www.familyperspective.org/safs/SynthesisReportSP.pdf> [↑](#footnote-ref-13)
14. Véase Ooms, T. “The Necessity of a Family Perspective.” *Journal of Family Issues, vol. 5, no. 2, June 1984, pp. 160–181* [↑](#footnote-ref-14)
15. Aguilar, L. F. “Políticas públicas y transversalidad”, en *La evaluación de políticas públicas en México*, Ramos, J. M. Sosa, J. y Acosta, F (coord.): pp. 23-42. 2011. [↑](#footnote-ref-15)
16. Existen esfuerzos en el plano internacional encaminados a impulsar políticas familiares y con perspectiva familiar. Estos esfuerzos han generado experiencias dignas de tomarse en cuenta para ser adaptadas al contexto mexicano. [↑](#footnote-ref-16)
17. Si bien este debate resulta sumamente importante, trasciende el esfuerzo por desarrollar políticas familiares y con perspectiva familiar. [↑](#footnote-ref-17)
18. Véase <https://www.purdue.edu/hhs/hdfs/fii/> [↑](#footnote-ref-18)
19. La legislación mexicana define al matrimonio de diversas maneras. Esta discusión escapa los alcances de la presente iniciativa. [↑](#footnote-ref-19)
20. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43805/9789243547305\_spa.pdf;jsessionid=B649829EB72CF3FB86F48D639AB4F0A2?sequence=1 [↑](#footnote-ref-20)
21. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63977/Documento\_Metodologico\_Proyecciones\_Mexico\_2010\_2050.pdf [↑](#footnote-ref-21)
22. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63977/Documento\_Metodologico\_Proyecciones\_Mexico\_2010\_2050.pdf [↑](#footnote-ref-22)
23. Fuente FAO (2017) información disponible en: https://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/como-lograr-un-desarrollo-rural-sostenible-la-custodia-del-territorio/ [↑](#footnote-ref-23)
24. Fuente: ibídem. [↑](#footnote-ref-24)
25. Fuente Unesco (2010) información disponible en: <https://www.oei.es/historico/decada/accion.php?accion=22> [↑](#footnote-ref-25)
26. Fuente Banco Mundial. Información disponible en: <http://siteresources.worldbank.org/INTMEXICO/Resources/La_Pobreza_Rural_en_Mexico.pdf> [↑](#footnote-ref-26)